

PÍO MOA

LOS ORÍGENES DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA



EE
ENCUENTRO

BÁSICOS

Presentación de Pío Moa

En el libro *Los orígenes de la guerra civil española* creo haber probado documentalmente algunos hechos clave para entender la dinámica de la historia de España en los años 30, y que en resumen serían éstos:

1.- La insurrección socialista y nacionalista catalana de izquierdas, en octubre de 1934, constituyó un intento de guerra civil en toda regla, implícito en el caso de la Esquerra catalana, y explícito en el del PSOE. Por entonces las invocaciones a la guerra civil eran frecuentes en la propaganda socialista, y las instrucciones secretas para la insurrección, publicadas en el libro, insistían que el movimiento debía ser entendido como una guerra civil.

2.- Es falsa la versión circulada durante muchos años, según la cual la sublevación de octubre trataba de impedir o responder a un «golpe fascista», manifiesto en la entrada de tres ministros de la CEDA principal partido de la derecha, en el gobierno centrista de Lerroux. Dicho partido había sido el más votado en las elecciones de un año antes, y tenía obvio derecho a gobernar. La propaganda ha pintado a la CEDA como un partido fascista o semifascista, pero los hechos revelan que su actitud fue esencialmente legalista y moderada. En realidad, la Esquerra ya tomó una actitud de rebeldía al perder las elecciones de noviembre de 1933, en las que los votos dieron el triunfo al centro derecha. Con igual motivo, Azaña y otros políticos de izquierda propiciaron un golpe de estado que burlase la decisión de las urnas, intento en el que reincidirían en julio de 1934. En cuanto a los socialis-

tas, su rebeldía contra la legalidad democrática provenía de antes de las elecciones citadas. Declaraciones y decisiones tomadas entonces prueban sin lugar a dudas que no sólo no creía el PSOE en la existencia de un peligro fascista -aunque propagandísticamente sostuviera lo contrario, a fin de exaltar a las masas-, sino que confiaba en que, aun si fallara su insurrección, la legalidad vigente seguiría en pie, y a ella podría acogerse el partido para esquivar la represión.

3.- La documentación es concluyente a la hora de establecer que el PSOE desató su asalto al poder con fines netamente revolucionarios, es decir, para implantar lo que llamaba la dictadura del proletariado, siguiendo el ejemplo soviético. Lo hizo porque consideraba que la situación histórica y la debilidad general que creía percibir en la derecha y en el aparato del estado, debilidad por otra parte bastante real, abrían el camino al objetivo definidor del partido: implantar en España un régimen socialista. La decisión ocasionó fuertes y dramáticas tensiones en el interior del PSOE, pues el sector de Besteiro no aceptaba en modo alguno la destrucción de la legalidad republicana. Pero Besteiro fue desplazado por Largo Caballero, llamado "el Lenin español", y por Prieto, con lo que quedó abierta la vía de la guerra.

4.- Y la Esquerra, en los meses previos al golpe de octubre, provocó deliberadamente al gobierno, impidiendo la solución negociada de diversos problemas, con el fin de crear en Cataluña un ambiente insurreccional, en lo que contó con el apoyo de las demás izquierdas republicanas, así como del PSOE y del PNV. Con ello atacaban directamente la legalidad que esos mismos partidos habían establecido en 1931, pero que no admitían pudiera dar el triunfo electoral a las derechas.

5.- El plan de guerra civil, que era complejo y no mal diseñado técnicamente, fracasó ante todo porque las masas no siguieron los llamamientos de los líderes socialistas y nacionalistas catalanes. Aún no existía, por tanto, el clima social propicio para la contienda. La excepción fue la cuenca minera asturiana, donde sí hubo un seguimiento masivo, que sumió al estado en una crisis extrema. En conjunto, el golpe de octubre del 34 fue el intento revolucionario más grave y sangriento ocurrido en Europa desde la Revolución Rusa de 1917, y fue comparado a la Comuna de París.

6.- Fracasada la insurrección, se abría un gran interrogante: ¿ser-

viría la experiencia para pacificar los espíritus, u ocurriría lo contrario, haciendo inevitable la prosecución de la lucha? Sabemos que la guerra se reanudó en julio de 1936. Este nuevo libro intenta mostrar, precisamente, los procesos desatados después de octubre del 34, que envenenarían el ambiente social de tal manera que en el 36 sí existía un clima social de guerra civil que arrastraba a grandes masas, y que dio lugar a una contienda de casi tres años, una de las mayores catástrofes de la historia de España.

Una breve nota sobre el título. Se me ha hecho observar que académicamente resulta más correcto «derrumbamiento» que «derrumbe», pues esta última palabra se refiere más bien a un despeñadero o corte brusco del terreno. Sin embargo en el lenguaje corriente, derrumbe ha llegado a ser sinónimo de derrumbamiento, y pocas veces se utiliza en otro sentido. Tiene, además, la ventaja de ahorrar un par de sílabas, y en mi opinión deben preferirse las palabras cortas.

Capítulo primero

El derrumbe de la República

1. La actitud de la CEDA ante la insurrección de octubre

Si alguna duda albergaban las izquierdas sobre el carácter legalista y no fascista de la CEDA, hubo de quedar totalmente disipada en el curso mismo de la sublevación, pues lo cierto es que Gil-Robles no intentó aprovechar el golpe de la izquierda para rematar a la democracia, ni propició reacciones extremadas.

La línea de la CEDA puede seguirse bastante bien a través de su inspirador doctrinal, el diario *El Debate*. Al estallar la revuelta, la derecha se sobresaltó, pero las noticias de la primera jornada no alteraron su confianza: «Serán derrotados», editorializaba el periódico el día 5: «Los enemigos de la legalidad y de la Patria se han decidido (...) Se rebelan contra una ley que ellos hicieron, protestan contra un sistema de mayorías que ellos han pretendido defender en otros tiempos, se abalanzan contra la autoridad que les disgusta. Saldrán del trance definitivamente derrotados (...) Que los ciudadanos se den cuenta de que lo son y de los deberes que impone la ciudadanía; que adviertan que se atenta contra las libertades públicas». Consignas cívicas, sin asomo de fascismo.

En la jornada siguiente ya pudo percibirse la amplitud del movimiento, aunque varios de sus más audaces planes permanecieron ignorados. La confianza dio paso a la inquietud, y los llamamientos subieron de tono. Bajo el título *Toda Europa contra los socialistas*,

clamaba el diario católico el día 6: «Llega un momento, dijo un famoso político francés de izquierda, pero muy patriota, Georges Clemenceau, en que la situación entre los marxistas y sus aliados, y nosotros, no es más que una cuestión de fuerza». No es culpa de las personas honradas que la batalla se plantee en ese terreno; pero ya que lo eligen los criminales disfrazados de políticos, resultaría menguado y oprobioso tolerar sus desafueros y permitir que el despecho prevalezca sobre la razón (...) ¿Qué disciplina ni qué norma de civilización es ésa que consiste en levantarse en armas contra las instituciones, contra la autoridad y contra la ley cuando éstas no les placen?»

Pero aún faltaba el golpe potencialmente más demoledor, al atardecer del día 6: la rebelión de Companys, quien había logrado engañar al gobierno durante dos días. Está astucia llevó al colmo la ira de la derecha: «La Generalidad (...) ha dado seguridades sobre la conservación del orden público (...) Ha mentido, porque ahora se descubre que durante todo ese tiempo preparaba la incomunicación de Cataluña y se apercebía para la perpetración del crimen. Lleva éste, pues, todas las características de cobardía que acompañan a los delitos de los pistoleros. Companys conoce bien su oficio. Se ha querido paralizar la vida en toda España, se ha pretendido sembrar el terror en algunas comarcas, se ha intentado cándidamente la intimidación de algunos poderes (...) para enajenar parte del territorio nacional (...) y para ahogar en sangre y desolar toda la región catalana, la Generalidad manda por radio a todos los pueblos catalanes que vayan en armas sobre Barcelona (...) ¿Qué le importa a Companys (...) que, inocentes y engañados, sucumban miles de españoles? Es precisamente la guerra civil lo que buscan. Pero España es todavía una nación, porque así lo sienten y quieren los españoles». Estos párrafos están escritos, claramente, horas antes de la rendición de Companys, cuando se temía que los llamamientos radiados desde Barcelona provocasen un río de sangre. Sin embargo, salvado el momento crítico, la furia menguó: «Companys era, desde luego, contrario a lo que ha ocurrido. Se ha visto verdaderamente arrastrado por Estat Catalá. (...) Hacía varios días que estaban presionando a Companys. Querían que el acto de rebeldía lo hubiera hecho el viernes por la tarde, pero no lo consiguieron. Companys se negó en un forcejeo violentísimo (...) Parece que Azaña tampoco estaba muy propicio», explicaba, más conciliador que

veraz, Angulo, corresponsal de *El Debate*, el día 9.

El 13, con la victoria gubernamental asegurada y próxima la extinción del foco asturiano, un editorial pedía: «Ni más ni menos que cumplir la ley (...) Cuando los Gobiernos y la gente no han respondido como se debía a la provocación, sino que han contemporizado y han pretendido armonizar lo imposible por debilidad o por no estar a la altura de las circunstancias, han sido, a la postre, desbordados y vencidos; Kerenski y la burguesía socializante rusa son tipos representativos (...) No pedimos ningún recurso o medio excepcional o extraordinario; pedimos simplemente el cumplimiento estricto de la ley».

La CEDA, por lo tanto, afrontó una crisis tan extremada sin adoptar un lenguaje o acción fascista o golpista. Su discurso, aunque colérico en algunos momentos, apeló a la defensa de las libertades ciudadanas y de la legalidad. Instó al «castigo ejemplar de los responsables», pero no pretendió leyes especiales ni siquiera la proscripción de los partidos rebeldes. Ahora bien, no era seguro que fuera a ocurrir lo mismo una vez consolidada la victoria sobre la revolución.

Capítulo segundo

II.- Un régimen en quiebra

Si durante la insurrección la CEDA, principal partido de la derecha, se atuvo plenamente a la legalidad, ¿ocurriría después lo mismo? El golpe del PSOE y la Esquerra había creado una situación extraordinariamente delicada y paradójica, que el día 19, apenas concluida la rebelión de Asturias, exponía *Gaziel* en *La Vanguardia* de Barcelona: «Se ha terminado la República del 14 de abril. Los que la trajeron están descartados, aniquilados. Los que no la querían son dueños de ella. Y se da el caso portentoso -¡otra cosa de España!- de que la Constitución ha sido desgarrada y pisoteada por los mismos que la votaron, y los encargados ahora de su custodia son aquellos que la combatieron. En estas condiciones volvemos a entrar en un compás de espera. Una espera en la que se dibuja por momentos una gran interrogación: ¿vendrá una república de otra clase... o vendrá otra cosa?».

El diagnóstico parecía correcto, incluso en su insinuación de que los vencedores podrían optar por la dictadura. La pacificación de los espíritus, o lo contrario, iba a depender de la lección que vencedores y vencidos extrajesen de los sangrientos sucesos pasados. *Gaziel* mostraba poco optimismo, pero no faltaban razones para la esperanza. Pues si bien las derechas podían aprovechar su victoria para derribar o socavar al régimen, hasta entonces no habían dado muestras de marchar en esa dirección. Y la derrota quizá permitiera corregir el

extremismo de las izquierdas.

¿Qué actitud, pues, adoptaría la CEDA? El PSOE había basado su estrategia en la profecía de que el país se escindiría entre partidarios de dictaduras, una *proletaria* y otra *burguesa*. La profecía tendía a cumplirse por sí sola, pues en la medida en que las luchas sociales fuesen atizadas con fines revolucionarios, la derecha se vería empujada a su vez hacia posiciones extremas, similares a los fascismos europeos de la época. El hostigamiento a la legalidad durante 1934, y la embestida final de octubre, habían sido de tal magnitud que parecía bastante lógica la caída de la CEDA en una postura revanchista.

No obstante, el 5 de noviembre, en el Parlamento, Gil-Robles volvía a distanciarse del fascismo: «Está en crisis aquel viejo concepto liberal que cimentaba sobre el individuo todo el edificio político y todo el edificio social. Pero me temo que mucho antes de ensayarse con plena eficacia esté también en decadencia ese principio contrario que, apartando al individuo, quiere construirlo todo sobre el estado. Y le temo mucho a los excesos del individuo; le temo mucho más a los excesos del Estado, que hace que desaparezca toda personalidad, toda individualidad, absorbida por el monstruo del Estado (...) Yo tengo que defender (la personalidad) en nombre de un concepto humano, en nombre de un concepto social, en nombre de un concepto cristiano». Respondía así al monárquico Calvo Sotelo, quien sí proponía utilizar la derrota revolucionaria para cortar por lo sano, dictatorialmente.

Salvador de Madariaga ha escrito: «El argumento de que Gil-Robles intentaba destruir la Constitución para instaurar el fascismo era a la vez hipócrita y falso. Hipócrita porque todo el mundo sabía que los socialistas de Largo Caballero estaban arrastrando a los demás a una rebelión contra la Constitución de 1931, sin consideración por lo que proponía o no Gil-Robles; y por otra parte a la vista está que el presidente Companys y la Generalidad entera violaron la Constitución. ¿Con qué fe vamos a aceptar como heroicos defensores de la República de 1931 a aquellos mismos que para defenderla la destruían? Pero el argumento es además falso, porque si Gil-Robles hubiera tenido la menor intención de destruir la Constitución del 31 por la violencia, ¿qué ocasión mejor que la que le proporcionaron sus adversarios alzándose contra la misma Constitución en octubre de 1934, precisamente cuando él, desde el poder, pudo como reacción haberse decla-

rado en dictadura? Lejos de haber demostrado en los hechos apego al fascismo y desapego al parlamentarismo, Gil-Robles salió de esta crisis convicto y confeso parlamentario»(1). Es difícilmente rebatible el análisis de Madariaga. La república se sostuvo y el gobierno siguió dirigido por los radicales, y eso hubiera sido imposible sin la templanza de la CEDA. No fueron prohibidos los partidos rebeldes, ni siquiera momentáneamente, y el estatuto catalán quedó suspendido, no abolido. Pero la revolución había inferido al régimen una herida de difícil cura. De hecho lo había dejado en quiebra, al arruinar la confianza en él como sistema de libre expresión y juego de las fuerzas políticas. No obstante, la moderación cedista permitía pensar en una etapa menos convulsa y en una progresiva reintegración política de los vencidos de octubre.

Así pues, la pacificación dependía ante todo de una rectificación en el ánimo y las ideas de los sublevados. Y esa rectificación faltó. La conducta democrática de la CEDA no impresionó a la mayoría de la izquierda, que continuó tildándola de fascista y reivindicó con orgullo el alzamiento. Para la Esquerra, era «tiempo de reflexión, de examen de conciencia», pero su examen justificaba de lleno la rebelión de octubre. Sin ella, aseguraba humillando a la lógica, «todo se habría perdido, hasta el honor (...) todo nos lo habrían quitado, hasta el derecho de llamarnos catalanistas y republicanos (...) todo habría sido más doloroso y más catastrófico». La derrota, al parecer, les había permitido salvar el honor y el derecho, mitigar el dolor y la catástrofe. El descalabro habría sobrevenido «por fatalidades políticas y por disensiones internas de las izquierdas políticas españolas», izquierdas con las cuales la Esquerra simpatizaba, pero de las que se excluía. Por fortuna dichas izquierdas «han iniciado los primeros esfuerzos para (...) reconquistar, no la opinión pública, que de hecho ha estado siempre con ellas, sino los organismos que han de encauzar políticamente esta opinión». En cuanto a la «democracia catalana», como se denominaba a sí misma la Esquerra, apoyaba «fraternalmemente» a los hombres de «la democracia española», y había «aprendido la lección tremenda en el sentido de depurar sus organismos y de encuadrarlos en una disciplina de hierro, de continuar la lucha abnegada y tenaz», porque «la democracia de izquierda, superior en hombres y en pasión, ha sido inferior en cuanto a disciplina y organización

a las fuerzas de la derecha. En las nuevas batallas civiles sólo una disciplina inflexible, una dirección unificada y un programa preciso de acción asegurarán la victoria». Para vencer, un «principio básico: unificación», la cual debía abarcar a la misma CNT, a la que halagaba al tiempo que le afeaba sus «erróneas» posturas. E insistía, en la misma línea anterior a octubre: «Un nombre, una bandera, una disciplina, un programa», así como «disciplina, serenidad, abnegación, lealtad (...) Nuestras miradas fijas en las órdenes, lleguen cuando lleguen, del único sitio de donde pueden y han de venir y ser dadas». Reflexiones tales, con reminiscencias del estilo fascista, eran públicas, en pleno estado de guerra y bajo la censura, en *La ciutat*, diario sustituto del suspendido *L'humanitat* (2).

En cuanto al PSOE, debió haber sido el momento de Besteiro, una vez los hechos habían corroborado sus advertencias: la revolución era una «locura», sólo podía producir «un baño de sangre» y concluir en fracaso. *El sol* editorializaba el 24 de noviembre: «Parece que en el seno del partido socialista va imponiéndose el criterio que siempre debió prevalecer. La tragedia revolucionaria (...) ha sido una lección demasiado dura (...) Pero el cambio de orientación (...) ha de emerger precisamente de un sincero viraje de la conciencia viva del partido». Sin embargo el viraje no ocurrió. Salvo los besteiristas, nadie en el PSOE juzgó oportuna la menor autocrítica o siquiera un examen a fondo de lo ocurrido. Es más, la propaganda socialista llegó a sentar la tesis de que, en definitiva, la insurrección había triunfado, al impedir una imaginaria dictadura de derechas. Sobre tan ardua pretensión escribirá el socialista Mario de Coca, partidario de Besteiro: «Julio Álvarez del Vayo (...) dijo en un mitin, ya bien entrado el año 1935, y no tardó en ser fielmente repetido por el jefe bolchevizante (Largo Caballero), que el proletariado español había dado una lección de heroísmo al proletariado universal con la insurrección octubrista, venciendo al fascismo cuando ya se había adueñado del Poder. Esto es batir por el máximo tanto alzado todos los campeonatos de idiocia y mentecatez» (3)

En cualquier caso la *mentecatez* tomó alas en el partido. Y persistió el espíritu de la última proclama del comité asturiano: la derrota sólo sería un alto en el camino, hasta una nueva ocasión propicia. Tampoco las izquierdas republicanas, encabezadas por Azaña, las

cuales habían apoyado moralmente la insurrección, iban a adoptar una actitud conciliatoria, sino al contrario. Por todas estas razones el año 1935 no veía la marcha hacia la estabilidad y la concordia, sino lo contrario. Como observará el socialista Amaro del Rosal, uno de los organizadores de la insurrección de octubre, «Las clases dominantes vivieron aterradas por ese fenómeno de vitalidad política. La prensa reaccionaria, bastaría con analizar *El debate*, era un exponente de ese terror. De ahí su incitación permanente de aconsejar «cristianamente» la represión y el golpe de Estado. La reacción había logrado la victoria electoral en 1933 y aplastar el movimiento de octubre, sin embargo no podía contener el proceso revolucionario que representaba octubre» (4). No hubo tales consejos de «golpe de estado», pero las demás frases responden a la verdad.

Nota: La tesis de que la revuelta de octubre evitó un golpe fascista, descalificada por Mario de Coca, merece cierto examen porque ha tenido influencia y sigue teniendo alguna. El historiador inglés P. Preston, por ejemplo, la hace suya: «Los apologistas de Gil Robles afirman que el hecho de no haber tomado el poder una vez consumada la represión muestra su respeto esencial por el sistema parlamentario. Los socialistas afirman que la determinación que mantuvo el proletariado asturiano no le daba otra alternativa». Realmente, definir a Madariaga como un «apologista» de Gil-Robles no es serio. Y quienes afirman lo que Preston dice no son «los socialistas», sino sólo algunos de ellos, muy pocos hoy día aparte del propio historiador. También es una expresión propagandística, más que informativa, la «determinación del proletariado asturiano», pues sólo una parte menor de éste se rebeló. Y no habiendo hecho amago la CEDA de contragolpe de estado, todo el argumento cae por su peso.

Preston apoya su interpretación en los siguientes datos: «Los mineros, armados sólo con cargas de dinamita, impidieron el paso de cuatro columnas armadas con artillería y pleno apoyo aéreo, y las derrotaron en dos ocasiones. La dificultad que tuvieron en pacificar una región no auguraba grandes éxitos en su intento de tomar el país entero. El mismo ministro de la Guerra admitió que de haber surgido levantamientos en otras zonas del país, el ejército no hubiera podido hacerse con ellas. Por otra parte, el mismo ejército se había mostrado lo suficientemente republicano en espíritu para tener que echar mano

de los mercenarios africanos para llevar a cabo la represión. Hay noticias de que al menos un oficial dio orden a sus hombres de no hacer fuego contra sus hermanos. De hecho, cuando la derecha decidió tomar el poder en 1936, tuvo que luchar durante tres años en una feroz guerra civil» (5).

Casi ninguno de estos datos es fidedigno. Los mineros disponían de muchísimas más armas que la dinamita, y sólo tuvieron a raya por unos días, sin derrotarla, a una de las columnas militares, aparte de otras dos pequeñas expediciones que se replegaron sin combatir. En cambio una columna mínima, de 300 hombres, logró atravesar la zona rebelde, liberando la importante ciudad de Avilés y penetrando luego en Oviedo; y las tropas enviadas por Franco a Gijón, con algo más de 2.000 soldados, se abrió paso hasta la capital regional y resolvió la situación en cinco días.

Es cierto, en cambio, que el ejército fue suficientemente republicano. Por ello casi todo él defendió la legalidad bajo el mando de un gobierno indiscutiblemente legal. Los militares revoltosos permanecieron pasivos en su mayoría, y apenas hubo deserciones. El oficial (jefe en realidad) que comentó (no dio ninguna orden en tal sentido) que sus hombres no tirarían contra sus «hermanos» tomó una actitud subversiva, no republicana. Los «mercenarios africanos», como parte del ejército español, ya habían sido traídos por Azaña contra Sanjurjo, en 1932. En los disturbios del 6 de febrero de 1934, en París, parte de la ciudad fue tomada por tropas senegalesas, y nadie pensó que el gobierno francés de izquierda desconfiara de su ejército y tuviera que recurrir a «mercenarios negros» para reprimir al pueblo.

También el argumento extraído de las declaraciones del ministro sobre la dificultad de controlar la rebelión si ésta hubiera estallado en todas las regiones prueba lo contrario de lo que el historiador inglés supone. Pues si bien los mineros combatieron con valor y hasta con heroísmo, fueron la excepción clamorosa, nunca imitada. Por eso fue vencida la revuelta tan fácilmente. Preston parece creer que sólo se intentó la revolución en Asturias.

Algo inapropiada resulta la comparación con los tres años de lucha que costó la victoria de los sublevados de 1936, pues olvida un punto esencial: que, al revés que en octubre del 34, en julio del 36 el poder estaba en manos de la izquierda. Por eso la rebelión derechista fue un

semifracaso inicial que bien pudo haber terminado como la izquierdista de octubre. Y si la derecha rebelde en 1936 logró finalmente vencer, tuvo para ello que superar la aplastante ventaja inicial de sus enemigos.

En realidad, la lección que la derecha pudo extraer de octubre fue más bien la facilidad de su triunfo en todas partes; incluso en Asturias la resistencia cedió pronto ante soldados bien entrenados.

El historiador olvida, además, que el «golpe fascista» había ocurrido ya, consistiendo en la entrada de tres ministros de la CEDA en el gobierno. Así lo afirmaba la propaganda y lo aseguró Companys en su célebre discurso. ¿Por qué, si no, se iban a rebelar? Por lo tanto, el «golpe fascista» habría triunfado de lleno. En mayo, los ministros de la CEDA subieron a cinco, uno de ellos el propio Gil-Robles y en la cartera clave de Guerra. No hay noticias de que el PSOE y la Esquerra volvieran a vencer este redoblado «golpe fascista», a pesar de haber impedido misteriosamente el anterior. Hace falta mucha credulidad para admitir que una insurrección derrotada, con su organización desmantelada, sus armas perdidas, sus jefes encarcelados o en fuga y con la desmoralización inmediata al fracaso, tuviese la mirífica virtud de impedir o vencer ningún golpe. Eso insulta la inteligencia, y un historiador sólo puede considerarlo como propaganda, algo tosca, la verdad, aun si normal en momentos de pasión política.

Capítulo III

Frustración y división de los vencedores de octubre

El gran problema, que a tantos inquietaba, de si la república sobreviviría a la insurrección de octubre, quedó resuelto a favor de la continuidad cuando la CEDA persistió plenamente en su política legalista. Pero a continuación se abría otro problema extremadamente serio: el del castigo de los insurrectos.

El 10 de octubre, en pleno auge de la rebelión asturiana, tenía lugar en Barcelona el primer juicio militar contra varios implicados. El caso más grave era el del comandante Enrique Pérez Farrás, acusado de rebelión militar y alta traición, y de iniciador de los disparos frente a la Generalidad, que habían ocasionado varias víctimas. Su condición de jefe del ejército le hacía acreedor a un trato más severo que el de los civiles, así que fue condenado a muerte, junto con el teniente coronel Ricart y el capitán Escofet.

Apenas conocida la sentencia, el cardenal Vidal i Barraquer, dirigentes de la Lliga Catalana, empezando por Cambó, y otros muchos personajes, enviaron al gobierno y al presidente de la república, Niceto Alcalá-Zamora, súplicas de clemencia a favor de Pérez. Ninguno de ellos parece haberse movilizado a favor de otro rebelde, Sanjurjo, en agosto de 1932, pese a que éste era, en principio, más afín a sus ideas. En todo caso el perdón, de concederse ahora, tendría la máxima repercusión, pues arrastraría el de los demás responsables del alzamiento, en especial los civiles.

Alcalá-Zamora estaba resuelto a impedir la ejecución de la sentencia. Ya el día 16 de octubre trató al convicto de “caudillo de las libertades catalanas”, en una nota oficial, según reseña Gil-Robles, y daba por hecho el indulto. Sin embargo no resultaría tan fácil. El artículo 102 de la Constitución rezaba: “En los delitos de extrema gravedad podrá indultar el Presidente de la República, previo informe del Tribunal Supremo y a propuesta del Gobierno responsable”. Y el gobierno no tenía intención de hacer la propuesta a favor de Pérez Farrás, aunque sí de Ricart y Escofet.

Ante ello, el presidente tomó la iniciativa, inconstitucional, de convocar a los ministros al palacio de Oriente, el día 17, con propósito de imponerles la clemencia. Preparó el escenario exhibiendo en una amplia mesa numerosos telegramas y cartas de petición de gracia, y luego habló casi tres horas seguidas, justificándose en la “potencialidad” de sus prerrogativas, que irían en aquel caso más allá de la espera pasiva a la propuesta de indulto. Recalcó especialmente que las ejecuciones crearían mártires, con todo su arrastre sentimental; en cambio la izquierda nacionalista se había hundido en el ridículo, “que es lo que más mata, y no convenía levantarla en la cumbre de la tragedia, lo que más realza”. Trató asimismo de quitar fuerza moral a los ministros, recordándoles que habían amnistiado al general derechista Sanjurjo “por un delito semejante” * (1).

*Dice Azaña sobre el caso de Sanjurjo: “La gente está empeñada en que se le mate. A la presidencia del Consejo han llegado tres mil telegramas, casi todos pidiendo la ejecución”. Azaña prefirió perdonarle la vida. (2)

Los ministros, varios de ellos opuestos por principio a la pena de muerte, vacilaban. «Todos veíamos la ventaja del Presidente. Mañana se diría que habíamos disputado como lobos hambrientos la cabeza de un hombre y que el único que había manifestado sentimientos humanos había sido Su Excelencia», observa Lerroux, ya ablandado tras la visita de la esposa del condenado, «estatua de dolor» y de su hija adolescente que «se arrodilló a mis pies». «No conozco situación más difícil para la sensibilidad de un hombre que aquella en que yo me encontraba y en la que se han encontrado tantos gobernantes». Al final acordaron remitir al Tribunal Supremo el informe condenatorio. «Don Niceto se cogió al clavo ardiendo, pero luego se verá que quie-

nes se quemaron fuimos nosotros», recuerda Lerroux. (3)

Los ministros de la CEDA rechazaban de plano la intromisión presidencial (4). Gil-Robles planteará: «¿Acaso no hubiera demostrado la CEDA tener una visión política más amplia y más certera si se hubiese sumado a la tesis del presidente de la República pensando en la futura pacificación del país? (...) En primer lugar, (con respecto a Sanjurjo) defendimos y logramos una amnistía encaminada a borrar la condena injusta de los ministros de Primo de Rivera, cuyo régimen había gozado de un indiscutible apoyo popular. El que la amnistía alcanzase (...) a Sanjurjo, con cuya rebeldía jamás habíamos tenido la más pequeña solidaridad (...) era una cuestión secundaria y una consecuencia forzosa. La revolución de octubre fue cosa muy distinta. Significó un ataque de los núcleos marxistas y sus cómplices (...) contra la legalidad constitucional que ellos mismos habían creado. Tampoco hay la menor paridad entre la sublevación de Sanjurjo, ahogada en pocas horas, y que apenas produjo más derramamiento de sangre que la de quienes secundaron al general, y los horrores de la revolución de Asturias (...). La revolución de octubre fue un intento fracasado de aplastamiento de un sector amplísimo de la sociedad española; un plan, que luego se repetiría, de aniquilamiento de una mitad de España por la otra media. La debilidad del poder público en ocasiones como ésta, acelera el proceso de descomposición en lugar de contenerlo» (4)

El dilema era real, pues si las ejecuciones creaban mártires, los indultos crearían héroes, dado el nulo arrepentimiento de los jefes rebeldes. Había un acento de desesperación en el debate cuando, el día 19, propugnaba: «No puede haber más que justicia. Llegan probablemente al millar las víctimas de la revolución*. En ninguno de los intentos subversivos ocurridos en nuestro país sucedió en tan poco tiempo cosa parecida (...) Nunca ha llegado entre nosotros a tal extremo la pérdida del sentido moral, la obsesión de destruir y matar, la borrachera del rencor (...) La tropa del crimen mueve a conmiseración y lástima; para los técnicos del crimen no puede haber más que justicia. Es absolutamente necesario, es nada menos que cuestión de vida a o muerte (subr. mío) acomodar a estas novedades de la revolución la actitud de la defensa (...) No son los revolucionarios los que, en fin de cuentas, ocasionan la ruina de los Estados, son los Poderes

débiles».

* Sobrepasaron ampliamente el millar

La derecha recordando los sucesos de Rusia, estaba muy sobresaltada por la pasada insurrección. Aunque ésta apenas había durado dos semanas, y en la mayoría de los lugares unas horas o escasas jornadas, los rebeldes habían matado a decenas de clérigos y guardias prisioneros, ya varios empresarios y políticos. Cambó, en sus Memorias, se muestra convencido de que sólo la pronta derrota de la Esquerra y la negativa de Dencás a armar a la multitud habían salvado a los propietarios y al clero de una masacre como la que iba a ocurrir en 1936.

Por todo el país proliferaron enseguida apologías de la revolución y denuncias de la represión contra ella, con lo que la inquietud de la derecha rozaba a veces la histeria. El pensador vasco Ramiro de Maeztu escribía: "Ahí están las muchedumbres que se lanzaron a la huelga revolucionaria (...) y las ideas insensatas que las movieron. y aquí estamos todos los burgueses en las listas negras para que otra vez, cuando salgan mejor las cosas a los revolucionarios, se nos fusile en masa» (5). Palabras por lo demás proféticas, pues a los dos años casi justos su autor caería fusilado junto con otros miles de derechistas, en Paracuellos del Jarama, cerca de Madrid, en la mayor matanza de prisioneros de la guerra*.

* Maeztu, próximo al anarquismo en su juventud, había vivido largos años en Inglaterra, donde influyó en el movimiento *Guild Socialism* y escribió, durante la guerra mundial, *Authority, Uberty and Function in the light of the war*, que le dio renombre, considerándole H. G. Wells un maestro del pensamiento de la época. Fue evolucionando en un sentido conservador, hasta propugnar un régimen de autoridad y jerarquía, dentro de un igualitarismo de tinte religioso.

El partido de la clemencia ganaba terreno en el gobierno. Se permitió que en el caso de Azaña y algún otro, sospechosos de complicidad en el golpe, prevaleciese su inmunidad parlamentaria. También Companys y sus consejeros obtuvieron librarse del tribunal militar, y ser juzgados por el Tribunal de Garantías Constitucionales, al que tanto habían denostado (6).

Los rumores de indulto e «impunidad» provocaban ruido de sables. Gil- Robles, sumido en "angustiosa perplejidad» no sabía por dónde

salir. «Si nos sometíamos a la coacción presidencial, quedaría impune el movimiento sedicioso (...) y la sangre derramada sería sólo precursora de mayores y más tremendas desgracias (...) El Gobierno que se doblegase a las presiones del señor Alcalá-Zamora quedaría destrozado moralmente (...) ante la opinión pública». Pensó en provocar una crisis haciendo dimitir a los ministros de su partido, pero dio esa batalla por «perdida de antemano», ya que el presidente, «despechado», favorecería entonces un gobierno de izquierdas y disolvería las Cortes, perspectiva que para Gil-Robles equivaldría a un golpe de estado. No es fácil creer que don Niceto pudiese hacer tal cosa, pero Gil-Robles parecía convencido de ello (7).

En tan arduo aprieto, el jefe cedista recurrió al ejército, pese a que le «repugnaba» mezclarlo en la política. Sugirió a los generales Fanjul y Goded, de tendencia monárquica, que él no se opondría «si el Ejército hiciera saber al presidente su firme deseo de impedir que se vulnerara el código fundamental de la nación, según estaba a punto de hacerlo». Esto era un chantaje similar al de la izquierda cuando advertía a Alcalá-Zamora que no toleraría ministros de la CEDA, y podía desembocar en un golpe de estado; si bien la presión izquierdista en octubre se hacía contra una medida perfectamente legal, mientras que Gil-Robles justificaba la suya en una actitud no constitucional del presidente. Pero los generales se inhibieron, influidos al parecer por Franco, quien detendría así por segunda vez un posible golpe militar.

El día 20, Fanjul y Goded comunicaron al jefe cedista que el ejército no estaba en condiciones de actuar, y aconsejaron a la CEDA resistir en el gobierno, tragándose el indulto de Pérez y otros (8).

Gil-Robles, lleno de amargura, claudicó. y así, sin tiempo para explotar o al menos saborear la victoria, el gobierno y la derecha se sumían en la depresión. Pero el mismo día en que los generales retrocedían, el Tribunal Supremo se pronunciaba contra el indulto, desairando al presidente. Según Lerroux, éste volvió a la carga sobre los ministros, con redoblado empeño. Según don Niceto no fue precisa esa segunda intervención (9). Los consejos de guerra continuaban y las penas de muerte pasaban de la veintena.

Entre reuniones y consideraciones en torno a la represión, el gobierno permanecía estancado, ofreciendo una estampa de falta de autoridad e iniciativa. Por fin, el 5 de noviembre, proponía a Alcalá-

Zamora el indulto de veintiún sentenciados, Pérez Farrás entre ellos. Sólo dos serían ejecutados: un rebelde que en León había arrojado una bomba contra un vehículo de la Guardia Civil ocasionando varios muertos, y un muchacho de diecisiete años, delincuente común que había asesinado a un policía durante un atraco. Esta incoherencia agravaba con una imagen de injusticia la de debilidad que transmitía a la opinión pública.

Ese día, por la tarde, debatieron las Cortes las responsabilidades de la revolución y Gil-Robles aprovechó para pedir a la Cámara un voto de confianza al gobierno. Afirmó, en parte contra su convicción íntima, que más que sanciones graves importaba aplicar medios eficaces para que la rebelión no se reprodujera. Pidió todas las medidas sociales que soportase la economía, así como transformar la vida sindical para impedir las tendencias revolucionarias. Llamó también a las izquierdas y los socialistas a volver cuanto antes al parlamento “sin pretextos”, y a exponer en él su conducta. Exigió una clarificación de los sucesos de octubre “caiga quien caiga”, a fin de salvar las instituciones. “Estas Cortes durarán mucho tiempo”, vaticinó temerario.

Las izquierdas faltaban, por propia voluntad, al debate. Vidarte afirma que la mayoría de los diputados socialistas hubiera preferido “asistir y pechar con el chubasco”, pero Negrín le había disuadido al transmitirles la opinión de Largo Caballero -entonces en la cárcel- de que el gobierno podría “enfurecerse más” y “perjudicar a los compañeros presos” (10).

El diputado monárquico Goicoechea rebatió a Gil-Robles, extrañándose de la necesidad de un voto de confianza. Pidió justicia y criticó la desigualdad ante la ley entre los brazos ejecutores y los jefes de la revolución: “¿Cuál es la razón de ese género de predilecciones? ¿Es acaso el hecho de que muchos de los inculcados forman parte de organizaciones secretas a las cuales pertenecen algunos ministros de la República?”, preguntó en alusión transparente a la masonería. Advirtió que las medidas sociales no acunarían contra la revolución, pues la raíz de ésta se hallaba, a su juicio, en los sentimientos de “odio y envidia” sembrados por la agitación socialista y republicana. “¿Qué anhela el país entero para que no se reproduzcan catástrofes como la actual? Que desandéis todo lo andado desde el 14 de abril de 1931”

Capítulo IV:

La solución Thiers

El debate parlamentario del 5 de noviembre sobre la reciente insurrección cobró un dramatismo y significación especiales cuando intervino Melquíades Álvarez, viejo político en otros tiempos izquierdista y participante en la huelga revolucionaria de 1917, también jefe de Azaña cuando éste hacía sus primeras armas en la vida pública. Habiendo evolucionado a posiciones conservadoras, y muy asustado por los acontecimientos, Álvarez tomó, al igual que los insurrectos pero en sentido contrario, el ejemplo de la Comuna de París de 1871: “Thiers (...) cuando presencié los horrores de la Commune, fusiló, y fusiló produciendo millares de víctimas. Con aquellos fusilamientos salvó la república, salvó las instituciones y mantuvo el orden”. Afirmó que la barbarie de los rebeldes de octubre ahuyentaba la natural predisposición a la piedad.

Cambó, el histórico líder catalanista de derecha, demandó “la máxima autoridad del Gobierno” para evitar el caos, y criticó sus indecisiones, que están sembrando “depresión en el espíritu público”. Pidió no agravar las penas, pero evitar las amnistías. España, dijo, era el país de las amnistías, y el español, citó de Ganivet, “primero se siente justiciero y quiere castigar muy duramente, pero inmediatamente se siente piadoso y quiere borrar por el perdón las penas que los tribunales han impuesto”; y de ahí la facilidad por las revueltas. Los condenados a años de prisión “están convencidos de que (...) en

diez o doce meses se verán amnistiados". En contradicción con su solicitud de indulto para Pérez Farrás, pidió pocas penas de muerte, pero ejecutadas. Alertó de que "la crisis actual es de una gravedad inaudita (...) (y) lo más grave es que coincide con una profunda crisis espiritual de la sociedad española", para superar la cual sería preciso "la floración intensa de un patriotismo (...) afirmativo, porque en España pasan los años y los siglos con afirmaciones de patriotismo negativo". El gobierno debía atender a otros asuntos perentorios y no estancarse en la liquidación del movimiento de octubre, insistió.

Calvo Sotelo, que descollaba como el mejor tribuno monárquico, pronunció las frases más radicales: "El entusiasmo de ayer se ha trocado en desesperanza (...) Los elementos revolucionarios se están rehaciendo espiritual y moralmente a marcha vertiginosa, y es que se sienten apoyados y protegidos por algo o alguien que no es fácil de definir; por un fluido magnético que sopla de no sé qué alturas invisibles". Era una nueva acusación a la masonería, o quizá a Alcalá-Zamora. "En pleno estado de guerra se difunde una prensa clandestina que ataca con prosa soez al Gobierno y sus representantes (...) Se habla de inminentes huelgas con entera naturalidad. ¿Por qué se tolera la cotización descarada (...) para indemnizar a todos los (rebeldes) que hayan sufrido daño como consecuencia de la revolución social? El Gobierno no tiene poder para impedir que se levante frente a él otro poder clandestino e ilegal".

Aseguró que en ningún país se daba el caso de que apenas aplastada una revolución surgiesen amenazas de nuevas revueltas, como una anunciada aquellos días por la CNT. Gil Robles contestó que a los ocho días de la revuelta espartaquista en Alemania, saldada, dijo, con trescientos fusilamientos, se preparaba un nuevo salto revolucionario. El monárquico atribuyó el hecho a la desorganización del ejército alemán. Asumió luego el argumento de Melquíades Álvarez sobre la represión de la Commune: "La República francesa vive, no por la Comuna, sino por la represión de la Comuna (el señor Maeztu: "¡Cuarenta mil fusilamientos!")* Aquellos fusilamientos aseguraron sesenta años de paz social". El ejemplo francés cundía, por tanto, en la derecha lo mismo que en la izquierda. Contradiciéndose en parte, rebatió al jefe del Gobierno Lerroux, que por aquellos días invocaba el lema "¡crueldad no!": "¿Quién pide en España crueldad? (...) Lo que pedimos a S.

S. Es que no haya crueldad para los criminales, pero que tampoco haya crueldad para los 22 millones de españoles que están expuestos a sufrir otra ola criminal semejante”.

*La represión de la Commune fue brutal, aunque sus cifras han sido revisadas muy a la baja

Denunció la táctica del PSOE, que “discrepa de la de todos los partidos (socialistas) solventes de Europa, puesto que ninguno patrocina la lucha de clases en su forma violenta”. En consecuencia, “debemos sentar el principio con todas sus consecuencias: hay que suprimir la lucha de clase. Como hecho y como propaganda. El morbo que lleva al país a estas luchas feroces no está sólo en los partidos; hay que buscarla, además, en los cuerpos legales de la misma República. La Constitución republicana (...) no tiene mañana”.

Al igual que otros derechistas, intentó Calvo una acusación en regla contra el presidente Alcalá-Zamora por conducta ilegal. “Entre los indultados había reos de rebelión militar y alta traición. Indultando a Pérez Farrás habéis cometido un crimen al ejecutar a esos dos desgraciados. ¿Qué más queda del espíritu de las Constituyentes? Queda la cúspide del Estado, y yo digo que si hay cuarenta y nueve diputados que asocien su firma a la mía se presentará una petición de discusión para acusar por responsabilidades políticas y criminales al jefe del Estado, que ha infringido la Constitución y ha pisoteado el espíritu representado por esta Cámara”.

Las palabras de Calvo impresionaron a los diputados, y hubo peligro de que las fuerzas vencedoras se desgarrasen. El propio líder cedista, aunque rebatió las expresiones totalitarias del monárquico y la idea de una represión sangrienta y masiva, estaba de acuerdo con él en lo referente a Alcalá-Zamora y el “impunismo”, y tuvo que hablar en contra de su convicción: “Fue, sin duda, uno de los momentos más difíciles de mi vida política”, recordará. Señaló: “El indulto es una facultad que corresponde exclusivamente al Consejo de Ministros. Si el Gobierno no cree oportuno poner en conocimiento del Jefe de Estado el caso, sin aquél ninguna autoridad puede intervenir. ¡Queda sentada la tesis!”. Pero se negó a extraer el corolario de encausar al presidente, como exigía Calvo, porque “si en el fragor de un período revolucionario planteara yo una cuestión previa al Gobierno para luego examinar si el jefe del estado ha cumplido o no con su deber, me convertiría

en un revolucionario dentro de ese mismo Gobierno”, de modo que “sin entrar en el examen de las razones expuestas, demostré la inoportunidad del debate, y mucho más las consecuencias que pretendían deducirse del mismo, en unos instantes en que, apenas dominados los principales grupos rebeldes, amenazaba estallar otro movimiento subversivo” (1)

La mayoría de las Cortes secundó al líder de la CEDA y dio su confianza al gobierno. Los monárquicos alfonsinos y tradicionalistas se abstuvieron. Los nacionalistas catalanes de la Lliga y los vascos del PNV habían anunciado también la abstención, pero ante la amenaza de otro movimiento subversivo, y para no ser imputados de insolidarios, apoyaron asimismo a Lerroux.

Los días 7 y 8 el Parlamento trató las responsabilidades. Los monárquicos denunciaron imprevisión ante el golpe de octubre, planteando un “velado voto de censura al gobierno”. Éste, aconsejado por Gil-Robles superó el trance echando por la borda a los ministros más criticados, Samper y Diego Hidalgo, ministros de Estado y de la Guerra respectivamente. Tal solución disgustó a los radicales y levantó graves resquemores entre ellos y la CEDA.

Peor fue el enojo de los monárquicos, con quienes la CEDA había tenido siempre un trato espinoso. Pasaron, dice Gil-Robles, a “zaherirme sin piedad, como si fuera un verdadero traidor. Todas las armas resultaron buenas para quebrantar y destruir, en lo posible, a un partido que (...) procuraba no agudizar los problemas espirituales de España”. Desde hacía tiempo, los monárquicos, acaudillados por la resuelta personalidad de Calvo Sotelo, trataban de formar con los grupos más extremos un “Bloque Nacional” que “tendría como misión primordial sembrar la mística de la reforma estatal totalitaria”. En noviembre, cada vez más irritados con la derecha católica, procuraban la abierta ruptura con ella desde una posición de fuerza. (2)

El 8 de diciembre el Bloque Nacional dio a conocer su manifiesto, redactado por Pedro Sainz Rodríguez, intelectual de cierto relieve y conspirador compulsivo. El manifiesto atribuía la revolución a “causas políticas (...) cuya extirpación necesaria es empeño inaccesible a los actuales gobernantes”. Proponía un referéndum con las preguntas: “¿Acepta o rechaza España el laicismo? ¿Quiere o no España la restauración de la gloriosa bandera bicolor (...)?” ¿Quiere o no España la

supresión de la lucha de clases? ¿Quiere o no España la supervivencia del actual Estatuto de Cataluña?”. Y pedía “un Gobierno patriota y fuerte” que “con paso firme y marcial, lograrse en plazo brevísimo el completo desarme moral y material del país (...) Unas semanas de actuación implacable dentro del derecho devolverían el sosiego a España (...) El Ejército, escuela de ciudadanía, depurado por sus Tribunales de honor, difundirá las disciplinas y las virtudes cívicas, forjando en sus cuarteles una juventud henchida de espíritu patriótico e inaccesible a toda ponzoña marxista y separatista. EL EJÉRCITO NO ES SÓLO EL BRAZO, SINO LA COLUMNA VERTEBRAL DE LA PATRIA”. Esta apelación a las fuerzas armadas se completaba con el propósito de una “conquista del estado, plena, sin condiciones”, y la llamada a actuar en “la tribuna, la prensa y la calle, o sea la actividad política extraparlamentaria”, para instaurar “los principios de unidad, continuidad, jerarquía, corporación y espiritualidad que hemos diseñado”. A Anasaldo, el mismo que había organizado la “Falange de la sangre”, y que había sido expulsado de ella por conspirar contra José Antonio, le fue encomendada la formación de unas milicias llamadas “Guerrillas de España”, que demostrarían poca efectividad. (3)

El Bloque se configuró como la verdadera extrema derecha, aunque no logró unificar a toda ella, pues la Falange lo recibió con suspicacia. José Antonio lo acusó de usurpación y de montaje para asegurar el liderazgo de Calvo Sotelo, hacia quien sentía una antipatía marcada: “¡Habla de unidad de mando, de Estado corporativo y de otras cosas fascistas! ¡Enseguida le van a creer! Un orden nuevo traído por las ultraderechas, es decir, por los partidos privilegiados del orden antiguo (...) del caduco tinglado español!”. (4) La CEDA vio en el Bloque una amenaza y reforzó su pacto con el Partido Radical.

La situación en Cataluña tampoco era buena. La revuelta de la Izquierda había desatado una oleada de opinión contraria al estatuto, y la CEDA, la Lliga y otros tuvieron que hacer un gran esfuerzo para mantenerlo y limitar la sanción a una suspensión temporal. Pero la suspensión se prolongaba, así como el estado de guerra, con descontento de sectores de la misma derecha. El 22 de enero el diputado de la Lliga, Ventosa, hacía en las Cortes este balance: “La obra que ha realizado el Gobierno desde el 6 de octubre hasta la fecha ha sido verdaderamente deprimente para España”; y pidió la vuelta a la norma-

lidad. Respecto de Cataluña advirtió: “Era indispensable dar una sensación de buen gobierno que pudiera representar un contraste con (...) la obra desaforada de los Gobierno de la Ezquerra. Lo que hacéis en Cataluña, manteniendo esta situación de interinidad (...) es preparar, precisamente, la apoteosis y la vindicación de todos los Gobierno de la Ezquerra”.

Las derechas y el centro, unidos y entusiastas en octubre, estaban ahora divididos y desavenidos, y la opinión pública así los veía, a la defensiva a pocas semanas de su triunfo. En tan inesperado desenlace había tenido un papel decisivo Alcalá-Zamora, quien para imponer los indultos saltó por encima de la Constitución, dispuesto a emplear “medios extremos”, incluyendo la disolución de las Cortes, con la que amenazó sin mucho disimulo. Estaba convencido de que “derramar sangre catalana” en aquellas circunstancias significaba “comprometer los altos intereses nacionales”, que a él correspondía salvar por encima de todo. Por el contrario, Gil-Robles caracterizará al presidente como “uno de los más graves peligros para la paz de España”. Entre los dos prohombres se abrió un foso que ya no se colmaría. Desde el punto de vista revolucionario, Vidarte da esta peculiar explicación: “Tuvimos un poderoso auxiliar: don Niceto Alcalá-Zamora. Si hubiera que señalar un gran culpable de la insurrección (...) ese culpable sería, sin duda el presidente de la República, al que se le había advertido, en todos los tonos, que ni los republicanos ni los socialistas tolerarían que las puertas del gobierno de la República les fueran abiertas a los enemigos del régimen. Justo era, pues, que su conciencia le remordiera por haber desencadenado tan descomunal catástrofe que luchara por salvar la vida de aquellos que resultaran víctimas de su provocación”. (5)

La interpretación resulta en verdad pintoresca, pero no por ello menos reveladora de los enfoques socialistas del momento.

Capítulo V

La campaña sobre la represión en Asturias

El informe de Fernando de los Ríos

Conforme crecía el desconcierto del gobierno y la derecha en torno a la liquidación del episodio revolucionario de octubre del 34, los socialistas y otras izquierdas recuperaban fuerzas en torno a una formidable campaña contra la represión. Su líder fue uno de los principales organizadores de la insurrección, Juan Simeón Vidarte, quien visitó a Largo Caballero en la cárcel para planear la actividad del partido y movilizar a los dirigentes en libertad, en especial a Fernando de los Ríos, Anastasio de Gracia y Manuel Cordero. Los dos últimos debían reimpulsar la UGT, y “Fernando será muy útil por sus muchas relaciones en el extranjero”. Vidarte atendería a la propaganda antirrepresiva en general, las gestiones de los indultos, auxilios a los presos, abogados, etc.: “Cuando me separé de Largo Caballero comprendí que habían caído sobre mí los trabajos de Hércules” (1)

Para la comisión de socorros a los detenidos, Vidarte habló con la diputada María Lejárraga. Otras dos, Matilde de la Torre y Veneranda García, ya estaban en Asturias trabajando por la causa. Margarita Nelken había huido a la URSS. Ofrecieron su ayuda varios políticos republicanos de izquierda, como Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz, algunos radical-socialistas, el independiente Osorio y Gallardo, etc. (2)

Llama la atención que Vidarte, miembro del Comité Revolucionario que preparó la insurrección, se moviera con tal libertad. No fue detenido ni, al parecer, sintió inquietud por ponerse a salvo. Más aun, cumplió sus tareas, extraordinariamente dañosas para el gobierno, con poca molestia de la policía. El jefe revolucionario Amaro del Rosal atribuye esta impunidad a la protección "del triángulo masónico" (3)

En el equipo antirrepresivo sobresalía Fernando de los Ríos: "Ex ministro de Justicia, de Estado y de Instrucción Pública, catedrático en la Universidad Central, presidente del Ateneo de Madrid, diputado en Cortes y vocal de la Comisión Ejecutiva del PSOE, su opinión iba a pesar en el mundo entero". Había sido poco partidario de la insurrección, a la cual, empero, no había opuesto resistencia, ni apoyado a Besteiro. Pasaba por bondadoso y bienintencionado, aunque no entre todo el mundo. Largo lo mienta con desdén: "hombre de grandes fantasías e irreflexiones (...) siempre tuvo el prurito de aparecer como gran depositario de todos los secretos y conspiraciones". Azaña lo deja malparado en sus diarios, como inepto, puerilmente vanidoso y de inteligencia escasa («Casares tiene razón, y como es infinitamente más listo (que De los Ríos), le apabulla»). Los comunistas le achacaban los denostados tribunales de urgencia (4).

En enero viajó De los Ríos a Asturias, junto con Negrín, organizador del movimiento de octubre, de donde el primero «regresó enfermo, con los nervios destrozados. Traía gran número de denuncias, todas de espantosos casos de sadismo y de ferocidad hasta entonces inconcebibles». Vidarte selecciona en su libro casos como éstos: «José García Díez, labrador inofensivo (...) es acribillado a balazos, por oponerse a que le fuera robada la cartera (...) En otra choza vive Herminio Martínez Iglesias que, después de luchar tres años con la tuberculosis y de soportar tres operaciones, hacía un mes que había empezado a trabajar (...) Se escondió en una casa inmediata a la suya, en compañía de Laureano Sánchez, Enrique Díaz -el consumero-, los muchachos Avelino y José Martínez Álvarez, de 18 y 16 años, y la madre de éstos, Marina Álvarez Rodríguez, con cuatro hijos más pequeños». Marina cuenta de los regulares: «Primero llamaron con bastante prudencia (...) Luego el jefe gritó: «¡Fuera las mujeres y los niños!». Yo salí con mis seis hijos y dije a los soldados: «Por lo que más quieran ni maltraten a mis hijos, que son inocentes. Estábamos aquí porque

el cañón estaba cerca y tuvimos que abandonar nuestra casa». El capitán me dio su palabra de que a mis hijos no les ocurriría nada (...) Mi Velino y mi Pepín desaparecieron de mi vista (...) Se oyeron unos disparos, pero ¡cómo iba yo a figurarme que los inocentes hijos míos eran fusilados! (...) Laureano Sánchez, Herminio Martínez y Enrique Díaz fueron asesinados al mismo tiempo que mis hijos». «A Generosa Álvarez Díaz, enferma y además encinta, los moros la hicieron salir de la cama y rasgaron los colchones en busca de billetes (...) Generosa dijo que en la casa eran pobres y no tenían nada de valor. Un moro -negro, con aros en las orejas y dos plumas en el turbante- al verle un diente de oro replicó: «Sacar diente, diente valer dinero».

El principal relato recogido por De los Ríos advierte: «Aun proponiéndonos justificar los desmanes cometidos por las tropas en los primeros momentos de la represión, cuando todavía algunos rebeldes estaban con las armas en la mano y eran un peligro (...) ¿cómo hallar justificación para los bárbaros tormentos a que fueron sometidos miles de ciudadanos indefensos que estaban en poder de la justicia y tenían derecho a que ésta los respetara y amparara?». Y expone: «Un hombre viejo que se encuentra entre los detenidos nos lleva al sitio que tiene más luz y muestra los cardenales que le cruzan las piernas, al tiempo que se le encienden los ojos de ira y aprieta el puño de la mano derecha con rabia. Le han martirizado con fiera inconcebible». Las condiciones de detención son descritas así: «El pan, cuando no lo dan duro, es lo mejor, de los alimentos que sirven». El café es «una cosa medio gris», que beben cerrando los ojos y haciendo muecas. Sirven también garbanzos «que medio ha deshecho el bicarbonato y medio deshacen el estómago». «Los que están despiertos cuidan de que no se unan los petates infectados de piojos a los pocos que consiguen defenderse del contagio». «La cárcel tiene un silencio de cementerio, sólo turbado de vez en cuando con un grito seco, fuerte, como lanzado por quien deposita la vida en él: «¡Ay, madre! ¡Por favor! ¡Madre! ¡Matadme! ¡No me martiricen! ¡Firmaré lo que quieran!». Cuando los lamentos retumban por las naves de la cárcel, se sobrecogen los presos y se agrupan unos a otros, como presintiendo los tormentos. El cerrojo, al abrirse, aumenta el miedo».

Otras denuncias hablan de Carlos González Miranda, comerciante, golpeado junto con sus hijos de 9 y 10 años, y que luego en prisión

«fue bárbaramente maltratado y el día 20 apareció muerto, estrellado sobre el pavimento (...). Acaso se suicidó porque no pudo resistir los suplicios»; o «un tal Álvarez, de Oviedo, cojo y manco (...) lo metieron al *baño maría* y lo apalearon brutalmente». Etc.

Había algo extraño en varios de aquellos testimonios, pues eran de difícil comprobación, de fuentes vagas, como «un viejo» o una persona identificada sólo con un apellido corriente, o mencionaban operaciones para tratar la tuberculosis, o adornos no reglamentarios de algún soldado moro. El texto principal, que reúne muchos casos y que Vidarte reproduce íntegro a causa del «valor literario en su emotivo relato», resulta ser anónimo; quien lo entregó a De los Ríos debía de ser «uno de tantos compañeros a quienes no les interesaba pasar a la historia»(5).

Los tormentos recibían calificativos como «nunca vistos», «inhumanos», de una «brutalidad inconcebible», pese a lo cual no quebraban a los presos: «Después de haber visto a cientos de viejos y jóvenes, antes y después de los martirios de la prisión, puede afirmarse que ni uno solo salió de estos martirios abatido en sus ideales», y «un viejo» mencionado en concreto hablaba con furia y rebeldía después de la tortura. Declaraciones distintas de las recogidas por Vidarte abundan en ello. Los hermanos Llana, destacados activistas, escribían a principios de enero: «Nos encontramos bien de salud, sobra, además, de alegría y una fuerte dosis de euforia (...) Tenemos todas las comodidades que se pueden adquirir dentro del régimen de prisión». Otro rebelde, Juan Pablo García, recuerda que entre los presos «la moral era altísima, casi religiosa, medieval. Todo el mundo hablaba de la segunda vuelta, de la segunda revolución, que ahora sí triunfaría». En este siglo de torturas «científicas» que hacen de los hombres guiñapos, la plena fortaleza moral con que salían de ellas sus víctimas asturianas funda alguna duda sobre su «inconcebible crueldad». y acaso quepa poner algún reparo a la sinceridad de la indignación socialista, teniendo en cuenta que el régimen soviético, su modelo de entonces, practicaba en gran escala torturas que sí destruían física y moralmente a sus víctimas, a menudo de forma irreversible, sin que esa realidad despertase escándalo, ni aun curiosidad investigadora, entre las izquierdas occidentales (6).

La campaña incluía la exaltación de los héroes de octubre. Uno de

ellos, Javier Bueno, había dirigido el diario *Avance*, muy leído en los valles mineros. *Avance* empleaba un tono crudamente injurioso para las autoridades, a las que trataba de delincuentes, y minaba el ejército, circulando entre soldados y clases. Sus artículos, no muy escrupulosos con la verdad, constituían una bandera revolucionaria siempre ondeante. «Dinamita espiritual», lo llamaba la derecha*.

*J. Pla comenta: «Llegaron en la propaganda cultural a extremos de pedantería, de simplismo y de primitivismo sólo comprensible si lo que se pretende es incitar los más bajos fondos del salvajismo humano» y recoge una muestra de un artículo de *Avance* titulado «Lo que cuesta una sentencia de la Audiencia de Oviedo». Según el periódico, un derechista había obtenido una sentencia favorable pagando 5.000 pesetas, lo cual podría confirmarse preguntando a «las cachondas hijas de los magistrados de la Audiencia» (7)

Bueno, capturado el 12 de octubre, declaró que un capitán de asalto, fuera de sí, le había increpado: «Tú eres el envenenador de Asturias (...). Pero las vas a pagar, granuja». Después recibió algunas «puñadas en el rostro», y posteriormente otros golpes y culatazos. Recomendó a un compañero que rompiera el cristal de su reloj y lo ocultara porque «estos canallas nos quieren asesinar y con el cristal nos podemos cortar una vena y la muerte será más grata». Pero fueron procesados normalmente. (8)

El informe de De los Ríos dice que Bueno «tiene un brazo roto y una pierna medio desgarrada de los palos que le dieron». Y más adelante: «A Luis Oliveira y a él les obligaron a cavar la fosa en que serían enterrados. Javier dijo: «Hazla curiosa, Luisito, que es para nosotros», aunque es inverosímil cavar con un brazo roto. Lo que denunció Bueno fueron puñadas y culatazos. Posteriormente se presentó a la prensa, en una fotografía célebre, mostrando manchas oscuras en los brazos, «llagas forunculosas» según el informe forense, y huellas de torturas según él. No había brazo roto ni se mostraban heridas en las piernas. También le habrían forzado a comerse artículos de *Avance*, y terminado de comer el último trozo del periódico, comentó: «Al fin y al cabo es mío». Ahora anda dando ánimos a todo el mundo». En la cárcel, Bueno dio pruebas de su espíritu indomable, revelando al exterior las torturas que presuntamente sufrían «miles de presos». (9)

Un mártir que, en cambio, no ofrecía lugar a dudas, fue el periodis-

ta Luis Higón, que firmaba *Luis Sirval*, y escribía para el diario republicano *La libertad*, de Madrid. Al parecer se le ocuparon crónicas en las que relataba supuestas atrocidades de los soldados. Arrestado, tres oficiales de la Legión lo sacaron del calabozo, el 27 de octubre, increpándole: «Tú eres un asesino y no vas a matar más». Un oficial de origen búlgaro, llamado Ivanof, lo mató a tiros. Después alegaron que el periodista les había agredido, cosa en extremo improbable. Este crimen causó enorme escándalo y de las víctimas de la revuelta se convirtió, por unas semanas, en la más citada, como demostración palpable y con nombre cierto, de la brutalidad achacada a los legionarios*. *En otro orden de cosas tiene interés el diario *La libertad*, para el que trabajaba el asesinado *Sirval*, porque refleja muy bien la actitud general de los republicanos de izquierda. El 4 de octubre del 34, cuando tres ministros de la CEDA habían entrado en el gobierno, y en vísperas de la rebelión, escribía: «La reacción ha tomado por asalto la República y nuestro papel es desalojarla por todos los medios». «Estamos preparados para todo y lo esperamos todo». «Esperamos que las fuerzas republicanas (...) se aprieten en un haz para la lucha (...) Lo que hay que hacer es ir pensando en proclamar en España la República. ¿Cómo? Como sea». Al vislumbrarse la derrota del alzamiento, *La libertad* juzgó pertinente cambiar de actitud, asegurando: «La violencia es contraria a la naturaleza misma de la civilización. Por eso somos partidarios decididos de la conciliación y el arbitraje». Pedía «Represalias no. Persecuciones en los salarios, tampoco». Y organizó una suscripción «por los huérfanos de Asturias», invocando el «amor a los niños asturianos». Según sus informaciones, «durante los sucesos han muerto (sic) veintinueve religiosos».

En esta tesitura, al diario le indignaba el «lenguaje ilícito» de *ABC*, lenguaje «de una violencia inusitada», de «violencia y agresión»; y criticaba que los monárquicos hubiesen suprimido el «señor» y el «don» para los «republicanos». O denunciaba cómo el «taimado» *El debate* buscaba «alarmar a la opinión» por una reunión de delegados de las Internacionales comunista y socialista para ayudar a los revolucionarios españoles: «El comentario de la noticia está hecho con la intención de denunciar una fuerza internacional en inteligencia con las organizaciones obreras del país, con daño para las esencias patrióticas». La reunión internacional se produjo realmente.

En 1936, el periódico volvió a encontrar oportuno un cambio de talante. Su deseo de «conciliación y arbitraje», y su crítica al «lenguaje violento» dieron paso a titulares como éstos, dirigidos a la derecha: «La exasperación y la aberración de los ineptos, los traidores, los inmorales». «Monárquicos y cedistas confabulados con otros elementos del contubernio». Bajo el dibujo de un cerdo con el letrero «Frente reaccionario», comentaba: «Menos mal que les sale barato, porque se alimenta sólo de basura». «Todavía aparece en (...) la prensa infame que inventó calumnias y lanzó canalladas, la palabra Asturias. «Como cuervos que olfatean su presa, se lanzan contra los pobres trabajadores presos», según denomina a los rebeldes, los cuales sólo habrían realizado actos de virtud: «No (les) conviene decir que los revolucionarios respetaron a las mujeres, que curaron a los guardias presos, que se jugaron a veces la vida por salvar a un enfermo o a un niño». «Esa prensa, tarde o temprano, cuando sea y como sea, habrá de pagar la responsabilidad contraída». Etc. Junto a ello, y bajo el expresivo título «Luz de amanecer», E. Zamacois glorificaba el estalinismo, citando a unos obreros venidos de la URSS, que contaban «la Verdad -con mayúscula-» de las maravillas del sistema soviético.

A juicio de *La libertad*, la república «es para todos los españoles (...) generosamente (sic) abierta a todos los españoles; pero nadie puede discutir que la República debe ser gobernada por los republicanos», a pesar de que éstos habían tenido siempre pocos votos. Idea azañista, de un democratismo por lo menos extraño. El ideal de *La libertad* parecía ser «Méjico, república ejemplar», bajo el régimen del PRI, al que loaba a menudo, pese su carácter muy escasamente democrático y extraordinariamente corrupto, aunque extremadamente anticlerical» (10)

El modelo Ferrer Guardia

En relación con la propaganda sobre la represión, un héroe a medias resultó Teodomiro Menéndez, dirigente socialista a quien, según Vidarte, «le sometieron a tan bárbaras torturas que un día, cuando lo llevaban de nuevo a declarar, se arrojó de una ventana desde un quinto piso», aunque sobrevivió. En realidad el intento de suicidio se produjo a finales de año, semanas después de los interrogatorios, como prueba también el hecho de que pudiese declarar a la prensa, días antes: «Me encuentra usted así porque no soy como los otros. Todos se han preocupado de la fuga, de preparar la retirada, de tener listo el automóvil, el barco, el paso de la frontera, el hotel en el extranjero. Yo tengo que ser la víctima».

Menéndez había sido de los pocos líderes reacios a la revuelta, en la que participó aparentemente por disciplina, y había sido arrestado y casi fusilado por sus propios camaradas. Cuando lo capturaron los gubernamentales, involucró a González Peña, y debió de hacerlo sin demasiadas presiones, porque sus compañeros de celda le recriminaron su delación. Menéndez, mortificado, debió de sufrir una crisis psicológica. Cuando se repuso negó haberse tirado al patio; se habría caído sobre la barandilla al sufrir un mareo (1).

Tuvieran lo que tuvieran de verdad, de falsedad o de exageración, las campañas de denuncias ofrecían a los revolucionarios un estribo para rehacerse, tomar la iniciativa política y relegar al olvido su responsabilidad por haber declarado una guerra civil y por las víctimas, pasando de acusados a acusadores. Y utilizaron las denuncias con destreza innegable. Vidarte mismo, otras veces circunspecto, rompe cualquier freno a su pluma en este punto: los represores eran «mil veces más crueles que los verdugos medievales», peritos en «los tormentos más inhumanos», etc. etc.

Los espantosos relatos comenzaron a circular masivamente, en hojas y prensa clandestinas y por rumores orales, gracias al aparato del PSOE que seguía en pie y al concurso de anarquistas, comunistas y el resto de la izquierda. El prestigioso Ateneo de Madrid, entonces muy radicalizado, hizo suyo el informe de De los Ríos y lo distribuyó en círculos intelectuales. Planteada sin asomo de autocritica, la campaña iba a lograr lo que no había logrado la agitación socialista

durante 1934: crear en amplios sectores de la población un ánimo irreconciliable, propenso a la guerra civil. (2)

De los Ríos entregó sus papeles a Alcalá-Zamora, quien los puso en conocimiento del gobierno, el cual los trasladó al Fiscal de la República, por considerarlos calumniosos. El fiscal advirtió a don Fernando: «Por el honor de España, que a todos nos interesa cuidar, le agradeceré que este expediente no se imprima ni se divulgue en el extranjero». Pero Vidarte entendió que la difusión exterior sería su mejor arma. Tomó como modelo la magna campaña internacional de 1909 en torno a Ferrer Guardia, fusilado en relación con la «Semana trágica», y se enfrascó en su estudio «durante muchos días (en) mis pocas horas libres»: «Creo que la lectura de aquellos episodios trascendentales de la historia de España me sirvieron más que cualquier otro razonamiento para iniciar inmediatamente en el extranjero, con la cooperación valiosísima de Fernando de los Ríos, la campaña a favor de los socialistas detenidos.

El caso Ferrer Guardia había, en efecto, conmocionado a medio mundo. Ferrer, agitador entre republicano y anarquista, había formado una «Escuela Moderna» para «introducir ideas de revolución en los cerebros». Preconizaba una revolución «sangrienta, ferozmente sangrienta», y fue con toda probabilidad el inductor y organizador de varios de los atentados más atroces de la época, como el realizado en 1906 por Mateo Morral, profesor de su escuela, contra el cortejo nupcial del rey, en la calle Mayor de Madrid, donde cayeron asesinadas 30 personas y heridas un centenar.

Con sus propagandas, Ferrer contribuyó de manera muy importante a crear el clima social que desembocaría en la «Semana Trágica» barcelonesa de 1909, la cual costó más de un centenar de muertos y la destrucción de gran número de edificios religiosos y públicos. Por este hecho fue condenado a muerte y ejecutado, aunque el tribunal sólo pudo reunir indicios no del todo probatorios de su implicación directa en los sucesos. El acusado era un destacado masón -como Vidarte-, y, como señaló Cambó, en protesta por su muerte a manos de la «España inquisitorial», la masonería movilizó una inmensa campaña en toda Europa, exaltando al revolucionario como un «genio intelectual», «nuevo Galileo», «educador de España» y «mártir de la libertad». En cambio Unamuno consideró su escuela «la obra de incultura

y barbarización de aquel frío energúmeno, de aquel fanático ignorante».

Él y otros protestarían en vano contra aquella agitación, a la que llamaban «la ferrerada». Vidarte reseña: Le Peuple, de Bruselas, dedicó un número extraordinario al proceso. En París, Roma, Berlín, Trieste, Florencia, Milán, Viena, Praga y otras importantes ciudades hubo manifestaciones para protestar por el fusilamiento; además, en París y Milán fueron apedreadas la embajada y el consulado de España. En París, Jaurès intervino en un grandioso mitin de protesta, y millares de personas desfilaron por las calles con banderas rojas y cantando «la Carmañola». En muchas de estas manifestaciones, el pueblo se enfrentó a la policía o al ejército y hubo muertos y heridos.

Todos los periódicos extranjeros de mayor circulación -*Le Matin*, *Le Journal*, *Le Figaro*, *Le Gaulois*, *Le Temps* y *Le Petit Journal*, de París; el *Berliner Tageblatt*, de Berlín; *La Tribuna*, de Roma; *Il Corriere della Sera*, de Milán; *O Seculo*, de Lisboa; *The Times*, *The Daily Telegraph* y *The Daily Mirror*, de Londres- tomaron con gran interés la campaña» en pro del «político y pedagogo de la Escuela Moderna». Vidarte aspiraba a lograr efectos semejantes.(3)

En ese empeño, el informe sobre Asturias aseguraba a sus lectores foráneos que «las masas se levantaron para evitar el fascismo en España», aunque sus redactores sabían, por supuesto, que no era cierto. De los Ríos realizó un trabajo inmejorable para su causa. Sus contactos internacionales funcionaron a pleno rendimiento y sus textos fueron reproducidos en periódicos de Estados Unidos y Francia, y citados ampliamente en muchos otros países.(4)

«Una de las primeras visitas que recibimos del extranjero fue la del diputado socialista Vincent Auriol, años más tarde presidente de su país. Acompañado de De los Ríos, expuso al jefe del gobierno, Lerroxx, la súplica del Parlamento francés de que fueran indultados los condenados a muerte, y protestó por el asesinato de Luis Sirval y de la aplicación en masa de la ley de fugas (...). También visitó en la cárcel a Largo Caballero». Auriol no menciona torturas, y sí en cambio una aplicación masiva de la ley de fugas que, indudablemente, no tuvo lugar. (5)

«La Masonería, la Segunda Internacional, la liga de los Derechos del Hombre, informaban al mundo de los crímenes cometidos por el

fascismo español. Los partidos socialistas y comunistas del mundo entero enviaron al gobierno español sus más enérgicas protestas. Y Vincent Auriol organizó, con el presidente del Partido socialista belga, Émile Vandervelde, una campaña internacional cuyos efectos no dejaron de sentirse en la actitud del gobierno de Lerroux». (6)

La actuación de la masonería, por su influjo en los medios burgueses a ambos lados del Atlántico, entorpeció la defensa internacional del gobierno republicano, pese a contar éste con varios masones, empezando por el propio Lerroux, que lo era en calidad de *durmiente*: la mayoría de la *orden* condenaba al Partido Radical. «En las logias de la calle del Príncipe, la masonería había organizado una gran campaña, dentro y fuera de España, para obtener los indultos. Pérez Farrás era hermano nuestro y varios de los ministros del gobierno también lo eran».

Y lo eran Fernando de los Ríos, Álvaro de Albornoz o Marcelino Domingo entre los principales colaboradores de la campaña. Don Fernando, subraya Vidarte, «desplegó una actividad incansable en pro de los indultos, poniendo al servicio de esta causa toda la generosidad y nobleza que le caracterizaban. Entre los dos organizamos la intensa campaña. Nos dirigimos a la Internacional de Amsterdam, a la Internacional Sindical, a la Liga de los Derechos del Hombre*, los partidos socialistas de Inglaterra y Francia, el Grande Oriente Español, la Gran Logia Española, etc.» (7)

*Organización creada y dirigida por la masonería

El director de la campaña visitó asimismo a Martínez Barrio, uno de los líderes de la masonería aunque había tenido que renunciar a la máxima jerarquía unos meses atrás. Martínez mostró cierto escepticismo: «Las circunstancias políticas obligan a veces a abrir un paréntesis en las obligaciones masónicas. Recuerde usted al masón Danton enviando a la guillotina al hermano Vergniaud, ¡a los girondinos, entre los que había tantos masones: Roland, Brissot, Condorcet, Barnave! Al masón Robespierre mandando a la guillotina a sus hermanos Danton, Camilo Desmoulins, Guzmán, etc. Al hermano Tallien promoviendo la conspiración de Termidor que llevó a la guillotina a los hermanos Robespierre y Saint-Just. Afortunadamente, en la República española todavía no nos hemos ajusticiado los unos a los otros y ojalá que no llegue nunca ese momento». Al final, sin comprometerse del todo le

prometió también ayuda: «Durante toda mi vida he sabido hermanar mis deberes republicanos y mi obligación de masón»(8)

El testimonio de Vidarte, masón devoto y organizador de la campaña, interesa al historiador porque rompe la extrema reserva cultivada por los *hijos de la luz*. En las memorias de Martínez Barrio, por contraste, la masonería simplemente no existe, pese a haber sido él uno de sus miembros directivos. Al gestarse la insurrección, Vidarte afirma haber pedido la baja provisional en la *orden*; pero con motivo de la campaña contra el gobierno, pensó que «la Masonería representaba una fuerza poderosa y no podía prescindirse de ella»

«También conseguimos que el Partido Laborista hiciese pública su firme protesta, organizase mítines en todas las ciudades importantes y (...) abriera suscripciones para sus hermanos de España. Un buen día se nos presentó una comisión de diputados laboristas, encabezados por Lord Listowell, de la Cámara alta», la cual quería investigar los sucesos de Asturias. El presidente de las Cortes, Alba, recibió a Listowell acompañado de María Lejárraga y un abogado francés. Alba manifestó que ni en virtud de su cargo «ni como ciudadano español, se allanaba a la idea de una información colectiva practicada por extranjeros», cuando, con arreglo a las leyes, los diputados de la izquierda podían investigar cuanto quisieran. Gil-Robles calificó el episodio de indignidad, y pidió que la comisión fuera puesta en la frontera. Pero Lerroux permitió a los ingleses viajar a Asturias, donde la fuerza pública hubo de protegerles de las manifestaciones hostiles de personas que habían sufrido los efectos de la revuelta. (9)

La campaña no incluía sólo presiones políticas por las alturas, sino también, y muy especialmente, una intensa agitación de masas, con mítines, reparto de octavillas, manifestaciones y difusión de carteles, desde San Francisco a París. Muestra de esa agitación y de sus contenidos puede ser un cartel, pegado masivamente en las fachadas de la capital francesa: «España en sangre. Mujeres y niños degollados. Cinco mil trabajadores muertos. Heridos torturados. Ocho mil heridos. Setenta mil prisioneros políticos: socialistas, comunistas, anarquistas, radicales, republicanos. Ciudades destruidas por la artillería, la aviación y los cruceros. Centenares de antifascistas amenazados de cárcel, o muertos, u obligados a refugiarse fuera de España». Otros carteles pintaban a multitudes de obreros desarmados y

de mujeres con niños en brazos, enfrentándose o huyendo de guardias civiles que, en filas, disparaban a mansalva. (10)

Aunque la represión afectaba a todo el país, las acusaciones por atrocidades se limitaban a Asturias, acaso porque no ocurrieran fuera de allí, o bien porque la mitificación internacional de la insurrección asturiana como una segunda *Commune* Multiplicaba el eco de los informes. Se fundaron asociaciones como la «Amis de l'Espagne», que incluía a intelectuales de la talla de André Gide, Henri Barbusse o Georges Duhamel, con el objetivo de «explicar al mundo la verdad de Octubre, sus causas y consecuencias», si bien cabe dudar de que los informadores estuviesen a su vez debidamente informados.

Otra organización muy activa en la denuncia del supuesto fascismo del gobierno y sus inconcebibles tropelías fue el «Comité de Socorro a las Víctimas del Fascismo», a cargo de Willi Münzenberg, auténtico genio de la propaganda staliniana en el mundo occidental*. Vidarte podía concluir, con justeza: «Estábamos satisfechos (...) La campaña internacional empezaba a dar frutos. Salvaríamos a todos los encartados en la insurrección de octubre». (11)

*Münzenberg creó un verdadero imperio periodístico en numerosos países, disimulada agencia de propaganda soviética. En torno a su *trust* organizó el reclutamiento de intelectuales, artistas y personajes influyentes como agentes encubiertos, a veces inconscientes «compañeros de viaje» del movimiento comunista. Arthur Koestler hace en su autobiografía un retrato admirativo de Münzenberg. Un libro de gran interés sobre él es *Double lives*, de Stephen Koch, con el significativo subtítulo: *Stalin, Willi Münzenberg and the seduction of the intellectuals*. Si bien contiene numerosos errores al referirse a España.

Con todo, los primeros indultos debieron poco o nada a aquellos trabajos, ya que poner el aparato en marcha costó unas cuantas semanas. La mayoría de las actuaciones fue posterior al indulto a Pérez Farras, que traería consigo los restantes. Otra cosa sería la segunda fase de la campaña, desarrollada en torno al juicio contra González Peña, ya en el mes de febrero, y que trataremos luego.

El caso de González Peña: propaganda y realidad

Ramón González Peña había sido reconocido como el máximo líder de los mineros asturianos -a veces se le aplicaba el título de «generalísimo» de ellos-, aunque en el curso de la revuelta había tenido constantes roces con muchos de sus teóricos subordinados, que le obedecían muy a medias y finalmente hicieron caso omiso de sus instrucciones de parar la lucha*, después del asalto a la caja fuerte del Banco de España y a otros bancos en Oviedo.

*Ver primera parte de Los orígenes de la guerra civil española

De entre los detenidos por la insurrección de octubre González era, quizás, la figura principal, tras Largo Caballero y Companys, pero su proceso superaba incluso en interés a los de éstos, como símbolo de la lucha revolucionaria más peligrosa para la república, y la más sangrienta.

González resultó, así, el héroe revolucionario por excelencia, en cuya exaltación se volcó la propaganda. Vidarte cuenta de él: «Había dicho que mientras quedase un minero luchando en las montañas con un fusil, él estaría a su lado, y fueron inútiles todas las gestiones de los otros directivos de la revolución para hacerle desistir de tan noble y heroico propósito». Doval, el endurecido comandante de la Guardia Civil, obsesionado con capturar al dirigente, habría torturado sin piedad, y también en balde, a los presos: « Aquellos bravos mineros se dejaban arrancar las uñas de los pies y de las manos -uno de los placeres favoritos de Doval-, quemar los ojos o los testículos, o soportaban que les colgasen de éstos pesas de varios kilos, hasta dilatárselos monstruosamente, antes que delatar a su jefe». Estos fracasos habrían inspirado al coronel Aranda «una idea *genial*, ¡monstruosa! Mandó detener a centenares de mujeres -esposas e hijas de mineros- e hizo correr la voz, por la cuenca minera, de que si no se presentaban los guerrilleros, sobre todo González Peña, todas ellas serían entregadas a los legionarios ya los moros. Al enterarse de esto, Peña se presentó a los guardias de asalto, en la aldea de Ablaña, el día 3 de diciembre. Llevaba (...) luchando en las montañas más de cincuenta días». (1)

Nuevamente la realidad difiere de la historia de Vidarte, según se desprende de las declaraciones del propio detenido ante el tribunal y

ante la comisión de suplicatorios del Parlamento. González había sido uno de los primeros en proponer la huida, ya el 10 de octubre*, bastantes días antes de la capitulación real, y no es creíble que a última hora se tornara tan absurdamente belicoso.

*Ver capítulo 9 de *Los orígenes de la guerra civil española*

Al día siguiente de su propuesta de rendición, González estaba, junto con otros, «entre las diez y las once de la noche en el cruce de carreteras de Langreo y Mieres, en San Esteban de las Cruces, Oviedo (...) Llegó en un coche el compañero Bahillo (...) el cual era portador de un saco conteniendo dinero», procedente del asalto al Banco de España. El dinero fue repartido, sin contarlo, entre los presentes, para facilitarles la fuga. Según la declaración del propio González al Congreso, él y otros trataron de escapar en dirección a Portugal, pero se lo impidió el hostigamiento de sus correligionarios, que les averiaron un coche a tiros. Se dispersaron y «quedó solo el declarante con Cornelio Fernández, el que me aconsejó no diese la vuelta, pues había oído decir poco antes, en Trubia, que por haber abandonado el movimiento habían dado orden de perseguirme los mismos compañeros y podía peligrar mi vida». La realidad de este peligro pudo comprobarla cuando, cerca de Grado le arrebataron «1.600 pts, junto con el reloj y una pluma estilográfica, (...) unos individuos que decían ser revolucionarios, que no sólo me quitaron esa cantidad, sino que me han dicho que he tenido gran suerte en caer en manos de ellos, pues de lo contrario me fusilarían, ya que estaba considerado como traidor, por haberles abandonado». Vagó por los montes de Quirós y de Teverga, durmiendo en casas de amigos y recaló por fin en la de una viuda muy religiosa, amiga de su familia, en el pueblo de Ablaña. Allí fue prendido, que no se entregó, y por guardias civiles, no de asalto. Su caso fue de mala suerte, porque tenía ya a punto su fuga por mar. El gobierno posiblemente lo hubiera preferido en el extranjero, y no sintió alborozo por su detención, que le auguraba nuevas campañas de descrédito. (2)

El resto del informe de Vidarte tiene la misma traza de fabricación propagandística. Desde luego «los mineros», en general, ignoraban el paradero de su ex jefe, y Doval tenía que percatarse de ello y de la inutilidad de torturarlos en masa; además no podía saber si el perseguido había huido ya de Asturias, como hicieron la mayoría de los

líderes. El gobierno tampoco hervía en deseos de capturarlo, y de hecho premió a Doval destituyéndolo de su puesto. La treta de Aranda suena poco verosímil, tanto por lo anterior como porque la pacificación de Asturias la había dado por cumplida López Ochoa ya a principios de noviembre, y la prensa informaba el 16 de ese mes del reembarque de las tropas enviadas en octubre. Entonces López había sido sustituido por Aranda, con fuerzas muy reducidas (7.000 hombres entre Asturias y León), y resulta absurdo que nadie quisiera soliviantar los espíritus cuando ya no había la menor necesidad. (3)

La mitificación del caudillo insurrecto alcanzó cotas muy elevadas. En un libro colectivo sobre él, Araquistáin ponderaba su heroísmo y su clara inteligencia como «técnico, si así puede decirse, de la guerra civil». González era «el hombre simbólico de la revolución, cuya cabeza pide a gritos una burguesía aterrada y vengadora (...) Desde los tiempos de la Inquisición, jamás el fanatismo católico, doblado esta vez de sevicia capitalista, había dado en España un espectáculo tan repulsivo de barbarie sanguinaria». Prieto destacaba su entereza, contagiada también a su mujer e hijas. Un llamado José Vidosa se tenía a sí mismo por «el hombre más bueno del mundo», pero reconocía que «la bondad de Peña es algo sencillamente sublime, imposible de superar (...) Con razón dicen sus íntimos que es (...) el genio que conducirá a la clase trabajadora a la total emancipación».

En el mismo libro Álvarez del Vayo da noticia de la solidaridad internacional en su favor: «Fue un movimiento de inusitadas proporciones, sostenido durante semanas y semanas en la primera página de los diarios obreros, y que incluso logró retener la atención de la gran Prensa liberal extranjera más allá de lo ordinario (...) El nombre de González Peña quería decir para el proletariado mundial «Octubre», y octubre era, a la vez, para la opinión antifascista de fuera, sin distinción de partido, gesta popular española contra el enemigo común (...) «Salvad a Peña» devino la consigna fija en los manifiestos más diversos, en las conclusiones de las asambleas, en los editoriales y pasquines. Era un grito unánime, reproducido sin desmayo (...) Fue, además, particularmente en Francia, una poderosa manifestación de frente único. Socialistas y comunistas lucharon con idéntico empeño». (4)

Pero la declaración del caudillo asturiano ante el tribunal demues-

tra que había perdido la ilusión por la revuelta y por su protagonismo en ella: «Aunque no soy católico (...) no se postró ninguno de esos católicos ante su confesor con la sinceridad con que yo lo hago ante vosotros», dijo a los jueces. Observó que la Guardia Civil había cumplido con su deber, y admitió atrocidades de los revolucionarios, al alegar que él, en persona, había impedido el asesinato de cien prisioneros. Su papel de jefe lo atribuyó a las circunstancias, y afirmó: «la labor principal de los dirigentes (...) no fue obligar a participar en el movimiento, sino contenerlo». Tampoco denunció torturas ni malos tratos, ni la supuesta redada de mujeres de mineros para ser violadas por los soldados de África. (5)

La actitud de González Peña enfureció a Largo Caballero: «avergüenza e indigna leer las manifestaciones transcritas; no se ve en ella ningún rasgo de virilidad ni de grandeza; todo es pequeño y bajo: delaciones, cobardía, indisciplina, prurito de pasar por humano y colocar a los trabajadores combatientes en situación antipática por sanguinarios y anárquicos». En otro lugar comenta con sarcasmo: «Es muy amargo verse en vísperas de ser fusilado o de ser condenado a presidio para el resto de la vida. ¿Para qué -dirán algunos- exponer lo más apreciado, que es la vida, si se puede colaborar sin esos peligros y hasta pasar a la inmortalidad como hombres sensatos y de buen juicio?». Pero Largo quizá hubiera visto el caso con más benevolencia si no fuera porque Prieto, después de escapar a Francia, le atacaba empleando como munición la figura de González. Comenzó así una ruptura entre los líderes socialistas que iba a acarrear largas consecuencias. (6)

El 15 de febrero de 1935 tuvo lugar la vista contra González Peña, con fallo de pena de muerte. Aunque la derecha presionaba para su ejecución, ésta era improbable, por el precedente de Pérez Farrás, y el mismo reo estaba tranquilo. Araquistáin cuenta que unas parientes fueron a verlo a la cárcel, y «como se echaran amargamente a llorar, convencidas de la inminencia de la ejecución, él contestó a su llanto con una carcajada de las que se dicen homéricas». De todas formas, la sentencia elevó a su ápice la campaña nacional e internacional, en la que París sirvió de placa giratoria. Allí «Prieto, Belarmino Tomás, Graciano Antuña y Amador Fernández* se dirigieron a las organizaciones obreras de todo el mundo solicitando ayuda. En su manifiesto,

algunos párrafos denotan la pluma de Prieto: «La cabeza de González Peña, obrero de la mina, la exige la burguesía como trofeo sangriento de una España regida por el clericalismo fanático». González había dejado de trabajar en la mina muchos años antes, y era un político profesionalizado del PSOE, con altos cargos políticos. (7)

* También jefes destacados de la insurrección

El gobierno quedó nuevamente a la defensiva frente a una ola de desprestigio impulsada por organismos muy potentes, y la cohesión del centro derecha volvió a quebrantarse. Sus aclaraciones obtenían escasa audiencia internacional, y dejaban una sórdida impresión de riña sobre quién había cometido más crímenes. En el interior, su vacilación e incoherencia favorecía a los revolucionarios: de nuevo fue indultado un caudillo insurrecto, ahora González, y ajusticiados dos meros ejecutores. El 10 de febrero caían ante el pelotón el sargento Vázquez, uno de los poquísimos militares pasados a los mineros, y un rebelde apodado *Pichilatu*, acusado de haber asesinado a varios paisanos, incluidos mujeres y niños. Vázquez murió arrepentido, y *Pichilatu* desafiante.

La gracia concedida a González ya no pareció una coacción de Alcalá-Zamora, sino directamente de los propios insurrectos y del resto de las izquierdas. Lo expuso el ministro Giménez Fernández, de la CEDA, firme partidario de reformas sociales: «Si los socialistas hubieran acudido al Parlamento a disentir del movimiento revolucionario que llevaron a cabo sus compañeros; si los partidos que en vísperas de la revolución dictaron sus famosas notas hubieran condenado abiertamente el movimiento; si el señor Azaña hubiera mantenido una línea clara de conducta sin ese carácter de reto que tienen casi todos sus discursos, entonces, sólo entonces, podría pensarse en una decisión de clemencia. Como nada de esto ha ocurrido, el indulto no parecerá clemencia, sino claudicación; no pacificará a los rebeldes, sino que les dará ánimos» (8). Y así fue. El contraataque propagandístico de la izquierda después de octubre triunfó más allá de las esperanzas de sus promotores, y dejó en la derecha un sabor amargo.

El 17 de marzo del 35, *El debate* propugnó el apaciguamiento y la aceptación del indulto, para evitar la crisis. Pero Gil-Robles, furioso, retiró esta vez a sus tres ministros, cosa que el PSOE no había logrado con sus amenazas de alzamiento ni con el alzamiento mismo. De

todas maneras nadie podía mantenerse en el poder sin el respaldo de la CEDA, y el nuevo gabinete duró sólo un mes. A continuación, y con sumo disgusto del presidente Alcalá-Zamora, Gil-Robles mismo entró en el ejecutivo -y en la crucial cartera de Guerra- junto con otros cuatro ministros de su partido. Era el quinto gobierno desde las elecciones ganadas por el centro derecha dieciséis meses antes, inestabilidad que impedía cualquier labor política continuada.

Capítulo VI

La realidad de la represión

Las izquierdas rechazan el debate parlamentario

La intención de las **campañas de denuncias** sobre la represión no fue, evidentemente, aclarar los sucesos, sino más bien levantar una marea de indignación en la opinión pública y justificar el derecho de la **izquierda**, al menos el derecho moral, a sublevarse contra una reacción cuyo carácter inconcebiblemente sanguinario y ciegamente egoísta la habían merecedora de ser destruida, por una vía u otra, en aras del progreso. La defensa de la legalidad por parte de la **derecha** quedaba así desacreditada y sin significado ante el peso y la mancha de unos crímenes horrendos.

La intensidad y emocionalidad de la **campaña antirrepresiva** ha llevado a bastantes historiadores a darla por verídica, sin mayor ponderación e incluso aportando su grano de arena, que llega a montaña en ocasiones. **Gerald Brenan**, por ejemplo, no se para en barras: «Millares de detenciones fueron hechas y los prisioneros, excepto los asesinados en el camino, fueron llevados a los cuarteles (...) Una vez allí, fueron sacados y fusilados en serie. Los legionarios del coronel **Yagüe** y los moros habían liquidado ya, según su costumbre, a todos los prisioneros caídos en el momento de la lucha. Es imposible decir cuántos cayeron en las ejecuciones realizadas por los pelotones de la guardia civil». En total, junto con los caídos en lucha, deben salir

muchos millares de muertos, si bien Brenan ofrece la incongruente cifra final de sólo 3.000. Pocos para tanta ferocidad como la que describe, aunque, por lo demás, triplican la cifra real.

Para explicar tanta crueldad, el autor aduce: «El general López Ochoa, un hombre humanitario y masón (...) quedó completamente anulado por las órdenes (del) Ministerio». Es difícil saber de dónde saca Brenan estas historias, que superan a las de la campaña socialista. La realidad es que las tropas de África no tenían la costumbre que les atribuye alegremente, de asesinar a mansalva a los prisioneros, y que los piquetes de la Guardia Civil tuvieron muy poca actividad, si es que alguna. En cuanto a López Ochoa fue bastante menos humanitario de lo que fantasea Brenan, y lejos de ser anulado, se impuso en todas sus discrepancias con **Franco** o con Yagüe ante el ministerio, como vimos en el primer tomo de *Los orígenes de la guerra civil*.

En la misma línea, **Hugh Thomas** asegura que las tropas «se comportaron en el territorio conquistado igual que si se tratara de un ejército victorioso que viviera de los sufrimientos de los vencidos (...) Indudablemente muchas muertes tuvieron lugar una vez acabada la lucha, cuando la Legión «saboreaba» su victoria». **Brian Crozier** habla, sin más base que su imaginación, de «la orgía de fusilamientos y violaciones de los moros de Yagüe, la ejecución de miles de prisioneros por la Guardia Civil y las sádicas torturas infligidas a los mineros capturados por un comandante de la Policía (era de la Guardia Civil) llamado Doval». **Gabriel Jackson** cree saber que «si un pequeño contingente de soldados cruzando territorio montañoso y hostil oía un disparo o una imprecación (...) creyendo que este disparo podía ser el preludio de un ataque general en un esfuerzo por liberar a los prisioneros, éstos eran matados por los guardianes» ¿Qué casos concretos de esa barbarie habrá conocido Jackson? Como él mismo señala «es imposible saber cuántos hombres fueron muertos de este modo»

Refutando a los anteriores, Enrique Barco Teruel llama la atención sobre el hecho de que la izquierda no diera casi nunca nombres de víctimas: «¿Cuántas denuncias de muertes ilegales (...) fueron presentadas a las autoridades, al Parlamento y a la prensa del Frente Popular cuando éste gobernaba? (...) Nadie puntualiza quiénes fueron asesinados a millares, a cientos o simplemente a decenas mucho después de finalizados los combates, cosa en verdad curiosa si se

tiene en cuenta que la izquierda tuvo en sus manos, desde febrero del 36, la posibilidad de realizar una información a fondo». Indudablemente se trató de un montaje propagandístico, pero martilleado en todos los tonos y con eficacia más que notable (1)

¿Cuáles fueron los hechos bajo la propaganda? ¿Cuántas las víctimas? Tendría que saberse, porque hubo campo libre para investigarlos en su momento. El 30 de octubre de 1935, Gil-Robles exhortó a la izquierda a un debate parlamentario, y animó al autor de uno de los informes de atrocidades, muy difundido dentro y fuera de España: «Que tenga el señor Gordón Ordás ocasión de decir en esta Cámara, donde se le puede contradecir con hechos y pruebas, lo que él pretende llevar en labor de simple agitación». Jactose de que «este Gobierno es el primer ejemplo que creo que se da en la política española (...) de haber abierto con amplitud jamás conocida el cauce a una investigación judicial o parlamentaria» (en alusión a la negativa inicial de Azaña a una comisión parlamentaria por Casas Viejas). Gordón, enojado, recordó que él había hecho una indagación sobre el terreno, y que en noviembre del 34 se le había impedido tratarla en las Cortes. Otro diputado, Vicente Marco Miranda, lo había intentado también, a finales del mismo mes, contestándosele que notificara sus datos a los tribunales, y sólo si éstos los rechazaban recurriese al Parlamento.

Gil-Robles replicó que en noviembre del año anterior la tensión revolucionaria seguía siendo fuerte y estaba en marcha una injuriosa campaña internacional, por lo que el debate simplemente se había aplazado, con plena legalidad. Pero desde entonces no habían insistido Gordón ni otros, pese a su tenacidad habitual en asuntos de menor enjundia: «Si S.S. hubiera puesto en eso el interés que puso en ir a revolver por Asturias los bajos fondos de la revolución para extraer una porción de infamias (...) hubiera podido aclarar lo que hubiera querido aclarar». Gordón, incoherente, rehusó plantear un debate en regla aduciendo que él no iba a tratar el asunto «cuando le convenga a Gil-Robles», ni a «proporcionarle una plataforma electoral»: «hablaremos cuando crea que el Gobierno tenga títulos». La alusión electoral indica que Gordón, al menos, planteaba el asunto desde ese punto de vista, y que no tenía demasiada seguridad de salir bien librado en el debate. A la exigencia de pruebas replicó: «Si yo puedo hablar algún

día será desde el poder». Marco Miranda había pedido la palabra, pero renunció a ella. Tampoco los socialistas ni los republicanos de izquierda juzgaron oportuno recoger la invitación de Gil-Robles.

Y la ocasión para Gordón Ordás se presentó a los cuatro meses, cuando el poder llegó a las izquierdas, en febrero de 1936, tras unas elecciones marcadas por una redoblada campaña en tomo a los supuestos crímenes de Asturias. Sin embargo él y el resto del Frente Popular mostraron una asombrosa desgana en la investigación y el debate, que no tuvieron lugar. El 16 de junio de 1936, en las Cortes, Dolores Ibárruri loaba con ardor «el octubre glorioso del cual nos enorgullecemos todos los ciudadanos españoles que tenemos sentido político, que tenemos dignidad», definiéndolo, contra toda evidencia, como «una defensa instintiva del pueblo frente al peligro fascista», y acusando a «los hombres de derecha» que «llegaron a extremos de ferocidad tan terribles, que no son conocidos en la historia de la represión de ningún país. Millares de hombres encarcelados y torturados; hombres con los testículos extirpados; mujeres colgadas del trimotor por negarse a denunciar a sus deudos; niños fusilados; madres enloquecidas al ver torturar a sus hijos», etc. Gil-Robles retó y exhortó una vez más a sus enemigos: «Todas las responsabilidades hay que ponerlas en claro (...) No es lícito venir a lanzar discursos de mitin».

A los diez días, el gobierno izquierdista rehusaba llevar el caso al Parlamento, y aún el 15 de julio, ya al borde de la sublevación militar, el líder de la CEDA apostrofaba a sus acusadores en el Congreso: «Cuando al obrero no le dais pan (...) lo que hacéis es darle unos cuantos latiguillos sobre octubre (...) Ya es ciertamente un poco extraño que llevando estas Cortes varios meses reunidas y habiendo sido motivo principal de propaganda de los partidos del **Frente Popular** la exigencia de responsabilidades por la represión de octubre, no hayáis tomado todavía ninguna determinación (...) Decía el señor Prieto que hay que medir las responsabilidades de cada uno. Yo tengo ganas de que se hable de todo, (...) también de las responsabilidades del señor Prieto y la de todos aquellos que prepararon el movimiento revolucionario y desencadenaron la catástrofe sobre España»

La languidez investigadora del Frente Popular ha oscurecido el asunto, sometido desde entonces a estimaciones contradictorias, usadas a menudo, aún hoy, con ánimo guerrero. Y sugiere que las

denuncias de atrocidades habrían sido falsas, si bien es difícil que lo fueran por completo. El tinte propagandístico del informe de De los Ríos resulta obvio, así como el de investigaciones posteriores de Eduardo de Guzmán, del grupo comunista Socorro Rojo Internacional, y otros. Marco Miranda hizo sus pesquisas con ayuda de un político socialista. Gordón Ordás ofrece más garantía, pues evita culpar en bloque al ejército o al gobierno, y no olvida crímenes de los insurrectos; además había condenado la revolución antes de octubre y no tenía interés, por tanto, en desviar la atención de ella. El auditor militar admite implícitamente excesos al quejarse: «Se olvida que las tropas actuaron en régimen de verdadera guerra frente a un enemigo numeroso que, bien armado, desarrolló una acción ofensiva con intensidad y crueldad inusitadas». Y debió de haber en algunos militares sed de venganza por los asesinatos de guardias prisioneros y por infundios sobre ciertas ferocidades de los revolucionarios. Por otra parte, una comisión enviada en enero por Lerroux negó veracidad a las denuncias, como también lo hizo el escritor Ramón Pérez de Ayala, diputado por Asturias y votado por gentes de izquierda, según señala Ricardo de la Cierva (2)

Queda la densa impresión de que las acusaciones tuvieron alguna base, pero desorbitada enormemente por una propaganda inescrupulosa.

Como resumen, en **Avilés** profirió López Ochoa amenazas brutales, aunque no tuvo que cumplirlas, y luego, para proteger su débil columna, colocó en vanguardia de ella a prisioneros, varios de los cuales cayeron en los encuentros. Su acto peor fue el fusilamiento de prisioneros en el cuartel de Pelayo (de 4 a 48, incluso a centenares, según Versiones). López argüiría que se trató de ejecuciones tras un juicio sumarísimo, pero en todo caso fueron ilegales. Hubo denuncias de asesinatos de civiles inocentes en el curso de la lucha, en Oviedo y sus cercanías, particularmente en Tenderina Baja, Villafría, San Esteban de las Cruces y otros puntos. El crimen más sonado, en Carbayín, fue perpetrado el 24 de octubre, cinco días después de la rendición rebelde: en supuesta represalia por los fusilamientos de guardias en Sama (23 civiles y 7 de asalto), un grupo de soldados o guardias civiles fusiló a su vez entre 18 y 24* prisioneros, incluyendo al parecer a un muchacho de 16 años y un maestro afiliado a la CEDA

(3).

*Se habló de entre 18 y 20. Paco Ignacio Taibo II da la suma de 24

Gordón menciona 24 asesinatos, Marco Miranda 46 y el informe divulgado por De los Ríos y Álvarez del Vayo, 31, de ellos 9 por torturas. Si damos por válidas todas las denuncias, descontando las repetidas (Carbayín y Luis Sirval), sale un total de 84, suma alejadísima de los millares aireados por las propagandas, y que incluye probablemente bajas producidas en el fragor de los combates, cuando se hacía difícil distinguir entre rebeldes y paisanos corrientes (4)*.

*Ramón y Jesús Salas Larrazábal anotan: «Díaz Nosty, en *La comuna asturiana*, eleva las víctimas de la represión gubernamental a un mínimo de 156 y un máximo de 210 (...) pero ni aduce pruebas ni la cifra puede resistir la confrontación con las manejadas por los diputados izquierdistas que realizaron investigaciones sobre el terreno». Ricardo de la Cierva calcula las víctimas totales en unas 200, un centenar para cada bando (5).

Por otra parte, ejecutar sobre la marcha a rebeldes capturados con armas ha sido común en acciones de este tipo. Lo había practicado el gobierno socialdemócrata alemán contra la insurrección espartaquista y contra el soviet de Baviera, en 1919. En España, cuando la revuelta anarquista de enero del 32, mucho menos grave que la de octubre del 34, escribe Azaña en sus diarios: «Como Fernando (de los Ríos) me oyó decir que se fusilaría a quien se cogiese con las armas en la mano, quiso disentir; pero yo no le dejé, y con mucha brusquedad le repliqué que no estaba dispuesto a que se me comiesen la República. Todos los demás ministros aprobaron mi resolución» (6). Y fusilamientos tales serían realizados masivamente por el Frente Popular (como por sus adversarios) en julio de 1936, cuando la derecha, a su vez, se sublevó. En todo caso, en octubre del 34 hubo comparativamente pocas víctimas de tales prácticas.

Los crímenes como arma arrojadiza

Tanto en Asturias como en Cataluña, Palencia y otros lugares fueron los rebeldes, sin duda, quienes iniciaron las atrocidades, de acuerdo con las instrucciones para la insurrección*. Aspiraron a imponer su propia legalidad, y lo consiguieron en numerosos pueblos, por unos días o unas horas, tiempo suficiente para aplicar una dosis de «terror plebeyo», como lo llamaba Marx y que horrorizaba a Besteiro. En Cataluña cometieron tres asesinatos, en Vasconia otros tres, y cinco más en varias provincias. En Asturias, donde el poder revolucionario duró dos semanas, las víctimas fueron al menos 43 guardias civiles y de asalto, 34 religiosos y seminaristas, varios vecinos y un estudiante «fascistas», técnicos de la industria, un magistrado del Supremo, etc. El total asciende a un mínimo de 85 y un máximo de 115. (1)

* Ver Los orígenes de la guerra civil, p 265 y ss, y apéndice

Los guardias sacrificados habrían aumentado en un centenar, de no haberlos salvado González Peña, si hemos de creer su testimonio. Los grupos más representados entre las víctimas fueron los guardias prisioneros y el clero, que también sufrió bajas en Cataluña y Palencia.

Alguna prensa de derechas difundió relatos macabros de sacerdotes quemados vivos y otros semejantes que demostraron ser patrañas, aunque en general las informaciones sobre los asesinatos eran correctas. El sol, el 27 de octubre, decía: «Los episodios revolucionarios en Asturias han sido, en general, terribles (...) Pero de esto al plus de sadismo que (...) quieren dar por cierto los incondicionales de la antirrepública, media una enorme distancia. No es lícito (...) el juego a que se vienen entregando (...) los periódicos monárquicos». El debate criticaba, a su vez, el día 28: «Algunos periódicos de izquierda (...) se resistieron primero a informar (...) Ahora todo su empeño consiste en desvirtuar lo ocurrido, en restarle importancia (...) Se apoyan para ello en que algunas versiones circuladas al principio por Madrid eran falsas; pero ¿es que las comprobadas después con tiempo y medios no son bastante horribles?».

La derecha empleó exageraciones sobre los crímenes como un arma arrojadiza. G. Brenan, entre otros lo ha subrayado: «La impresión producida en toda España por este alzamiento fue, naturalmente tremenda. Uno de los efectos que menos podían esperarse fue la atrocidad».

campaña emprendida ferozmente por todos los periódicos de derechas. Las más increíbles leyendas fueron contadas solemnemente (...) Contaban que las monjas del convento del Colegio de las Adoratrices, de Oviedo, habían sido violadas; que habían sacado los ojos a veinte hijos de policías de Trubia; que curas, frailes y niños habían sido quemados vivos y que el cura de Langreo había sido asesinado y colgado de un gancho con la siguiente inscripción puesta sobre el cadáver: «Se vende carne de cerdo». A pesar de que la más escrupulosa investigación por periodistas independientes y por diputados radicales, miembros del partido entonces en el poder, no reveló la menor huella de estos horrores y de que las fuertes sumas recaudadas para los veinte niños ciegos debieron ser destinadas a otros menesteres (...), estas y otras leyendas continuaron siendo repetidas por la prensa de derechas durante muchos meses. Aun siendo indulgentes ante la facilidad con que las clases altas españolas se sintieron dominadas por el pánico y ante el hecho de que el relato de las atrocidades tenía una fuerte componente pornográfica, lo menos que podemos pensar es que había una deliberada intención (...) deseaban producir una atmósfera de terrible venganza». (2)

La revisión de la prensa de entonces muestra que al propio Brenan podría achacársele bastante de ese desprecio por la verdad que él atribuye a «todos los periódicos de derecha». El principal de éstos, *El debate*, informó con bastante objetividad, aunque dejó pasar algunas probables falsedades, cosa inevitable con ocasión de conflictos bélicos, como puede verse en la prensa de todo el mundo, incluida, desde luego, la británica. Así, el 23 de octubre dicho diario citaba nominalmente a dos mujeres, una de las cuales afirmaba que haber visto cómo un sacerdote era quemado vivo, o cómo los rebeldes habían rematado a 35 camaradas suyos heridos, para que no cayeran vivos en manos de las tropas. Otra testigo decía haber visto en Sama cadáveres de guardias civiles con los ojos vaciados y un sacerdote abierto en canal con el letrero famoso. El diario expuso estos relatos sin darles mayor relieve y dentro de una información en general veraz. Al día siguiente, 24, el monárquico ABC, que no había publicado lo anterior, alertaba contra noticias «tendenciosas y falsas que circulan con frecuencia, debidas, más que a una intención definida, a la imaginación exaltada» de personas que presenciaron hechos u oyeron hablar

de ellos. «Algunas informaciones publicadas son falsas y (...) no son menester nuevos horrores que añadir a los muchos de que tenemos conocimiento». Algunas de estas noticias, que no pudieron comprobarse, salieron también en la prensa de izquierda. Así, *La libertad* hablaba esos mismos días de un clérigo a quien «le rociaron con gasolina y le prendieron fuego», de un ingeniero «a quien los revolucionarios cortaron la cabeza y arrastraron el cadáver, o de que al párroco de Sama «lo mataron, le descuartizaron y los restos los pusieron en venta en un escaparate».

La denuncia estruendosa de algunas falsedades que, más o menos intencionadamente, difundieron algunos periódicos, sirvió como cortina de humo sobre el conjunto de los hechos y sobre quiénes los habían organizado. Brenan que, como hemos visto, mantendrá sus propias desvirtuaciones no ya meses, sino años, afirma que «las verdaderas atrocidades de los mineros asturianos se redujeron al fusilamiento, a sangre fría, de una veintena de personas, todas del sexo masculino», incluidas un cura y seis maestros de las Escuelas Cristianas. Y explica: «Los mineros reaccionaban así a la tentativa de implantar allí un nuevo sindicato según el modelo de los sindicatos católicos austriacos», dando al crimen una explicación complaciente. Añade: «algunas iglesias fueron quemadas», una de ellas «con gran ceremonia». «En Portugalete (los anarquistas) se divertieron de lo lindo quemando el museo de la Inquisición». Lo que ardió en Portugalete fue un palacio con una valiosísima biblioteca y gran cantidad de obras de arte. Salta a la vista que Brenan no sabe muy bien de qué habla, y que muestra una credulidad extraordinaria hacia la propaganda revolucionaria. (3)

Hubo, sin duda grandes exageraciones de la derecha, sobre todo en los primeros momentos, pero, con todo, no pueden equipararse con las de la izquierda. La mayor parte de la derecha renunció a las falsedades, una vez se comprobaron, y *El debate*, por ejemplo, expuso en sus reportajes rasgos simpáticos de los rebeldes, como su idealismo o su rechazo mayoritario del robo, su conducta humanitaria en ocasiones, facilitando auxilios a guardias heridos. También reiteró cómo la población civil había sido, en general, respetada por los rebeldes, así como las monjas y las mujeres, y alertó contra las noticias exageradas (4).

Nada de eso se percibe en la campaña de la izquierda, que adoptó una actitud maciza, sin resquicio para la rectificación, no digamos a la simpatía. De hecho, hoy conservan algunos el mismo tono.

Un rasgo peculiar de la revuelta fue la caza de sacerdotes, fruto de la propaganda anticatólica difundida por los partidos de la izquierda. La tradición anticlerical se remonta al siglo pasado, y ha dado lugar a algunas degollinas, para culminar, en 1936-39, en una de las persecuciones más mortíferas jamás sufridas por la Iglesia. Cabe señalar que actitudes semejantes, aunque atenuadas, persisten hasta hoy. El historiador Bernardo Díaz Nosty, por ejemplo, habla de la matanza de clérigos en Asturias como «un buen punto de partida para analizar el resentimiento del proletariado astur contra el aparato eclesial y, a la vez, base para una profunda reflexión sobre el papel de la Iglesia en el desarrollo de las relaciones sociales» (5).

En román paladino, los asesinos no serían unos cuantos exaltados, sino nada menos que «el proletariado astur»; y las víctimas serían las culpables, por no obrar siguiendo el criterio de los socialistas (y de Díaz Nosty), ganándose así el «resentimiento», se supone que justificado, del «proletariado».

Entre los republicanos, la actitud antirreligiosa estaba muy extendida. Portela Valladares, masón de alto rango, narra en sus memorias esta anécdota no imposible, aunque difícil de comprobar: «En un Consejo, el siempre almibarado Fernando de los Ríos dijo incidentalmente que un futuro ministro técnico «era un veterinario capaz de poner unas herraduras de plata a un santo Cristo» «¡Qué blasfemia tan magnífica!», gritó uno de los consejeros, apretándose los ijares, y entre blasfemias cada vez más resonantes y espantosas (...) hubo de suspenderse el Consejo». (6)

Los dirigentes del primer bienio, apenas instaurada la II República, permitieron y en cierta medida alentaron, la destrucción de más de un centenar de conventos, escuelas y bibliotecas, hecho que ganó al régimen un profundo e innecesario descrédito entre buena parte de la población.

La causa de esas actitudes es a la vez fácil y difícil de hallar. Fácil, porque todas las izquierdas veían en la Iglesia un bastión *reaccionario* o de *las clases explotadoras*, y una tradición detestable. Sin embargo, aun desde ese punto de vista, el exterminio de seminaristas, frai-

les o párrocos, en su mayoría bastante pobres y a menudo dedicados a obras asistenciales, carecía de valor militar o revolucionario. Como no lo tenía la quema de templos, arte religioso y libros. Se trataba de un odio visceral, telúrico, diríamos, producto de una muy larga e intensa propaganda ideológica, y racionalizada con afirmaciones difíciles de creer, como la de que los frailes y los curas disparaban «contra el pueblo» desde las iglesias. Cosa que recuerda bulos del siglo pasado, sembrados probablemente por agentes políticos para empujar a las capas *lumpen* de la población a matar clérigos, como el que acusaba a éstos de emponzoñar las fuentes.

Los asesinatos en ambos bandos, si bien pocos en comparación con otros sucesos revolucionarios o bélicos de la época, impresionan como índice del nivel alcanzado por los odios, nivel que en adelante no haría sino subir, hasta tomar el carácter de furia asesina en 1936.

Vencida la revuelta, el comandante Lisardo Doval, de la Guardia Civil, recibió la misión de capturar a los fugados y descubrir las armas escondidas. Doval, más eficaz que escrupuloso, según Madariaga, (7) debió de emplear la tortura, aunque ciertamente sin el carácter indiscriminado (los «miles de obreros martirizados») que le achacaron, como indica el hecho de que durante el Frente Popular no se presentaron, aparentemente, reclamaciones por lesiones y daños que forzosamente habrían resultado. Pero justo a raíz de su mayor éxito, la captura de González Peña, Doval fue retirado de Asturias, a petición de Gil-Robles y otros, lo cual suena a admisión, nuevamente de que las acusaciones tendrían algún fundamento.

Clave de la represión fue el castigo de los líderes. Ninguno de ellos alegó torturas o las denunció en otros, lo mismo Companys y sus consejeros que González Peña, Teodomiro Menéndez o Pérez Farrás. El entonces líder juvenil Santiago Carrillo sufrió un interrogatorio que «casi me pareció versallesco», mientras que Amaro del Rosal mencionaría coacciones y amenazas (8). Varios de los jefes máximos, como el mismo Vidarte, ni siquiera fueron detenidos, pudiendo moverse con gran libertad.

Prieto, huido en París, protestó por «indefensión» al habersele declarado en *rebelión*. Su estancia en el extranjero, aclaraba en carta al juez, obedecía a una dolencia no especificada, certificada por un médico que le recetaba sosiego y abstención de viajes. Otro de sus pa-

peles prueba, sin embargo, que había viajado, si bien no a España, porque «los seiscientos metros de altitud de Madrid le serían fatales». Prieto se había responsabilizado del alzamiento de octubre en unas declaraciones a la agencia francesa *Havas*, así que, para desvanecer el efecto de ellas, envió al fiscal un sibilino desmentido, y lo hizo publicar en su diario *El liberal*, de Bilbao y en otros, aunque no en los de Francia: «Como algunos periódicos españoles han reproducido extractos defectuosos e inexactos de mis declaraciones hechas en París, me interesa hacer constar que ciertos conceptos de los que en esos extractos se me atribuyen no responden fielmente ni a mis palabras ni a mi pensamiento». Jiménez de Asúa, aspirante a su defensa, condenó las «declaraciones que le han atribuido y que con jactancia impropia de la serenidad reconocida por todos en nuestro mandante, se pretende que se ha hecho responsable del movimiento revolucionario». El juez militar, sin duda poco comprensivo, mantuvo la calificación de rebeldía para Prieto (9).

En cuanto a los dirigentes de la Esquerra, su caso resultó aun más notable, como veremos.

El proceso de los líderes de la Esquerra catalana

En Cataluña, la Esquerra temió en los primeros días una dura represión e incluso verse prohibida como partido, dada su abierta rebelión y haber utilizado las instituciones legales contra la legalidad republicana, en unos sucesos que, aunque de menor violencia que los de Asturias, habían dejado 107 cadáveres en las calles. Pero el gobierno la trató con suavidad, que algunos han contrastado con la dureza de la represión a que se libró el gobierno de Azaña después de la sanjurjada.

(1)

El juicio de Companys y sus consejeros empezó el 25 de mayo y se convirtió en una magnífica plataforma política para la oposición. Los inculcados alegaron que antes de octubre habían estado inquietos por las amenazas a la república y a la autonomía catalana. Sin embargo esas amenazas no habían existido, sino que, lo mismo que el peligro fascista, procedían de la propaganda de la izquierda y tenían por fin soliviantar a la población, según se desprende de los hechos examinados en Los orígenes de la guerra civil española; también aludieron los encausados a su preocupación por movimientos de pánico «de esos que se producen frecuentemente en Madrid»; pero aseguraron que había sido el pueblo quien por su cuenta había reaccionado a dichas amenazas. Cuando el conflicto por la ley de cultivos, simplemente «nos encontramos en Cataluña con un movimiento de opinión favorable a lo que nosotros entendíamos», insistieron -aunque dicho conflicto, como se desprende inequívocamente de los testimonios de Dencàs, Hurtado y otros, había sido abultado y utilizado por la Esquerra para crear un ambiente insurreccional.

Preguntado Companys si la huelga de octubre había sido «amparada por elementos que estaban al servicio de la Generalidad, los cuales la fomentaban e imponían en comercios e industrias e incluso en ferrocarriles», respondió que «el sentimiento de la huelga penetró de una manera espontánea en todo el elemento obrero de Cataluña», y si bien admitió que «es posible que la FAI fuera opuesta a la huelga», aclaró que «siempre había tenido noticias de que esa agrupación estaba en combinación con los monárquicos -si bien la CNT-FAI había colaborado con la Esquerra para traer la república, y ambas formaciones se habían apoyado mutuamente durante un tiempo-. El consejero

de Justicia, Lluhí opinó así del grave incidente provocado por la Generalitat poco antes del golpe, al negar permiso a los jueces para buscar armas en Cataluña: «nos causó extrañeza la medida, no sólo por la desconfianza que entrañaba, sino por las consecuencias que podía tener», consecuencias que no hubieran podido ser otras que amenazar los preparativos insurreccionales. Según él, habría sido el general de la Guardia Civil quien, «de acuerdo con las normas establecidas al traspasarse estos servicios» había rehusado hacer la indagación. De hecho la Generalitat esquerrista había impedido la búsqueda de armas, no sin poderosas y evidentes razones.

En suma, no había existido rebelión, sino solo la orden defensiva de «rechazar por las armas a todo el que atacase el Palacio de la Generalidad». En tocando este extremo, los interrogatorios tomaron un cariz notablemente cómico. Lluhí, «afirma no saber exactamente si algún consejero dio orden de que se defendiera la Generalidad». Contra quiénes debiera ser defendida tampoco estaba claro, ya que si bien Companys dijo que «tenía noticias de que se iba a declarar» el estado de guerra, Lluhí indicó que la *Generalitat* se creía en riesgo de ser «atacada por la FAI, pues se temía que quisiera aprovechar las circunstancias para derivar el movimiento hacia su ideología». Al sonar el primer cañonazo deliberó con sus compañeros: «Hablarnos de lo que se había producido, extrañados enormemente de que fuerzas del Ejército vinieran a atacar la Generalidad, sin una previa comunicación y sin estar declarado el estado de guerra. Hubo momentos de gran confusión (...) Yo fui a descansar un rato sobre las cinco».

La extrañeza de los consejeros era tanta, al parecer, que no lograban convencerse de que fuera el ejército el que tenían enfrente. Un miembro del tribunal, no menos extrañado, entabló este diálogo con el consejero Ventura Gassol:

-¿Tenían ustedes algún motivo racional para imaginarse que existían en Barcelona agrupaciones o fuerzas que tuviesen armamento como aquél, (...) que no fuese el Ejército?» (se refería a los cañones).

-Esto no puedo decirlo, porque en absoluto no puede decirse nunca si hay elementos que tienen o no armamento (...)

-¿Contestaron desde la Generalidad a los ataques?

-Lo ignoro, porque no era de mi incumbencia.

-¿Pero usted estaba en la Generalidad?

-Sí estaba; pero no me enteré de los detalles.

-¿No se le ocurrió a ninguno de los miembros de la Generalidad informarse de quiénes eran los que atacaban?

-Yo no puedo responder.

-¿A usted no se le ocurrió?

-A mí no se me ocurrió.

Y así sucesivamente. Los encausados también ignoraban los actos de Dencás, o si se habían repartido armas en la Generalidad, no digamos fuera de ella, pese a la orden de rechazar los fantasmales ataques de la FAI. No salió a la luz ni un dato sobre los preparativos de los meses anteriores. Todo parecía haber sido un triste malentendido.

Los socialistas habían decidido negar, contra toda evidencia, su responsabilidad en el movimiento revolucionario, y aparentemente Companys había tomado la actitud opuesta, reclamando para sí la responsabilidad de lo sucedido. Pero lo sucedido, de creer a los líderes esquerristas, resultaba al final un embrollo realmente extravagante y tan contario a la evidencia y a la lógica como la irresponsabilidad socialista. En realidad, la Esquerra se había declarado «en pie de guerra» a raíz de la victoria electoral del centro derecha en noviembre de 1933 y en el verano de 1934 había utilizado el conflicto sobre la Ley de Contratos de Cultivo para crear entre los catalanes un ambiente apasionado y extremista, había organizado constantes choques y enfrentamientos con el gobierno centrista de Samper, al tiempo que efectuaba preparativos para un levantamiento armado contra la legalidad republicana, aprovechando para ello la cobertura de la Generalidad y el estatuto autonómico. De esto no puede caber duda hoy. Pero, como quedó expuesto en *Los orígenes de la guerra civil española*, la Esquerra mostró aun mayor opacidad que el PSOE sobre los preparativos y motivaciones de su rebelión, de los que hoy día no sabríamos casi nada si no fuera por escasos, pero concluyentes testimonios*.

Ossorio y Gallardo, defensor de Companys, adujo que los acusados estaban el 6 de octubre «incomunicados virtualmente con el resto de España» -aunque omitió que ellos mismos habían cortado, selectivamente, las comunicaciones-, y «justamente preocupados ante la verosimilitud de un golpe de Estado de tipo fascista» -ninguno creía en realidad en tal supuesto, como indicamos en el libro anterior-. Mientras, las masas se rebelaban «espontáneamente», -las masas no

apoyaron la revuelta en ningún momento-, y entonces «el Gobierno de la Generalidad, precisamente por ser Gobierno y ejerciendo una función de Gobierno, inexcusable en tan dramáticas circunstancias, hubo de buscar un cauce jurídico y político (...) para que la alarma y la indignación de enormes masas del pueblo catalán no se mantuvieran en una posición meramente protestativa y negativa (...) sino que aplicasen su exaltación y su fervor a una obra política constructiva». Para abrir ese cauce constructivo redactó Companys «el manifiesto en que se proclamaba el Estado catalán dentro de la República Federal Española». Tales hechos «no son constitutivos de delito», o, de serlo, sólo en relación «con el artículo 167, número primero del Código Penal, ya que se trataba de reemplazar al Gobierno constitucional por otro»; pero los consejeros «ni se alzaron en armas ni hostilizaron al ejército». Procedía por tanto, absolverlos. (2)

* En especial A. Hurtado, que mantuvo negociaciones clave al servicio de la Esquerra, y J. Dencàs, organizador de los preparativos militares. De la discreción de la mayoría de los jefes esquerristas pueden dar idea las memorias, mucho más voluminosas que aclaratorias, de C. Pi Sunyer, alcalde de Barcelona en octubre de 1934: hasta su muerte, en 1971, mantuvo la versión de los acusados ante el tribunal (él mismo entre ellos), y escribe, por ejemplo: «Lo que realmente pasó (en la consejería de Gobernación) es difícil saberlo. Habiendo escapado Dencàs más tarde y no figurando entre los sometidos a proceso, faltan las declaraciones que permitirían averiguarlo». Donde no hay manera de averiguar nada es precisamente en las declaraciones del proceso. Con todo, resulta revelador el sentimiento con que Pi alude a los esfuerzos combativos de los *escamots* y otros, o al fracaso, que carga, en la línea oficial y con harta injusticia, sobre Dencàs (3)

Un miembro del tribunal, llamado Sbert, sostuvo una tesis que «ha producido gran sensación por su consistencia y por la modernidad de las teorías expuestas», según la prensa de la Esquerra. Sbert recordaba que sólo podían penarse delitos tipificados, como el intento de cambio de gobierno. Ahora bien, la Esquerra había intentado en realidad un cambio de estado, cosa muy diferente y no contemplada en la ley, siendo por tanto un acto «político y legítimo», sin castigo posible. (4)

Así como respecto de Asturias la campaña se centró en la represión, en Cataluña identificó el espíritu y los intereses catalanes con los presos, y en especial con Companys. «En el banquillo de los acusados, siete hombres de Cataluña. Y en torno al estrado y al banquillo (...) y fuera, el pueblo. Este será el hecho más trascendente desde el 14 de abril», escribía el 6 de enero *La ciutat*, diario reemplazante del suspendido *L'Humanitat*. «Lluís Companys, el Presidente de la Generalidad, es el primer luchador de Cataluña». «Companys y Cataluña. Gómez Hidalgo ha establecido la magnífica ecuación. Companys y Cataluña se encontraron juntos el 6 de octubre. Y no se separarán más». «Companys es Cataluña. Cataluña es Companys», insistían los más variados textos propagandísticos. Se promovieron textos como un libro cuyo título, *Companys-Cataluña*, lo decía todo. En su prólogo, el escritor Azorín describía así a los procesados: «Estos hombres son afectuosos, llanos e inteligentes. Han procedido con lealtad y rectitud en el gobierno de su nación. Lo han sacrificado todo por el pueblo (...) Sus pensamientos abarcan a todos los núcleos peninsulares (...) ¡Por Cataluña y por todos los pueblos de España (...) en el acervo de libertad, de justicia y de progreso!». Companys era retratado, en Madrid y en Barcelona como «un hombre de gobierno», y exaltado sentimentalmente como persona que lo había «tenido todo», para caer en inmerecida desgracia. (5)

Los siete procesados fueron condenados a treinta años de prisión, como Sanjurjo, y como él iban a salir pronto en libertad, cumpliéndose el dicho de Cambó, «España es el país de las amnistías». El 6 de junio *L'Humanitat*, acogía la sentencia «con lágrimas en los ojos» y un titular a toda plana: «TREINTA AÑOS DE PRESIDIO ¡VIVA CATALUÑA!», acompañado de unas frases de Companys: «El veredicto que nos importa es el que pronuncie en su conciencia íntima el pueblo (...) Ya que nuestros defensores han hablado del juicio de la Historia, declaramos que esperamos tranquilos su veredicto definitivo, con orgullo en el corazón y conciencia limpia». En cierto sentido, el pueblo ya había pronunciado su fallo al desoír los llamamientos de Companys aquel 6 de octubre, a consecuencia de lo cual se había visto el líder ante los jueces. Pero la Esquerra, con agudo instinto propagandístico, no tuvo el fallo por inapelable.

A Largo Caballero le sonrió la suerte. Se limitó a negar toda partici-

pación o relación con el alzamiento. Al parecer no había pruebas de la evidencia, por así decir, y los magistrados lo absolvieron. Santiago Carrillo y los demás dirigentes socialistas aprovecharon para pedir a su turno la absolución, sobre las mismas bases, pero continuaron en espera de juicio hasta que el Frente Popular los liberó unos meses después. En resumidas cuentas, y dada la magnitud de la revuelta, probablemente en ningún otro país europeo se hubiera aplicado una represión menor.

Otro aspecto de la represión lo refleja el informe leído en el Comité Nacional del PSOE el 16 de diciembre de 1935, que en el apartado de «Perseguidos» señala el éxito de la tarea de «atender y auxiliar a los perseguidos para ponerlos fuera del alcance de la justicia»: De ese modo «más de 400 compañeros» fueron puestos al otro lado de la frontera. La atención policial a estas fugas casi masivas debió de ser muy escasa, porque se realizaron «sin tener que lamentar un solo tropiezo». (6)

Gil-Robles había propugnado un castigo «rápido y ejemplar» de los líderes y cierta clemencia para los secuaces, pero Alcalá-Zamora había impedido lo primero. Tres penas capitales se cumplieron, ninguna en dirigentes. Quizá este fracaso de la CEDA redundó en un mayor rigor con los militantes, a fin de obstaculizar en lo posible su reorganización para una nueva y anunciada intentona. Fueron detenidas 30.000, 40.000, 70.000 y hasta 150.000 personas, según la propaganda. La cifra más aireada fue la primera, imposible de confirmar por haber desaparecido los registros. Más probable parece la de 15.000*, la mayoría de los cuales quedaron libres antes de cuatro o cinco meses; pese a ello debieron de seguir entre rejas varios millares durante todo el año 1935. «Las detenciones -como siempre que se producen estos fenómenos de gran envergadura- se hicieron un poco a boleo y con un criterio poco fijo», señala Josep Pla.

*Tuñón de Lara en *La república*, opina que los 30.000 incluyen a los presos comunes preexistentes, que él estima en 9.000. Pero difícilmente bajarían de los 13.000 que había en 1933. (7)

Esta política facilitaba el motivo para una incesante protesta de las izquierdas, y el gobierno, y en especial la CEDA a la que apuntaban todos los dardos, tenía ante sí un arduo dilema, y cualquier cosa que hiciera tendría las mayores probabilidades de salir mal. Portela Valla-

dares, que a finales de año encabezaría el gobierno, expulsando de él a la CEDA, explica: «Más de una vez dije en el Consejo de Ministros: los tribunales militares deben hacer rápida justicia (...) Ocho meses de constantes consejos de guerra (...) concluirán por sublevar la conciencia española. Me contestaron que se aplicaba la ley y que las tardanzas eran garantía para el buen ajuste de la justicia (...) Este criterio formalista y riguroso había dado fin a don Antonio Maura y acabaría ahora con Gil Robles-Lerroux» (8).

El 25 de mayo resurgía Azaña a la vida pública con un mitin en Valencia, ante 80.000 izquierdistas, y coreaba las acusaciones genéricas sobre la represión: «¿Vosotros concebís una política de conservación social que consista en lanzar a la mitad de la población contra la otra mitad?» Afirmó que el gobierno usaba el «movimiento insurreccional popular», como pretexto para «perseguir a la gente (no) por lo que ha hecho, sino por lo que piensa, y se ha desatado una persecución política sin ejemplo en España desde los días terribles del régimen de la dictadura fernandina». A su entender, la pasada rebelión era un «signo del estado de la opinión pública», y ese signo valía «por lo menos tanto como la elección a los 15 vocales del Tribunal de Garantías», elección que, como se recordará, había originado la pérdida del poder por Azaña, en septiembre de 1933, junto con otras votaciones también perdidas después de la matanza de Casas Viejas (9). Equiparar unas elecciones con una insurrección (mucho menos popular de lo que Azaña decía), solo podía aumentar el nerviosismo de una derecha a cada paso más frustrada.

No mayor fundamento tenía la indignación de Azaña por la represión gubernamental, pues las represiones del gobierno azañista en el primer bienio habían tenido, comparativamente, mayor dureza y envergadura. Cuando el alzamiento ácrata de 1932 (con 30 muertos, frente a los 1.300 de octubre) había habido cientos de detenciones, denuncias de torturas, y 104 jefes anarquistas deportados a las colonias africanas. Otros cientos de detenciones habían seguido al golpe de Sanjurjo (10 muertos), así como nuevas deportaciones sin juicio, incautación de tierras de aristócratas, en su mayoría ajenos a la «sanjurjada», y cierre en masa y sin acusación de la prensa de derechas. Otro levantamiento ácrata en enero de 1933 (80 muertos) había dado lugar, entre otras cosas, a los asesinatos de Casas Viejas por la

fuerza pública.

Pese a todas sus contradicciones, exageraciones y abiertas falsedades, la campaña sobre la represión gubernamental y los juicios a los jefes rebeldes dividió a los vencedores de octubre y los colocó a la defensiva. Tienen algo de fascinante el éxito de la campaña y la incapacidad del gobierno para hacerle frente, y por ello puede considerarse aquella como un modelo en su género, muy digno de estudio desde la teoría de la propaganda y la sociología política.

Pero su importancia aun fue mayor como el fenómeno más significativo y trascendental del período posrevolucionario. La campaña desplazó a un segundo y borroso término la cuestión clave de las causas y organización del alzamiento, se convirtió en eje de la política izquierdista hasta las elecciones de febrero de 1936, influyó decisivamente en la alianza de partidos en el Frente Popular y en el acercamiento a éste por parte de la CNT; y consiguió crear en las masas el ambiente irreconciliable y belicoso que no había logrado la propaganda previa a la insurrección de octubre.

Capítulo VII

El PSOE camina a la escisión

Tres tendencias en el Partido Socialista

El PSOE, organizador de la insurrección de octubre junto con la Esquerra, había acordado negar su responsabilidad en caso de derrota, con el fin de cubrirse de la represión aprovechando la legalidad democrática. El ardid le estaba dando resultado, aunque políticamente fuera comprometido, tanto por negar una evidencia como por contradecir su versión de que en España se había instalado el fascismo. Pero la campaña sobre la represión en Asturias, al centrar la agitación y la atención del país, iba a librar al partido de los efectos políticos de tales incoherencias, así como a aliviar los de la derrota.

Le libraría, si bien no por completo, dada la magnitud del desastre sufrido. Así se alzó en el PSOE una marejada interna que pudo haber llevado a revisar la línea bolchevique. Besteiro había condenado la dictadura proletaria, negado el supuesto fascismo de la CEDA, advertido contra el menosprecio a las fuerzas derechistas y vaticinado el viento de sangre que había de traer la intentona. Los hechos parecían refrendarle concluyente y dolorosamente. Por tanto, su posición debería haberse robustecido, e indicios de ello fueron la recuperación por los besteiristas del potente Sindicato Ferroviario, y la publicación de la revista reformista y moderada Democracia, salida tras la suspensión del diario El socialista. El diario El sol elogiaba a Besteiro, el

hombre de la nueva etapa, y Lerroux le saludó como al campeón del «verdadero socialismo» (1), indispensable para la continuidad de la república.

Pero pronto se evaporaron esas esperanzas. Los *bolcheviques* repelieron rudamente cualquier avenencia. Anécdota significativa, contada por Del Rosal: el besteirista Andrés Saborit, visitando a los detenidos, tiende la mano a Largo Caballero, pero éste «se la rechaza con un gesto brutal, negándole la palabra (...) Saborit, abochornado, cabizbajo, se retira y desaparece entre el desconcierto de los visitantes» (2). Araquistáin vapuleó el reformismo, desde las páginas de *Leviatán*, tildándolo de obra de «mentecatos» y «deficientes mentales», puro «derechismo». Besteiro se defendió con timidez desde *Democracia*. Estaba frenado sentimentalmente y cogido en las redes de la campaña por la amnistía, a la que, aun sin entusiasmo, hubo de apoyar. Cayó bajo un fuego cruzado de injurias y acusaciones de colaborar con la *reacción*, de actuar como siervo de «los que autorizaron las matanzas de Asturias», y hasta de haber saboteado el movimiento y causado su derrota. Clamaba un folleto de las Juventudes: «Después de ahogada la revolución, los reformistas pretenden caer sobre las organizaciones sindicales como grajos sobre un cadáver. Todos los medios son lícitos. Los militantes están encarcelados (...) Tienen, pues, el camino libre para sus repugnantes acciones. La burguesía les aplaude y les ayuda» (3). Tales dicterios causaban estragos, dada la exaltada emocionalidad creada por la campaña contra la represión. Arrojados en ella, los *leninistas* zurraron a conciencia a los moderados. Denuncias tan ilustrativas como el «Anticaballero» de Mario de Coca -aparecido a principios de 1936-, se diluiría entre la hostilidad o la indiferencia de los militantes.

Y, ciertamente, cabía extraer dos lecciones opuestas del desastre de octubre: que el camino emprendido era insensato, como proclamaba Besteiro, o, al contrario, que sólo había ocurrido un revés momentáneo en una lucha necesaria e inevitable en tiempo de crisis de la burguesía. Esta última posición ganaría la partida. Como ya vimos, la fuerza principal de la derecha -la CEDA- se había mostrado legalista y moderada, pero la subsistencia de la paz no dependía sólo de ella. El descalabro reformista en el seno del PSOE, principal partido de la izquierda, tuvo por ello un efecto definitivo, pues truncó la rectificación

que hubiese ahuyentado el peligro revolucionario y permitido reorientar el destino de la república.

Pero no sólo desgarró al PSOE la contienda en torno al reformismo. Mientras éste zozobraba en el mar de la impotencia, estallaba otra discordia, mucho más encarnizada, entre Prieto y Largo. Como se recordará, en los meses anteriores a la insurrección ambos habían unido sus fuerzas para descabargar de la UGT a Besteiro, obstructor de los planes revolucionarios. Sin embargo, Prieto, aunque arrastrado por la línea sovietista de Largo, nunca la había compartido en su fuero interno, por lo que el fracaso de octubre hizo aflorar las discrepancias hasta entonces encubiertas, y la lucha resultante iba a llevar al partido a una virtual escisión.

La posición *bolchevique* o *leninista* quedó recogida en el folleto *Octubre, segunda etapa*, escrito en presidio por los líderes juveniles Hernández Zancajo y Carrillo. Los dos mantenían incólume su confianza en que «las fuerzas organizadas de la clase trabajadora, frente al poder del Estado, eran infinitamente superiores. Las clases patronales carecían de organización. La reacción, por su constitución heterogénea, carecía de unidad de lucha». ¿Por qué, entonces, habían perdido los revolucionarios? Por la insuficiente unidad obrerista, debida a las reticencias de la CNT y el PCE, por la traición de los reformistas, y por la inconsecuencia de la minoría parlamentaria del PSOE; sin olvidar a los *centristas*, como denominaban a los seguidores de Prieto, los cuales habían ido al movimiento «con sus miras y dándole una interpretación propia», subordinando los intereses *proletarios* a los de la *pequeña burguesía* republicana (en referencia a la amistad política de Prieto con Azaña). (4)

Por tales razones, «la preparación insurreccional no puede ser abandonada, sino, por el contrario, intensificada». La UGT debía someterse con «disciplina férrea y subordinación absoluta» a la dirección del PSOE. Para empezar, había que depurar de contrarrevolucionarios el partido, a fin de bolchevizarlo a fondo. El motor de la purga serían las Juventudes. Centristas y reformistas quedaban prevenidos: «En su día seremos implacables juzgando a los que tienen una gran responsabilidad en que del movimiento de octubre no saliera la victoria proletaria» (5).

Prieto acusó el fustazo de *Octubre*, y replicó en cinco artículos de

gran eco, en su periódico *El liberal*, de Bilbao, del 22 al 26 de mayo del 35. Los insultos de «traidor» con que *Octubre* le obsequiaba le habían hecho «sangrar», se dolía, por venir de camaradas; pero esquivaba con maña el debate doctrinal y recurría al sentimentalismo reinante en torno a los presos: «Ante todo y por encima de todo me interesa la amnistía». «No me perdonaría nunca, política ni personalmente, el que por no haber agotado todos los recursos a nuestro alcance para obtener la amnistía la hubiésemos diferido o imposibilitado». Tales recursos se concretaban en «un extensísimo frente electoral que, comprendiendo a todos los sectores obreros que en él quieran entrar, abarque también a elementos republicanos». Nadie sabía cuándo habría elecciones, pero él trataba de desviar hacia ellas la disputa.

El escurridizo centrista se valió de González Peña, «a quien no creo se ponga en entredicho por tibieza revolucionaria», para desechiar la bolchevización y oponerle las tradiciones «creadas por aquel hombre indiscutible y adorado por nosotros que se llamaba Pablo Iglesias». Él mismo se presentaba como exaltado: «en orden a las aspiraciones de justicia social del proletariado no pongo límite alguno a mi pensamiento, y no repudio procedimientos extremos para lograrlas»; pero soslayaba cautelosamente el análisis de los sucesos revolucionarios. Ensalzó la labor de la minoría socialista en las Cortes, tachando de antiparlamentarios a quienes la reprobaban, y de paso minó el terreno a Largo Caballero, acusando a sus seguidores de cultivar «la flor exótica del caudillismo». En el PSOE, aseguró con escasa veracidad, «no hubo, ni hay ni habrá jefe». En la práctica había dos.

El folleto *Octubre* se convirtió en piedra de toque de ambas posiciones. Prieto tachó a los jóvenes de inexpertos y excedidos en sus funciones, procurando aislarlos de los militantes adultos; Largo, a su vez, censuró a quienes descalificaban a las juventudes o pretendían acallarlas. De hecho dio rango semioficial al escrito de Hernández y Carrillo al elogiarlo como «plausible, acertado», y al aprobar la bolchevización propuesta y criticar el «anquilosamiento» de la II Internacional. (6)

A aquellas alturas Prieto, como González Peña y otros, repudiaba la insurrección, pero tenía buen cuidado en disimularlo. Sólo años más tarde, exiliado en México, revelaría su pensamiento: «Cuando el movimiento fracasó (...) me juré en secreto no ayudar jamás a nada

que, según mi criterio, constituya una vesania o una insensatez». (7) Hubiera podido, entonces, hacer causa común con los moderados, pero los dejó en la estacada, al igual que en el otoño de 1933. Bajo la común condena a la revolución, abierta en Besteiro, secreta en Prieto, bullían desavenencias básicas. Besteiro concebía la república como una democracia normal, con alternancia en el poder, mientras que Prieto compartía la intolerancia de Azaña para con un gobierno de derechas. No hubo en el líder centrista asomo de autocritica por la revuelta, ni de mano tendida hacia el centro derecha que, al fin y al cabo, habían salvado la legalidad. De labios afuera glorificó el golpe y contribuyó como el primero a las vehementes exageraciones sobre la represión. Hasta intentó promover, con vistas a una nueva unidad de la izquierda, el programa antidemocrático que él mismo había pergeñado para la revolución en 1934*; aunque terminaría abandonándolo, por presión de Azaña.

* En Los orígenes de la guerra civil española, p. 239 y ss

Si Prieto dejó hundirse a Besteiro, desplegó contra Largo una extraordinaria destreza de maniobra y pocos escrúpulos. Comprendiendo la popularidad de su antagonista, trabajó denodadamente por socavarla. Para denigrarlo como irresponsable y falto de valor, aireó su dimisión de la ejecutiva pocos días antes del golpe, causada, como hemos visto en Los orígenes de la guerra, por una intriga del mismo Prieto. A poco de la revuelta corría por prisiones y organismos del partido la carta de unos jóvenes asturianos presos, con frases añadidas que, sin nombrarle, mortificaban al Lenin español por su «anemia mental» y su «pueril» manía de «la revolución permanente». El injuriado protestaba con amargura: «Envenenan las conciencias de manera falaz y cobarde, por medio de misivas a los presidios». (8) Quedó bastante clara la mano del líder centrista detrás de los mensajes*.

* Si bien Prieto protestará en carta a Negrín, el 26-VI-35, calificando de «tejido de falsedades» la imputación de haber él divulgado y añadido frases a la carta de los jóvenes. Tal acusación, lamenta, es «una infamia, una más de las que en esta temporada vienen formando en torno a mí un rosario que me indigna, me asquea y me fatiga». Dice haber sabido que la carta se había reproducido a ciclostil en Bilbao y Pamplona, y que había mediado para borrar los conceptos ofensivos. Largo, con buenas razones, no creía una palabra de Prieto (9).

Aparentemente Prieto tenía las mejores bazas, pues estaba en libertad, y desde Francia y Bélgica, donde se había exiliado, disfrutaba de fáciles relaciones con el interior, mientras que la plana mayor de sus adversarios seguía entre rejas. Además, disponía de buena parte de las cuantiosas sumas procedentes de los asaltos a bancos durante la revolución de Asturias. Sin embargo sus ventajas valían menos de lo aparente. Como señala Amaro del Rosal, él mismo encarcelado y uno de los líderes de la intentona, «la cárcel de Madrid, aunque parezca paradójico, fue el centro de dirección política y de organización más importante de la España democrática» (no debe olvidarse que para Del Rosal democracia equivalía a sovietismo). El 17 de noviembre de 1934, al mes de concluida la insurrección, se reconstruía en presidio la dirección de la UGT y de sectores del PSOE: «De la cárcel salían diariamente la correspondencia, las circulares, las orientaciones de la dirección (...) A la cárcel venía diariamente la correspondencia y los problemas» de las organizaciones. «En la cárcel se desarrolló el proyecto de editar el semanario *Claridad*», que pasaría a convertirse en órgano del sector revolucionario. «Desde la cárcel se orientaron los trabajos de solidaridad y de creación del Comité de Ayuda, que tan importante papel jugó durante el *Bienio Negro*; los sindicatos soviéticos aportaron a la suscripción un millón de francos. Álvarez del Vayo fue el agente de la Solidaridad internacional». La comodidad con que actuaron desde su encierro fue tal que allí guardaron el dinero sobrante del «Fondo especial», creado para sufragar la revolución, así como otras gruesas sumas que sirvieron, entre otras cosas, para costear *Claridad*. En las visitas a los presos circulaban fondos de hasta 50.000 pesetas (equivalentes a más de 10 millones actuales). (10)

Tal actividad no hubiera sido posible sin la lenidad de diversas autoridades. En concreto, «la comprensión, sentimientos democráticos y liberales del Director de la prisión, señor Elorza (...) permitió que, a partir de mediados de noviembre, en la quinta galería de políticos funcionaran las direcciones nacionales de la UGT, del Partido Socialista y de la Federación Nacional de las Juventudes Socialistas, así como las secretarías de algunas federaciones nacionales de la UGT», con sus reuniones, conferencias, correspondencia y manejo del dinero. El director de la cárcel sería fusilado en Burgos por los nacionales, tras

reanudarse la guerra en 1936. (11)

Prieto acosa a Largo Caballero...

Aun así, Prieto sabía aprovechar sus bazas. Desde el exilio escribía cartas y movía contactos en España y en la emigración. Gracias a su ingenio dialéctico y sus vínculos con los socialistas asturianos - siendo él de Asturias, aunque criado en Bilbao-, se ganó a líderes aureolados como Belarmino Tomás, Amador Fernández etc., y llegó a hacerles creer que su cese (de Prieto) en los contactos con militares, poco antes de octubre, había sido motivado la derrota. Así lo sugería una carta a los presos asturianos, enviada desde Bélgica: «Habrà que decir a quien haya sido culpable de ello, el por qué se le desplazó (a Prieto) del papel que en su principio tenía asignado (...) y por dicha causa fue casi seguro el fracaso del movimiento». Largo exageró por el lado contrario: «Nadie le desplazó de ninguna gestión. Prieto no hizo nada» (1).

El exiliado supo atraerse al encarcelado González Peña, cuya reputación, cimentada en una resonante propaganda, le vino de perlas. Fomentó el victimismo entre los asturianos, y les animó a alancear al *Lenin español*: «Asturias tiene mucho que decir, y Madrid mucho más que responder», escribía Amador Fernández en *El pueblo*, de Oviedo, el 19 de agosto, con amenaza inconcreta, pero evidente; González Peña zahería a «los de Madrid», que «son como el arco iris, salen después de la tormenta (...) Mucho hablar de la revolución, pero nos han embarcado». Largo contestó que «los asturianos no fueron los que menos contribuyeron» a precipitar el alzamiento (2).

El astur-bilbaíno utilizó a conciencia, según su rival, el truco de «atribuir a las demás actitudes por él imaginadas para darse el gusto de combatirlas» (...)

*Prieto, en efecto, dominaba ese truco. En ocasión del homenaje de las Cortes a Macià, tras el fallecimiento de éste, el líder socialista gritó que había oído un «¡muera Cataluña!» en los escaños de la CEDA, cosa en extremo improbable. Gil-Robles le desmintió, pero se formó un escándalo mayúsculo, y la prensa de la Esquerra lanzó a toda plana una campaña de «desenmascaramiento» de las derechas por su «anticatalanismo».

Con la sospecha sembrada por Prieto de que se quería ir a la abstención electoral -¡qué disparate!- cuando era, en realidad, todo lo

contrario, por la necesidad de un triunfo electoral para sacar de la cárcel a millares de presos, se pretendió también desacreditarnos». Largo estalló cuando aquel, antes acorde en desentenderse del golpe derrotado, declaró «que era una vergüenza que nadie se hiciera responsable» de él, insinuando cobardía en el *bolchevique*. Éste replicó: «nadie con menos autoridad podía pronunciar tales palabras. (...) Desde París censuraba a los que estábamos en la cárcel sin poder defendernos (...) ¿Por qué no regresaba y se presentaba al juez haciéndose responsable, lavando de este modo la vergüenza de que hablaba?» (3)

La fobia entre ambos líderes llegó al extremo. Para aplacarla, Vidarte fue a hablar con Largo en la cárcel. En balde: «Vi dibujarse una división, una escisión quizás, en el seno del PSOE (...) Todos tendríamos que elegir entre él y Prieto». Belarmino Tomás, en el exilio, también creía inevitable la ruptura. Quizás para profundizar la discordia acusó -falsamente- a los *leninistas*, de planear el ingreso de la UGT en la Comintern (sic) y la fusión del PSOE con el PCE, por lo que pedía la destitución de los dirigentes «hasta que el Congreso los juzgue». Unos y otros querían un congreso que cortase por lo sano (4).

Esta querella sorda a base de rumores, arterías y campañas de desprestigio, prosiguió a lo largo de 1935 y salió plenamente a la luz en diciembre. En ese mes reapareció *El socialista*, y Prieto, que se hallaba en Madrid, teóricamente clandestino, ganó la batalla por el control del diario. Tuvo de su parte al director, Julián Zugazagoitia, antes ardiente campeón de la revuelta, quien se impuso a los redactores *leninistas* Serrano Poncela y Cabello. El periódico había sido suspendido por el gobierno, y en su lugar el ala besteirista había editado *Democracia*, y la bolchevizante *Claridad*, ya en julio. Al volver a la calle el órgano oficial, la ejecutiva del partido exigió la desaparición de los otros dos, pero solo *Democracia* obedeció, perdiendo su medio de expresión el sector moderado. Por el contrario, los *leninistas* reforzaron *Claridad* hasta hacerlo diario, como plataforma de lucha contra sus enemigos.

También en diciembre obtuvo Indalecio Prieto otro éxito crucial, al desbancar a Largo de la ejecutiva. A tal fin usó la misma treta que el año anterior en vísperas de la insurrección: vulnerando los estatutos, intentó someter la minoría parlamentaria del PSOE al control del Co-

mité Nacional, cosa que Largo juzgó un golpe de estado dentro del partido. Pero ahora Prieto redondeó su astucia con una bofetada moral y política: sabiendo que su adversario descalificaba a los parlamentarios del PSOE*, promovió una declaración de éstos aprobándose a sí mismos por su actuación en las Cortes. Para llevar a cabo su acción, viajó a Madrid, desatando las sospechas de Largo: «¿Es que se le han dado facilidades, no ya de carácter particular, sino oficial? (...) ¿Es que la policía (...) no se enteró de la presencia de Prieto y de su permanencia en su propio domicilio? (...) Es difícil creer que se pueda hacer esto sin previa garantía de impunidad». Desde luego, el *centrista* había ido a Madrid con el objeto de «hacer saltar de la presidencia del Partido a Largo Caballero» (5).

*Largo: «El deseo de aparecer en la prensa impulsaba a algunos diputados a facilitar noticias que solo las podía dar la Directiva (...) se firmaban proposiciones para restablecer la pena de muerte sin contar con nadie; se autorizaban proyectos de ley o proposiciones incidentales de los partidos enemigos», etc. Sobre todo por lo último, el líder *bolchevique* había abandonado en abril del 34 la presidencia de la minoría, pretendiendo, en vano, una retirada total del Parlamento. (6)

A estos ardides contestó el *Lenin español* Largo, como un año antes. Pero, al revés que entonces, ahora quedó efectivamente fuera del máximo órgano directivo, junto con tres de sus partidarios. La lucha por el poder rozó el punto de ruptura. «¡Marxistas, en pie! ¡No os dejéis arrebatar el control del partido», clamaban los *leninistas* contra la ejecutiva dominada por Prieto, usurpadora a su juicio, y cuya total renovación exigían.

El control de la ejecutiva y de *El socialista*, garantizaba a Prieto un poder real en el partido, y le evitaba sufrir el ostracismo interno de Besteiro, pero no suponía una victoria completa ni mucho menos. Los de Largo seguían hegemónicos en la decisiva UGT, y más aun en las Juventudes, así como en muchas asociaciones locales del partido, entre ellas la crucial de Madrid. Los *centristas*, en cambio, preponderaban en agrupaciones tan significativas como las de Asturias y Vizcaya, paradójicamente las más radicalizadas durante el año anterior, junto con la de Madrid.

En la práctica existían a finales de 1935 dos partidos socialistas enfrentados, cada uno con su órgano de expresión y su línea política.

Se trataba de la crisis interna más dura y peligrosa desde la fundación del PSOE, en 1879, por el ferrolano Pablo Iglesias, figura indiscutible para los militantes, que había impreso en el partido sus rasgos personales de disciplina, severidad y austeridad, y un moralismo algo estrecho. Iglesias seguía un marxismo sin demasiadas prisas revolucionarias, aunque había manifestado en ocasiones su extremismo, llegando a justificar el atentado personal*, o promoviendo la huelga revolucionaria de 1917. Pero en otra crisis decisiva, cuando el PSOE parecía oscilar hacia la Comintern, en 1919, había volcado toda su influencia en contra, manteniendo al partido en la obediencia más moderada de la II Internacional. En 1935, su legado estaba en cuestión.

*El catalanista Cambó lo consideraba un «hombre grosero y violento al cual se le ha creado después un prestigio totalmente injustificado» (7).

En la crisis de este año, el sector centrista de Prieto quería cambiar la línea revolucionaria de octubre, y sustituirla por una alianza estratégica con la izquierda *burguesa*, en un retorno al primer bienio republicano. Solo que los sucesos ocurridos desde 1933 no habían sido en balde, y hacían muy difícil, si no imposible, ese retorno. Además el prietismo carecía de doctrina, y tenía que disimular su verdadero anhelo mediante estentóreas denuncias de la represión, y exigencias de amnistía. Sus críticos izquierdistas no se engañaban al acusar a Prieto de supeditar los intereses del *proletariado*, a los de la *pequeña burguesía* encarnados en Azaña.

La renuncia *centrista* a la revolución no debe confundirse con una postura socialdemócrata o moderada, al estilo de la besteirista. Obedecía más bien a la mayor afinidad de Prieto con el radicalismo jacobino de Azaña que con el marxismo, doctrina oficial del partido. Ello no impedía al líder *centrista* apelar al marxismo cuando le parecía conveniente, aunque no creía en él. En su trayectoria política, Prieto distaba en cualquier caso de lo que se ha dado en llamar moderación. Ya se había distinguido en la huelga revolucionaria de 1917, primera gran intentona del siglo XX para destruir por la violencia «el normal desarrollo de la política», según ha dicho un comentarista en referencia a un suceso posterior, la dictadura de Primo de Rivera. Huido al fracasar dicha huelga, y vuelto luego, había aprovechado el desastre de Annual para acusar al rey Alfonso XIII -sin fundamento- de tener

responsabilidad directa en él, contribuyendo así, junto con el terrorismo anarquista, a llevar al régimen liberal de la Restauración a la ruina, y al país a la dictadura de Primo de Rivera.

A continuación Prieto había propugnado, en vano, la ruptura del PSOE con la dictadura, lo que habría puesto al partido en peligro. Caído Primo a principios de 1930, había logrado arrastrar al PSOE a las conspiraciones republicanas, despreciadas por Largo. La retórica prietista, muy agresiva, se conjuntaba con la de Azaña, también promotor abierto del extremismo («no seré yo quien predique moderación» (8). Había entrado en la conjura para un golpe militar que debía imponer la II República y, fracasado éste, había vuelto a huir a Francia. Venida la república en abril de 1931, había colaborado intensamente con Azaña, pero en octubre del 33 había proclamado en las Cortes la estruendosa ruptura de su partido con los republicanos de izquierda, señal del definitivo rumbo revolucionario del PSOE. Al ganar el centro derecha las elecciones de noviembre de ese año, había propugnado el golpe de estado, y apoyado a Largo Caballero contra Besteiro, participando en la intentona revolucionaria de octubre del 34*.

*Este asunto está tratado con detenimiento en *Los orígenes de la guerra civil española*, capítulos 7 y 8 de la segunda parte.

Otra vez exiliado al fracasar ésta, volvía a la alianza con Azaña, aunque sin intenciones realmente democráticas, pues pensaba anular políticamente a la derecha moderada; fue también indicativo que, en la pugna partidista postinsurreccional, dejara nuevamente caer a Besteiro.

Hombre intuitivo, pragmático y con diversos talentos, pero impulsivo y sin principios claros, Prieto tenía fama de excelente maniobrero. Sin duda lo era, pero le faltaba perspectiva y doctrina, y por ello su sentido de la oportunidad solía quedarse en oportunismo, y sus maniobras conducir a encerronas. El antropólogo y memorialista Julio Caro Baroja opina de él, no sin agudeza: «un falso hombre hábil, que metió a la República en varios callejones. A algunas personas todavía les irrita, nos irrita, la fama de hábil de Prieto, responsable, en gran medida de la desgraciada revolución de Asturias (...). Era hábil, sí, para maniobrar en el Congreso, con un gobierno constitucional a la vieja usanza, como lo puede ser un cacique muñidor; pero no tenía clarividencia en los momentos más peligrosos, aunque luego se diera

cuenta de lo que pasaba y escribiera artículos justificativos bastante claros» (9)

...Pero los bolcheviques mantienen su fuerza

Frente a él, Largo representaba no sólo otra política sino también otro tipo humano, también frecuente en el partido: disciplinado y disciplinario, sólido en su argumentación y tenaz en sus objetivos, a quien desagradaban las maniobras y la ligereza. Líder de la intentona revolucionaria de 1917, había tomado entonces cierta inquina a los republicanos, por quienes se había sentido traicionado. Había propugnado la colaboración con la dictadura de Primo de Rivera, de la cual sacaría el PSOE el inestimable beneficio de llegar a la república como el único partido bien estructurado y con fuerza de masas. Así, por paradoja, la colaboración con la dictadura había convertido al PSOE en el eje de la república. Renuente al principio a colaborar con los republicanos, Largo había terminado por unirse a ellos, pero, en la tradición marxista, era indiferente a la democracia *burguesa*, la cual veía simplemente como un instrumento a utilizar hasta que llegara la ocasión de abolirla y superarla en un sistema socialista. Sin tener en cuenta estas concepciones se vuelve ininteligible la evolución del PSOE en aquellos años. A Largo y a muchos de sus correligionarios, la república les interesaba como régimen débil, que abriese el camino a la revolución.

¿Habría sido posible una estabilización de la conjunción socialista-republicana del primer bienio? Probablemente sí... si las izquierdas *burguesas* hubieran sido un socio realmente fuerte. Pero no había nada de eso. Dichas izquierdas formaban partidos frágiles, de escaso calado social, propensos a las trifulcas y al navajeo entre ellos. De modo que a lo largo de 1933, conforme los republicanos entraban en crisis y resistían a las presiones socializantes, Largo se sintió defraudado en su expectativa de un tránsito legal al socialismo. Cuando el gobierno de Azaña, del que era ministro, perdió el poder en septiembre y dos meses más tarde el centro derecha ganaba las elecciones, el ya llamado *Lenin español* comprendió que el PSOE constituía la única fuerza política real de la izquierda, que la experiencia republicana se había agotado, y que, por tanto, la revolución socialista pasaba a primer plano. A ese fin resultaban prescindibles, a no ser en calidad de satélites, sus anteriores aliados, partidos inestables y en cierto sentido ridículos*.

* Ver II parte, cap. I a III de *Los orígenes de la guerra civil española*

En cuanto a la derecha, la creía un enemigo poco serio y tarado por una esencial cobardía e incoherencia, manifiesta ante la caída de Alfonso XIII, la posterior quema de conventos y bibliotecas, la inepta rebelión de Sanjurjo, etc. La CEDA, parecía, a pesar de sus votos, un conglomerado improvisado unos meses antes, y en riña constante con los monárquicos. El Partido Radical, de Lerroux, sólo inspiraba desprecio en las izquierdas.

Jefe e inspirador de la revuelta octubrina, el *Lenin español* no creía que la derrota hubiera cambiado la verdadera relación de fuerzas, y atribuía el descalabro a fallos de organización e impericia técnica, subsanables en la siguiente ocasión. Un optimismo razonable, pues si al gobierno le había desbordado la revuelta asturiana, ¿qué ocurriría cuando la rebelión cundiera en el resto del país? ¿Y no estaban las derechas desconcertadas y desavenidas a las pocas semanas de su éxito, mientras la propaganda izquierdista se extendía y calaba en las masas? Después de todo, también había abortado el pronunciamiento militar de diciembre de 1930 para traer la república, y sin embargo aquel fracaso había dado aire a las velas republicanas y precipitado el naufragio de la monarquía en abril de 1931. ¿Por qué no había de repetirse la experiencia? Así como la propaganda y la emotividad habían convertido en héroes a Galán y Hernández, los dos rebeldes fusilados en diciembre de 1930, ahora ocurría algo similar con los vencidos de octubre. La convicción de los redactores del folleto *Octubre* de que las fuerzas revolucionarias seguían superando a las de sus enemigos, tenía alguna base.

Al revés que Prieto, Largo sí creía en el marxismo. ¿Qué significaba esto entonces? Se ha achacado al PSOE -y a Largo- una formación teórica muy simple, y se ha observado que sus intelectuales y políticos nunca aportaron nada digno de mención a su propia doctrina. Mas la pereza teorizante no impedía un intenso activismo ni el arraigo entre los militantes de las ideas marxistas fundamentales.

Las teorías corrientes en el PSOE pueden esquematizarse así: el mundo y sus evoluciones, se explicaban por sí mismos (en el *materalismo dialéctico*), sin necesidad de apelar a una trascendencia; Dios era un fantasma, producto de la ignorancia e impotencia técnica propias de épocas pasadas, y utilizado por las clases dominantes para justificar su poder y mantener sumisos a los oprimidos. La sociedad

humana sólo podía entenderse desde la economía -su base «material»-, y el motor de la historia era la lucha de clases, definidas éstas por su posición económica como explotadas o explotadoras. Las clases explotadoras construían un aparato estatal para imponer coactivamente sus intereses, y elaboraban las ideologías, el arte, la literatura, etc., cuyo sentido profundo era la defensa o justificación de la explotación. La clase explotada por excelencia en la época presente, el proletariado o clase obrera, tenía la misión histórica de derrocar el poder burgués o capitalista. En esa lucha, el PSOE constituía «el partido de la clase obrera», a la que representaba, encabezaba e ilustraba. Estas concepciones se consideraban científicas, frutos del estudio de las fuerzas que impulsan la historia, y describían la dirección inexorable de ésta, por encima de las voluntades o ilusiones de los individuos.

Al romper las cadenas *burguesas* el proletariado emanciparía a la humanidad entera. La destrucción de la economía, ideología y estado capitalistas se completaría durante una etapa transitoria de «dictadura proletaria» correspondiente a la fase inferior del socialismo. Después vendría una fase superior, o comunismo, en la cual desaparecerían las clases y el ser humano se desarrollaría con plenitud, bajo el lema «de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades». Sería la revolución más definitiva y asombrosa de la historia, y convertiría la tierra en «un paraíso», según la letra del himno *La internacional*. Por ese ideal, muchos estaban dispuestos a morir y aun más a matar, y ciertamente lo hicieron: «La violencia es la partera de la historia», había sentenciado Marx.

Los reproches de simplismo, incluso de rudeza, hechos al marxismo de Largo y del PSOE, van mal encaminados. Contra una idea frecuente, el marxismo es básicamente simple, a pesar de haber engendrado verdaderas bibliotecas de pensamiento y análisis, y dado pie a interminables debates. Este esfuerzo intelectual, en verdad titánico, nace de la dificultad de acomodar los esquemas teóricos a una realidad rebelde a ellos, o más propiamente, la realidad a los esquemas. La idea de que la economía determina la política y la cultura, nunca quedó justificada claramente, como tampoco el carácter «material» de la primera, ni su efecto sobre la supuesta emancipación humana; ni la lucha de clases como motor de la historia. La teoría

explicativa de la explotación burguesa -la del valor-trabajo y la plusvalía- no ha tenido la menor utilidad cuantitativa o descriptiva: nunca fue posible medir las economías capitalistas, o la soviética, en términos de valor-trabajo.

Pese a que el marxismo debiera emanar del proletariado, sus creadores y líderes, Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, Fidel Castro, etc., han sido *burgueses* y no obreros. Y, a la inversa, nunca los obreros, sino sólo fracciones minoritarias de ellos, se sintieron representadas en, o identificadas con, los partidos marxistas, o han sentido sus intereses como antagónicos de los intereses empresariales*.

*Las reivindicaciones sindicales no implican tal antagonismo, pero la idea contraria es tenaz. Son de Tuñón de Lara, historiador marxista, estos párrafos: «La originalidad y la lucidez de Ortega desaparecían al enfrentarse con el quehacer político y social. Sirvan de ejemplo sus palabras (...) «Es menester tranquilizar al capitalista, diciéndole seriamente que si se va a mermar una porción de su haber le queda el resto para movilizarlo con acierto, y además, si añade a ello el esfuerzo suyo como empresario, podrá tener un porvenir mucho más lucido» Y luego: «¡Obreros españoles! España tiene que ser más rica para que vosotros (...) podáis ser menos pobres». E ilustra muy serio Tuñón: «Los dos párrafos son contradictorios, económicamente hablando. Y los dos revelan el sueño de ver un país capitalista desarrollado»(1). A Tuñón le parecían incompatibles el beneficio capitalista y la mejora de las condiciones obreras, y creía «un sueño» la prosperidad del país sobre esas bases. ¡Eso lo escribe en 1974! En su empeño por ganarse a los obreros, los partidos marxistas desplegaron una intensa labor sindical, vehículo principal de su influencia, y en ese sentido sí llegaron a representar a grandes sectores obreros. Pero el sindicalismo tendía a abandonar la revolución y a integrarse en el sistema. De ahí las periódicas luchas internas por recuperar la pureza del ideal. En España, las tendencias moderadas en los movimientos obreristas sólo se impusieron, paradójicamente, durante la dictadura de Primo de Rivera, con la que colaboró la UGT, mientras la CNT mantuvo una desusada mansedumbre.

Tampoco estaba clara la necesidad de sacrificarse por una sociedad que de todas maneras debía llegar por la dinámica de la historia, por encima de las acciones individuales. Aun más oscura la conve-

niencia de luchar por una sociedad posiblemente maravillosa, pero que no esperaba disfrutar casi ninguno de los luchadores del momento. Quienes cayeran en el empeño no podían esperar otra recompensa que un vago e inseguro recuerdo agradecido de sus hijos o nietos, premio sin sentido para un materialista ateo, para quien la vida presente era todo lo que el hombre poseía y a lo que podía atenerse. Por donde las seguridades científicas del marxismo desembocaban en una fe, y en una fe contradictoria. Etc.

Realmente, el esfuerzo teórico de los marxistas impresiona como un trabajo de Sísifo, y en ese sentido puede decirse que el esquematismo del PSOE le libró de una tarea atormentada y fundamentalmente estéril*.

*Impresiona aun más ese titánico esfuerzo en sus aspectos prácticos, que impusieron un inmenso derroche de sangre, sudor y lágrimas. A los problemas teóricos en apariencia insolubles, Marx oponía el criterio de la práctica social, que los resolvería por la vía de los hechos. Resulta irónico que la práctica haya sido, precisamente, el verdugo de los regímenes inspirados en Marx. O que una doctrina que interpretaba al hombre y la historia desde la economía, se haya hundido, en muy amplia medida, por su ineptitud económica.

Hoy, tras la caída del muro de Berlín en 1989, sabemos el destino del gran experimento marxista, pero eso no podían siquiera imaginarlo en 1935 los socialistas. Sí conocían en cambio su coste en sufrimientos y privación de libertad, por el ejemplo de la Unión Soviética. Sin embargo despreciaban el asunto, tachándolo de «propaganda burguesa», o bien, con mayor sinceridad, lo admitían, considerándolo el precio a pagar por el progreso. Después de todo construir el socialismo implicaba destruir cuanto y a cuantos se oponían al sueño dorado, al porvenir radiante, a la liberación de la humanidad. Cualquier sentimentalismo al respecto sobraba, y Largo, como los demás y especialmente los líderes juveniles, así lo entendían. Y así lo explicitaban sus declaraciones, varias de las cuales quedaron reseñadas de *Los orígenes de la guerra*. También esto es necesario tenerlo en cuenta.

Por sus actitudes, los socialistas de Largo se sentían más próximos a los comunistas que a Prieto. Pero esa proximidad tenía matices. Los autores del folleto *Octubre* afeaban al PCE su anterior sectarismo, que le había llevado a tachar al PSOE de *socialfascista*, pese

a la evidente disposición revolucionaria de éste; y disentían de las nuevas consignas comunistas de alianza con grupos burgueses en un *bloque popular antifascista*: «La clase obrera no se halla tan maltrecha que se vea obligada a servirse (...) de la pequeña burguesía para salir a flote. Muy al contrario, tras las jornadas de octubre, sus organizaciones y su Partido siguen en pie, más fuertes que antes, con más prestigio revolucionario, dispuestos a tomar la ofensiva». Únicamente admitían alianzas electorales de ocasión con las izquierdas republicanas, como táctica momentánea y sin compromisos profundos. Se situaban, pues, a la izquierda del PCE, al que criticaban con estilo fraternal, envuelto en protestas de admiración por la Unión Soviética y de simpatía hacia la Comintern, de la que disentían solo por su absorbente centralismo. De paso, se declaraban ajenos a la obediencia de la II Internacional. (2)

Pero a pesar de los enfrentamientos entre los dos sectores del Partido Socialista, según corría a su fin el año 1935 se iba dibujando un terreno de acuerdo: volviéndose atrás de sus solemnes declaraciones en el otoño de 1933, Largo y Prieto empezaron a promover o aceptar un acuerdo con los burgueses de izquierda, especialmente con Azaña, a fin imponer la ansiada amnistía en las elecciones siguientes, cuya fecha se ignoraba. La demanda de amnistía se transformó en el santo y seña de la política de izquierdas, hasta propiciar un frente unido de todas ellas. Sin embargo, bajo la aparente coincidencia, las diferencias mantenían toda su fuerza, que tendría las más decisivas consecuencias en 1936.

Capítulo VII I

Los comunistas entran en la historia de ESPAÑA

Rasgos de los partidos comunistas

Mientras en el PSOE, incluso dividido, predominaba la línea revolucionaria, se abría en el país otro proceso de radicalización, aunque por el momento casi nadie pudiera apreciar sus decisivas consecuencias: el auge del Partido Comunista de España.

Hasta entonces el PCE apenas había arraigado. En 1919, había nacido la III Internacional o Comintern (Internacional Comunista), con el fin de aplicar el marxismo revolucionario y desbancar a la socialista II Internacional. El suceso había conmocionado a los medios obreristas hispanos, y en el PSOE brotó una corriente pro comunista, acabada en escisión. Con todo, el PCE sólo asentó entonces unos núcleos en Vizcaya, y luego en Sevilla. Al llegar la república, en 1931, Moscú prestó atención a España, donde maduraban condiciones revolucionarias, pero el PCE siguió aislado. En 1932, la Comintern decidió cambiar la dirección del PCE, encabezada por José Bullejos: sin el menor respeto a los estatutos, impuso un nuevo equipo que después hizo refrendar al partido. El jefe (secretario general) pasó a ser José Díaz, procedente del anarquismo sevillano, hombre íntegro, modesto, no muy culto, pero de verbo contundente y claro. Junto a él destacaban Dolores Ibárruri, La Pasionaria, como oradora de masas, antes adicta a Bullejos, a quien dejó oportunamente; Vicente Uribe y Jesús

Hernández, venidos, como la anterior, del comunismo bilbaíno, donde habían participado en actos terroristas, uno de ellos contra Prieto; Antonio Mije o Mitje, llegado, como Díaz, del anarquismo andaluz, y proclive a la corrupción; y Pedro Fernández Checa, organizador eficiente, quizás la persona más capaz del grupo, pero sin ambición de líder. Con ellos aumentó la agitación, pero el partido no salió de su gueto (1).

Todo iba a cambiar tras la insurrección de octubre de 1934, momento clave en el que los comunistas entran realmente en la historia de España. A partir de entonces el PCE pesaría más y más en la política, al punto de que los siguientes cinco años no podrían explicarse sin él.

Los partidos comunistas eran distintos de los demás partidos, incluso de los socialistas, respecto de los cuales representaban un escalón superior como «vanguardia proletaria», en el molde del Partido Bolchevique de Lenin: grupos de revolucionarios profesionales consagrados en cuerpo y alma a destruir el capitalismo. A los comunistas se les exigía «temple de acero», y entrega total a la causa sobre cualquier consideración personal o sentimental. Los partidos nacionales, destacamentos de la revolución mundial, seguían a la URSS, centro y guía, «patria del proletariado». Defender a la URSS, por encima y aun en contra de los intereses nacionales, era el primero y fundamental deber de esos partidos, la «piedra de toque» de su «internacionalismo proletario», pues la clase obrera «no tiene patria», al menos patria *burguesa*.

La escuela comunista, más aun que la socialista, forjó un tipo de militante fanático y al tiempo ilustrado en una concepción del mundo *científica*, que anunciaba la pronta caída del sistema *burgués*, último de los basados en «la explotación del hombre por el hombre». El PC, vanguardia empapada de la ciencia de Marx, en estrecha relación con «las masas» y hábil en todas las tácticas para atraerlas a la revolución, abría camino a un porvenir glorioso.

Alentaba a los comunistas la depresión económica mundial, confirmadora de la teoría leninista: el capitalismo había entrado en su fase «imperialista», es decir, «superior» o agónica. Según Marx, el capital tiende a concentrarse y destruir las empresas menores, proletarizando a sus dueños. La tendencia culminaría a finales del

siglo XIX en la formación de enormes consorcios financieros e industriales, los «monopolios», que manipularían el estado y el mercado, definiendo dicha fase «imperialista». Quedaría así superado el decimonónico capitalismo de libre competencia, correspondido en lo político por la democracia parlamentaria y liberal. Bajo el «imperialismo», la libre competencia y la democracia se reducían a una fachada, o degeneraban en tiranías fascistas. Los monopolios, desbordando el marco estatal y a menudo aliándose entre sí por encima y contra los intereses nacionales, formarían una «cadena imperialista», que explicaría por qué la revolución había triunfado en la industrialmente atrasada Rusia, y no en los países avanzados, contra el pronóstico de Marx: la cadena había quebrado «por su eslabón más débil», Rusia, país a un tiempo imperialista y sometido a imperialismos más fuertes.

Pese a sus intereses comunes y supranacionales, los monopolios seguirían necesariamente sumidos en una rivalidad salvaje por la explotación del planeta, lo cual explicaría guerras como la del 14, guerra imperialista por un nuevo reparto del mundo. La misma industrialización minaba en los países ricos la tasa de la ganancia capitalista, basada en la plusvalía extraída a los obreros, y de ahí que los monopolios se afanasen en explotar las colonias (entonces la mayor parte del mundo estaba colonizado, directa o indirectamente), de las cuales extraerían superbeneficios necesarios para mantenerse y aplacar la lucha de clases en las metrópolis, sobornando a los socialdemócratas, obreristas inadaptados a la nueva época. En esta situación, la revolución rusa comenzaba las revoluciones proletarias y anticoloniales. En los años treinta, el mundo parecía acercarse a una enorme explosión social.

Aunque la historia no ha sido muy clemente con tales teorías, quizá pueda apreciarse en este resumen algo de su aparente poder aclaratorio, y por ende su atractivo, incluso para no marxistas. El marxismo-leninismo contó con nutridos círculos de simpatizantes y agentes *burgueses*, los llamados *compañeros de viaje*, que le fueron de impagable utilidad. D. Caute ha argumentado convincentemente que esa activa simpatía nació de la tradición, o una de las tradiciones, de la Ilustración del siglo XVIII, venero de las ideologías*.

*"En su aspecto intelectual más serio, el fenómeno del compañero de viaje puede entenderse como una posdata a la Ilustración. Repre-

sentó, para adaptar la admirable frase de Peter Gay, un recobro del impulso, una reafirmación de valores un día audazmente proclamados y universalizados, y luego corroídos. Recuperaba el ideal del siglo dieciocho, de una sociedad racional, educada y científica basada en la maximización de los recursos y el continuo mejoramiento (si no la perfección) de la naturaleza humana según la entendieron mentes objetivas y desprejuiciadas. Saber y moralidad vuelven a verse como complementarios; la ancha senda del «progreso» conduciría desde el pasado, tullido por el prejuicio y la tradición, a un feliz porvenir. Para los compañeros de viaje, la Rusia de Stalin representaba la voluntad práctica de resucitar el gran experimento, mientras que las democracias occidentales aparecían como traidoras a sus propios ideales, sumidas en el fango de la codicia, las renovadas supersticiones y el egoísmo de clase. Además, filósofos, escritores y tratadistas sociales de finales del siglo XIX habían lanzado un formidable desafío a los valores y a los supuestos de la Ilustración, y ese reto exigía una audaz réplica, una afirmación de fe» (2).

Incluso a sus adversarios solía infundir un temor reverente la coherencia doctrinal y la agresividad propagandística del comunismo.

El ideal inspiraba en sus seguidores una increíble capacidad de sacrificio. Muchos comunistas arrostraron enormes peligros, la tortura y la muerte, y mostraron una tenacidad combativa a prueba de fracasos. Lo cual no excluía una luchas internas por el poder brutales y a menudo sanguinarias, así como una profunda corrupción y cinismo, sobre todo entre elementos dirigentes, debido a las contradicciones de la doctrina, oscuramente percibidas, a la rivalidad por el poder y a la necesidad de sobrevivir en el acatamiento ciego a la máxima autoridad partidista: Stalin por entonces, la voz de la historia*.

*Existe toda una literatura sobre la inconsecuencia y brutalidad de los jefes comunistas. *Jan Valtin*, cominterniano alemán desencantado, describe al «dirigente proletario» Dimítrof: «Esperaba ver a un hombre como de acero, a un veterano endurecido en muchas campañas. En cambio me vi frente a un hombre alto, apacible, fornido y moreno, con una cara floja, vestido como un «dandy» y oliendo a densos perfumes. Había entrado mostrando, al cerrar la puerta, un grueso anillo en su mano izquierda. Sus dedos bien manicurados ceñían un habano. Sus ojos eran grandes y audaces. Pronto descubrí que era realmente

una personalidad dominadora». He aquí una pintura hecha por E. Castro Delgado, ex dirigente del PCE: «Vicente Uribe, el director (de *Mundo Obrero*) (...) trabajaba con todo cerrado, con la boina puesta, el gesto duro, textos de los clásicos (marxistas) sobre la mesa. Cuando escribía parecía un animal hembra en un mal parto. Pero el enano se creía un gigante. Cualquiera que le interrumpiera era recibido con una mirada que era una blasfemia. No hacía más que el editorial, cuando lo hacía, pero era la tarea que le consumía su jornada de director. Alguna que otra vez abandonaba el despacho, salía precipitadamente hacia la calle del Pez, que tenía sus encrucijadas de carne a precio y allí se estaba lo que el cuerpo le pedía o el dinero daba de sí. Cuando regresaba se metía en el excusado, orinaba y otra vez al despacho, a hurgar en el alma de los clásicos (...) Allí conoció Castro a Jesús Hernández y a Cabo Giorla. Venían de Moscú. Hernández, consagrado. Lo decía su porte y un abrigo de piel que en Moscú sólo daban a los altos funcionarios. Pero era simpático, asequible y siempre con ganas de hablar a todos de la «casa», que por ese nombre se conocía a Rusia. Cabo Giorla, otro producto «made in URSS», era casi un gigante, lleno de vitalidad, de cinismo, de ruido, dispuesto a llegar lo más pronto posible a la cima. Sin embargo, en los primeros tiempos no tuvo éxito. No era proletario y hubo que proletarizarle (...) Entró de peón. Pero no aguantó la prueba. Sus hombros no aguantaban más que la chaqueta y sus ambiciones (...) Y buscó a María Carrasco (...) que ganaba quince pesetas diarias y que buscaba marido. Se encontraron. Se casaron. Giorla no trabajó más. Se dedicó a administrar el salario de ella y a pensar en la revolución. A cambio de ese «administrar» lo que ella ganaba le proporcionó una sífilis de la que no se curó jamás». Pero estos cuadros son anecdóticos, y en buena medida impresiones subjetivas. Básicamente los jefes comunistas, aun si inteligentes y honrados, al menos desde su propio punto de vista, han sido peculiarmente despiadados, con una extraordinaria indiferencia hacia el sufrimiento humano, producto de su concepción materialista del hombre y de su historicismo. Frente a la historia y su movimiento ineluctable, los individuos no eran nada ...con ciertas excepciones, naturalmente. El testimonio de Li Zhisui sobre Mao Tsetung, de quien fue médico, resulta extraordinariamente revelador al respecto (3).

Aun más inclemente era la lucha contra los disidentes abiertos,

como terminaría comprobando el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), grupo comunista menor, con cierta base en Cataluña. Este partido, sin ser trotskista, simpatizaba con Trotski, héroe de la revolución soviética, que tras la muerte de Lenin había perdido la batalla por el poder, frente a Stalin. El odio abismal surgido entre ambos, antes camaradas, terminó en el asesinato del perdedor, en Méjico, donde le alcanzaría, en 1940, el largo e implacable brazo de Stalin por medio del español Mercader. De modo similar, tres años antes, en plena guerra civil española, el POUM perecería, aplastado sangrientamente por el PCE y los servicios secretos soviéticos.

Otra característica notable de estos partidos fue el culto a los líderes, que con Stalin, Mao y otros alcanzó una especie de deificación. En el 70 cumpleaños de Stalin, desde el Kremlin, se inscribió su nombre y efigie entre las estrellas, por medio de proyectores. Los líderes españoles no tuvieron tiempo u ocasión de tanto, pero la Pasionaria llegó a recibir un curioso culto, reminiscente del la Virgen: «madre del sol de la mañana, norte de nuestra reconquista, segura estrella salvadora, Pasionaria, la nueva aurora...». En 1948 el PCE dará a sus *maquis* en España una consigna algo extravagante: «¡Aguantad! ¡Ya vendrá Pasionaria!» (4).

La cual, desde luego, se guardó mucho de acudir.

la estrategia comunista en España.

No se entenderá la política del PCE sin referirse a Stalin, su faro orientador. Por entonces la estrategia soviética emprendía un giro que iba a repercutir en la historia del mundo y, desde luego, en la de España. Ya en enero de 1934, en el XVII Congreso del PC de la URSS, Stalin remarcó que «en los países capitalistas se realizan preparativos febriles para una nueva guerra con vistas a un nuevo reparto del mundo y de las esferas de influencia». Las grandes potencias anhelaban destruir a la URSS, pero al tiempo peleaban entre sí, por «contradicciones interimperialistas». Esas «contradicciones», quedaba implícito, debían ser explotadas de modo que la guerra, juzgada inevitable, se desviase de las fronteras soviéticas y estallase entre países *burgueses*.

El mayor peligro para Moscú provenía de los nazis, dueños de Alemania desde principios de 1933, y que habían arrasado a los antes potentísimos partidos socialdemócrata y comunista. Un eje de la política nazi, trazado por Hitler en su libro programático *Mi lucha*, consistía en destruir la URSS y abrir sus vastos espacios a la expansión germana. Stalin ponderó ante el congreso los esfuerzos soviéticos por firmar acuerdos de no agresión con los países vecinos y otros más alejados, como Francia, con vistas a cercar a Alemania. Pero también sentó un principio: «Está muy lejos de entusiasmarlos el régimen fascista de Alemania. Pero no se trata aquí del fascismo, por la sencilla razón de que el fascismo en Italia, por ejemplo, no ha impedido a la URSS establecer las mejores relaciones con dicho país». Por tanto, la política de cerco a Hitler no excluía un eventual acuerdo con él, incluso un vuelco en los pactos, pues no podían establecerse lazos firmes con los países burgueses: «No hemos tenido una orientación hacia Alemania, como tampoco tenemos una orientación hacia Francia. Nos hemos orientado antes y nos orientamos ahora hacia la URSS, y solamente hacia la URSS». Este juego con las «contradicciones» del enemigo marcaría los años siguientes.

Pero de momento Stalin hostigaba a Hitler con aparente ferocidad. También Francia, inquieta por el nazismo, procuró un acercamiento a la URSS, que tomó cuerpo en mayo de 1934. A finales de ese mes, un artículo en el órgano del partido soviético *Pravda* animaba -en rea-

lidad ordenaba- el acuerdo de los comunistas con los socialistas en Francia: era el inicio de la política de «frentes populares»*, que debía aglutinar en cada nación todas las fuerzas posibles contra el fascismo y el nazismo. En septiembre, la URSS entraba en la Sociedad de Naciones, antes sañudamente denostada (1).

* El nombre de «Frente Popular» parece haber sido inventado por Eugen Fried, enviado de la Comintern en Francia. En España, Vidarte se atribuye la expresión (2)

El viraje fue ciertamente radical. Antes, los comunistas practicaban una política de «clase contra clase», es decir, ataque general a la *burguesía* y a los partidos socialdemócratas, lacayos del fascismo. Ahora, éstos se convertían en aliados. Desde un punto de vista *dialéctico*, el cambio tenía sentido. La socialdemocracia y los partidos pequeñoburgueses, si bien propensos a colaborar con el fascismo, sufrían también la amenaza de éste, de ahí que pudieran actuar como «socialfascistas» o lo contrario, según las circunstancias. ¿Y qué circunstancia aconsejaba en 1934 suavizar el ataque general a la *burguesía* y la socialdemocracia, para centrar la lucha contra un solo sector enemigo, el sector fascista? El afianzamiento del poder nazi, obviamente.

La política de frentes populares, ingrediente clave en la nueva línea soviética, se afianzó a lo largo de 1935 en toda Europa, y especialmente en Francia y España, donde, tras la catástrofe alemana, tenían los comunistas mayores perspectivas. Siempre hubo algo oscuro en esta estrategia soviética, que culminaría en un viraje tan increíble para casi todo el mundo como el Pacto Germano-Soviético de agosto de 1939. Según W. Krivitski, desertor de su alto cargo en el espionaje soviético, ya en julio del 34 pensaba Stalin concertarse con Hitler, y a ese fin obedecía su aparente hostigamiento contra éste. La búsqueda de alianzas antinazis perseguiría en realidad forzar a los nazis a un acuerdo. La versión de Krivitski suena un tanto retorcida, y su testimonio fue vilipendiado por políticos e historiadores de izquierda. Sin embargo, tiene sustancia: él expuso sus asombrosas revelaciones meses antes del citado pacto entre nazis y soviéticos, que las confirmó en buena medida. Por lo demás, cuadra con la *dialéctica* de Stalin. Era típico de él no adoptar orientaciones exclusivas, sino abiertas a varias salidas. Si, ante el peligro de cerco, Alemania accedía al pacto,

tanto mejor; en otro caso proseguiría la alianza contra ella, con lo que nada se perdía. De igual modo, los frentes populares debían empujar a los gobiernos *burgueses* a activas posturas antinazis, agravando las *contradicciones* interimperialistas, y al mismo tiempo estaban claramente diseñados para crear condiciones revolucionarias en cada país. Su empleo final dependería, una vez más, de las circunstancias. Eso habría de verse en España al recomenzar la guerra en 1936 (3).

La línea de frentes populares, lentamente elaborada en el Kremlin, tomó forma definitiva a finales de julio de 1935, en el VII Congreso de la Comintern reunido en la Casa de los Sindicatos de Moscú, antiguo club de la nobleza zarista. El tema central consistió en la lucha antifascista, porque «en condiciones de crisis económica extraordinariamente profunda, de agravación notable de la crisis general del capitalismo, de revolucionarización de las masas trabajadoras, el fascismo ha pasado a una amplia ofensiva».

El documento clave del Congreso fue el informe del búlgaro Georgi Dimítrof, a quien los hitlerianos habían culpado del incendio del Reichstag, que dio la señal para la caza contra los comunistas alemanes. El proceso de Leipzig contra el búlgaro y sus compañeros había originado una contienda propagandística mundial, coordinada por Münzenberg en el bando comunista, y perdida por los nazis, a pesar de su destreza en las artes de la demagogia. Extrañamente, los acusados habían sido puestos en libertad y Dimítrof se había convertido en el líder más carismático de la Comintern.

El congreso abordó la definición teórica del fascismo, al cual no acababan de encajar los teóricos marxistas en su habituales «análisis de clase». Para unos era un movimiento nacionalista y pequeño burgués, y había quienes lo situaban por encima de la lucha entre burguesía y proletariado. Dimítrof lo conceptuó como «la dictadura terrorista de los elementos más reaccionarios, más nacionalistas, más imperialistas, del capital financiero». Su auge obedecía a que los poderes imperialistas «se esfuercen por adelantarse al ascenso de las fuerzas de la revolución por medio del aplastamiento del movimiento revolucionario (...) y de la agresión militar contra la Unión soviética, baluarte del proletariado mundial. A causa de esto necesitan el fascismo». No obstante, el término «fascista» sería empleado, según conviniere, en sentido restringido o en otro tan amplio que abarcaba a cuan-

tos criticasen al comunismo.

El fascismo no expresaría fuerza, sino flaqueza. Citando a Stalin, Dimítrof explicó: «Hay que considerar la victoria del fascismo en Alemania no sólo como un signo de debilidad de la clase obrera y como el resultado de las traiciones perpetradas contra ésta por la socialdemocracia (...). Hay que considerarlo también como signo de debilidad de la burguesía (...) que ya no es capaz de ejercer su dominación por los viejos métodos del parlamentarismo y de la democracia burguesa, lo cual la obliga a recurrir (...) a los métodos terroristas». En suma, el fascismo manifestaba la crisis, probablemente terminal, del poder burgués, su última y desesperada reacción: «el fascismo sube al poder como el partido de choque contra el movimiento revolucionario del proletariado», y por ello mismo constituía «un poder feroz, pero precario».

Al representar el fascismo sólo a una ínfima oligarquía financiera, chocaba con la mayoría de la población, incluidos sectores burgueses, y por tanto permitía una vasta alianza en su contra: «Una tarea particularmente importante es crear un amplio *frente popular antifascista* sobre la base del frente único proletario. El éxito de toda la lucha del proletariado está estrechamente ligado al establecimiento de una alianza de combate con el campesinado y la masa fundamental de la pequeña burguesía urbana». El *proletariado* debía estimular las reivindicaciones de esas capas y combinarlas con las suyas propias. Ardua combinación, porque la misión *del proletariado*, según la teoría, consistía en borrar de la faz de la tierra a la burguesía, pequeña o grande. Sin embargo los marxistas confiaban en la incapacidad constitucional del pequeño burgués para ver más allá de un corto horizonte histórico, limitado por sus intereses inmediatos.

El fascismo, señalaba Dimítrof, «halaga demagógicamente las necesidades y aspiraciones más ardientes» de las masas y de ahí su atractivo entre ellas. Para contrarrestarlo, los comunistas debían «abordar de manera justa» a la pequeña burguesía y «terminar con la actitud despreciativa que se nota frecuentemente en nuestra práctica respecto a los diversos partidos y organizaciones pequeño burguesas». En los regímenes enemigos recomendaba «la táctica del caballo de Troya», infiltrándose en sus organizaciones de masas para movilizar con reivindicaciones inmediatas incluso a los fascistas de base: «lo

importante es ponerlos en movimiento, pues aunque en los comienzos no se desarrolle francamente por consignas de lucha contra el fascismo, no por eso deja de ser un movimiento objetivamente antifascista». La infiltración no se aplicó solo, ni mucho menos, a tales organizaciones, sino también a las democráticas y entre los propios aliados.

Una plataforma política unitaria debería abrir camino a un gobierno de frente popular, encargado de dar plena libertad a la actividad comunista y aplastar por completo «a los magnates contrarrevolucionarios de las finanzas y sus agentes fascistas». No sería propiamente un gobierno soviético, pero en él los marxistas llevarían la voz cantante, creando las condiciones para el paso a un régimen realmente socialista. Un tal gobierno de frente sólo se concebía «en vísperas de la victoria de la revolución soviética».

Esta política iba a movilizar a buen número de demócratas. Su energía e iniciativa permitió a los comunistas crearse una imagen, inconcebible poco antes, de adalides de la democracia, y hasta reparar o negar a los demás títulos de demócrata, según aceptasen o no el antifascismo soviético. El éxito les acompañó en medida estupefaciente, considerando que, desde diciembre de 1934, la dictadura de Stalin se reforzaba a extremos nunca vistos. En dicho mes fue asesinado un dirigente bolchevique de Leningrado, Serguei Kírof, posiblemente por agentes de Stalin, quien atribuyó el atentado a sus adversarios en el partido. La provocación abrió las compuertas del «Gran Terror», con millones de personas asesinadas y deportadas al Gulag, entre ellas, irónicamente, una multitud de viejos bolcheviques. Pasma que miles de profesionales del intelecto, mentes ejercitadas en una punzante crítica social en los países democráticos, defendiesen a Stalin, sin ser ellos mismos comunistas. Stalin predijo: «lo tragarán todo», y acertó (4).

La nueva política del PCE

Debido a la insurrección de octubre, el caso español recibió especial atención del congreso de la Comintern. Dimítrof resumió allí los errores del PSOE durante el primer bienio republicano, cuando compartió el poder con los republicanos de izquierda: «¿Establecieron (los socialistas) un contacto de combate entre las organizaciones obreras de todas las tendencias políticas (...)? ¿Exigieron la confiscación de todas las tierras de los grandes terratenientes, de la iglesia? (...) ¿Intentaron luchar por la autodeterminación nacional de catalanes y vascos, por la liberación de Marruecos? ¿Procedieron en el Ejército a la depuración de los elementos monárquicos y fascistas para preparar su paso al lado de los obreros y campesinos? ¿Disolvieron la Guardia Civil? ¿Atacaron al partido fascista de Gil Robles? ¿Anularon el poder de la Iglesia?». Habían hecho lo contrario, opinaba Dimítrof, con los efectos esperables.

No obstante, las insurrecciones austríaca y española de 1934 habían sido muy positivas, y el líder comunista entonó una loa a la guerra civil, citando a Lenin: «La escuela de la guerra civil (...) es una escuela ruda (...) Pero solamente los pedantes redomados o las momias desprovistas de todo sentido común deploran la entrada de los pueblos en esta penosa escuela».

El secretario general del PCE, José Díaz fue cooptado a la ejecutiva de la Comintern, sin que ello impidiera la colocación, a su lado, -y como en los demás partidos- de consejeros encargados de velar por la pureza política, tutores, por no decir los auténticos dirigentes de los partidos. Para tutelar al partido español fue designado el argentino Victorio Codovilla o Codovila, *Medina**, ocupándose también, desde Moscú, Togliatti y otros destacados líderes cominternistas. *En Francia eran Eugen Fried y Togliatti, superiores, de hecho, de Thorez.

Como efecto de la nueva política, aumentó el número de militantes en el PCE. Se habla de 20.000 en 1934 y 30.000 el año siguiente. Las cifras reales deben de ser muy inferiores*, pero en todo caso hay pocas dudas de que el partido creció con rapidez después de octubre. *R. de la Cierva, por ejemplo, las rebaja a apenas 10.000 antes de octubre del 34.

Ante el Congreso de la Internacional aseguró difundir 17.000 ejem-

plares del órgano de su comité central, *Bandera Roja* y como este solía difundirse a militantes como material de discusión y proselitismo, acaso su tirada refleje el número de afiliados (1).

A menudo se ha subestimado la fuerza del Partido Comunista, por atender sólo al número de afiliados o de votos, como si se tratase de un grupo democrático más. Pero aquel partido tenía otras fuentes de poder e influencia. En primer lugar era incomparablemente más cohesionado que los partidos restantes, un tanto deshilachados en su mayoría. Su disciplina militar o más que militar, le proporcionaba una capacidad de maniobra, así como de agitación y propaganda, muy superior, proporcionalmente, a la de cualquier otro partido y más en tiempo de desórdenes. Le inspiraba una mística de lucha, sin reticencias ni equívocos acerca de sus objetivos, y le apoyaba un poderoso aparato internacional. Además representaba a la revolución soviética, cuyo prestigio le nutría. Y aparte de su influencia directa, disfrutaba de la indirecta en el PSOE, afín en doctrina. Ni siquiera antes de octubre era un partido tan insignificante como harían creer sus votos.

El punto de partida del auge comunista fue, como hemos indicado, la insurrección del 34. Aunque fuera de Asturias el PCE apenas había participado en ella, comprendió la ventaja de reivindicarla cuando los socialistas negaban oficialmente su protagonismo. Díaz afirma haber visitado a Largo en la cárcel para proponerle reivindicarla común. Largo habría rehusado, y en consecuencia los comunistas levantaron como propia la bandera de octubre: “¿Qué ha permitido la victoria temporal de la insurrección sino (...) (que) en Asturias (...) la agitación y la organización comunistas han penetrado más profundamente? (...) ¿No se inspiraron (los rebeldes) directamente en el ejemplo de la revolución de octubre en Rusia?”. El mito soviético había inspirado ciertamente a los insurrectos, pero por la propaganda de los socialistas, no de los comunistas. Pese a lo cual, éstos pregonaban: “Si en Asturias pudo ondear victoriosa la bandera de los Soviets durante quince días, fue gracias a la iniciativa, al valor, a la decisión y al heroísmo de nuestros camaradas”. Y Díaz alardeaba: “Los comunistas han llamado a la lucha y a la insurrección a las masas, se han puesto a la cabeza y han luchado (...) con las armas en la mano. El Partido Comunista está, pues, identificado con el movimiento insurreccional y asume su plena responsabilidad”. De paso vituperaba al fascismo imperante en

el país, que, de ser real, le hubiera hecho pagar cara tal agitación (2).

El PCE hizo una masiva propaganda a fin de “mostrar a los obreros que el movimiento de octubre fue una preparación para los grandes combates que se avecinan” y que “en el futuro cercano seremos testigos de amplios movimientos precursores del victorioso octubre en España”. Suspendida su prensa, difundieron suplementos de su revista *Bandera Roja*, folletos y relatos sobre Asturias, llamamientos «A los obreros comunistas, socialistas y sindicalistas de España, a los trabajadores de España, de Cataluña, del País Vasco* y Marruecos»; libros como *Sangre de Octubre*. UHP, innumerables octavillas etc. (3). *El concepto nacional del PCE seguía el elaborado por Lenin, basado en la experiencia histórica de los imperios ruso y austrohúngaro, muy diferentes de la evolución española. Desde la Edad Media en que se va constituyendo o reconstituyendo España, los gallegos, catalanes, vascos o castellanos se consideraban normalmente españoles. Los nacionalismos en España florecen muy tardíamente, a finales del siglo XIX, y, excepto, en parte, el vasco, que trató de definirse sobre un peculiar racismo, no mostraron un separatismo definido.

Uno de sus folletos ilustrativos *Lecciones de los combates de octubre*, sacaba como enseñanza principal la necesidad de un partido proletario único. Citaba a Stalin: “El triunfo de la revolución (...) es necesario prepararlo y conquistarlo. Y sólo un fuerte Partido proletario revolucionario puede hacerlo”. Ese partido «debe reconocer abiertamente que la toma del poder por la clase obrera sólo será posible por medio de la insurrección armada. Debe luchar de forma consecuente por la dictadura del proletariado”. El octubre asturiano acercaba la victoria: “La batalla ha sido ganada momentáneamente por la burguesía y los terratenientes (...) (pero) el proletariado ha dado un paso formidable (...) La revolución ha crecido. (...) El camino de Asturias (...) del Gobierno Obrero y Campesino, es el faro que señala a las masas la única senda de su liberación” (4).

Las invocaciones a la unidad no impedían la «lucha ideológica» contra socialistas y anarquistas. Si el PCE se atribuía la parte de éxito en Asturias, la parte de fracaso recaía por entero sobre los demás. Un documento titulado *Adelante, hacia nuevas batallas*, firmado por José Díaz, André Marty y Palmiro Togliatti, en representación de los partidos español, francés e italiano, fustigaba a los jefes socialis-

tas por su improvisación irresponsable, peor todavía, por haber utilizado a los obreros, aseguraban, en una infame maniobra, no para hacer la revolución, sino para presionar a Alcalá-Zamora y volver a compartir el poder *burgués*. El PSOE, “bajo la presión de las masas, lanzó la consigna de dictadura del proletariado, pero rechazando la idea de los soviets (...) e impidiendo la alianza de los obreros y del campesinado”. Además habría saboteado el movimiento al retener las armas en muchos lugares. La derrota también debía mucho al boicot de los anarquistas, «héroes de la frase revolucionaria», «cobardes», «traidores», etc. así como a la «capitulación vergonzosa de los nacionalistas» catalanes (5).

Pero estas críticas irían perdiendo el tono feroz del anterior período, cuando los socialistas y libertarios eran equiparados al fascismo («socialfascistas» «anarcofascistas»). Por el contrario, un tema central de su propaganda consistió en la exaltación martilleante de la unidad proletaria que ya incluía al PSOE como tal, y no sólo «por la base»: “Los que (...) han vivido días de triunfo bajo los gloriosos pabellones del Poder Obrero y Campesino en la heroica Asturias y hoy sufren la sangrienta y bárbara represión (...) ¿Por qué no pelean unidos cuando la ofensiva del fascismo vaticanista se recrudece con salvaje encarnizamiento?”. “El fascismo no pasará si todos nos unimos”. Y así de manera incansable (6).

La unidad tenía que funcionar en primer lugar contra la represión, pues había más de 60.000 prisioneros, «el terror salvaje del gobierno Lerroux-Gil-Robles» aplicaba constantemente la ley de fugas y las torturas sádicas, también a los *rabassaires*, triplicaba el número de policías secretas, guardias civiles y de asalto, etc. Estos datos no pasaban de invenciones, pero el PCE confiaba en que hicieran efecto, como así ocurrió (7).

Paralelamente el partido creó o utilizó grupos de apoyo dirigidos por comunistas, pero que disimulaban su carácter, y procuró infiltrar otros. Así, la organización estudiantil del PSOE, la FUE (Federación Universitaria Española), terminaría instrumentalizada por los comunistas en 1935. Otro ejemplo típico fue el «Comité Mundial de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo», uno de los montajes organizados por Willi Münzenberg, cuya sección española dirigió, sin mucho éxito, Dolores Ibárruri. Prohibido durante la revolución de octubre, el comité

fue transformado, con buen instinto propagandístico, en «Organización por Infancia Obrera», que fomentaba una espesa emocionalidad en torno a los huérfanos de rebeldes asturianos, como medio para una agitación fortísima. Ella le atrajo a sectores femeninos del PSOE y republicanos*, e hizo famosa en Europa a la *Pasionaria*, gracias al aparato de Münzenberg. «Las mujeres de organizaciones políticas europeas, no necesariamente comunistas, fueron las mejores propagandistas» de Ibárruri, la cual «daba, para ellas, la mejor imagen del pueblo español en lucha». Otra organización sumamente activa, el Socorro Rojo, proporcionaba abogados y ayudas a los detenidos y facilitaba huidas a Francia y a Rusia (612 personas, 220 de ellas, socialistas, según afirmaba); y, sobre todo, hacía también propaganda. Estos trabajos iban a completarse con una labor de especial relevancia cerca del PSOE, destinada a influir sobre el sector revolucionario socialista, mientras fuera de España la Comintern ondeaba a todos los vientos la bandera de la *comuna* asturiana (8).

*Ibárruri: «La simpatía que de forma explícita mostraban hacia las mujeres comunistas, por su actividad política, las mujeres republicanas, inquietaban a ciertos camastrones de Unión Republicana, que decidieron cortar por lo sano las cordiales relaciones (...) y colocaron a la policía a la puerta de su círculo para impedir en él nuestra entrada». El resultado, dice la *Pasionaria*, fue que bastantes republicanas se acercaron más al PCE. Con el PSOE no siempre iban bien las cosas. En casa de María Martínez Sierra, «diputada socialista y distinguida escritora» tuvo la *Pasionaria* que entrar, dice, por la puerta de servicio (9).

De acuerdo con la nueva línea, el PCE aplicó las consignas de antifascismo, amnistía y unidad obrera. Practicó una elaborada política hacia el PSOE y la UGT, atendiendo al “proceso de diferenciación política” en el seno de éstos y halagando “al ala izquierda de los socialistas, para influenciar políticamente en ella”. En el congreso de Moscú, al abrir las sesiones, el dirigente alemán W. Pieck había enviado un saludo a Largo Caballero, allí mismo vitoreado como *El Lenin español*, título que el PCE pasó a usar con fines obvios. Con el mismo objetivo fusionó con la UGT el pequeño sindicato comunista, la CGTU, en noviembre de 1935, “pues la experiencia nos demuestra que cuando nuestros camaradas entran en los sindicatos reformistas (...) son

elegidos para los puestos dirigentes". También prestó cuidadosa atención a las Juventudes Socialistas, bajo el asesoramiento de *Medina*. En estas tácticas, el PCE iba a anotarse éxitos de enorme repercusión (10).

No fructificarían, en cambio, sus zalemas a los anarcosindicalistas, ni su intento de revitalizar las Alianzas Obreras, muertas por consunción al perder el PSOE interés en ellas. En cuanto a los presuntos aliados *pequeñoburgueses*, el PCE pudo comprobar el despegue del principal de ellos, Azaña. Sin embargo, la tenacidad bolchevique terminaría por imponer su poco deseada presencia en la coalición de izquierdas bautizada finalmente como Frente Popular, aunque éste había de tener al principio escasas semejanzas con los frentes propugnados por Dimítrof.

La línea general quedó bastante definida en mayo del 35, cuando, al ocupar Gil Robles el ministerio de la Guerra, el PCE llamó a la disolución de las Cortes y nuevas elecciones, exigiendo la libertad y amnistía para todos los presos y perseguidos políticos de izquierda, la depuración del ejército y disolución de los "organismos fascistas", la autodeterminación para Cataluña, Euzkadi y Galicia y abandono de Marruecos, la confiscación de los latifundios y su reparto, sin indemnización, la rebaja de impuestos a los pequeños propietarios, y mejora general de las condiciones de vida obreras (10) (sin especificar cómo se conseguiría esa mejora). Tales puntos tenían de hecho carácter revolucionario, tanto porque habrían multiplicado las tensiones sociales y llevado la economía a un callejón sin salida, como porque suponían una revancha de los vencidos de octubre y la abolición de la legalidad republicana. Al mismo tiempo debían movilizar y atraer al PCE a muy diversas capas sociales. Por lo demás, muchos signos alentaban las esperanzas revolucionarias. El poder republicano, instaurado en 1931 sin firmes raíces, carecía de solidez, y sus partidos se hallaban muy divididos, con varios de ellos proclives a someterse al impulso revolucionario, a poco que éste se presentara con una retórica relativamente suave y les propusiera un enemigo común derechista.

Capítulo IX

El peso del anarquismo

La CNT y las izquierdas

Junto a los partidos marxistas, luchaba por destruir el régimen burgués la CNT (Confederación Nacional del Trabajo), poderosa sindical de orientación anarquista, comparable en afiliados a la UGT, y muy combativa. Sus centros principales radicaban en Andalucía y Cataluña, pero tenía influencia en casi todo el resto del país, desde La Coruña o Guipúzcoa hasta Valencia, pasando, desde luego, por Madrid. Se le atribuía un millón, y hasta un millón y medio de afiliados, pero si en UGT las cifras estaban infladas, más aun en la sindical ácrata, poco dada, por su propio carácter, a la escrupulosidad administrativa.

No obstante, la CNT había rehusado colaborar en la insurrección de octubre, salvo en Asturias. De ahí que comunistas y socialistas le lanzaran dardos envenenados, achacándole buena parte del fracaso: «Un ciclón de cieno, de viles calumnias (...) se ha lanzado por el jesuitismo marxista contra la Confederación, como alivio a su mal disimulado despecho por el fracaso de la insurrección octubrina. Los socialdemócratas y bolcheviques españoles emigrados, (...) con una furia que jamás usaron contra los tiranos seculares (...) nos aplican el calificativo de traidores y derrotistas»

A lo cual respondían los libertarios con lenguaje a tono: resaltaban

el historial «nefasto», «contrarrevolucionario», del PSOE, su colaboración con la dictadura monárquica de Primo, y luego su sabotaje a la huelga general en diciembre de 1930. Instaurada la república, los socialistas, aliados con la burguesía y su representante Azaña, «el político más cínico y fríamente cruel que nació a la vida política española», habrían cometido atrocidades contra la clase obrera, al extremo de que «el plomo republicano-socialista asesinó a 340 trabajadores por el crimen de plantear reivindicaciones al capitalismo». Sin olvidar la deportación de 125 dirigentes cenetistas al desierto y las selvas de África, o los campos de concentración creados para los revolucionarios por la Ley de Vagos y Maleantes. En conclusión, resumía el líder de la FAI Abad de Santillán, «¿Qué solidaridad era posible establecer con hombres y con partidos que han matado, en dos años, más obreros que la monarquía en un cuarto de siglo, que han intensificado todos los métodos de exterminio y de represión (...) para servir incondicionalmente a los enemigos del proletariado?».

Las milicias de los partidos marxistas quedaban descritas como «bandas terroristas y rompeshuelgas o agentes confidenciales de la policía». Los «más caros afanes (de los socialistas) consistían en enriquecerse velozmente, y no quedó ni un rincón del erario nacional (...) que no fuese (...) acaparado (...) a la par que la represión se acentuaba (...) y las legiones de hambrientos se agigantaban por obra y gracia del socialismo». Además acusaban al PSOE -sin base, aunque coincidiendo en ello con el PCE y con algunos historiadores posteriores-, de haber utilizado cínicamente a los obreros en octubre, sacrificando cientos de vidas en aras de un cambalache con el poder: «se forjaron la ilusión de que el presidente de la República y la burguesía les pedirían por favor que no desencadenasen la guerra civil, dándoles a cambio el gobierno que apetecían».

En fin, desechaban las pretensiones revolucionarias del PSOE: «Lo que había de nuevo en la actitud de las izquierdas y del socialismo era la confesión de las aspiraciones dictatoriales. Y la dictadura partidista es siempre fascismo, cualquiera que sea el sector que la propicie». «El programa de la rebelión no merecía que se moviera por él el dedo meñique, pues si la (...) Juventud Socialista aspiraba al predominio único y exclusivo de su partido (...) los Maese Pedro del movimiento querían reponer en sus puestos a los asesinos de Casas

Viejas», es decir a Azaña y los suyos. Así, socialistas y burgueses de izquierda se veían acusados por los ácratas de los mismos crímenes que aquellos achacaban a los gobiernos fascistas de centro derecha.

El PCE no salía mejor librado: «asilo de todas las nulidades periódicas o aventureros políticos que execran los partidos burgueses». «Esa entidad marxista, que la componen media docena de descocados sin inteligencia ni moral, sobresale como maestra indiscutible del embuste. Llenaríamos varias páginas hablando verdades a esos enanos saturados de ponzoña (...) Así son los marxistas españoles, bolcheviques o mencheviques».

En cuanto a Companys, no pasaba de «atorrante político que vivió del halago al anarquismo y que luego lo persiguió con refinamiento». «El miedo a la victoria del proletariado lo resaltaron (los jefes de la Esquerra) negando la copiosa cantidad de armamento que tenían a los obreros (...) y lo dieron profusamente a las alcantarillas, a los muladares y a las brigadas de la policía» «Los gloriosos masacradores de anarquistas (en Cataluña) (...) se entregaron como azoradas mujercuelas».

Todo ello no impedía a los anarquistas reclamar para sí el mérito principal de Asturias, como hacían los comunistas: «Se puede reivindicar como iniciativa de la CNT y de la FAI lo poco que se llevó a cabo en la insurrección de octubre». «Si Asturias, que es un caso aparte, llegó al punto que llegó en su heroísmo, se debió a la intervención decidida de la CNT»; en aquella gesta, la «más notable de los trabajadores de Europa en el último siglo», importaba saber «por qué se abandonó a su suerte a los rebeldes asturianos».

Con todo, los anarquistas estaban psicológicamente a la defensiva y forzados a dar explicaciones: «Nuestro movimiento (...) no estaba preparado insurreccionalmente. Nosotros no contamos con banqueros ni con millonarios capaces de adelantarnos hoy cien para cobrarse mañana mil». En octubre «Las armas sobraban en manos de los socialistas; depósitos enormes cayeron en poder de la Policía. Y nuestros compañeros fueron rechazados siempre que las gestionaron». «El movimiento de Octubre iba contra nosotros tanto o más que contra las derechas políticas (...) Por eso tenía que fracasar». Y señalaban «como exhortación al buen sentido (...): o la revolución se hace

en España con la CNT o no habrá revolución; y si no hay revolución habrá fascismo».

Había bajo la crítica un ambiguo ofrecimiento para una ocasión posterior: «Se habla por ahí de la necesidad de un frente único para impedir el advenimiento del fascismo. Realmente nada más lógico (...) Pero (...) el antifascismo puede ser hecho en nombre de la democracia (...). Nosotros somos antifascistas porque queremos superar la crisis presente mediante una nueva estructuración social, no para mantener la supervivencia del mito de la democracia» (1)

No faltaba alguna razón a los cenetistas cuando advertían de que sin ellos no habría revolución en España. Conscientes del problema, los marxistas habían hecho esfuerzos, y los seguirían haciendo, por atraerse a la CNT, bajo el doble argumento de la necesaria «unidad del proletariado» y de la solidaridad con los detenidos en la revuelta. En apariencia debía resultar fácil la unidad, al menos en la acción, entre ellos. Todos decían representar a los obreros y al pueblo, deseaban trastocar de arriba abajo el orden social, y estaban dispuestos a emplear la máxima violencia a tal fin. En aras de su misión liberadora, todos decían haber superado los personalismos y las mezquinas intrigas y rivalidades propias de los políticos burgueses, codiciosos y egoístas por naturaleza. Sin embargo, bajo las exhortaciones a la unidad o al pacto, cada uno sospechaba intenciones siniestras en los otros. Y no eran sospechas vanas. Prieto, por ejemplo, había expuesto a Besteiro, antes de octubre, cómo pensaba afrontar a los anarquistas en caso de triunfar la insurrección, «neutralizando» a unos cientos de los jefes. Nada mejor aguardaría a los marxistas si en el común triunfo prevaleciese la CNT.

Por estas razones la consigna de unidad, aunque esgrimida unánimemente, surtía poco efecto. Más lo tendría, en cambio, la apelación emocional por los represaliados de octubre. Muchos de ellos eran anarquistas asturianos, y el anhelo de liberarlos empujaba a la CNT a una alianza oficiosa con el resto de la izquierda. Una vez más la abrumadora campaña contra la represión iba a jugar un papel decisivo abriendo camino a la unidad antifascista, por mucho que el fascismo, por el momento apenas existiera en España. Y así, sobre los odios y desconfianzas recíprocos, iba cuajando una colaboración destinada a fructificar a principios de 1936. Para creciente ansiedad de la derecha.

La CNT, pues, constituía una auténtica potencia en el panorama de la época, lo cual constituía una peculiaridad de España, en cuya historia del siglo XX, hasta 1939, ejerció profundo impacto el anarquismo. Aunque éste había logrado implantarse en Italia, Rusia, Portugal o Francia, hasta en Usa, en todos ellos había desaparecido, por consunción en unos casos, por represión en otros -en Rusia a manos de los bolcheviques, en Italia de los fascistas; la represión en Usa también fue considerable-. Sólo en Argentina o Uruguay conservaba cierto peso.

En España, su influencia se remonta a 1868, cuando Bakunin envió un agente suyo, Fanelli, que esparció la simiente en Madrid y Barcelona, pronto extendida a Andalucía. Pero la gran organización que pasará a la historia será la dicha CNT, fundada en Barcelona en 1910 sobre el modelo del sindicalismo revolucionario francés (si bien ya en 1870 el español Anselmo Lorenzo había propuesto algo semejante en la Conferencia de Londres de la Internacional). La Confederación se definió como un movimiento «para recabar de momento todas aquellas ventajas que permitan a la clase obrera poder intensificar la lucha dentro del presente estado de cosas, a fin de conseguir (...) la emancipación integral de la clase obrera, mediante la expropiación revolucionaria de la burguesía, tan pronto como el sindicalismo (...) se considere bastante fuerte numéricamente y bastante capacitado intelectualmente para llevar a efecto la huelga general, que por propia definición debe ser revolucionaria, y hace suya la divisa de la Primera Internacional: *«La emancipación de los trabajadores ha de ser la obra de los trabajadores mismos»*. A nueve años de su fundación la CNT decía contar con 700.000 miembros, cifra probablemente muy exagerada (2).

Enseguida el terror («la propaganda por la acción», la «acción directa», aunque así se llamó también a la negociación sin intermediarios entre obreros y patronos) fue acogido como un arma esencial del movimiento. En el último cuarto del siglo XIX, Rusia había sido el mayor escenario de los atentados ácratas, y la prensa republicana y *progresista* hispana los interpretaba como «respuestas desesperadas» a la ausencia de libertades y de justicia social en el país del zar. Pero desde los años 90, los bombazos indiscriminados y los magnicidios se habían extendido a países como Francia o Bélgica, y

alcanzado a Usa, echando por tierra la teoría de la «respuesta desesperada» a una autocracia. Muchos esperaron entonces que la plaga no alcanzaría a España, porque creer incompatible con el carácter español crímenes tales. Pero volvieron a errar (3).

Los anarquistas infirieron al régimen de la Restauración profundas heridas, al asesinar a varios de sus mejores políticos, Cánovas, Canalejas y Dato, al atentar contra Maura o el rey, y crear un clima de inestabilidad. Hicieron de Barcelona la «ciudad de las bombas», y sus brutales acciones provocaron reacciones exasperadas y medio ciegas, seguidas de las correspondientes campañas de propaganda y crisis políticas. La espiral de violencias culminó en la caída del régimen y la dictadura de Primo de Rivera. El anarquismo, por tanto, frenó el desarrollo y reforma de la Restauración, y finalmente fue causa muy principal -aunque no única- de la dictadura.

La dictadura, en conjunto benévola, reprimió la subversión cenetista, aunque permitió algunas de sus organizaciones y propaganda, y la mayoría de los sindicalistas se plegó sin demasiada resistencia a las nuevas condiciones. Pero tras la marcha del dictador, la sindical volvió a la palestra con inesperados bríos, entrando en alianza *de ipso*, no formal, con fuerzas *burguesas* y socialistas para traer la república. No lo hizo, lógicamente, por especial vocación republicana, sino -como el PSOE aunque con otra estrategia-, por calcular que el nuevo régimen sería débil ante su agitación. Por su parte, *burgueses* y socialistas pensaban utilizar a su peligrosa auxiliar como fuerza de choque contra la monarquía, para después meterla en vereda a como diese lugar. Unos y otros se equivocaron. Durante el primer bienio de la república, la CNT multiplicó sus huelgas, sabotajes e insurrecciones. A su vez, el gobierno reprimió a sus ex aliados con mucha mayor violencia que la monarquía. Ninguno logró imponerse, pero la subversión libertaria devino un cáncer de la república, como lo había sido de la Restauración, provocando crisis políticas que desfundaron al gobierno izquierdista de Azaña.

La llegada del centro-derecha al poder, a finales de 1933, produjo un nuevo cambio de simpatías. Las izquierdas, en especial el PSOE, volvieron a ver en la CNT un posible aliado contra la derecha. Pero los odios del bienio anterior seguían en carne viva, y los acuerdos fueron escasos, si bien no nulos: en Asturias, la CNT aceptó colaborar en la

insurrección. En Cataluña, por el contrario, la sabotó, y en otros lugares se abstuvo.

Anarquistas y marxistas

Esas incoherencias distinguían a la CNT. Su individualismo antiautoritario forzaba discusiones y consultas interminables para cualquier decisión, dificultaba tomar acuerdos comunes y frustraba a menudo su cumplimiento. Por ello la potencia efectiva del sindicato apenas guardaba relación con la teórica. Sus insurrecciones, aunque capaces de sacudir a un régimen, no bastaban a derribarlo ni movilizaban a la totalidad de la organización.

En parte para contrarrestar la dispersión, y sobre todo para asegurar la fidelidad a los ideales libertarios, en la CNT existían sociedades secretas, «grupos específicos» y «de afinidad», que no excluían el empleo de la manipulación y la violencia para sus fines. La sociedad más destacada sería la FAI (Federación Anarquista Ibérica), fundada bajo la dictadura de Primo de Rivera, aunque poco activa entonces, que reuniría a los elementos más resueltos. Otros, como García Oliver, Durruti y Ascaso, del grupo «Los solidarios», llamado más tarde «Nosotros», se integraron a disgusto en la FAI, a la que aquél tacha de burocrática, pero que radicalizó fuertemente a la CNT.

A los marxistas les exasperaba también la pretensión ácrata de apoliticismo, que consideraban pura charlatanería. Argüían que los actos de la CNT tenían consecuencias políticas y eran ellos mismos política aunque no fuera llamada así. Acusaban a la incontrolable acción libertaria de sabotear las políticas de la izquierda, sirviendo, de hecho, a «la reacción»; incluso tachaban a la sindical de infiltrada y manipulada por la derecha*.

*Algo de ello ocurrió a veces. El monárquico Sainz Rodríguez cuenta cómo utilizó al periódico anarquista *La tierra* en la campaña sobre la matanza de Casas Viejas: «Esta campaña -se sabe ahora porque yo creo conveniente revelarlo- fue impulsada por las derechas. Yo, personalmente, redacté algunos de los artículos que se publicaron en *La Tierra*, y el señor Cánovas Cervantes, director y propietario del periódico, se citaba conmigo precisamente en la rinconada que hace el callejón del Arenal (...) enfrente de la librería de los Bibliófilos (...) Allí recibía Cánovas Cervantes un sobre en el que iban las directrices de la campaña, textos redactados por nosotros y una muestra de nuestro agradecimiento por esta colaboración política». Sainz exagera: aun-

que aceptaran esa colaboración, los ácratas tenían suficientes motivos para atacar por su cuenta a Azaña, ya que las víctimas de Casas Viejas eran anarquistas (1).

Claro que la misma acusación recibían los acusadores, aparte de que las izquierdas hacían, a juicio de la CNT una política burguesa sin interés para ella. Pese a todo, la corriente general anarquista se inclinaba hacia la izquierda, a la que ayudó y ayudaría en momentos decisivos.

Tenían larga tradición las diferencias entre ácratas y marxistas pese a su común objetivo de abolir la propiedad privada, la religión o las clases sociales. Ambas tendencias habían ido juntas en los movimientos obreristas de los años 60 del siglo XIX, pero pronto habían roto. Las pugnas en la I Internacional entre Marx, procedente de la burguesía judeo-alemana, y Bakunin, aristócrata ruso, habían hecho quebrar a dicha Internacional, formando más tarde los marxistas una segunda. Y al triunfar la revolución bolchevique de 1917, los seguidores de Lenin habían masacrado a los anarquistas, sin atender al carácter popular y revolucionario invocado por éstos.

En las querellas entre Marx y Bakunin había tomado cuerpo el anarquismo como teoría y organización. Los dos dirigentes discrepaban en puntos como la consideración del estado. El judeo-alemán pensaba que alcanzar el comunismo exigía un transitorio estado *proletario*, para erradicar la economía y los lastres ideológicos capitalistas, los cuales no iban a desaparecer al día siguiente de derrocar el poder político burgués. El ruso le oponía que todo estado, sin exceptuar el *proletario*, terminaba por engullir y corromper las energías sociales, esclavizando a los hombres. Su crítica fue premonitoria: los estados marxistas han resultado incomparablemente más absorbentes y tiránicos que los que pretendían superar. Él defendía un comunismo que terminó llamándose «libertario» -por contraposición al «autoritario» de Marx- a instaurar sin dilación tan pronto cayera el régimen del capital.

Pero tampoco le faltan contradicciones al antiautoritarismo de Bakunin. Dado que sus ideas liberadoras no acababan de convencer a los desheredados, para empujarlos a la acción propugnó casi obsesivamente las sociedades secretas, gobernadas con obediencia ciega y rígida jerarquía. En países de libertades como los

eurooccidentales -de cuya tolerancia y garantías hacían amplio uso los revolucionarios-, una sociedad secreta no podía tener otro fin que el de manipular a las masas. Y a eso aspiraba, en efecto, el profeta anarquista, para lo cual fundó una «Alianza de la Democracia Social», con vocación de orientar a la Internacional desde las sombras. Por supuesto, Marx la torpedeó, interpretándola, según comunicó a su amigo Engels, como un intento del ruso de convertirse en «dictador de los trabajadores europeos. Que ande con cuidado si no quiere verse excomulgado oficialmente». Aun pensó el ácrata formar círculos más secretos, que manejasen a los anteriores.

También suscitaba irritación y desprecio en Marx la, en su opinión, estólida y caprichosa teorización anarquista. Ya de joven había atacado a utópicos como W. Weitling: «Excitar a la gente sin firmes ni bien fundadas razones sería simplemente engañarla. Despertar fantásticas esperanzas (...) equivalía al vano y deshonesto juego de la prédica, que suponía, de un lado, al profeta inspirado y del otro a asnos boquiabiertos» (2).

No apreciaba el papel concedido por Bakunin a la ética, equiparada por éste con la economía en cuanto a relevancia social. El pensamiento del ruso descansaba en el supuesto de una natural bondad humana. Sólo el estado y la teología -afirmaba- creían al hombre esencialmente perverso; él opinaba que eran precisamente la religión y la autoridad quienes lo pervertían. De ahí su radical ateísmo y antiestatismo, y la fe en que la abolición de la religión y el estado («ni Dios ni amo») aportaría una sociedad feliz y «natural». Para Marx, concepciones tales no permitían explicar ni entender la historia, sino sólo juzgarla -como un cúmulo de horrores causados por el mal estatal y religioso- a partir de un moralismo abstracto, intemporal y en el fondo vacío. Sin contar el absurdo de suponer al hombre bueno por naturaleza y capaz, al mismo tiempo, de crear y perpetuar males tan absolutos como la religión y el estado.

El judeo-alemán trabajó, desde luego, por explicar la historia, cuyo sentido encontró en la lucha de clases. Una clase explotaba a otras y las dominaba por medio de un aparato estatal, hasta que la dinámica de la contienda clasista y el cambio económico originaban un sistema de explotación nuevo. Así, el sistema esclavista había dado paso al feudal, y éste al burgués. La explotación y la opresión propias de esas

sociedades no constituían un problema moral, sino económico: dependían del desarrollo de las fuerzas productivas. De modo que si Espartaco, por ejemplo, hubiese vencido a las legiones romanas, no habría podido establecer una sociedad sin explotación, por mucho que lo deseara, sino que habría reproducido inevitablemente la esclavitud. Esa triste necesidad solo desaparecía con el sistema capitalista, productor de un desarrollo material gigantesco, el cual hacía posible, por primera vez en la historia, una sociedad de abundancia generalizada, sin clases ni explotación. Para acceder a ese paraíso, el obstáculo era la propia burguesía, encastillada en sus privilegios y que al tiempo que multiplicaba la riqueza esterilizaba sus efectos al provocar, por la dinámica de la explotación, la depauperación de los obreros, los estragos de las crisis, la ruina de la pequeña propiedad, etc.

El esquema de Marx poseía, desde luego, más nervio teórico que las declamaciones bakuninistas. En él poco pintaba la moral, concebida como un subproducto de la sociedad de clases. Cada sistema construía su propia moralidad, al igual que sus instituciones, normas de derecho e ideas políticas, destinadas todas a desaparecer con el sistema económico que las sustentaba. El moralismo ácrata, con sus pretensiones de universalidad, no podía representar otra cosa que una versión banalizada de la moral cristiana, o una idealización de los anhelos pequeñoburgueses. Los marxistas solían tipificar al anarquismo como expresión de la furia desesperada del pequeño propietario arruinado y proletarizado por el gran capital.

Lo mismo valía para la religión. Los marxistas proclamaban el «ateísmo militante», pero no en el mismo plano que los ácratas, los cuales se definían «en política, anarquistas, en economía, colectivistas, en religión, ateos». Eso, para Marx, no pasaba de confusionismo y estulticia. Igual que el papel otorgado por los bakuninianos a la personalidad individual: la frase «el hombre lo es todo», exhibiría el «individualismo pequeñoburgués» (en los marxistas el «todo» son las masas, y el partido). Ello no impedía a Bakunin propugnar un tipo de revolucionario capaz de renunciar al interés, sentimiento o propiedad personales, y hasta a un nombre propio.

Otro rasgo ácrata ha sido la afición a las frases sugestivas, de ingenio en general verbalista: «Paz a los hombres y guerra a las insti-

tuciones», «la anarquía es la más alta expresión del orden», la rabelesiana «prohibido prohibir»*, la procedente del surrealismo «sed realistas, pedid lo imposible»; la descriptiva «nuestros sueños son vuestras pesadillas». Etc.

*Pude presenciar un curioso incidente en una celebración anarquista del 1 de mayo, hacia 1979 o 1980, en el barrio madrileño de Tetuán. Un grupo de mujeres llevaba una pancarta en que proclamaba la militancia de las «putas, lesbianas» y similares. Un obrero mayor, enfadado, les ordenó retirar la pancarta. En esto se le acercaron otros más jóvenes e, invocando el *prohibido prohibir*, le afearon su actitud, que, dijeron, no era anarquista. El otro, acobardado o desconcertado, se retiró murmurando «pues entonces que vengan aquí los fascistas. No podemos prohibirles nada»

Sobre la práctica y contradicciones de Bakunin arroja luz su asociación con Necháief, un joven revolucionario ruso, mitómano que inventaba historias para glorificarse u obtener dinero, y por quien el patriarca libertario llegó a sentir ciega admiración, hasta que rompió con él por motivos en parte pecuniarios. Durante su asociación escribieron *Los principios de la revolución y el Catecismo revolucionario* en los que explicaban: «El revolucionario (...) sólo considera moral aquello que contribuya al triunfo de la revolución (...) Los sentimientos acomodaticios y enervantes de la familia, la amistad, el amor, la gratitud, del honor incluso, deben ser ahogados en su pecho por la fría pasión por la causa revolucionaria (...) Su único pensamiento debe ser (...) la destrucción despiadada»*.

*Bakunin, por lo demás, no era de los que predicán con el ejemplo. Dando enorme trascendencia a la abolición de los derechos de herencia, peleó desesperadamente por la suya... y la de otros. Al morir el intelectual filosocialista y eslavófilo Alexandr Herzen, Bakunin y Necháief presionaron desconsideradamente a la hija de aquél, Natalia, incitándola a adherirse a su sociedad y jurar obediencia total al «Comité revolucionario». Como ella vacilaba, Necháief, furioso, comenzó a insultarla llamándola «señorita pazguata», mientras Bakunin le repetía, para calmarlo: «¡Quieto ahí, cachorro de tigre!». Ambos revolucionarios querían, justamente, la herencia de Herzen, que finalmente escapó a sus manos. A los sesenta años, Bakunin tenía la salud quebrantada: «Después de haber entregado toda mi vida a la lucha, empiezo a

estar cansado de ella (...) Que otros más jóvenes prosigan la labor (...) En lo sucesivo no turbaré el reposo de nadie, y pido que se me deje en paz». Intentó nacionalizarse suizo, pero Marx, inoportuno, le lanzó ataques que le ponían en evidencia ante la autoridad helvética. El ruso le contraatacó «en el triple concepto de comunista, alemán y judío», acusándole de obrar «como agente de policía, delator y calumniador». Las relaciones con sus camaradas también se enturbiaron, por lo que buscó la tranquilidad «lejos de sórdidas intrigas y de asquerosos intrigantes». «Con gran desilusión -escribió a Eliseo Reclús- he descubierto (...) que en la masa no prende la idea revolucionaria, y que en ella no anida ni la esperanza ni el valor. Y donde no existen esas condiciones, por más que uno se esfuerce es imposible conseguir resultados» (3)

«No podemos admitir más actividades que las que tienen por objetivo el exterminio (...) La revolución santifica todos los medios, por violentos que sean». El terrorismo obedece a esas concepciones, reflejadas en España, por ejemplo, en Ferrer Guardia, predicador de una revuelta «ferozmente sangrienta». Había lógica en tales propósitos, pues la destrucción de las instituciones y sus gentes alumbraría el triunfo de la esencial bondad humana, objetivo sublime, justificador de actos tachados de crímenes por las normas convencionales. La pasión por la destrucción, aseguraba Bakunin, es también una pasión creadora. Necháief asesinó en Rusia a un camarada, por sospechar que podría convertirse en confidente policial, y esa fue su principal hazaña revolucionaria, no muy brillante pero coherente con su credo*.

Un rasgo siempre presente en el anarquismo, ha sido el bandidaje. Bakunin retrató al bandolero como revolucionario «genuino», «indómito», «apolítico», capaz de actuar «sin frases bonitas, sin retórica». Otro pensador libertario, M. Stirner, propugnó la pura expresión de la voluntad y el deseo individual, sin inhibición ni reparos en el uso de la violencia, y sin concesiones a la retórica del «pueblo». Las masas le merecían desprecio, por su carácter gregario; los pocos individuos capaces de rebelarse y hacer su voluntad debían asociarse en «sindicatos de egoístas», y practicar el crimen como una virtud. También fue popular Nietzsche, por su negación de la moral cristiana. Una revista libertaria de Barcelona *El productor literario*, sermoneaba a principios del siglo XX: «¡Robar y matar para vivir es hermoso, grande

como la misma vida! Robar... Matar...». También tenía ello su racionalidad a partir de otro pensador de esta doctrina, Proudhon, para quien «la propiedad es un robo». El bandolero entonces, se limitaba a *reexpropiar* a los ladrones burgueses (4).

*El asesinato del estudiante no preocupó a Bakunin. Al romper, más tarde, con Necháief, éste le hurtó cartas y documentos comprometedores, a fin de chantajearle y desacreditarle en caso necesario. Sin embargo, Bakunin guardó un buen recuerdo de su turbulento discípulo, porque «sus intenciones fueron siempre buenas». Según algunos testimonios, Lenin apreciaba en Necháief su talento como organizador y conspirador, y quizá se inspiró en él, en alguna medida, para su partido de revolucionarios profesionales (5)

La tradición ácrata en España

En España, la CNT integraba todas esas corrientes, desde la mística obrerista a los «grupos de afinidad» en extremo individualistas. Una combinación difícil de ambas puede hallarse en el dirigente catalán Juan García Oliver, quizá el anarcosindicalista más notable de esa época, persona compleja e intelectualmente bien dotada, líder nato: «Para mí, Bakunin y Marx eran sospechosos a causa de su origen (...) Ninguno de los dos había conocido el trabajo de peón»; llega a calificarlos de «grandes enajenados de las realidades sociales» y sus disputas de «pueriles». Pero indiscutiblemente las ideas anarcosindicalistas procedían en gran medida de Bakunin, y las tentativas de García y otros por mejorarla no podían llegar lejos: «Para que los trabajadores logren realizar su emancipación, es menester que la clase trabajadora se reencuentre y suprima a Marx del marxismo y a Bakunin del anarquismo, analizando detenidamente qué cosa es el Estado y qué cosa el gobierno, qué es la autoridad y qué es la libertad y, por encima de todo, qué es el hombre». Un programa tan ambicioso como desesperado, según testimonia la historia de la filosofía (1).

Pero mientras no se resolviesen esas cuestiones, había al menos algunas cosas claras: los burgueses, el clero y el estado causaban los males que afligían al hombre, y «a la hora del fracaso total del sistema capitalista, solamente la organización de los trabajadores podría salvar del caos a la sociedad humana». Sobre estas certezas y el aire de sencillez y evidencia que ofrece la moral a gente poco dada a especular, se imponía la acción resuelta contra los culpables: *Tanta injusticia no debe seguir... Si tu existencia es un mundo de penas... antes que esclavo, prefiere morir*, decía un himno. García Oliver, aunque constata que «lamentablemente, la CNT careció siempre de teorizantes de sus luchas», y por eso la obra del sindicato «no ha sido debidamente explicada ni glosada», tenía muy escasa simpatía por los teóricos. Prefería a los activistas: «El día que asesinaron al «Noi del Sucre», en Barcelona lloraron los hombres fuertes, de que siempre ha sido rica nuestra Organización, *els homes d'acció*, porque Seguí también había sido uno de ellos. (...). (Entonces) nos dejaron los que se creían y decían intelectuales. Se pensó que nuestra Organización

hincaría las rodillas y en largo lamento pediría clemencia. No fue así». *Els homes d'acció* prosiguieron los atentados. No menos despreciaba García a los *burócratas*, que proliferaban en las filas sindicalistas, en parte por la necesidad de ordenar mínimamente aquella enorme fuerza colectiva* (2)

*Salvador Seguí, «El noi del sucre» («El chico del azúcar»), legendario líder de la CNT, fue asesinado por pistoleros de la patronal en marzo de 1923, en la época álgida del terrorismo en Barcelona. Hombre de notable talento organizador y oratorio, había llegado a preconizar una acción más paciente y menos violenta, y por eso algunos creen que su muerte frustró una posible reorientación del sindicalismo por cauces reformistas, que hubieran cambiado quizás la historia posterior de España. Sin embargo la ola terrorista había llegado a tales extremos que resultaba improbable una vuelta atrás.

El mismo García, compañero de anarquistas míticos como Durruti, los hermanos Ascaso, o Jover, estuvo complicado en la preparación del asesinato —*ajusticiamiento*, según él— del gobernante Eduardo Dato, en 1921, y en la tenaz escalada terrorista que finalmente dio al traste con la Restauración y trajo la dictadura de Primo de Rivera en septiembre de 1923. Luego actuó contra la dictadura y, en la república, destacó en la organización de insurrecciones (la «gimnasia revolucionaria»). En plena guerra civil aceptaría un ministerio del Frente Popular, claudicación en los principios justificada por la circunstancias bélicas. No representaba, ni mucho menos, a la CNT en conjunto, pero sí a un sector muy característico*.

*Refiriéndose a las malavenidas fracciones anarquistas exiliadas después de la guerra, observa García cómo una de ellas formaba sucesivos comités nacionales de CNT en el interior, que caían sistemáticamente en manos de la policía franquista: «el burocratismo carece de héroes, pero llega a tener muchas víctimas». Otra tendencia «la llamada de Toulouse, con (...) Federica Montseny, Germinal Esgleas, Felipe Alaiz y José Peirats, no aspiraba a tener ni mártires ni héroes. Ser burócratas les era suficiente» García estaba, desde luego, con «los que, con precisión psicológica, algunos periodistas franceses llamaban desesperados. Cargados con todos los anatemas del equipo de Toulouse, cruzaban los Pirineos, se adentraban en España e iban a recalar a las barriadas obreras de Barcelona, donde se recor-

daban los ecos de antaño cuando eran recorridas por unos hombres que hacían susurrar a los obreros al verlos pasar: son los hombres de acción del sindicalismo. Entre los burócratas de Toulouse y los quiméricos integrantes de los Comités nacionales de Madrid, los hombres de acción preferían el acto desesperado» (3).

Por otra parte, la insistencia en la libertad y la fraternidad, no hacía de las sociedades ácratas un modelo al respecto, lo cual podía despertar dudas sobre la posibilidad de que su triunfo abriera las puertas al espléndido mundo prometido. Las luchas por el poder, aunque no se las llamara así, solían ser despiadadas. García Oliver habla de los libertarios franceses de mediados de los años 20: «Penetrar en aquellos grupos era como caer en un avispero. El líder de uno de aquellos grupos, Armand, para dar una idea de esa situación, escribió un libro que tituló *Parmi les loups* (Entre lobos)». En España no sucedía nada mejor: «Dividida la militancia en pequeñas capillas, el medio moral se restringía de tal manera que hacía imposible la convivencia entre compañeros (...) No podía olvidar los sufrimientos morales que padeció el compañero Salvador Seguí, El Noi del Sucre. Seguí cayó abatido por las balas (...) Pero antes, Seguí tuvo su larga pasión en la campaña de insidias de que era objeto por parte de muchos compañeros». Entrañaba serios riesgos exponer ideas que otros encontrasen contrarrevolucionarias. Cuando Ángel Pestaña propuso un apoyo condicional a la II República, él y los suyos fueron expulsados entre insultos y amenazas que nadie tomaría a broma (4).

El movimiento libertario formaba una sociedad peculiar y cerrada, con sus «ateneos» y centros de cultura, prensa y actividades. Las ideas corrientes eran muy generales, predicaban el trabajo y la vida sobria y sana, mediante el vegetarianismo o el desnudismo, y el anatema del alcohol y del tabaco, un «amor libre» oscilante entre el puritanismo y una semiprostitución, así como un anhelo algo ingenuo por la elevación cultural y la fraternidad universal, expresada, por ejemplo, en el cultivo del esperanto. Rechazaban lo que podríamos llamar una moral de la riqueza. Cuando Pestaña, delegado de la CNT ante el congreso de la Comintern en 1920, habló con Lenin, le soltó una breve filípica que el bolchevique debió de escuchar perplejo: «La mayoría de los delegados concurrentes al Congreso (...) tienen mentalidad bur-

guesa (...) Murmuran y maldicen de que la comida es poca y mediana, olvidando que (...) millones de hombres, mujeres, niños y ancianos carecen, no ya de lo superfluo, sino de lo estrictamente indispensable. ¿Cómo se ha de creer en el altruismo de esos delegados que llevan a comer al hotel a infelices mujeres hambrientas a cambio de que se acuesten con ellos (...) ¿Con qué derecho hablan de fraternidad esos delegados que apostrofan, insultan e injurian a los hombres del servicio del hotel (...) A hombres y mujeres del pueblo los consideran servidores, criados...» Denostó asimismo las «lucrativas componendas», la «canallada» y la «granujería» de los que ponían «a precio su adhesión» al movimiento (5).

Por su moralismo, el anarquismo español ha sido comparado con una religión. Brenan le encuentra semejanza con «la herejía protestante de la que la Inquisición salvó a España en los siglos XVI y XVII»; idea algo sorprendente. «Me atrevería a sugerir que la rabia de los anarquistas españoles contra la Iglesia es la rabia de un pueblo intensamente religioso que se siente abandonado y decepcionado. Los curas y frailes lo abandonaron en un momento crítico de su historia y se echaron en brazos de los ricos». Esto no pasa de ser un tópico, aunque cite palabras de un ácrata amigo suyo ante los incendios en Málaga: «Le aseguro que no quedará piedra sobre piedra, y que ni una planta, ni una triste col volverán a crecer allí, para que no haya más iniquidad sobre la tierra». Y comenta: «Era la misma voz de Amós o de Isaías (aunque el viejo nunca había leído a ninguno de ellos) o la de un sectario inglés del siglo XVII». Pero también la de Bakunin. De todos modos, en la medida en que la ética libertaria iba más allá de la simple justificación de su violencia, sólo podía fundarse en las tradiciones cristianas del país (6).

El anarcosindicalismo dio muchas figuras humanas extremas, desde sádicos que empleaban el disfraz ideológico para saciar sus rencores, hasta hombres de vida extraordinaria y aventurera, a veces talentosos y de moral exigente. Las memorias de varios de ellos se leen como novelas, y resultan documentos muy interesantes de la época, así las de Abad de Santillán, Peirats o García Oliver. También el anarquismo tuvo una *pasionaria* menor en Federica Montseny. Tipo característico fue Cipriano Mera, albañil madrileño de notable talento natural, militar destacado durante la guerra. En sus palabras, «cuan-

do termine la guerra, el teniente coronel Cipriano Mera dejará las armas para volver a empuñar el palustre», y así lo hizo, viviendo de su oficio en Francia, en una modestia voluntaria, «franciscana» a su modo (7).

En cuanto a García Oliver, sus memorias, *El eco de los pasos*, revelan talento literario, a menudo una especie de seca poesía, también un ego muy fuerte (siempre tenía las ideas adecuadas en el momento adecuado), y, en conjunto, son de lectura apasionante. Durante la guerra sería ministro de Justicia en el gobierno de Largo Caballero, y aunque llegó a justificar los asesinatos llamado «paseos», trató de establecer una justicia digna de ese nombre*.

*Tras la guerra el gobierno sueco le dio refugio, por considerar que había hecho «cuanto pudo por restablecer la ley y el derecho de gentes» durante la contienda. Según cuenta, el mismo gobierno rehusó dar asilo a un grupo de 300 republicanos, entre los que se contaban catedráticos, ex ministros, ex diputados etc. (8).

Exiliado en Suecia, aprendió algo del idioma, pero dejó el país por no depender de un subsidio, ya que la ley prohibía emplear a extranjeros mientras hubiera suecos en paro. El ex ministro había ofrecido con naturalidad su competencia como camarero, barnizador de muebles y trabajador textil en tintes y aprestos. Terminó en México, donde vivió en condiciones duras, y soportando desgracias como la muerte, en accidente, de su joven hijo único. Su peculiar moralismo, áspero y sin consuelo, lo reflejan las últimas frases de su libro: «En adelante deberé contemplar el paso de los días, en la estricta soledad y el nada hacer de quien, apartado del trabajo creador, ha de dedicarse a contar el tiempo, el segundo empujando al minuto y el minuto a la hora. Y así hasta la muerte». O en la forma en que describe a exiliados anarquistas inadaptables, condenados a la miseria: «Cuando entraban en Indigencias (sección del Hospital Español) no esperaban ni una larga estancia: al decidirse a aceptar su internamiento, ya se consideraban fuera de la circulación, sin mañana posible. Era el caso de Cristóbal Aldabaldetresco. Entró, lo revisaron, lo acostaron, se puso de cara a la pared y murió». Aldabaldetresco, «aunque de origen vasco, anduvo por las barriadas obreras de Barcelona, con paso cauteloso, el de los hombres de acción del sindicalismo» (9)

Capítulo X

Revolución y conservación

Revolución y totalitarismo

Tres poderosas fuerzas, dos marxistas y una anarquista, el grueso absoluto de la izquierda, se orientaban, aun con sus diferencias, a la revolución social. Tenían influencia hegemónica —pero no total, ni con mucho— en el proletariado urbano y agrícola, y muy fuerte, directa e indirecta, en las clases medias, incluso en las altas, y entre los intelectuales, así como largos hilos en las fuerzas armadas y el resto del aparato estatal. Afirman algunos historiadores que la democracia no estaba amenazada desde la izquierda, pero basta recordar las insurrecciones anarquistas, la socialista y nacionalista catalana de octubre, y los procesos abiertos a continuación, para comprender que la revolución social se ponía realmente a la orden del día.

Desde el golpe bolchevique de 1917, la revolución creaba inestabilidad o guerra civil en muchos países, conquistaba amplias zonas de China, recorría el mundo. De Europa, había sido Alemania su mayor escenario, con tres insurrecciones y una soterrada guerra civil, en la que finalmente habían vencido los nazis, rivales del comunismo y hermanos de él en vocación totalitaria. Tras esa derrota, España pasaba a ser el lugar donde la revolución tomaba rasgos más acuciantes.

Las revoluciones del siglo XX han cuajado en totalitarismos, entendidos no como dictaduras corrientes, sino como sociedades transfor-

madras de arriba abajo, con abolición de los viejos valores e instituciones, incluyendo las libertades y la democracia, tildados de disfraces del poder burgués. Todo ello debía ser arrojado al «basurero de la historia», olvidado en un mundo superior, sin explotación ni opresión, cuna del «hombre nuevo» liberado de la religión, la familia y el estado burgueses, moldeado sobre la racionalidad y la ciencia. El inmenso experimento ha cubierto en el siglo XX más de un tercio de la humanidad, e, incluyendo el totalitarismo nazi, casi toda Europa. Ha producido gigantescos baños de sangre, un incremento de la crueldad y el terror quizás sin paralelo en la historia, y sin la esperada contrapartida de liberación y plenitud humana en cuyo nombre se imponía tal sufrimiento.

No sólo los burgueses, también los obreros, y aun los revolucionarios, fueron sacrificados a cientos de miles o a millones, o esclavizados en campos de concentración, y pueblos enteros deportados o condenados a una vida lóbrega bajo un poder absoluto*.

*Por eso H. Arendt no considera totalitario al fascismo italiano, dado «el número sorprendentemente pequeño y las sentencias relativamente suaves impuestas a los acusados de delitos políticos». De 1926 a 1932, sus años más activos, sólo se pronunciaron 7 penas de muerte, y fueron absueltos 12.000 acusados, la mayoría de ellos (1).

Ello ocurría en Rusia en los años 30 y era conocido en España — aunque no en todos sus detalles — y en el mundo. Cuando en 1956 el líder soviético Jrúschof condenó los crímenes de Stalin, no descubrió nada nuevo, y menos a sus oyentes, altos jefes partícipes en las atrocidades. Lo nuevo era que éstas aparecían por primera vez como crímenes, y no como actos necesarios a la revolución y justificados por ella.

Claro que sería absurdo identificar a cuantos simpatizaban con la revolución con otros tantos Necháief o Dseryinski, el aristócrata polaco creador de la Checa. La mayoría, incluso parte de los jefes, tenía una conciencia brumosa sobre las implicaciones últimas de su ideal, y, a su pesar, seguían empapados de la cultura y la moral tradicionales. De ahí la tensión interna en esos partidos que obstruía la aplicación plena de la doctrina y producía frecuentes deserciones. En tiempos de calma pocos adoptan las ideas revolucionarias, y bastantes de ellos lo hacen por pose; pero aun entonces esas ideas engendran un

movimiento expansivo. Observó Tocqueville que es tan difícil al hombre no ser consecuente en las ideas como serlo en la conducta, pero en ocasiones la lógica de las ideas cobra un dinamismo propio que arrastra las conductas, arrastra a los individuos tras los jefes más resueltos y consecuentes, los Lenin, los Necháief y Dserýinski. En España una situación tal había impuesto a Largo Caballero y a Prieto sobre Besteiro, y luego impedido a Prieto refrenar el impulso bolchevique en el PSOE. Por reacción, también en la derecha terminarían imponiéndose los extremistas, si bien muy tardíamente.

Cabe plantearse cómo sueños de aire tan bello dieron frutos tan funestos. Acaso se trató de desviaciones o errores que no afectarían a la esencial validez de las ideas, errores corregibles en renovados intentos. Pero la reiteración de la experiencia desde la Rusia de Lenin —o la Alemania de Hitler— hasta la Camboya de Pol Pot, indica un lazo de hierro entre tales ideas —aun en sus formulaciones más floridas— y las prácticas conocidas.

Merece la pena, pues, detenerse algo sobre el fenómeno totalitario, tan debatido y oscuro. Rasgos típicos de esas ideologías han sido el cientifismo y el futurismo, indica la pensadora judeoalemana Hanna Arendt en su clásico *Los orígenes del totalitarismo*: «insistencia casi exclusiva en la profecía científica, diferenciada del anticuado recurso al pasado», como también ansia de dominación universal (2).

El futurismo salta a la vista. Las ideologías han solido ser interpretadas como reflejo de condiciones presentes insoportables (por ejemplo las de la revolución industrial), pero lo inverso suena más cierto: es el deslumbrante futuro prometido el que hace sentir como insoportables el presente y el pasado. Desde luego, la agitación totalitaria pintaba la vida en los regímenes liberales con colores tenebrosos y sin salida, salvo la revolución misma*.

*Y a menudo la vida era, y es, miserable, aunque rara vez sin salida. Los informes sobre las condiciones de hacinamiento y explotación de los obreros durante gran parte del siglo XIX, sobrecogen. Con todo, estudios recientes muestran que la duración media de la vida aumentó, incluso en esas décadas lúgubres, en Inglaterra y otros países, de lo cual se deduciría que las condiciones vitales mejoraron con respecto a la época anterior. Pero no es seguro. Por entonces la medicina avanzó rápidamente, y el propio hacinamiento, si por un lado

favorecía la enfermedad, por otro permitía una atención médica más rápida y eficaz que entre la dispersa población rural del antiguo régimen. De ahí, quizás, la ampliación de la vida media, aun con una explotación realmente brutal. Los revolucionarios denunciaban sin descanso tal situación; otra cosa es que le ofrecieran un remedio razonable.

La ideología exageraba los males y aun los inventaba, y negaba las mejoras, a fin de exasperar a las masas y azuzarlas a la rebeldía; pero su verdadera fuerza movilizadora, lo que la volvía atractiva para tanta gente de diversa fortuna, nacía mucho menos de la miseria presente, real o supuesta, que de la visión de un porvenir «radiante», sin trabas a la voluntad y al poder humanos.

La novedad del totalitarismo con respecto a movimientos utópicos o mesiánicos anteriores consistía en su cientifismo. Los nazis invocaban «las leyes de la naturaleza y de la vida», a las cuales debía conformarse el hombre por su propio bien, y que determinaban, según estableció Darwin, la selección de los mejores en el mecanismo de la lucha por la existencia. En esa lucha triunfaría la raza superior, justificada como superior precisamente por su triunfo, en un razonamiento circular como el de los anarquistas cuando justificaban la revolución por la moral, y la moral por la revolución. La idea tomaba en Marx la forma de la lucha de clases: las «leyes de la historia» daban sentido al presente y determinaban la victoria del *proletariado*. Engels, gran amigo y colaborador de Marx, llamó a éste el Darwin de la teoría social.

Y las leyes de la vida, como las de la historia, tienen forzosamente validez universal. De ahí el imperialismo universalista de esas ideologías.

Los totalitarismos saltan a la arena contra la democracia liberal, pese a proceder en cierto modo de ella. El ácrata P. Kropotkin tomaba los derechos humanos como base de su empeño en sustituir la moral religiosa: «Si las costumbres tienen su origen en la historia del desarrollo humano, entonces la conciencia moral tiene su origen en una causa mucho más profunda, en *la conciencia de la igualdad de derechos*, que se desarrolla fisiológicamente en el hombre así como en los animales sociales» (3).

Una igualdad de derechos consecuente anularía el poder, sustitui-

yéndolo por la cooperación libre, pero la democracia *burguesa*, teóricamente apoyada en tales derechos, los violaría al mantener un poder estatal y generar disparidades económicas que, en la práctica, anularían aquella igualdad «natural» o «fisiológica». Sin embargo es fácil ver que la cooperación humana no se desprende de dicha igualdad, sino de alguna necesidad o coerción, y cabría sostener que el estado ha surgido, precisamente, para asegurar la cooperación de los individuos que, armados de su derecho, podrían negarse a cooperar. Quizá la coerción social, es decir, el poder, podría ser sustituido por una coerción «natural», la impuesta por la necesidad de sobrevivir. Pero esta solución tampoco satisface: se sospechaba, y Darwin lo confirmó, que la naturaleza impone una lucha despiadada. La cooperación tendría sentido solo dentro del propio grupo, para fortalecerlo contra la hostil competencia ambiental, como sostuvieron los nazis.

Marx veía en los derechos igualitarios un disfraz de la dominación burguesa, útil, en una primera etapa, para derrocar a los poderes feudales y eclesiales —en ese sentido habían sido «progresistas»—, pero luego usado para embaucar y desunir a la clase obrera. Los intereses de clase, y no supuestos derechos, movían la historia, y el interés obrero consistía en derrocar a la burguesía.

Además de la democracia liberal, los revolucionarios aspiraban a derrocar la religión, aspecto crucial porque el cristianismo ha sido la base cultural de occidente, y probablemente sigue siéndolo a pesar de la fuerte erosión sufrida desde el siglo XVIII. Por ello es preciso insistir algo en este conflicto, que en España había de cobrar tintes trágicos, dándole un tinte peculiar entre los conflictos mundiales de la época.

La base de la religión, la fe, se tornaría innecesaria ante el avance de la razón y la ciencia. Más aun, razón y ciencia demostrarían no ya lo inútil, sino lo nocivo de la fe, expresión del oscurantismo, la explotación y la ignominiosa impotencia del ser humano. En su interpretación del Génesis, Nietzsche expresó una convicción común a los revolucionarios: «Dios se había creado un rival, la ciencia hace *iguales a Dios* —;se han terminado los sacerdotes y los dioses si el hombre se vuelve científico!— *Moraleja*: la ciencia es lo prohibido en sí, ella es lo único prohibido. La ciencia es el *primer* pecado, el germen de todo pecado, el pecado *original*. La moral no es más que esto: «no conoce-

rás». El resto se sigue de ahí» (4).

En un completo vuelco, los valores religiosos corrompían, asfixiaban la vida. Dios sería el mal y «el diablo» el bien, el amigo que muestra al hombre la vía para «ser como dioses»: desobedecer, retar a la divinidad. Marx tenía a Prometeo —cuyo mito recuerda tanto al relato de Adán y Eva— por el único santo de la filosofía*. El mundo debía ser refundado contra la tradición cristiana y, en general, religiosa.

*Aunque estas interpretaciones abren fácil camino a la divagación, resulta sugestiva la identificación del revolucionarismo con el espíritu prometeico. El titán Prometeo —«en una palabra, odio a todos los dioses»— robó el fuego divino, impulsó con él el saber y el poder humanos, y fue castigado por Zeus. En los siglos XIX y XX, por fin la ciencia iba a romper las cadenas del titán, y derrocar el milenarismo reinado de los dioses sobre el alma humana.

En la versión de P. Diel, Prometeo representa la opción por los deseos materiales, la exaltación de ellos. El castigo divino expresa la consecuencia inevitable de esa exaltación. Prometeo —el ser humano— queda encadenado a la roca, es decir, a los deseos materiales, a una vida banal y roma, torturado por el remordimiento (el águila que le roe el hígado) de haber rechazado al *espíritu* y optado por la *materia* (5).

La sociedad actual, posrevolucionaria, no parece odiar a la divinidad, sino desdeñarla, pero el resultado sería semejante, una espantosa trivialización de la vida. También caracteriza a nuestro tiempo la angustia de impotencia y desorientación ante las fuerzas generadas por la propia sociedad humana, que se suma al ancestral sentimiento de impotencia ante la naturaleza, sólo muy parcialmente dominada.

Si atendemos a la intuición de los mitos —aludidos, y no casualmente, por Marx y otros—, la *tentación* totalitaria, de sustituir el «poder de Dios» por el poder del hombre (sobre sí mismo y sobre la naturaleza), se hallaría inserta en la naturaleza humana. Lo novedoso en el siglo XX consistiría en el impulso tomado por la utopía a partir del extraordinario avance científico-técnico. Pero la ciencia ha sido usada para el bien y para el mal, dicho en términos convencionales, y no parece capaz de decidir sobre lo que es bueno o malo.

No extrañará que algunos hayan encontrado en el ateísmo la raíz de las ideas totalitarias*. El prodigioso impulso científico y técnico de

los tres siglos últimos ha proporcionado asidero a muchos para negar la divinidad, para «retarla» por así decir. Y asombra que el espíritu religioso, ya en sus orígenes, haya percibido tal desafío como la «tentación» fundamental de la condición humana, el «pecado original». Una dificultad de las ideologías totalitarias es la definición de un orden moral. En los libertarios, como de hecho en los marxistas, el bien consistía en lo conveniente para la revolución. De modo parejo, Hitler declaraba que «es justo lo que es bueno para el pueblo alemán» (6).

Pero ¿quién y cómo había de decidir lo justo en tal sentido? Quedaba descartado el debate libre, ya que pondría en el mismo plano a los buenos y a sus enemigos. Tampoco convenía la discusión interna en los partidos, fuente de disensiones, aparte de que la ciencia margina el debate democrático: nadie votaría la ley de la gravedad o sus equivalentes sociales. Una consecuencia bastante lógica era la concentración del poder en una sola persona, intérprete privilegiado de los intereses del pueblo o de la clase obrera, y expositor de la verdad científica. De ahí el halo semidivino que rodeaba habitualmente al líder máximo. Arendt evita la interpretación religiosa, y trata el totalitarismo como un mero proceso sociopolítico, pero sus conclusiones resultan contradictorias: el totalitarismo sería el «mal absoluto porque no puede ser deducido de motivos humanamente comprensibles» (7); ¿implica que ella ha fracasado en su análisis?

* Así los filósofos alemanes Vogelin y Gurian, que discutieron con Arendt al respecto. Pero no conozco ese debate más que por una breve referencia en Furet (8).

También declara nulas sus pretensiones «racionales» o «científicas». Pero aquellos regímenes no dejaron de producir mucha ciencia y técnica, pese a aberraciones como la «ciencia aria» o «proletaria». Y la racionalidad con que aplicaron sus principios también resulta clara: llevaron al extremo su propio razonamiento cientifista, en el cual conceptos como el de dignidad o valor de la vida humana carecen de sentido*.

*De todos modos ningún régimen o actividad humana es por completo racional, y ningún esquema racional satisface plenamente sus propias exigencias: descansa finalmente en principios indemostrables. En cuanto a la ciencia, la URSS puso el primer satélite artificial y el primer hombre en el espacio; y si el nazismo logró sostener seis años

de guerra a muerte contra medio mundo, se debió en buena medida a su capacidad científico-técnica.

El conservadurismo extremado

En fin, sea cual fuere la explicación del totalitarismo, caben pocas dudas sobre su relación con las aspiraciones revolucionarias que han marcado el siglo XX. No hay razones para pensar que en España hubieran terminado de otro modo. Otro problema es el de cómo pudieron tan grandes multitudes caer en la seducción del totalitarismo y aceptar su terror, incluso el dirigido contra ellas mismas. Arendt lo explica por el «hombre masa», base social del sistema, cuya nota clave «no es la brutalidad y el atraso, sino su aislamiento y falta de relaciones sociales normales»: «individuos atomizados y aislados», propensos a encuadrarse en vastos movimientos con «lealtad total» (1).

El «hombre masa» ha movido mucha reflexión. Ortega y Gasset vio en él desarraigo cultural, más bien que social: «vaciado de su propia historia, sin entrañas de pasado y, por lo mismo, dócil a todas las disciplinas llamadas *internacionales*». Carente de un «dentro», de intimidad, falto de vida personal. «Tiene sólo apetitos, cree que tiene sólo derechos y no cree que tiene obligaciones». Es «el tipo humano hoy dominante», y por ello «Europa se ha quedado sin moral», concluye en *La rebelión de las masas*. Esta obra no aborda el totalitarismo, por estar escrita en los años 20, cuando el fenómeno parecía lejano, propio de las estepas rusas, «asiático»; aunque lo atisba: «Si (el *hombre masa*) se presenta como reaccionario o antiliberal, será para poder afirmar que la salvación de la patria, del Estado, le da derecho a allanar todas las otras normas (...) Lo mismo acontece si le da por ser revolucionario: su aparente entusiasmo por el obrero manual, el miserable y la justicia social le sirve de disfraz para desentenderse de toda obligación» (2)

Ese hombre desarraigado, procede, en Arendt, de la «Declaración de los Derechos del Hombre», derechos fundados supuestamente en la misma naturaleza humana. El individuo quedaba emancipado, único dueño de sí mismo y árbitro de su conducta, contra la religión, la historia y la costumbre, opuestas a la «naturaleza», obstáculos al triunfo de ésta. Pero esos derechos serían abstractos, sin garantía — el estado nacional aparecería como su garante, e inclinado, al mismo tiempo, a vulnerarlos —, harían de la sociedad un conglomerado de

individuos inseguros, privados hasta de la solidaridad de clase, propensos a seguir al demagogo fuerte y seguro, resuelto a imponer sus soluciones. El «hombre masa» constituiría un aborto de la democracia liberal, de su individualismo (3).

Aunque Arendt y Ortega creen históricamente nuevos estos fenómenos, a mediados del siglo anterior Tocqueville los había vislumbrado: sujetos atomizados por la democracia igualitarista, que «no aspiran sino a goces fáciles y del día», desprecian las formas y «se lanzan impetuosamente hacia el objeto de cada uno de sus deseos; la menor dilación les desespera». Masas propicias a un despotismo de nuevo tipo, «un poder inmenso y tutelar», que «quiere que los ciudadanos gocen, con tal de que no piensen sino en gozar. Se esfuerza con gusto en hacerlos felices, pero en esa tarea quiere ser el único agente y juez; provee medios a su seguridad, atiende sus necesidades, pone al alcance sus placeres, conduce sus asuntos». Programa reconocible en los comunismos y fascismos. «La igualdad ha preparado a los hombres para estas cosas: para sufrirlas y con frecuencia hasta para mirarlas como un beneficio». Este despotismo le parecía a Tocqueville «el mayor peligro que amenaza a los tiempos democráticos», pues, «no sólo oprimiría a los hombres, sino que a la larga les despojaría de los principales atributos de la humanidad» (4).

No obstante Tocqueville describe una servidumbre *blanda*, «reglamentada, benigna y apacible», que «podría combinarse mejor de lo que se piensa comúnmente con algunas de las formas exteriores de la libertad», un poder «todopoderoso, pero elegido por los ciudadanos». Un régimen así, apoyado en una propaganda absorbente y obsesiva, recuerda las aspiraciones de la socialdemocracia, mejor que al nazismo o al bolchevismo, los cuales usaron de modo irrestricto el terror, además de la propaganda. También la utopía anarquista, por su dinámica y sus círculos «específicos», abocaría a un totalitarismo, si sus características no tendieran a la autodestrucción del movimiento antes de lograr sus objetivos.

La tesis del «hombre masa» quizá explique el caso alemán, pero no tanto el de la URSS o el de China; y tampoco el de Gran Bretaña o Francia, donde el peligro totalitario ha sido débil, pese a que allí debería haber proliferado especialmente el hombre masa. Por otra parte, el ideal totalitario también sugestionó a miles de intelectuales que le

dieron forma y propagaron.

Frente a las ideas revolucionarias se han alzado las conservadoras. Empleo aquí este término en un sentido amplio, que abarca desde las corrientes típicamente *reaccionarias*, anhelantes de una vuelta al orden anterior a la Revolución Francesa, hasta las liberal-conservadoras, deseosas de armonizar los principios liberales con las tradiciones históricas. Con sus diferencias, la mayoría de los conservadores coinciden en rechazar la idea de que la familia, la propiedad privada, el estado o la religión se reduzcan a simples reflejos de relaciones económicas. Suelen ver en el estado un instrumento necesario y perfectible de ordenación colectiva, capaz de dar salida no violenta a los conflictos propios de las sociedades humanas, y no un aparato de dominación de una clase social; consideran la familia como el núcleo de la sociabilidad, transmisora de una moral que, bajo sus formas variables, encerraría una ley fundamental, y no como un medio de dominio sexual y transmisión de ideología. Encuentran en la propiedad privada la base de la economía, y en su eliminación con fines colectivistas, una vía segura a la barbarie y la miseria. La cultura no es para ellos *burguesa* sin más —aunque acepten a menudo el término—, sino el precipitado de una larga y difícil evolución humana, auténticamente valiosa por encima de sus defectos. En cuanto a la religión, no suelen entenderla como una fantasmagoría nacida de la ignorancia y el miedo, «opio del pueblo» para enturbiar la conciencia de las masas con una moral servil, sino como expresión de una verdad esencial. La impotencia humana ante el mundo y el tiempo sería, no una situación históricamente superable por la ciencia, sino una manifestación de la propia condición humana, a la que la religión aportaría un consuelo y un sentido veraz, no ilusorio*.

*En general no admiten, por tanto, el antagonismo entre razón y fe. A ésta podría considerársela, en parte, producto de la razón: de la razón que reflexiona sobre sus limitaciones, o que las intuye desde el principio. Ante el misterio del mundo y de la vida, al parecer insondable para la capacidad humana, surgiría la fe, como confianza en que la vida tiene, a pesar de todo, un sentido y un valor. De otro modo el misterio se reduciría al absurdo, y sobre la convicción del absurdo naufragaría la vida social. Freud pensaba que la ciencia llegaría a «dar sentido y equilibrio a nuestra vida», idea difícil, pues la ciencia pres-

cinde por método de la noción de sentido, noción basada en la intencionalidad, y por tanto en la moral. El biólogo J. Monod, de formación marxista luego desechada, opinó que la ciencia, tomada como árbitro del «sentido y el equilibrio», deviene un «terrible poder de destrucción, no sólo de los cuerpos, sino de la misma alma». Él buscó — sin éxito — fundamentar una moral «científica» (5). Debe notarse que, al menos mientras no logran explicar la vida, la razón y la ciencia se convierten en objeto de una fe sucedánea. Hoy por hoy, ciencia y razón fracasan en dar respuesta a los interrogantes fundamentales del ser humano, pero el cientifista cree que la darán en el porvenir. A su modo, el cientifista resulta así un creyente, arriesgándose a una fe en el futuro que condena el pasado y vuelve insostenible el presente. Fe irracional en la razón y acientífica en la ciencia.

Si en la revolución francesa puede encontrarse el nido del totalitarismo actual, también, como reacción a ella, el del conservadurismo. No extrañará que una conmoción social tan violenta provocase en muchas mentes una aguda repulsa. Quizá el mejor exponente de esa actitud haya sido Joseph de Maistre, espíritu inquietante cuyo arsenal de argumentos ha nutrido el pensamiento antidemocrático y antiliberal posterior, incluido el fascismo.

De Maistre, que vivió el traumático fin del viejo orden, identifica las sacudidas políticas y morales de su tiempo con el liberalismo, causante de ellas por su visión del hombre simple y superficial, frívolamente optimista. Pero la realidad natural no admite el optimismo, pues constituye un escenario espeluznante de violencias, empeorado en el ámbito humano: el hombre, predador insaciable, masacra a las demás especies no sólo por necesidad, sino por gusto o «porque sí», y además asesina a sus congéneres incansablemente y en masa. Para De Maistre, como para los revolucionarios y muchos liberales, la historia viene a ser una ristra inacabable de crímenes espantosos — «enigma horrible» —; pero no achaca ese mal a la sociedad ni a gobiernos presuntamente ilegítimos, sino a la innata maldad del individuo, ser ilógico, caprichoso, cegado por las pasiones e incapaz de soportar la verdad.

Refrenar al individuo dentro de un orden exige, entonces, una autoridad inflexible —sintetizada en la institución del verdugo—, la cual, para hacerse indiscutible, debe ser sacralizada como emanada direc-

tamente de Dios, por encima de decisiones o elecciones populares. Precisamente la tolerancia a las ideas ilustradas había engendrado la revolución. En el odio a la autoridad, venero de desórdenes y brutalidades, veía él la plaga de su tiempo. Para evitar esos desastres, habría que abastecer al vulgo con mitos necesarios, aun si falsos desde un punto de vista racional, y a ese fin serviría la religión. El escéptico y el escepticismo debían ser reprimidos sin piedad, por su carácter deletéreo, y reconocida la miseria de la razón, incapaz de producir otra cosa que disputas sin fin. Debiera propiciarse también la identificación plena del individuo con la comunidad, hasta la disolución psicológica del uno en la otra, a fin de escapar del fútil y pretencioso «yo», irremediablemente sucio e inclinado al crimen, y en desoladora marcha hacia la muerte*

*Otro conservador, Bonald, oponía al individualismo liberal la observación de que «el hombre es malo por naturaleza y bueno por sociedad» (6), puesto que la sociedad le educa, limita su agresividad y le proporciona los bienes necesarios para una vida digna, que jamás encontraría fuera de ella.

Dificultad de esta doctrina es que el poder, para ser incontrastable, ha de concentrarse en un monarca absoluto, no exento, como individuo, del estigma de la maldad y la estupidez; también suena extraña la extensión del dogma religioso a la política; la religión, complemento del verdugo, resulta tan instrumental hacia el poder que cabe especular si De Maistre creía en ella*.

* Pudiera interpretarse como una actitud cínica hacia la religión, simétrica de la de Marx, que ve en ella una ideología al servicio del poder burgués o feudal. De Maistre era católico y masón, en rara armonía. De ahí, quizá, su afición a saberes esotéricos que no debían ser comunicados a los mortales corrientes, a quienes habría que calmar con seudomitos.

Y su discurso, por otra parte, no deja de constituir un empeñado y a veces brillante ejercicio de la razón, con el fin paradójico de negarla. De Maistre posee un toque a su modo revolucionario. Al absolutizar ciertos rasgos del viejo régimen, desvirtuaba la realidad histórica de éste, con lo que la pretendida vuelta al pasado conducía hacia un modelo nuevo, capaz de inspirar, como así ocurriría, a diversos totalitarismos. Su insistencia en la autoridad absoluta de un pequeño

número, y finalmente de un jefe, adelanta formas fascistas y nazis, sin estar alejada del poder omnímodo e irresponsable del «partido proletario» o de los círculos secretos anarquistas.

Estas concepciones, aunque interesantes por su influencia general, tuvieron poca en España, donde el tronco del pensamiento político (Mariana, Vázquez de Menchaca, Suárez etc.) preludiaba más bien el liberalismo: el poder no venía al monarca directamente de Dios, sino a través del pueblo, en un contrato implícito que negaba la autoridad absoluta del rey, repudiaba su posible tiranía y le obligaba a respetar la ley común y a constituirse en servidor de la comunidad. Sin duda el pensamiento español de los siglos XVI y XVII, enseñado, en especial Suárez, también en universidades protestantes, contribuyó en buena medida a las doctrinas liberales y democráticas posteriores. En la propia España creó un poso permanente, pese a haber sido postergado bajo los Borbones, resueltos a imponer su poder absolutista y más partidarios de la «felicidad» que de los derechos de sus súbditos*. También el desdén por el individuo y la visión maistriana de la vida poseían un toque lúgubre en exceso para el habitual talante español.

* En la expulsión de los jesuitas por Carlos III hubo de pesar la tenacidad de aquellos en explicar y divulgar a Suárez, cuyas enseñanzas molestaban en extremo a las doctrinas del absolutismo importadas de Francia con los Borbones.

Pero alguna influencia sí tuvo, por ejemplo en Juan Donoso Cortés (6), que hizo especial hincapié en la maldad y flaqueza humanas, nacidas del pecado original. Donoso evolucionó desde un liberalismo templado («hermanar la libertad y el orden»), hasta un catolicismo conservador, identificado como única garantía del orden y de una cierta libertad: cuanto más religioso el pueblo, menos represivo el gobierno, y viceversa.

Su *Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo*, una de las poquísimas obras españolas de pensamiento del siglo XIX influyentes en Europa, vuelve a atraer la atención por temporadas. Comienza citando del anarquista Proudhon: «Es cosa que admira el ver de qué manera en todas nuestras cuestiones políticas tropezamos siempre con la teología». Donoso sostenía la incompatibilidad del catolicismo con las otras dos doctrinas: el liberalismo achacaba el mal a las instituciones políticas y el socialismo a la organización social,

mientras el catolicismo lo descubría en el individuo. El catolicismo, por tanto, ponía en acento en el mejoramiento moral de la persona, y daba por fútiles e insensatos los trastornos políticos o sociales que las otras doctrinas propiciaban. Desde ese punto de vista, la revolución francesa, por ejemplo, con su pretensión de liberar al hombre del mal, que se encontraría fuera de él, en las políticas e instituciones del pasado, contrarias a la naturaleza humana, esa revolución, con sus matanzas y persecuciones, con su terror alucinado, era la demostración más cabal de lo contrario: de que el mal estaba dentro del hombre, dentro de su naturaleza, y que pretender lo contrario simplemente abría las compuertas del crimen.

Donoso achacaba al liberalismo un escepticismo disolvente, indefinición sobre los problemas humanos básicos, tendencia solapada al ateísmo y a allanar la vía a la revolución social: «Las escuelas socialistas (...) sacan grandes ventajas a la escuela liberal, cabalmente porque se van derechas a todos los grandes problemas y a todas las grandes cuestiones y porque proponen siempre una solución perentoria y decisiva. El socialismo no es fuerte sino porque es una teología satánica». El liberalismo, inconsecuente y en general inaplicable, «no domina sino cuando la sociedad desfallece (...) (y) no sabe si irse con Barrabás o con Jesús». Es «impotente para el bien, porque carece de toda afirmación dogmática, y para el mal, porque le causa horror toda negación intrépida y absoluta» (7).

El liberalismo conservador y una profecía de Donoso Cortés

La experiencia revolucionaria francesa y sucesos posteriores parecían justificar la acusación ultraconservadora de que el liberalismo abre paso a nuevas tiranías. En nombre de la razón, en nombre de la libertad, igualdad y fraternidad, la revolución había generado la sistematización del terror y la guerra total, hasta desembocar en las guerras napoleónicas, cruentas como ninguna anterior. El horno jacobino, con sus genocidios, terror de masas y persecución religiosa habría cocido los totalitarismos e hipernacionalismos que alcanzarían su apogeo en el siglo XX.

Pero del propio liberalismo partió otra reacción a la Revolución Francesa, ejemplificada en el angloirlandés E. Burke, un *whig* que había apoyado la emancipación de USA. Burke señaló, ya en 1790, la crucial diferencia entre los sucesos de Francia y la revolución norteamericana o el sistema inglés. Los anglosajones entroncaban en una tradición legal y parlamentaria, asentada en cimientos cristianos; en contraste, el jacobinismo constituía un liberalismo exaltado y antirreligioso, resuelto a hacer tabla rasa de la historia y de las relaciones sociales reales para imponer su especial concepto de la razón. La ruptura con el pasado y la pretensión de refundar la sociedad sobre ideales abstractos*, le parecían a Burke insensateces o abierta locura.

*Comenta F. Furet: «La característica de la revolución francesa será, pues, despojar a Francia de su pasado, condenado globalmente, e identificarla con un principio nuevo, sin lograr nunca, no obstante, arraigarlo en las instituciones» (1)

A su juicio la constitución inglesa, fruto de una larga experiencia en la conciliación de derechos e intereses diversos y concretos, aunque no formalizada en un texto preciso, encerraba mucha más sabiduría, humanidad y virtud práctica que una declaración de derechos formalmente iguales que desvinculaban al hombre de su realidad social y abocaban al despotismo del estado. La sociedad no podía concebirse como una masa de individuos abstractamente iguales, sino como una trama de asociaciones, instituciones e intereses jerarquizados por el tiempo y la costumbre. La libertad real solo podía nacer de la tradición y las instituciones concretas. Burke, al contrario

que De Maistre, tenía en mucho las libertades y el parlamentarismo.

En este sentido, la Revolución Francesa y las constituciones anglosajonas representan modelos contrapuestos de liberalismo, el primero jacobino y el otro conservador, con gradaciones y matices entre ambos. También vio pronto la diferencia el escritor alemán Friedrich von Gentz, entusiasta al principio de la revolución francesa, a la cual terminó acusando de «invocar los derechos del hombre para justificar la destrucción de los derechos de los ciudadanos» y de usar «la soberanía del pueblo como pretexto para socavar el respeto a las leyes y los cimientos del orden social». El presidente de USA, J. Q. Adams, se felicitó de que Von Gentz hubiera liberado «a la revolución norteamericana de la infortunada imputación de basarse en los mismos principios que la revolución francesa» (2).

En todo caso, resulta ilustrativa la práctica de uno y otro liberalismo en los siglos XIX y XX: convulsa en la Europa continental, mucho más estable y evolutiva en USA o en Gran Bretaña. La Revolución Francesa, se ha dicho, funda el nuevo orden liberal, democrático y laico de la edad contemporánea. Pero también puede verse como el fundamento de un nuevo desorden, el de una pugna sin fin entre sus criaturas ideológicas —socialismo, anarquismo, nacionalismos jacobinos— para las cuales la revolución había quedado a medias; y entre ellas y los intentos conservadores, más o menos inspirados en el liberalismo inglés, de encauzar las aguas desbordadas y restablecer el enlace con el pasado; o, en otros casos, de volver atrás la historia y recuperar el viejo régimen. En España esas pugnas iban a tener un peculiar dramatismo.

No es fácil definir la doctrina liberal, formada lentamente desde mediados del siglo XVII e interpretada de distintos modos*.

*Así, un clásico del pensamiento liberal del siglo XX, F. A. Hayek, viene a considerar socialista a J. Stuart Mill, generalmente tenido por otro clásico liberal del siglo XIX, sólo un escalón por debajo de sus predecesores Montesquieu, Locke, Hume o A. Smith (3).

En algunos principios, sin embargo, concordarían casi cuantos se dicen liberales: libertades públicas (de conciencia, expresión y asociación), estado con división de poderes y separado de las iglesias; elecciones libres, igualdad ante la ley, propiedad privada y economía de mercado. Liberalismo no equivale a democracia, y durante el siglo

XIX aquel solió conciliarse con sistemas aristocratizantes, como el inglés, y con fuertes restricciones al voto; además, los principios liberales no se someten a las urnas. Pero si el liberalismo puede no ser democrático, difícilmente una democracia dejará de ser liberal, ya que sin libertades no existen elecciones ni por tanto mayorías genuinas. Por lo común, los liberales procuran ampliar la esfera de la sociedad frente a la del estado, si bien el estado, en sus límites, debería ser fuerte y efectivo*.

*Una corriente anarco-liberal promueve la supresión del estado, al que considera un bandidaje organizado. M. Rothbard, apoyándose en parte en Vitoria, Suárez y otros brillantes escolásticos hispanos de los siglos XVI-XVII, emplea el concepto de «ley natural» que se plasmaría en un derecho esencial e ilimitado del individuo a disponer de sí mismo y de sus propiedades. Sobre ese derecho y las normas del mercado edifica una teoría en que empresas privadas facilitarían los servicios y la protección hasta hoy ofrecidos por el estado, con mayor eficiencia que éste y sin sus coerciones. Rothbard cree que la ley natural, descubierta por la razón, debiera imponerse sin atención a la costumbre y la historia.

En ello chocan con la socialdemocracia, que extiende sin descanso el ámbito de la intervención estatal, y también con el liberalismo jacobino, fuertemente estatalista. Idea típicamente liberal es que la discrepancia pública y la competencia económica, lejos de traer la disgregación social y la ruina, como una primera intuición y la experiencia histórica indicarían, impulsan la creatividad y prosperidad generales, siempre que se sometan a ciertas reglas de juego.

La izquierda obrerista ha aguijoneado sin tregua al liberalismo, en especial al conservador. Los marxistas, aunque glorificadores de la revolución francesa, la criticaban por su incapacidad para cumplir las promesas de igualdad, con lo que la invocación a la libertad quedaba como un formulismo engañoso, encubridor del dominio capitalista: libertad... para explotar al prójimo. Sólo la clase obrera sabría cumplir el programa igualitario, y por eso el liberalismo, asustado, retrocedía de su primeras posiciones progresistas (jacobinas), para reconciliarse con la «reacción» y la Iglesia. Marx censuraba también la ilusión, implícita en las doctrinas liberales, de haber alcanzado, con el supuesto triunfo de la racionalidad, la culminación de la historia, en lugar

de reconocerse como una etapa que, como las anteriores (feudalismo, etc.) había de ser superada, esta vez por un sistema socialista.

También difícil, y por razones opuestas, ha sido la relación entre la Iglesia y el liberalismo. Las violentas persecuciones en Francia parecieron confirmar los augurios eclesiásticos sobre el librepensamiento y las teorías de la Ilustración. La Iglesia veía en el liberalismo una agresión a sus privilegios materiales y a su posición política, a la «alianza del trono y el altar», que debía refrenar con su peso moral la inclinación del poder a la tiranía. También achacaba al liberalismo la pérdida de un concepto claro de la moral, relativizándola al cortar su raíz religiosa, y reduciéndola así a meras convenciones. De ahí que propiciara la descomposición social y allanara el camino al socialismo.

Muchas de estas críticas han demostrado ser falsas. Así la del carácter «formal» o «abstracto» de las libertades, pues no hay duda sobre la mayor libertad —bien concreta y tangible—, de las personas en regímenes liberales. Tampoco el escepticismo y el relativismo moral que se le ha achacado han provocado la disolución de la sociedad, ni el amparo a la libertad de sus enemigos le ha impedido defenderse de éstos, como demostró la II Guerra Mundial*.

*Cabe observar, no obstante, que el triunfo sobre el nazismo exigió la unión de las grandes potencias liberales junto a otra totalitaria, la URSS, y que fue en ésta donde, principalmente, fracasó Hitler. También cabría cuestionar si la victoria nació de las virtudes liberales —cosmopolitismo, etc.— o de otras más tradicionales, como el patriotismo. Y su estabilidad social, ¿en qué medida se debe a los principios liberales, y en cuál a la pervivencia de unos sentimientos e ideas morales de cimiento religioso? Por otra parte, la esfera del estado no ha dejado de ampliarse a lo largo del siglo XX, con socialdemócratas o con liberales. Finalmente nuestra sociedad, orgullosamente individualista, puede ser parcialmente descrita como un régimen de manipulación de masas por pequeñas oligarquías, a través de medios de comunicación propicios. Caricatura, cierto, pero no sin un evidente fondo de realidad. Claro que, para los liberales, esos males pueden ser superados dentro del sistema.

Con todo, dicho relativismo aparece como una amenaza cierta, a despecho de los esfuerzos por superarlo desde las ideas liberales.

Hayek, por ejemplo, tras su incisiva crítica al socialismo, termina identificando ética con prosperidad económica: es bueno lo que aumenta la prosperidad y sirve a la indicación bíblica «creced y multiplicaos». No hay otro fin, pues «la vida no tiene otro sentido que la vida misma»; frase a su vez sin sentido*.

*Según la crítica de A. Argandoña (4). En la Universidad Complutense de Madrid vi hace unos años este cartel: «El fascismo y el comunismo convertían la vida en una pesadilla. El liberalismo la convierte en una pocilga». El cartel, quizá anarquista, no exponía alternativa.

Desde finales del siglo XIX el liberalismo, azotado por la izquierda obrerista, por interpretaciones de las teorías de Darwin o por la valoración, con Nietzsche, Freud y otros, del fondo irracional humano, sufrió una crisis ideológica, agravada después de la I Guerra Mundial. El hundimiento de la Bolsa neoyorkina en 1929 anunció, en opinión muy extendida, el ocaso del modo de pensar, de hacer política y de regirse los estados, predominante desde principios del siglo XIX. La pasión despertada entre la juventud por los ideales marxistas y fascistas era otro síntoma que la historia marchaba contra el liberalismo y la democracia. Uno tras otro, los países caían en la dictadura; para 1935 la mayor parte de Europa vivía bajo gobiernos totalitarios o autoritarios, y los demás soportaban duras tensiones internas, que en Francia, y sobre todo en España, cobraban aires de guerra civil.

Ante el riesgo de quiebra social los gobiernos, incluso el británico y el norteamericano, aceptaron una intervención masiva del estado en la vida económica y social, injerencia antes anatematizada por la doctrina. La sensación de peligro movió a intelectuales y políticos a plantear qué reformas precisaría el liberalismo, la misma civilización occidental, para subsistir.

Esa preocupación, visible, en España, en el Ortega de *La rebelión de las masas*, generó obras como *Anarquía o jerarquía*, de Salvador de Madariaga, publicada en 1935, en un periodo de máxima agitación en España y después de que en Alemania los nazis hubieran escalado el poder aprovechando la legalidad demoliberal. Señalaba el autor que todo gobierno era forzosamente una «oligarquía», y que el sufragio universal movilizaba a masas ignorantes, y en el fondo desinteresadas, de la política, fuerza de maniobra para los dictadores; además, los electores «no votan a quien quieren, sino a quien pueden», es

decir, a pequeñas listas de personas previa y secretamente seleccionadas por la «gente parcial e irresponsable» de los partidos: «todos sabemos a qué descrédito ha llevado este sistema a los Parlamentos». Por otra parte se hacía sencillamente insostenible la separación de la política y la economía propugnada por el viejo liberalismo. Para salvar los principios liberales había que aprovechar «el elemento positivo que la idea (totalitaria) en sí contiene», elemento invisible para los espíritus libres debido a «los métodos, a la vez inadmisibles y contraproducentes» de los dictadores* (5).

*La impresión de Pío Baroja: «Yo creo que el liberalismo ha sido siempre de intenciones limpias y lógicas. Ahora, llevado a la práctica, ha fallado casi siempre porque le faltaba eficacia, fuerza. En un torneo en donde uno de los contrincantes tiene escrúpulos y el otro no, el escrupuloso siempre pierde» (9)

A ese fin proponía admitir sólo el voto de quienes testimoniasen interés político prestando, por ejemplo, «servicio voluntario a alguna institución pública de enseñanza o de beneficencia» —en el siglo XIX se había restringido el electorado en función de la renta, criterio más arbitrario—. El voto de estos «auténticos ciudadanos» no pasaría, sin embargo, del ámbito municipal. Luego, los concejales elegirían a los diputados regionales, éstos al Parlamento y éste, en fin, al gobierno. Madariaga, en la estela de Ortega, quería que las *oligarquías* gobernantes ascendiesen a *aristocracias* en el sentido etimológico: gobierno de los mejores. El escalonamiento electoral propuesto debía ayudar a tal fin. Al lado de la estructura política funcionaría un «estado económico», dirigido por un «Consejo Económico Nacional», de carácter técnico, promotor de la legislación económica y con poder ejecutivo sobre el crédito, la circulación fiduciaria, etc. (6)

El gobierno de «los mejores», atento al bien común, «representante sincero» del pueblo y así reconocido espontáneamente por éste, constituiría una «democracia orgánica unánime». El espacio de los partidos, sin desaparecer, quedaría muy reducido, porque «el modo de regir un país para su máximo rendimiento en orden, salud física y mental y prosperidad se va haciendo cada vez materia menos opinable y más cognoscible por el estudio y la reflexión»; enfoque «tecnocrático» antes de la expresión (7).

Esta situación, «forma natural que tiene que adoptar una nación

civilizada que alcanza su mayoría de edad», llegaría no por la fuerza, sino en un proceso gradual y espontáneo, movido por «el ideal humanístico», para crear el «ambiente óptimo para la libertad*» de cada ciudadano (8).

*Las libertades estarían amenazadas en ese sistema: «Es inadmisibles que una institución de tan inmenso poder político (la prensa) se encuentre en manos particulares». Aunque la propiedad por el estado «significaría la muerte de toda crítica pública», por lo cual, aunque no existe una solución satisfactoria, la menos mala sería hacerla parte del «Estado económico», tecnificándola, y con una agencia de noticias dirigida por «hombres elegidos de común acuerdo por todos los partidos políticos, por su imparcialidad e independencia de juicio». Recuerda la (insatisfactoria) televisión pública del posfranquismo (11)

He expuesto con cierta amplitud el concepto de «democracia orgánica», tanto como indicativo de la crisis del liberalismo como porque iba a tener largo futuro en España. La expresión ya la había usado el intelectual socialista Fernando de los Ríos, en el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza, como una forma de gobierno que no se apoyaría en el voto distribuido espacialmente, sino en las instituciones «naturales» de la familia, el municipio o el sindicato. La idea sería recogida por la Falange.

Como quiera que fuese, en 1935 se cernía en España la sombra de una contienda entre dos concepciones del mundo y de la vida. Respecto de ellas tienen notable interés algunas profecías de Donoso. Aseguró éste que la ambición socialista de convertir la tierra en paraíso haría brotar la sangre «hasta de las duras rocas, y la tierra se transformaría en un infierno». El comunismo tendería a «la completa supresión de la libertad humana y la expansión gigantesca de la autoridad del Estado», a «un despotismo de proporciones inauditas». Véase, en especial: «Cuando el socialismo afirma que la naturaleza del hombre está sana y la sociedad enferma; (...) cuando convoca y llama a todos los hombres para que se levanten en rebeldía contra todas las instituciones sociales, no cabe duda sino que en esta manera de plantear y resolver la cuestión, si hay mucho falso, hay algo de gigantesco y de grandioso, digno de la majestad terrible del asunto»; por contraste, el liberalismo, «ha escogido para sí no sé qué crepúsculo incierto entre las (...) sombras eternas y las divinas auroras. Puesta en esa

región sin nombre, ha acometido la empresa de gobernar sin pueblo y sin Dios; empresa extravagante e imposible (...) Nadie sabrá decir dónde estará en el tremendo día de la batalla y cuando el campo todo esté lleno con las falanges católicas y las falanges socialistas» (10).

La profecía sobre la inviabilidad del liberalismo ha salido errada, pero no la de la «tremenda batalla», que, en España, tendría lugar ochenta y tres años después (Donoso escribía en 1851): la guerra civil iniciada en 1934 y reanudada en 1936 puede verse, en efecto, como un trágico choque entre católicos y socialistas*, en el cual tocaría al liberalismo un papel incierto y subordinado.

*Socialistas en el sentido de Donoso, en cuya época socialismo, comunismo y anarquismo se mantenían indiferenciados.

Capítulo XI

Las fuerzas conservadoras

Las fuerzas conservadoras (I)

Frente a las fuerzas revolucionarias, poderosas aunque divididas, las conservadoras se hallaban en 1935 también divididas, a veces muy enfrentadas entre sí. Sus tendencias iban desde la extrema derecha —Falange, pequeño partido de corte fascista, o los monárquicos carlistas y alfonsoinos—, a la Lliga catalanista, el Partido Agrario y, sobre todo, la CEDA, el principal de ellos con diferencia; debe incluirse al Partido Radical de Lerroux, antaño republicano exaltado y por entonces en actitud moderada.

Aunque, como veremos, la caída de la monarquía forzó una completa reestructuración de las fuerzas conservadoras, la raíz de ellas se encuentra, como la de sus contrarias, en la revolución francesa o, mejor, en las guerras napoleónicas que esparcieron la semilla revolucionaria por Europa.

La siembra napoleónica dio frutos diversos según países, y muy particulares en España, donde la invasión chocó con una resistencia popular superior a la de cualquier otro país europeo. Resistencia de carácter revolucionario, pues hubo de prescindir de las viejas autoridades, rechazar las impuestas e improvisar otras nuevas. Sin embargo, ese carácter revolucionario se combinó con la repulsa del grueso de la población a los ideales venidos de Francia. Y no sin causa: al conoci-

miento de la persecución religiosa y el terror jacobino, odiosos para una población casi unánimemente católica, se unió la experiencia de unos ejércitos extranjeros que, en expresión de P. Johnson, atravesaban el país como hierros candentes, dejando un rastro de matanzas, saqueos y destrozos. De ahí la adhesión mayoritaria a la restauración borbónica (Fernando VII) como garantía de orden. Finalmente, la invasión dio pie a movimientos de independencia en América, arrastrando a nuevas guerras a un país ya devastado, y a la pérdida de casi todo el imperio, con profundas consecuencias económicas, políticas y morales. España, pese al prestigio adquirido en Europa por su resistencia a Napoleón y a la evidencia de que su pueblo, en apariencia amodorrado, conservaba grandes energías, pasó de gran potencia —aun sin contar entre las primeras— a país empobrecido y muy secundario en el concierto de las naciones. Al declive ayudó mucho Inglaterra, supuesta aliada que durante la guerra de independencia también había organizado saqueos y destrucciones en España, lo cual afianzó la aversión al liberalismo y a las reformas. Así, la necesidad de cambios chocaba con la densa desconfianza hacia ellos no sólo entre los interesados en mantener sus privilegios, sino también entre la masa popular.

Comienza entonces en España la división contemporánea entre derechas e izquierdas, más tensa que en otros países. A la muerte de Fernando VII, en 1833 se delinea una derecha carlista, ultraconservadora, y una izquierda liberal. Esta incluye a quienes se sienten más directamente herederos de la revolución francesa, es decir, los exaltados, luego progresistas, —con inclinación republicana frenada por la conciencia de su debilidad—; y a los moderados o liberal-conservadores, más en la corriente anglosajona, deseosos de armonizar la libertad con el orden y el respeto a las tradiciones. Los moderados pueden considerarse centristas entre los otros dos, aunque siempre se aliaron con los progresistas antes que con los carlistas.

Por las razones dichas, los liberales eran seguramente minoritarios frente a los carlistas. Lo reconoció, forzando algo la nota, el exaltado Evaristo San Miguel: «Nosotros somos un ejército; ellos, un pueblo» (1).

Pues en el ejército tenían los liberales su más efectivo apoyo. En la guerra subsiguiente, el «ejército» venció al «pueblo», aunque le

costara una cruel guerra de seis años, que causó probablemente tantas bajas como la guerra civil del siglo XX, para una población mitad que la de ésta, y ya quebrantada por las contiendas napoleónicas y americanas.

Con la derrota carlista en 1840, la derecha, y con ella un gran sector de la población, quedó marginada para el resto del siglo *.

*En este sentido, véase el tópico, frecuentemente oído, de que hasta 1982 en España siempre gobernó la derecha, salvo breves intervalos en las dos repúblicas.

Se abrió un periodo de 35 años, caracterizado por una turbulenta rivalidad entre liberales progresistas y moderados, resuelta en general con pronunciamientos militares (cuatro con éxito, aparte de otros fracasados VER), estableciendo algo así como un sistema de alternancia violenta en el poder. Más que a intromisiones de los militares en la vida civil, los pronunciamientos respondían a la utilización del ejército por unos partidos de estrecha base popular, faltos de confianza en sí mismos y de respeto a las reglas del juego. A estas violencias se sumaban las sacudidas carlistas, con otras dos guerras, aunque mucho menores que la primera. El periodo conoció también VER constituciones. En 1868, fue derrocada Isabel II, y con ella la dinastía borbónica. En lugar de aplacar las tensiones, esta revolución abrió paso a un sexenio todavía más convulso, en que el país pareció próximo a desgarrarse.

En general, los liberales aspiraban a consolidar una «nación» en el sentido contemporáneo y capitalista del término, a base de un mercado único y una legislación homogénea, que rompiera las trabas regionales, como fueros, aduanas, etc., tan arraigadas. Pero con tal inestabilidad, la modernización del país no podía ser profunda, y por ello sorprenden sus considerables logros en la racionalización del estado y la fiscalidad, en la regulación de la enseñanza superior y media, etc. La economía, en conjunto estancada, al menos no se hundió catastróficamente. Se echaron bases importantes para un desarrollo moderno, como una infraestructura de comunicaciones, en especial ferrocarriles; se afianzó la banca y unas bases industriales en Bilbao y Barcelona, y las principales ciudades crecieron. Casi todos los avances prácticos se deben a los periodos de liberalismo moderado, en especial el decenio de Narváez y los años de O'Donnell. Los periodos

progresistas resultaron espasmódicos, aunque alumbraran algunas leyes y medidas inteligentes, mezcladas con otras no tanto.

El período indicado de 35 años se cerró con una nueva restauración borbónica, en 1875, la Restauración por excelencia. El nuevo régimen consiguió algo nuevo: la alternancia pacífica en el poder de los dos partidos liberales, que pasaron a llamarse «conservador» y «liberal», según el modelo inglés. La hazaña iba a revelarse muy fructífera y dar por fin al país casi cincuenta años de estabilidad, progreso económico sostenido y acelerado, y un fuerte auge cultural, la época más productiva desde comienzos del siglo XIX. Pero sus bases eran débiles: partidos de escaso arraigo en la masa popular — mayoritariamente analfabeta e indiferente en política—, lo que dio pie a una extendida corrupción electoral y al llamado «caciquismo».

Por otra parte, al doblar el siglo irrumpieron grupos menores, pero en extremo agresivos, capaces de provocar serias crisis al sistema: movimientos obreristas revolucionario (ácratas y socialistas), conformaron una nueva izquierda que dejó a su derecha a los dos partidos liberales; también surgieron los nacionalismos catalán y vasco, y renació el republicanismo. Si la práctica había mostrado que el liberalismo no traía necesariamente las violencias de una revolución francesa, en cambio entraba ahora en escena la «revolución social», complicada con impulsos más o menos secesionistas en algunas regiones. Las oleadas de atentados y la acción a menudo desestabilizadora de los partidos obreristas y catalanistas, culminaron en el intento de derrocar violentamente al régimen, en agosto de 1917. Las reformas de Antonio Maura, las de Dato, o, por fin, la dictadura de Primo, trataban de responder a la presión revolucionaria.

La confluencia de esa presión con la desafección de numerosos intelectuales «regeneracionistas» —convencidos de que algunas fórmulas simples harían progresar al país a grandes zancadas—, y el mediocre maniobrerismo de los políticos liberales, junto con el infortunio de Annual, terminaron de arruinar la Restauración, en 1923. La subsiguiente dictadura de Primo de Rivera probó dos cosas: el agotamiento del sistema —el dictador recibió apoyo casi general— y la debilidad de revolucionarios y nacionalistas, capaces de hacer la vida imposible al régimen, pero no de derribarlo, y menos de sustituirlo.

La Restauración fue en medida principal obra de Cánovas, estadis-

ta de talla reconocida en toda Europa*.

*Cuando fue asesinado, en 1897, Bismark declaró ante el Reichstag: «jamás he inclinado la cabeza ante nadie, pero lo hacía siempre con respeto al oír el nombre de Cánovas del Castillo». Diversos autores lo han considerado entre los tres o cuatro grandes estadistas europeos de su época (2)

En general, la política de la época se distinguió por un pragmatismo sin vuelo, pero destacaron por su capacidad y amplitud de miras Canalejas y Dato, asesinados como el propio Cánovas, y en especial Antonio Maura, que se libró por poco. Podrían ejemplificarse dos tipos políticos en Dato y el conde de Romanones. El primero, hombre valeroso, de amplia perspectiva y al mismo tiempo realista, salvó a España de la guerra de 1914, derrotó la huelga revolucionaria de 1917 y comenzó la legislación social, destinada a integrar en el sistema a las fuerzas obreristas; el segundo, cuya visión política apenas superaba el interés de partido y los manejos caciquiles, fue el clásico político «habilitoso», con pánico a ser tildado de «reaccionario», que estuvo a punto de romper la neutralidad española en la guerra mundial y desvirtuó las leyes reformistas de Maura, diseñadas para ampliar la base social y democratizar el régimen. Había muchos más Romanones que Datos, como siempre ocurre, y entre los peores golpes que recibió aquel sistema estuvo la pérdida de sus mejores hombres, por crímenes anarquistas.

Pese a que las ideas llamadas regeneracionistas atacaron a la Restauración, puede considerarse a este régimen el verdadero regenerador del país, aun si lento y desigual. En todo caso, pronto sus críticos iban a tener su oportunidad, y no sólo no iban a alcanzar logros comparables, sino que sumirían al país en su peor crisis desde 1834.

Tras seis años largos de dictadura más una transición frustrada, llegó la II República, en abril de 1931. La dictadura había tenido el efecto paradójico de arrasar los viejos aparatos liberalconservadores y dejar en pie un solo partido fuerte: el marxista PSOE. En estas circunstancias, y con el liberalismo sumido en una crisis mundial sin precedentes, los partidos conservadores hubieron de rehacerse desde una base muy precaria, y subió de tono el temor a la revolución anarquista o comunista. Lerroux, antaño republicano exaltado, adver-

tía de la posibilidad de que surgiera un soviét. El catalanista Cambó anunciaba al eufórico Ortega y Gasset «el comienzo de una era de convulsiones para España». Gil-Robles, futuro dirigente de la CEDA, esperaba algo parecido. El mismo Azaña, de talante jacobino, diseñaría una alianza con el PSOE destinada a prevenir «los horrores de la revolución social». Los liberales monárquicos Miguel Maura y Alcalá-Zamora, optaron, casi de súbito, por encabezar el movimiento republicano, precisamente para apartarlo de tentaciones extremistas (3).

Quizás Alcalá-Zamora y Maura hubieran logrado estabilizar el régimen mediante una amplia corriente liberal-conservadora, pero la esperanza se fue en humo con la gran quema de templos y bienes culturales apenas estrenada la república, y la impotencia de los dos líderes en la ocasión. La opinión de derechas se radicalizó o se retrajo. Luego, en las primeras elecciones, las derechas no llegaron al 15% de los diputados. Su desazón aumentó con las violencias posteriores a la «quema de conventos»: renacimiento del terrorismo ácrata hasta organizar auténticas insurrecciones, radicalización creciente del PSOE, frecuentes y sangrientos incidentes de orden público y agresividad anticatólica de las izquierdas republicanas. Los revolucionarios pasaron de grupos desestabilizadores, pero pequeños, a movimientos de masas. En 1932 tuvo lugar una confusa reacción conservadora, el pronunciamiento de Sanjurjo, cuya derrota reforzó a las izquierdas.

Hasta 1933, los conservadores continuaron dispersos e impotentes, sumidos en personalismos y celos de influencia. Sólo en abril de ese año —y a los dos de instaurarse la república— tomó cuerpo una auténtica fuerza de derecha, y aun entonces por medio de una asociación floja, la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). Ésta, inspirada por la Iglesia, tenía carácter antiliberal y corporativista en la línea, un tanto vaga, de la «democracia orgánica», más que en la democracia cristiana. Ese mismo año nacieron también la monárquica Renovación española y la Falange, asimilable al fascismo, consagrados a derrocar la república.

Las fuerzas conservadoras (II)

La fuerza derechista más veterana, el carlismo, había surgido a principios del siglo XIX como simple reacción antiliberal y en pro de un absolutismo reforzado. Pero había evolucionado al ideal de una monarquía inspirada en la de los siglos XVI y XVII, es decir, con respeto a las «autarquías» regionales y a un concepto de la libertad personal traducido en intenso individualismo. Quizá por eso Carlos Marx, por un tiempo observador atento de España, señaló en el carlismo, no un mero intento reaccionario, sino «un movimiento libre y popular en defensa de tradiciones mucho más liberales y regionalistas que el absorbente liberalismo oficial». El carlismo poseía un estilo camaraderil, burlón y jaranero, algo anárquico, en combinación peculiar con una fuerte religiosidad* y un sentimiento del honor y de la lealtad a toda prueba.

*En mi infancia todavía se oían por el norte viejas canciones de la carlistada: «Por andar entre tascas / nos llaman informales / y con el buen vinillo / se matan liberales». En relación a *la botella*, decía otra: «Muchachos, a ella, gozad y reíd / que por Dios, por la patria y el rey / quizá mañana tengáis que morir» Etc.

En años aún recientes el hijo de Antonio de Lizarza, conspirador antirrepublicano, veía el ideal en su padre: «fue, como carlista de verdad, un bloque de granito, duro, inamovible a tiempo, personas o circunstancias». Este estilo, entre romántico y fanático, provocaba las sátiras de sus enemigos. Y no evitaba las intrigas y rivalidades personales que plagaban las alturas del movimiento(1).

A finales del siglo XIX el carlismo encontró su mejor teorizador en el astur-galaico Vázquez de Mella, que atribuía la decadencia española a la vulneración del espíritu y las libertades (los fueros) de las regiones. Tal habría sido el modelo español de gobierno, con el cual había conocido España su tiempo de esplendor, opuesto al centralismo de corte francés. Vázquez proponía una doble soberanía, política y social. Esta última se expresaría en la familia, la universidad, el municipio, la región y las clases profesionales, y su representación en las Cortes debía sujetar al poder político (monárquico), cortando su tendencia a la centralización excesiva y al despotismo, así como evitar el poder de los partidos, considerado fuente de disgregación y corrup-

ción. En sustitución de ellos defendió una «Comunión Tradicionalista».

Con las derrotas militares, la difusión del «espíritu del siglo» —el liberal—, y el sostenido progreso durante la Restauración, el tradicionalismo carlista había perdido su influencia primigenia, y en los años 30 sólo retenía sus feudos de Navarra y Álava, más núcleos dispersos por el resto del país. Su debilidad numérica la compensaban en parte con su espíritu aguerrido y propenso a «echarse al monte». Después de la quema de conventos organizaron grupos de acción, para contener «posibles desmanes» y como «vivero de futuros esfuerzos de mayor envergadura» (2). Impulsaron las milicias llamadas «requetés». Pero su parquedad de fuerzas les impedía cuajar en un movimiento peligroso; carecían, además, de líderes sobresalientes.

Al lado de los carlistas bullían los monárquicos alfonsinos, partidarios del destronado Alfonso XIII. Salidos de la liberal Restauración, los alfonsinos, ante la crisis de la época, habían evolucionado a posiciones hostiles al liberalismo, al que consideraban ahora la antesala de la revolución. Tras unos comienzos indecisos se habían distanciado de la derecha católica, y formado, en 1933, su propio partido, «Renovación española». Desde muy pronto conspiraron en el ejército, aunque les seguían pocos militares, parecidos, por lo demás, a sus adversarios republicanos en cuanto a indecisión e ineptitud conspiratoria*. El golpe de Sanjurjo, en 1932, no tuvo carácter monárquico, aunque los monárquicos lo apoyaran.

A pesar de su escaso número, los alfonsinos disponían de un periódico influyente, *ABC*, y elaboraban sus ideas en una revista de pensamiento, *Acción Española*; título imitado de la *Action Française*, del monárquico ultraconservador Ch. Maurras, aunque fue más que un mero trasunto de ésta. Su evolución acercó mucho el alfonsismo al carlismo, e hizo posible la unificación de ambos en un solo partido monárquico, pero los viejos recelos lo impidieron. Con todo, ambos grupos estuvieron juntos, en 1934, en la petición de armas y dinero a Mussolini, a fin de preparar un golpe antirrepublicano, conspiración que, como otras, no pasaría a los hechos.

El intelectual más relevante de Renovación española era probablemente el vasco Ramiro de Maeztu, antes anarquizante y liberal. Viviendo en Inglaterra fue influido por, e influyó a su vez en, el Socialismo

gremial (*Guild socialism*) y escribió, durante la guerra mundial *Authority, Liberty and Function in the light of the war*, considerándole H. G. Wells un maestro del pensamiento de la época. El libro, traducido como *La crisis del humanismo*, se inspiraba en la experiencia bélica, en la que cada individuo cumplía con disciplina su cometido en un todo gigantesco bien ordenado. Criticaba al liberalismo y al socialismo, frutos tardíos del Renacimiento, por su relativismo ético y confianza dañina en la bondad natural del hombre. El liberalismo, al depositar la verdad y la moral en la arbitrariedad del individuo, no podía crear una sociedad estable; el socialismo hacía del estado un juez moral y material no menos arbitrario. Si la persona, en vez de actuar en política como un ente aislado, hallase su puesto y protección en gremios de especialistas, tendría a la vez conocimiento real de sus asuntos y motivación para defender sus intereses, controlando con efectividad a sus representantes. Sabría desempeñar su función y cumplir con su deber, eliminando la corrupción y el engaño inherentes al sistema de partidos. En la función social de cada uno la libertad dejaría de ser abstracta para tomar formas concretas. Maeztu propugnó una sociedad de autoridad y jerarquía, sobre un fondo igualitario de tinte religioso.

Otra idea clave de Maeztu, expuesta en *Defensa de la hispanidad*, es que el ámbito de países de habla española contiene valores propios de gran alcance, susceptibles de desarrollarse y dar contenido a una comunidad cultural alternativa a las culturas anglosajona o francesa. Esta idea daría pie a la consigna, extendida en la derecha, de reconstituir el imperio español, no como una entidad política, (aunque algunos podían considerarlo también así), sino «en un sentido espiritual», de resurgimiento del antiguo ímpetu.

Como vemos, en la mayoría de los ámbitos conservadores cuajaba, con uno u otro nombre, la «democracia orgánica» y el corporativismo —es decir, la representación a través de las relaciones sociales «naturales» como la familia, el municipio y el sindicato o gremio, y una concepción más o menos tecnocrática de la política—, vistos por unos como un modo de salvar los principios liberales, y por otros de superarlos. Sólo algunos partidos menores, como el de Miguel Maura, o el grande de Lerroux, mantenían las concepciones liberales, en apariencia anticuadas. La «democracia orgánica» también tenía en Espa-

ña raíz izquierdista. Ya en 1917 Fernando de los Ríos llamaba a «organizar la democracia», no a partir de la «pluralidad de individuos dispersos», sino de «grupos orgánicos», es decir, del sindicato, «la unidad orgánica concreta en la vida social», que debe «servir de base a la organización política», y proponía una Cámara sindical, asistida por técnicos, en contrapeso a la «garrulería e incompetencia», plagas de los parlamentos. Los gobiernos dejarían de serlo de partido para convertirse en comités suprapartidistas designados por las Cámaras. Desarrollaba concepciones de la Institución Libre de Enseñanza, algo reminiscentes de las de Vázquez de Mella o Maeztu. Primo de Rivera intentó algo parecido a la Cámara sindical, y Besteiro había favorecido la idea, en 1934 (3).

También la CEDA pensaba superar la democracia liberal mediante un sistema corporativo u orgánico, a cuyo efecto vigilaba atentamente las experiencias de intervención estatal en Gran Bretaña o el *New Deal* de Estados Unidos, que encontraba muy preferibles a los regímenes fascistas, sofocadores de las libertades*.

*Ver apéndice de *Los personajes de la república vistos por ellos mismos*. En un discurso en las Cortes después de la insurrección de octubre, Gil-Robles replicó a Calvo Sotelo, que había ensalzado los fascismos: «Es cierto que se necesita un poder fuerte, una democracia organizada; pero no es menos cierto que por la condenación simplista de esos poderes se va al más monstruoso panteísmo del Estado (...), que hace que desaparezca toda individualidad absorbida por ese monstruo del Estado que entra en las conciencias en la forma de la escuela única, que, ya en tiempos de Napoleón, llegó a la Universidad para desde allí organizar un monopolio de la enseñanza, que propugna la economía dirigida en formas que son verdaderamente manifestaciones socialistas, que se entromete en todos los órganos de la actividad individual y que acaba por matar la personalidad, que yo tengo que defender en nombre de un concepto humano, de un concepto social, de un concepto cristiano». Un diputado le interrumpió: «Eso es tradicionalismo» (4)

Si cabe hacer un paralelismo, la CEDA sería al movimiento ultraconservador lo que la socialdemocracia al marxismo revolucionario. El Partido Agrario, con apoyo especialmente en Castilla la Vieja, actuaba en la órbita de la CEDA.

El pensamiento conservador antiliberal en España, desde Donoso a Ramiro de Maeztu, pasando por Balmes o Menéndez Pelayo, ha sido más templado —o si se quiere más inconsecuente— que el correspondiente europeo, y admite cierta flexibilidad en la relación entre el dogma y la política. La mayoría aceptaría formulaciones como la de A. Aparisi: «Jesucristo no nos dijo que viviésemos en República o en Monarquía» (5) ; aunque prefiriesen la segunda, por creerla más de orden y tradicional. Monarquía ajena al absolutismo, como hemos indicado, limitada por leyes e instituciones, por exigencias morales y por derechos y valores inalienables de la persona. En tal suelo arraigaban mal las doctrinas fascistas, no digamos las de tipo nazi, pese a que éstas despertaran simpatía por su oposición al liberalismo y al comunismo.

De ahí que los grupos fascistas apenas medraran en España por aquellos años. La Falange, el más característico, no iba a sacar un solo diputado cuando se presentara con su nombre, en 1936. Pero incluso el fascismo falangista tenía bastantes peculiaridades, visibles, por ejemplo, en su prolongada contención ante la violencia mortal que ejercieron contra ella, casi desde su nacimiento, las juventudes socialistas y comunistas*.

*Aunque la versión más divulgada hoy día sostenga la falsa idea contraria.

La Falange aspiraba a una revolución de contenidos vagos, que superase «la esclavitud económica» liberal, nacionalizase la banca e hiciese de los sindicatos la columna vertebral del estado. Fundada tardíamente, en octubre de 1933, chocaba con duros obstáculos a diestra y siniestra: en el campo obrero la acosaban socialistas y anarquistas, ya muy asentados y agresivos frente al nuevo partido; y en la derecha sonaban a simples extravagancias sus exhortaciones a la lucha y el sacrificio, y su estilo «mitad monje, mitad soldado», junto con sus aficiones obreristas y nacionalizadoras. Aunque los alfonsinos pensasen en utilizar a las huestes falangistas como fuerza de choque.

Mención aparte merecen otros dos grupos conservadores, la Lliga catalana y el PNV vasco. La primera, obra de Francesc Cambó, constituía un partido liberal —si bien muy proteccionista en cuanto al comercio exterior—, nacionalista catalán y al mismo tiempo españolista.

Intentaba hacer de Cataluña la región rectora del país, proyecto a duras penas viable pues, para empezar, precisamente en Cataluña encontraban resuelta oposición sus propósitos modernizadores y europeizantes, por parte del anarquismo y de la Esquerra, aglutinadora de corrientes jacobinas. En la Restauración había jugado muy fuerte, contribuyendo a la caída de aquel régimen. Pero bajo la república acentuó su moderación, asustada por el espectro de la revolución social. Tenía buena relación con la CEDA, un tanto averiada en 1935, cuando el partido de Gil-Robles empezó a crecer en Cataluña, que Cambó consideraba reservada para los nacionalistas.

Carácter muy distinto tenía el PNV, fundado por Sabino Arana, para quien «antiliberal y antiespañol es lo que todo bizkaino debe ser». El partido creía que los vascos constituían una raza sumamente especial, superior, claro está, a los «maketos», como motejaba a los demás españoles, cuyo tradicional buen trato con los vascos deploraba. Vasconia, sería una colonia explotada y afrentada por el pueblo maketo, «a la vez afeminado y embrutecido» —pese a que el nivel de renta de la supuesta colonia brillaba entre los más altos del país—. El eje de la política peneuvista consistía en debilitar a España («Tanto nosotros podemos esperar más de cerca nuestro triunfo, cuando España se encuentre más postrada y arruinada»), aunque ello entrañase pactar con grupos ajenos a su ideología. Así, su extremo conservadurismo no le había impedido la unidad de acción con el PSOE, ni su catolicismo casi teocrático obstaculizó su alianza con la Esquerra catalana, virulentamente anticatólica, en las peligrosas campañas desestabilizadoras del verano de 1934, cuando se incubaba la guerra civil*.

*Su antiespañolismo le llevó, por ejemplo, a inventar nombres sin la menor raíz cultural —Gorka (Jorge), Kepa (Pedro), etc— o a imponer en la ortografía vascuence la «k», sin tradición en España ni, por supuesto, entre los vascos. O a crear la palabra «Euzkadi», que irritaba al pensador vasco Unamuno: «grotesca y miserable ocurrencia» de un «menor de edad mental» (por Sabino Arana); «terminacho espurio y disparatadísimo que forja con un sufijo ->adi» (...) que se encuentra en nombres de arboledas y cosas así (...) como si al pueblo español le llamáramos «la españoleda», al modo de pereda, robleda...». Aunque las provincias vascas se habían integrado pacífica y volunta-

riamente en España, primero a través del reino de Navarra y después del de Castilla, y participado en todos los avatares del país, los nacionalistas inventaron también una historia de enfrentamientos básicamente ficticia, que retrotraían, con desbordante fantasía, a la más remota antigüedad (10).

Los nacionalistas vascos contaban con salvarse, en todo caso, de un desastre que afectase al conjunto del país (6).

Las fuerzas conservadoras (III)

La principal línea divisoria dentro de las derechas conservadoras corría entre los partidarios de derrocar la república (básicamente los monárquicos y falangistas), y los que se integraban abiertamente en ella (los conservadores de M. Maura, los radicales de Lerroux, y luego los agrarios y la Lliga) o al menos la respetaban, es decir, la CEDA. Ésta se consideraba a sí misma «posibilista», y llamaba «catastrofistas» a los monárquicos.

Las elecciones de noviembre de 1933 delimitaron claramente estas actitudes y la relación de fuerzas en el seno de la derecha: la CEDA obtuvo 115 diputados, el partido Agrario, 36, la Lliga catalana, de Cambó, 24, los tradicionalistas, 20, Renovación Española, 16, y el PNV 14 (aparte de algunos grupos menores y diputados independientes). Es decir, una proporción de más de 190 moderados contra menos de 40 «catastrofistas». Si añadimos los 102 del centrista Partido Radical, de Lerroux, aliado de la CEDA, la superioridad de los grupos pacíficos y legalistas resulta abrumadora.

Estos datos tienen valor decisivo. Prueban, contra un difundido prejuicio, que a finales de 1933 la inmensa mayoría de los conservadores descartaban usar la fuerza contra la república, aun aspirando a reformar la Constitución izquierdista, por la que se sentían seriamente perjudicados, especialmente en sus sentimientos religiosos.

Ese legalismo no tiene parigual en las izquierdas, las cuales solo ganaron por junto algo más de 100 escaños —casi el doble, con todo, de los de las derechas en 1931—, con predominio del PSOE (60 escaños), ya volcado a la dictadura *proletaria*. El resto de las izquierdas tampoco aceptó la ley de las urnas. La Izquierda —19 diputados—, se declaró «en pie de guerra», y Azaña intentó impedir la reunión de Cortes.

Aunque la propaganda izquierdista ha pintado a la derecha hispana como montaraz, fanática de sus privilegios y de la religión, y siempre dispuesta a la violencia, los hechos —el modo en que cedió el poder a la república, su pasividad ante la quema de conventos, su dificultad y tardanza en reorganizarse, etc.— indican más bien un espíritu, al menos entre sus dirigentes, conciliador, cuando no medroso y acomodaticio, en ocasiones hasta la bajeza. La izquierda percibió con

claridad ese apocamiento, y bajo sus denuncias de intolerancia y brutalidad circulaba el desprecio, de donde una audacia que acabaría en temeridad.

El alma del conservadurismo era la Iglesia católica, de raíces muy profundas en la historia del país a partir de su definitiva hegemonía en tiempos de la monarquía goda. La larguísima lucha contra la dominación mahometana, rompedora de la tradición latina y del cristianismo, hizo que la Iglesia y la idea de España se presentaran íntimamente unidas en el pensamiento y el sentimiento populares, como, en circunstancias de fondo similar, ha ocurrido en Irlanda tras la sangrienta conquista inglesa, o en Polonia*.

*España y Hungría son los únicos países del mundo vueltos al cristianismo después de haber sido sometidos por el Islam.

También la época dorada del siglo XVI y XVII quedó unida en la imaginación colectiva a la Reforma católica y a la defensa contra turcos, berberiscos y protestantes. Este arraigo religioso —junto con el tinte antiespañol que tomó la Ilustración en Francia, en parte como revancha nacionalista por pasadas querellas—, hizo que la Ilustración española fuese relativamente débil, y que el pensamiento ilustrado buscase aquí la conciliación de la razón y de la fe, mientras en el país vecino la relación entre ambas se pensó más bien como conflicto.

Ante la revolución francesa y los sucesos del siglo XIX, España volvió a presentarse, en la mente de muchos eclesiásticos, como el bastión católico frente a la hirviente marejada herética, que se colaba por todas las grietas del país. Visión reforzada por traumas como la expropiación de los bienes de la Iglesia o el asesinato, en diversas matanzas a lo largo del siglo, de no menos de 370 curas y frailes, a menudo con acompañamiento de torturas. El grueso del clero había simpatizado con los carlistas, cuya derrota compartió en buena medida. No obstante, los periodos liberal-conservadores le permitieron recobrar peso social y político, al tiempo que se distanciaba del carlismo.

La Restauración presenció un apoyo básico mutuo entre la Iglesia y el poder, pero con frecuentes fricciones, de modo que al entrar en crisis la monarquía, en 1930, la Iglesia hizo poco en su defensa, e incluso una parte de ella alentó a los republicanos. En el siglo XX, el clero ofrecía una impresión cierto anquilosamiento, mientras minorías

crecientes abandonaban la religión y algunos grupos se revolvían contra ella. Aparte las acusaciones izquierdistas de ser la Iglesia partidaria de «los ricos» y constituir el aparato ideológico de la explotación, liberales templados como Madariaga le achacan haber abandonado el legado de sus mejores tiempos y vegetar en la mediocridad y la rutina: «Que la Iglesia española, un tiempo gloriosa y liberal, que con Vitoria y Suárez fundara el derecho internacional, y con Mariana definiera al príncipe democrático, viniese a degenerar hasta producir los curas guerrilleros y las monjitas místicas (...) La Iglesia española fue grande mientras se nutrió de la cultura de las grandes universidades del siglo XVI» (1). Pero si bien la Iglesia no atravesaba su mejor momento en la II República, suponerla, entonces o en el siglo XIX, compuesta fundamentalmente por curas guerrilleros y monjitas místicas, distorsiona la realidad*.

*Sobre la tosquedad y la cerrazón clericales hay una abundante literatura. J. Caro Baroja reseña: «El clero español dio unos cuantos diputados avanzados, otros reaccionarios. Pero en conjunto, al menos en el Norte, la campaña más sorda y necia contra la República se hizo en las sacristías, utilizando la amenaza, la idea de persecución, etc.(...) La retirada de los crucifijos de las escuelas, las leyes acerca de licencias para procesiones y otras sancionadas por las Constituyentes, los incendios de iglesias y conventos, dieron lugar a interpretaciones torcidas o equívocas, que irritaban a hombres y mujeres, según los cuales, los castigos de Dios eran inminentes. Todo quedaba englobado bajo la misma interdicción clerical: desde «bailar el agarrado» o ir en el «correcalles» a leer La Voz de Guipúzcoa. Cuando cerca de cuarenta años después ve uno a todos los descendientes de esta derecha tremebunda, en paños menores por playas (...). Entonces había que dar la sensación de que el fin del mundo estaba próximo. Hoy, la de que vivimos en el mejor de los mundos posibles enseñando las nalgas». Sin embargo todo esto no pasa de pintoresquismos al lado de las acciones anticlericales, realmente violentas y agresivas (2).

No era desdeñable ni mucho menos su labor asistencial, muy extensa y de enorme valor en un país que no conocería la Seguridad social hasta bastantes años después; o su esfuerzo de promoción de trabajadores mediante la formación profesional (un objetivo de la «que-

ma de conventos» de mayo de 1931, fueron las escuelas salesianas y jesuitas). También se esforzaba en formar elites profesionales y políticas, y en contrarrestar intelectualmente las doctrinas laicistas y revolucionarias, como reconoce Martínez Barrio (3). Esfuerzo mejor o peor encaminado, pero en conjunto notable. La única facultad de economía del país, por ejemplo, era obra de los jesuitas, y fue cerrada sin mayor reparo por el gobierno de Azaña.

El desarrollo del proletariado planteó a la Iglesia un importante problema. Los sucesos políticos desde principios del siglo XIX habían asentado en numerosos clérigos una actitud de beligerante incompreensión, mezclada de pusilanimidad, hacia los fenómenos *modernos*, temidos y detestados en bloque. Así, aunque a principios del siglo XX los «Círculos Católicos» obreros tenían más afiliados que los partidos obreristas, no llegó a cuajar —salvo en Vasconia, ligado al PNV— un sindicalismo apoyado por la Iglesia, como en otros países. De hecho, los medios sindicales católicos empezaron la república con desaliento y con la impresión, nada fantástica, de que la Iglesia desatendía al mundo obrero. El resultado final lo define el historiador J. M Cuenca Toribio como un fracaso, en el que influyeron la falta de tenacidad, intrigas de sacristía y rivalidades de órdenes religiosas, cocidas en una característica hipocresía clerical (4).

La postura eclesial durante la república no fue homogénea. Las diferencias podrían personificarse en los cardenales Segura por un lado, y Vidal i Barraquer por otro. El primero, impregnado del espíritu tradicional, pidió a los creyentes colaboración con las nuevas autoridades, sin dejar de recordar a la monarquía con fundamental gratitud. Aunque sus expresiones hacia la república no pasaban de frías, el gobierno le respondió con menos tolerancia de la que los republicanos habían disfrutado bajo la monarquía, resultando una colisión en la que Segura llevó las de perder. En cambio Vidal, imbuido de nacionalismo catalán y próximo a lo que sería la democracia cristiana, prefería olvidar el pasado, aceptaba más abiertamente el espíritu del siglo y cerraba los ojos a muchas asperezas anticlericales, esperando que el tiempo las limase. Esta posición predominó en el Vaticano —representado en Madrid por el mundano nuncio Tedeschini— y en España, a través de Ángel Herrera, seglar con mucho peso en medios eclesiales, cofundador de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, de

los diarios *El debate* y *Ya*, y del partido Acción Popular, embrión de la CEDA, a la cual dirigía ideológicamente. La Iglesia adoptó, pues, una actitud contemporizadora.

Las características de la Iglesia española le daban cierto aire arcaizante, poco apreciado en el Vaticano. Sáinz Rodríguez, intelectual monárquico y enemigo de transar con la república, escribe: «Esa idea que tienen muchos españoles de que España, por su gran tradición católica, es un país que pesa y es muy apreciado en el Vaticano, es totalmente equivocada. Justamente en el Vaticano se temían siempre las posibles reacciones de una actitud intransigente de los católicos españoles; nos consideraban un pueblo al que se tiene seguro, en el que no existe peligro de que se aparte de la disciplina católica, pero al que no hay que prestar excesivas atenciones (...) En cambio, el elemento francés pesaba enormemente en el criterio del Vaticano»* (5).

*»Incluso los asuntos españoles eran interpretados a través de lo que se decía en Francia», señala Sainz. Por esa razón él mismo escribía con otra firma en *La Revue Hebdomadaire*, próxima al movimiento monárquico de extrema derecha *Action Française*, entregando sus artículos al cardenal Pacelli, futuro Pío XII: «El prestigio de ser algo escrito por intelectuales franceses y publicado en París hacía que, las mismísimas ideas que defendidas por mí le merecían una cortés acogida, en la revista francesa eran leídas con verdadera avidez, como fuente segura de información»

Las izquierdas, y también algunas derechas, han creado al catolicismo español de entonces una imagen de hipocresía, rutina y oquedad. Sin embargo, en 1935 se acercaba una prueba durísima, quizá la más cruenta persecución sufrida desde los tiempos de Roma por el clero y los católicos, los cuales iban a dar prueba indiscutible de la profundidad y sinceridad de sus convicciones.

El político representativo de la orientación católica fue José María Gil-Robles. Procedía de la clase media salmantina, donde su padre había sido un notable jurista, de orientación tradicionalista. Al llegar la república se inclinó por la línea inspirada por Ángel Herrera y el sector hegemónico de la Iglesia, y a su constancia se debió muy principalmente que en 1933 las derechas ya no fueran «los restos, casi pulverizados, de algo pretérito, sino la fuerza poderosa, organizada y tensa

que demostraba hallarse dispuesta a librar la batalla en el terreno en que se le presentara» (6). De ahí su popularidad entre muchos miles de seguidores, los cuales le miraban como un verdadero héroe, el «hombre providencial» que les había devuelto el valor y el vigor político, y en torno a quien tejieron una especie de culto a la personalidad. Era el campeón triunfador de la derecha, el dirigente de la CEDA al que masas juveniles saludaban con el apelativo fascistoide de «¡Jefe, jefe!». No obstante nunca permitió a sus juventudes transformarse en milicias ni que practicasen el terrorismo, como sí hicieron, en cambio, quienes le acusaban de fascista.

Abogado y catedrático, orador notable y de respuesta rápida y mordaz, constituía en las Cortes un rival de talla para el propio Azaña*.

*Es famosa su réplica «¡Qué indiscreta es su mujer!», a un diputado de izquierdas que se burlaba del supuesto color de sus calzoncillos. A otro que le achacaba no dar una en el clavo y sí ciento en la herradura, le contestó: «Como no dejan ustedes de moverse...» Aunque de ánimo batallador, su política era básicamente conciliadora, cayendo en ocasiones decisivas en la irresolución, al punto de que sus adversarios no percibieron en él y en su partido una fuerza capaz de imponerles respeto. Tal y como iban a suceder las cosas, las derechas cada vez más radicalizadas le acusarían años después de haber propiciado los avances revolucionarios conducentes a la guerra. Pero, no sin razón, observaría él años más tarde: «La incompreensión y el estallido pasional torcieron el rumbo de nuestra política; y lanzado el país por los caminos de la violencia, el olvido y la ingratitud remataron la obra», y haría notar: «¿Han pensado alguna vez los vencedores de la guerra civil lo que hubiera sido de las derechas españolas si el triunfo del Frente Popular, en 1936, las hubiera sorprendido en el estado de ánimo de 1931?» (7) La dificultad de su tarea queda indicada por este hecho: en julio de 1936 iba a salvarse por puro azar de ser asesinado las izquierdas.

Otros dos líderes clave de la derecha fueron en aquellos años José Antonio y José Calvo Sotelo. El primero, aristócrata madrileño de origen andaluz, hijo del dictador Primo de Rivera, de buen porte y facciones agradables, carácter franco, abierto e idealista según muchos testimonios, despertaba simpatía incluso en adversarios como Prieto. Otros lo retrataban como el clásico fascista, a un tiempo miembro y

esbirro de la oligarquía. Abogado, aficionado a la poesía, fundó la Falange, la cual pretendía combinar nacionalismo y obrerismo (nacional-sindicalismo) y cultivar un estilo de vida arriesgado y caballeresco. Para romper la hostilidad y las limitaciones que asfixiaban a su partido preconizaba un esfuerzo «inasequible al desaliento», aun así insuficiente, con toda probabilidad. Muy posiblemente la Falange hubiera vegetado con otros grupúsculos de línea fascista, de no intervenir la campaña de atentados organizada contra ella por el PSOE, que le obligó a responder de la misma forma. Con ello alcanzó una notoriedad que, sin embargo, le atrajo pocos afiliados. Sólo a última hora, dos o tres meses antes de que la guerra recomenzase en 1936, empezaría a convertirse en un movimiento de masas.

Las fuerzas conservadoras (IV)

Calvo Sotelo, gallego de clase media, seguidor en sus orígenes de Antonio Maura y de sus reformas que, en principio, habrían erradicado el caciquismo y democratizado la Restauración, había hecho desde muy joven una brillante carrera política. Con la dictadura de Primo había sido ministro de Hacienda, por lo cual la república intentó procesarle, y hubo de exiliarse en Francia. Elegido diputado por Orense en 1931 y 1933, no pudo ejercer hasta que la amnistía de marzo de 1934 le permitió el retorno. Tanto por esa experiencia como por convicción doctrinal, detestaba la república y el parlamentarismo, y deliberadamente utilizó las Cortes para realizar una crítica demoledora contra ellas y el régimen. Rechazaba el obrerismo y creía que cualquier mejora para las clases populares sólo podía venir de la gestión de los expertos y no de la acción sindical. Su oratoria poco remilgada pero clara, contundente y agresiva, su pericia política y económica, y su fuerte personalidad, pronto lo convirtieron en el espolón de proa del monarquismo alfoncino. Después de la insurrección de Asturias dirigió el Bloque Nacional, como vimos en el capítulo II, desde el que fustigaba sin tregua a Gil-Robles, y a su línea «posibilista» o «accidentalista».

Para destruir la república, Calvo trataba de aunar fuerzas con el tradicionalismo y la Falange, y expresaba simpatía hacia los regímenes fascistas, por su capacidad para derrotar a la revolución. Por estas razones y por su labor bajo la dictadura, debiera haberse entendido bien con José Antonio, con quien compartía un talante combativo y arriesgado. Pero no fue así. El hijo del dictador lo repelió siempre. Incluso cuando, ya encarcelado, fue Calvo a visitarle le volvió la espalda. Aversión extraña en quien había elogiado a Prieto e incluso a Azaña. Pero el falangista veía al político monárquico como un «madrugador», arrivista reaccionario ávido de usar a la Falange como carne de cañón. Al abrirse 1935, a ambos les quedaba poco tiempo de vida. Calvo, menos afortunado que Gil-Robles, caería asesinado en julio de 1936, y José Antonio fusilado en octubre (1).

Daba el tono de los tiempos la progresiva relegación de conservadores tradicionales, como Cambó, Alcalá-Zamora o Lerroux representantes de épocas más pacíficas y ordenadas. Lerroux moderado des-

pués de un pasado un tanto energuménico, amortiguaba la hostilidad entre izquierdas y derechas, pero su influencia tenía los días contados en 1935. Alcalá-Zamora, republicano de última hora, aunque poderoso como presidente de la república, había fracasado ya en su empeño por dirigir una amplia corriente conservadora. Cambó, casi una ruina política al empezar la república, logró recobrarse en 1933, pero su éxito duraría poco.

Calvo Sotelo, José Antonio y Gil-Robles, sobre todo, al final, los dos primeros, personalizaban la época, y también a una nueva generación. En 1935, Cambó tenía 60 años, Alcalá-Zamora 58, y Lerroux 71, mientras que José Antonio alcanzaba los 32, Gil-Robles 37, y Calvo no pasaba de 42.

Es difícil describir el espíritu reinante en los medios conservadores. La banalidad, ruindad y arrogancia de la gente adinerada llena la literatura de todos los países, y poca calumnia hay en ello; en España se ha destacado su mediocridad, nulidad cultural, flojera como empresarios, afición al parasitismo y al privilegio. Pío Baroja cita esta jactancia, cargada de tipismo: «El socialismo no podrá hacer que un obrero tenga a su mujer vestida con un traje de Worth, a su mesa ostras de Arcachon y una botella de champagne de la viuda Clicquot». La bobada revela más por deberse a Juan Valera, hombre de inteligencia y sensibilidad excepcionales, y permite suponer la actitud de los del montón. Cambó critica amargamente: «Si yo hubiera gastado mucho dinero en el juego, en joyas, en exhibiciones de lujo, el buen burgués barcelonés lo hubiera encontrado razonable porque eran los gastos suntuarios que él comprendía y sentía. Pero que yo, que seguía viviendo confortablemente pero sencillamente, invirtiera grandes sumas en la compra de obras de arte, lo encontraban tan absurdo que sólo a base de haberme vuelto loco o de tener una fortuna descomunal lo podían explicar. Sé que en el Consejo del Banco Vitalicio, cuando yo aseguraba un cuadro o una colección de jades, o de terciopelos, o de bronces, por una suma que me habría permitido comprar una buena casa en el Ensanche, ¡lo estimaban locura o provocación! Y al saber que todo estaba destinado a los Museos de Barcelona y que era para todo el mundo, lo encontraban inexplicable... indignante»^{*} Descripción aplicable, incluso ennegrecida, al resto del país (2).

^{*}Y abunda en el tema: «Dado el espíritu mezquino y envidioso que

tanto abunda en nuestra tierra, yo no tengo ninguna duda de que el hecho de ser generoso en el dispendio, de invertir dinero en cosas de interés general, inclinación casi sin precedentes entre nuestros conciudadanos, contribuyó fuertemente a crearme enemigos. Políticamente, estoy convencido de que el haber tenido dinero y, sobre todo, haberlo gastado generosamente, patrióticamente, no me fue perdonado por muchísimas personas de alta y mediana posición social. En mí, en definitiva, no se envidiaba y odiaba el que fuera rico, sino que supiera ser rico por todos aquellos que no sabían serlo» (3)

Descripción veraz, pero unilateral. Si España había prosperado de modo sostenido en los anteriores 60 años, buena parte del mérito correspondía a la iniciativa de sus elementos pudientes, con todas sus deficiencias y miserias. Asimismo, se ha dicho que el pueblo español soportaba injusticias y penurias sin parangón en Europa, achacándose el clima de revuelta al ciego egoísmo de los plutócratas. También hay aquí exageración. La mayoría de los países europeos sufrían seguramente tanta o mayor pobreza y desigualdad social, sin tensiones equiparables.

Por otra parte la multitud de los conservadores no pertenecía a las capas adineradas sino a las intermedias, incluyendo a bastantes obreros. Gentes de vida sobria cuando no francamente dura, de arduo esfuerzo mal retribuido, lo que no les impedía defender una concepción tradicional de la familia, la propiedad, la religión o la unidad de España, y desconfiar de las soluciones revolucionarias. Curiosamente su ideal mayoritario, «pequeñoburgués», coincidía con el expresado por algunos socialistas: ingresos suficientes para una vida sin aspiraciones de lujo, pero digna; un hogar ordenado y alegre, oportunidades de promoción personal.

Bastantes historiadores siguen pensando que las izquierdas, en especial las obreristas, representan a los trabajadores o al «pueblo», mientras que los conservadores defienden los intereses de la «oligarquía»*.

*El marxismo ha influido tan intensamente que muchas de sus categorías y tópicos siguen en vigor hasta entre estudiosos no marxistas, que hablan de «partidos obreros» o «burgueses».

Ello impide explicar el apoyo popular a los conservadores. Ciertamente la propaganda y los esfuerzos organizativos de la derecha y el

centro se dirigían de preferencia hacia las clases medias y de pequeños propietarios del campo, y las izquierdas obreristas centraban los suyos en el proletariado industrial y rural. Pero, por lo común, la mayoría de los obreros prefería reformas concretas y no la destrucción del sistema —a la que, sin embargo, podían verse arrastrados por una dinámica de violencias—. Y a la inversa, los más resueltos debeladores del capitalismo procedían a menudo de las capas medias o altas.

En la derecha había variadas actitudes, desde el entusiasmo ante la perspectiva de construir una «nueva España» técnicamente modernizada, «imperial», capaz de recuperar un papel de primer orden en el mundo, hasta un gris escepticismo que se contentaba con un modesto ir tirando, ni heroico ni brillante, pero tangible; sin olvidar a quienes sólo pensaban en su cartera. Pero un sentimiento común era el miedo a la revolución. Ésta provocaba espanto por dos razones: por su propio objetivo de destruir la sociedad y el mundo de ideas, creencias y valores con los que se identificaban y en los que encontraban sentido y acomodo millones de personas; y por la violencia y el terror entrañados en ese designio. La revolución implicaba la guerra civil, no por una desviación o un defecto práctico, sino de manera necesaria, pues no había esperar que la *burguesía* —y en este concepto entraban cuantos disintiesen de los revolucionarios, fueran capitalistas u obreros— cediese el campo, persuadida por simples prédicas. Marx, Bakunin o Lenin lo habían expresado con descarnada franqueza. Si bien la propaganda cotidiana, con menos sinceridad y para irritado desconcierto de los conservadores, insistía en que la única violencia procedía de la *reacción*, la cual obstruía «la marcha de la historia» y bloqueaba cerrilmente las aspiraciones naturales, lógicas y aun moderadas de «los trabajadores»*.

*El escritor fascista francés Drieu la Rochelle, observó: «Los nazis son los cínicos, porque admiten abiertamente su tiranía, su violencia, y los comunistas son los hipócritas, porque niegan descaradamente la suya» (4).

Según hemos visto, las izquierdas estimulaban el miedo al fascismo como un pretexto para justificar su propia acción subversiva. De modo similar, numerosos historiadores y políticos han querido ver en el temor a la revolución un espantajo derechista para manejar a las masas e imponer una involución política; pero los hechos no abonan

tal interpretación.

Los conservadores tenían muy presentes los sucesos de Rusia y los que presagiaban algo semejante en España. Ya la república había intentado imponerse por la fuerza, y aunque luego había nacido pacíficamente —gracias al abandono del poder por la monarquía—, la violencia había vuelto enseguida con un rosario de incendios, agresiones y disturbios, casi todos ellos procedentes de las izquierdas o de la represión del gobierno izquierdista. En las elecciones de noviembre del 33, de seis a ocho derechistas habían sido asesinados, y los ácratas habían respondido a la victoria electoral del centro derecha con una cruenta insurrección, mientras la Esquerra catalana se ponía «en pie de guerra» y las amenazas de golpe de estado se sucedían *.

* Ver sobre estos asuntos Los orígenes de la guerra civil española.

Largo Caballero lo había expresado con crudeza: «la revolución exige cosas que repugnan, pero que la historia justifica luego». Las juventudes socialistas advertían: «Muchas sentencias habrá que firmar (...) Los jóvenes socialistas, con entusiasmo, estarán dispuestos a darles cumplimiento». La Esquerra anunciaba: «Es la hora de ser implacables». Se habían vuelto habituales los desfiles de milicias izquierdistas, así como la prédica del odio como virtud revolucionaria, «un poso de odio imposible de borrar sin una violencia ejemplar y decidida, sin una operación quirúrgica» (5).

La guerra civil tomó cuerpo con el alzamiento de octubre del 34, con sus dosis de «terror plebeyo». Pero si el golpe de octubre conmocionó a los conservadores, debió de parecerles espeluznante, diabólica por así decir, la increíble tenacidad de sus enemigos, que apenas vencidos y pese a su momentánea impotencia, se revolvían en plan ofensivo, incansables y sin asomo de conciliación. El socialista Amaro del Rosal señala con justeza ese pavor ante «la imposibilidad de contener el proceso revolucionario» (6). La propaganda izquierdista abundaba en ufanas referencias al pánico de sus contrarios, y no debe verse en ello una manifestación de vanidad pueril, sino la convicción de que la *burguesía*, pese a su reciente victoria, estaba condenada, de lo cual constituía su angustia un satisfactorio indicio.

Azaña reconocerá la situación cuando observe, ya tarde, cómo las espadas se habían afilado en la piedra del miedo. Pero el diagnóstico vale sólo para la derecha. La izquierda exhibía hacia sus contrarios

desprecio y amenaza. El mismo Azaña, poco antes de reanudarse la guerra, ¡encontrará muy divertido el temor de las derechas, como expresa en sus cartas a Rivas Cherif! Esa actitud triunfalista no excluía, naturalmente, una ansiedad circunstancial ante un posible golpe militar que se adelantase a la revolución.

De ahí que muchos conservadores, viéndose en peligro, especulasen a su vez con una violencia despiadada, al estilo de la desplegada en Finlandia por Mannerheim, o en Alemania por los socialdemócratas contra los comunistas, después de la Gran Guerra. Postura expuesta, después de octubre, en la apelación en el Parlamento a una represión inspirada en la feroz de Thiers contra los *communards* de París. La exasperada idea contrariaba, al revés de lo que a veces se dice, la tradición conservadora española*.

*El régimen de la Restauración había sido poco represivo en el pronunciamiento republicano de Villacampa, o en su respuesta a los magnicidios de Cánovas, Canalejas o Dato, a matanzas como la de la calle Mayor de Madrid, etc. El castigo por la Semana Trágica, en 1909, había sido duro, pero no desproporcionado a los hechos ni a los tiempos. Los condenados por la huelga revolucionaria de 1917 pronto fueron amnistiados y admitidos en el Parlamento. Las excepciones, como los «tormentos de Montjuich», respondían a unos atentados brutales, frente a los cuales no existía experiencia ni una policía experta. La falta de una adecuada ley antiterrorista —la que Maura presentó en 1907 fue boicoteada por toda la oposición—, dejó al régimen sin instrumento útil para afrontar el terror, favoreciendo con ello métodos como la «ley de fugas». También había sido cualquier cosa menos sanguinaria la dictadura de Primo de Rivera. La subversión antimonárquica de 1930-31 apenas había sido reprimida, y las dos ejecuciones tras el pronunciamiento militar republicano de diciembre de 1930, no pueden considerarse tampoco actos arbitrarios o crueles —si acaso impolíticos—. En cambio, en el bienio izquierdista de la república la represión se acentuó a extremos desconocidos durante la Restauración o la dictadura, y aplicando leyes tan arbitrarias como la de «Defensa de la República».

Tampoco iba a imponerse ahora el método Thiers, como pudieron constatar los jefes revolucionarios. Pero su simple conjuro era todo un síntoma.

Capítulo XI I

¿Una tercera vía?

Azaña y la tradición jacobina (I)

Entre las fuerzas de la revolución y las de la conservación existía una tercera fuerza, la izquierda republicana, autoproclamada progresista sin llegar al obrerismo revolucionario. Identificada con un liberalismo jacobino, opuesto al conservador, tenían su origen, como éste, en la invasión napoleónica.

El jacobinismo español aparece en 1820, con el pronunciamiento del general Riego, el cual repuso la Constitución de 1812, obligando a Fernando VII a aceptarla. Riego cobró fama en toda Europa. Hasta en la Rusia lejana —pero influyente por entonces en España—, fue saludado (no por todos, claro) el pronunciamiento, que inspiró la célebre revuelta militar de los «decembristas» en San Petersburgo, en 1825*.

*Turguénief, entusiasta de la lucha contra Napoleón («¡Gloria a los españoles invencibles!»), anotó en su diario: «¡Por segunda vez España muestra qué es el espíritu del pueblo, qué es el amor a la patria!». Pushkin comprobó cómo en los núcleos incubadores de la rebelión decembrista circulaba la idea de que Rusia necesitaba una revolución «a la ispaniola», y recomendaba a un amigo: «Huela tabaco español y estornude fuerte, más fuerte»(1).

Sin embargo el golpe abrió tres años convulsos, enfrentados los liberales *moderados* con los *exaltados*, y ejerciendo éstos un doble

poder desde las «sociedades patrióticas», y otras secretas, semejantes a los «clubs» de la revolución francesa. El intento de imponer reformas drásticas y poco realistas, como la supresión de las órdenes religiosas, acreció la tensión. El trienio terminó con una nueva invasión francesa, la de los «Cien mil hijos de San Luis», la cual, en contraste con la napoleónica, acogió el pueblo benévola­mente, o al menos sin resistencia. En un nuevo bandazo retornó el despotismo fernandino, que tampoco auguraba tiempos calmos.

El general Riego se había sublevado a la cabeza de tropas listas para marchar a América contra las rebeliones independentistas, favoreciendo a éstas. Muchos sospecharon que había actuado en connivencia con intereses británicos, a través de las logias, y por ello veían al militar como un traidor a la patria. Ello influyó en la dureza de su condena y ejecución, en 1823.

El liberalismo jacobino (*exaltado*, después *progresista*) tuvo otra oportunidad con Mendizábal ministro de Hacienda en un gobierno *exaltado*, nacido de un nuevo golpe militar. El ministro*, potentado gaditano, masón, vinculado a Inglaterra, realizó en 1836 una de las acciones cruciales del siglo XIX: la desamortización de bienes eclesiásticos.

*Se apellidaba Méndez (Juan Álvarez Méndez), pero cambió a Mendizábal por parecerle más sonoro.

La medida debía capitalizar extensas tierras explotadas irracionalmente desde el punto de vista del beneficio. Pero fue aplicada mediante la expropiación pura y simple, a fin de obtener recursos para la guerra contra el carlismo. El modo de realizarla ilustra un estilo por así decir descuidado, típico en el jacobinismo español. Masas de campesinos que vivían mejor o peor en las tierras eclesiásticas fueron arrojadas a los caminos y a unas ciudades capaces de acogerlas solo en calidad de mendigos o delincuentes, dada la parálisis económica. Edificios de alto valor arquitectónico o histórico quedaron en ruinas, y dispersadas o destruidas bibliotecas, registros, esculturas y pinturas, etc.*.

*Cayeron en ruinas monasterios como el de San Pedro de Arlanza, importante en la historia de Castilla. El gobierno mandó arrasar nada menos que el monasterio de La Rábida, donde se gestó el descubrimiento de América, y sustituirlo por un monolito. Sólo la desobediencia de una autoridad local salvó el edificio, de valor histórico y evocativo

único.

Los grandes propietarios acapararon la mejor parte de las tierras, agravando el latifundismo y del absentismo, y no se creó una capa de pequeños y medios campesinos. La explotación de la tierra mejoró, no demasiado.

Otras etapas de hegemonía jacobina o *progresista* (la de Espartero (1836 ó 1840—44, el bienio progresista de 1854—6, también dominado por Espartero, o el sexenio democrático, desde 1868) resultaron asimismo experiencias faetónicas*.

*Durante el sexenio, los problemas españoles provocaron de rechazo, la guerra franco-prusiana de 1870, por la rivalidad en torno a las candidaturas al trono español, vacante tras la expulsión de Isabel II. El nuevo rey fue el neutral Amadeo de Saboya. La guerra franco-prusiana dio lugar, a su vez, a la conmoción revolucionaria de la Comuna de París.

En 1873 un Parlamento en principio monárquico implantaba la I República, como salida al vacío institucional abierto por la abdicación del rey Amadeo de Saboya. Esa I República logró, en solo once meses, poner al borde del abismo la misma subsistencia de la nación.

El liberalismo *progresista* o jacobino parecía, más *moderno* que el conservador: propugnaba la desamortización y el libre comercio —aunque era muy estatista en otros terrenos—, y soberanía nacional aboliendo la del trono, mientras que los conservadores defendían una soberanía compartida por la nación y el monarca, sufragio restringido y proteccionismo económico. Algunas reformas *progresistas* tenían buen enfoque, sobre todo las emprendidas en el sexenio democrático bajo la inspiración inteligente del general Prim: sufragio universal, abolición de la esclavitud y de la pena de muerte, libertad religiosa y de enseñanza, racionalización monetaria (la peseta), implantación del sistema métrico decimal, de estadísticas oficiales, etc. Y sin embargo una especie de fatalidad empujaba siempre al fracaso a sus gobiernos.

Bajo la Restauración, desde 1875, la posición de las fuerzas políticas cambió. Los *progresistas*, integrados en el régimen, se acercaron a los conservadores y quedaron a la derecha por comparación con los republicanos y no digamos los socialistas y anarquistas. Los republicanos, nacidos como corriente menor en 1849 (Partido Demócrata) y llegados al poder en 1873, no tendrían otra oportunidad hasta 58 años

después, con la II República. Para aprovechar esta nueva y muy favorable ocasión, pactaron con los socialistas y, oficiosamente, con los anarquistas. En 1933 el balance de esas alianzas había sido, una vez más, desastroso, y en 1935 el horizonte estaba en verdad oscuro.

¿Por qué estas experiencias naufragaban una y otra vez? La causa más obvia parece la oposición *reaccionaria*. Pero esa explicación es falaz. La *reacción* casi nunca contrarió en serio el inicio de esas experiencias y sólo intervino contra ellas *in extremis*. Prieto deplorará en los republicanos «aquellos fenómenos (...) acaso incorregibles», que les impedían hacer obra de gobierno; Cambó los tilda rudamente de «perfectos botarates»; el mismo Azaña fustiga a menudo su obtusidad e ineptia (2). Su tema permanente, capaz de unir a los grupos de esa tendencia por encima de los odios, a veces feroces, que se profesaban, era la religión y la Iglesia, causas de todos los males, a su juicio*.

*Se hizo célebre la sesión de Cortes, del 26 de abril de 1869, en que la minoría republicana se empeñó en discutir el dogma budista, el musulmán y el cristiano para demostrar que lo mejor era el ateísmo o la irreligiosidad. Según ellos, se trataba de sustituir «la fe, el cielo, Dios», por «la ciencia, la tierra, el hombre»; generalmente su sustancia teórica no iba mucho más allá de estas simplezas. Cuando, después de oír largas parrafadas, el presidente de la cámara dijo que aquellas discusiones podían estar bien en una academia, pero no en el parlamento, los republicanos se retiraron muy ofendidos, invocando la libertad de expresión vulnerada. No menos famosa, en la misma línea, fue aquella decisión democrática —por votación mayoritaria— de la inexistencia de Dios, en una sesión del Ateneo de Madrid. Estos pintoresquismos tendrían cierta gracia si no se acompañaran a menudo de violencias y ultrajes mucho más serios. El mismo Azaña consideraba que la supresión de la enseñanza católica, la prohibición de toda actividad económica a las órdenes religiosas e incluso la beneficencia, eran cuestión de vida o muerte para la república.

Algo en el jacobinismo español, *progresista* o republicano, fomentaba el caos. Ese «algo» era, para empezar, su debilidad material. Dada la impopularidad de la revolución francesa, por las razones ya vistas, el jacobinismo sólo atrajo a reducidos sectores urbanos y a círculos militares, especialmente a través de las logias. Y nunca su-

peró ese desarraigo mediante movimientos sindicales, cooperativistas, culturales o deportivos, como lo hicieron en otros países partidos semejantes y lo harían los nacionalistas en Cataluña y el País Vasco.

Pero esa debilidad no les impedía una audacia increíble. *Progresistas* y republicanos estaban prestos en todo momento a adueñarse del poder, sin atención a la probabilidad de un salto en el vacío*.

*Por ejemplo, al llegar la II República, no disponían de personas capaces para gobernadores civiles. Lo narra así Miguel Maura: «Los partidos republicanos, a través de los ministros respectivos, entregaban al de la Gobernación la lista de los miembros de cada uno de ellos que se consideraban aptos para desempeñar el cargo. Tales listas se formaban teniendo en cuenta no la capacidad cultural y temperamental del interesado, sino sus *servicios a la causa*, su veteranía republicana y, por descontado, su amistad con el ministro proponente». Como muestra menciona el caso de un recomendado de Álvaro de Albornoz, un madrileño castizo, sin estudios, cuyo padre era conocido por *El Dantón* «porque hablaba muy bien, ¿sabe usted?» Había estado en la cárcel por «arrear un leñazo a un guardia que a poco le deslomo», y pedía ser gobernador de Segovia porque un amigo suyo tenía en la ciudad una casa de bebidas «y los veranos vamos allí a pasar dos semanas y lo pasamos muy bien. Y ahora, con eso de los gobernadores, pues hablé con Álvaro de Albornoz y le dije a ver si podía ser, porque desde el cargo podría ayudar a un amigo, que quiere establecerse arriba, en la Plaza, y poner ya un café serio». Albornoz le había dicho que para el cargo necesitaba «mano izquierda y *quinqué* — señalando el ojo con el índice—», y de *quinqué* él tenía de sobra, como buen hijo del barrio de La Latina. Albornoz, al conocer sus palabras «se retorció de risa, exclamando «¡Es magnífico ese hombre, es magnífico! (...) Esa gente es utilísima y hace republicanos con sus entusiasmos. Son como misioneros». Según Maura no se trataba de un caso aislado, ni mucho menos (3).

Apenas representativos, se decían líderes del *pueblo* con no menor desparpajo que los marxistas del *proletariado*, y no vacilaban en pactar con el terrorismo ácrata, al cual consintió la Esquerra asesinar a numerosos obreros rivales en 1931. Suponiéndose a sí mismos adalides del bienestar y el progreso humanos, sus contrarios debían encarnar la «tiranía», la «ignorancia», la «caverna», y portar las cul-

pas por las miserias y crímenes del presente y aun del pasado: cualquier cosa resultaba preferible a la *reacción*, y contra ella valía cualquier medio.

De ahí también la predisposición a la violencia. La emplearon las sociedades secretas y patrióticas del trienio liberal, y durante la primera guerra carlista los liberales comenzaron las atrocidades contra sus enemigos y familias de éstos. Espartero no dudó en bombardear Barcelona para reprimir una revuelta popular, en 1842. Las matanzas de frailes y sacerdotes, las quemas de templos y otros edificios también son un legado jacobino. A principios del siglo XX, las proclamas republicanas, próximas al anarquismo, llamaban con naturalidad a una revolución «ferozmente sangrienta». Figuras como las del primer Lerroux, Ferrer Guardia o Rodrigo Soriano son por demás ilustrativas (4).

Ese estilo creó un tipo humano «comecuras», de expresión desgarrada y amenazante. No todos los republicanos encajaban en el tipo, pero el mismo se mantenía vivaz y característico en los años 30 *. Pese a haber llegado al poder gracias a las facilidades casi obsequiosas dadas por la monarquía, exhibieron enseguida un talante persecutorio e intransigente, plasmado en las famosas frases de Álvaro de Albornoz: «No más abrazos de Vergara, no más pactos de El Pardo*; no más transacciones con los enemigos inconciliables de nuestros sentimientos y de nuestras ideas» (5).

*Y hasta en los años 60 E. Tierno Galván, intelectual pro republicano y antifranquista, lo describe: «El español que yo apenas había encontrado en España, lo veía repetido en la mayor parte de los exiliados fuera del país. Tendían a dárselas de broncos, de amigos del chiste obscuro, propicios, no a los excesos eróticos, sino a la lujuria (...) El falso español yuxtapuesto, que parece que tiene como mayor satisfacción la agresión, la batalla, la palabrota, el desaire y la autoafirmación continua (...) en ocasiones rozaba la parodia.» Eso, entre los de «clase media culta o relativamente culta. No, sin embargo, entre los trabajadores manuales emigrados, que mantenían la cordura y la buena crianza». M. Portela Valladares, él mismo masón y anticlerical, cuenta con desagrado esta anécdota de los primeros tiempos de la II República: «En un Consejo, el siempre almibarado Fernando de los Ríos, dijo incidentalmente que un futuro ministro técnico

«era un veterinario, capaz de poner unas herraduras de plata a un Santo Cristo» «¡Qué blasfemia tan magnífica!», gritó uno de los consejeros, apretándose los ijares, y entre blasfemias cada vez más resonantes y espantosas (...) hubo de suspenderse el Consejo» (6)

*El abrazo de Vergara había permitido terminar la primera guerra carlista, y el pacto de El Pardo había articulado la alternancia pacífica en el poder durante la Restauración.

Consideraban el régimen como propiedad suya, solo por ellos gobernable. Tales actitudes aparecen con claridad en Albornoz, pero también en Azaña, Domingo, Macià, Companys, Casares, Gordón o Botella, algo menos en Martínez Barrio, etc.

Azaña y la tradición jacobina (II)

Algo indica el hecho de que este movimiento naciera con el golpe militar de 1820, o que volviera al poder, en 1836, con otro golpe, el de los sargentos de La Granja, organizado por Mendizábal a base de crudos sobornos. Fueron los jacobinos quienes crearon y cultivaron la tradición del golpismo militar, los pronunciamientos, causa y resultado a la vez de la inestabilidad política en la España del siglo XIX. Ya antes de triunfar con el de Riego lo habían intentado cuatro veces, y la casi totalidad de los 35 pronunciamientos a lo largo de ese siglo tuvieron (salvo cinco) carácter *exaltado*, *progresista* o republicano. Cuando en 1930 los conspiradores se reúnan en San Sebastián para traer la II República, lo primero en que pensarán será en un golpe militar*.

*Por esta razón, el político e intelectual pro franquista G. Fernández de la Mora, en una reseña del libro de M. Alonso Baquer *El modelo español de pronunciamiento*, concluye, comentando la observación de S. Payne sobre el carácter «monárquico, católico y conservador» del país: «Y para hacerlo republicano, agnóstico y revolucionario había que recurrir a la fuerza y torcer su voluntad» (1)

Ciertamente los jacobinos españoles no llegaron a usar el terror masivo de sus modelos franceses o sus homólogos suramericanos*, y su violencia resultó inconclusiva. Pero quizá se debió más a su debilidad que a otra razón.

*Bolívar, por ejemplo, decretó la «guerra a muerte» para «destruir en Venezuela la raza maldita de los españoles (...) Ni uno solo debe quedar vivo». Trataba de abrir un foso entre éstos y los hispanoamericanos, muy renuentes a seguirle en su lucha independentista. El decreto consiguió su objetivo (aunque de forma parcial: a menudo los bolivarianos obtenían sus «voluntarios» por la pura coerción, encarcelando y llevando atados a los jóvenes. De ahí que emplearan también a mercenarios ingleses, norteamericanos y otros). Panegiristas de Bolívar siguen tomando esa guerra de exterminio por «su mayor timbre de gloria». Pero el coste fue terrible: las matanzas de prisioneros y civiles nacidos en España se multiplicaron, y, con las represalias españolas, dieron a la lucha un carácter terrorista que marcaría la política de aquellos países mucho después de la independencia. Explicaba el libertador a un corresponsal inglés: «El objeto de España es

aniquilar al Nuevo Mundo y hacer desaparecer a sus habitantes, para que no quede ningún vestigio de civilización (...) y Europa solo encuentre aquí un desierto. (...) Perversas miras de una nación inhumana y decrépita». El propio Bolívar, cada vez más adusto y sombrío, escribirá: «No confío en el sentido moral de mis compatriotas», y confesará a Santander: «Amigo, no es sangre lo que fluye por nuestras venas, sino vicio mezclado con miedo y horror»; aunque la desmoralización se debía mucho a los modos de la guerra por él desatada (Santander había ordenado, entre otras, una matanza de 36 oficiales españoles prisioneros, previamente perdonados por Bolívar. «Me complace particularmente matar a todos los godos», dijo otra vez. Un presente que le recordó el indulto, fue también fusilado sobre el terreno).

Aunque españoles de origen, los independentistas se proclamaron extraños herederos de la América precolonial, cuya tradición decían defender contra España. Los indios, desde luego, apenas se llamaron a engaño y en aquellas guerras permanecieron pasivos o respaldaron a Madrid, siendo por ello masacrados en varias ocasiones. Ya independientes, los indios mejicanos fueron despojados de su tierras, poseídas colectivamente, y peor pasó en Argentina. Sarmiento, educador de este país según opinión extendida, hablaba con sinceridad cuando trataba a los mapuches de «indios asquerosos, a quienes habríamos hecho colgar y mandaríamos colgar ahora» (no era menos claro con los gauchos: «No trate de economizar sangre de gauchos —recomendaba al general Mitre—. Este es un abono que es preciso hacer útil al país»). Al igual que en USA, los indios argentinos fueron acosados y exterminados.

Bolívar pensó en un protectorado británico sobre los nuevos países —rehusado por Londres—, y auguró que le sucedería «un tropel de tiranos» y nuevas guerras civiles. Al otro extremo de Suramérica, Sarmiento comentaba treinta años después de la independencia: «Véase tanta inconsciencia en las instituciones de los nuevos Estados, tanto desorden, tan poca seguridad individual, tan limitado en unos y tan nulo en otros el progreso intelectual, material o moral de los pueblos, que los europeos (...) miran a la raza española condenada a consumirse en guerras intestinas, a mancharse con todo género de delitos y a ofrecer un país despoblado y exhausto como fácil presa a una nueva colonización europea». El precursor de los libertadores, Fran-

cisco de Miranda, al ser entregado por Bolívar a los españoles, a cambio de un pasaporte, había hecho su célebre frase: «Bochinche, bochinche. Esta gente no es capaz sino de bochinche». Miranda, hombre muy notable y culto, oficial del ejército español y del revolucionario francés, viajero por Estados Unidos, Francia, Rusia, etc., había sido también agente pagado por Londres (con 1.000 libras anuales) para socavar el imperio español. El liberalismo conservador tenía más afinidad con la tradición inglesa que el jacobino, pero éste convenía a los intereses del imperio británico(2).

Esta agresividad republicana coexistía con una exaltada sentimentalidad humanista y culturalista, personalizada en figuras como Salmerón, presidente de la I República, que dimitió, según se dice, por no firmar una pena de muerte. Aunque en unos grupos predominaba la violencia y en otros el sentimentalismo, las dos actitudes suelen ser complementarias en todas las ideologías, y convivir o alternarse en el tiempo en un mismo grupo. Cuanto más ardientes por el ideal, mayor la recriminación y el recurso a la fuerza contra los adversarios. El ardor escondía algunas veces un fondo de incredulidad y desprecio por las propias ideas*.

*Cuenta Pío Baroja del novelista Blasco Ibáñez: «había hablado (...) en un mitin republicano, haciendo líricamente la apología de la República, y por la noche nos dijo con sorna que la República sería el régimen de los taberneros, de los zapateros de viejo y, sobre todo, de los maestros de escuela. Según él, afortunadamente, no vendría nunca a España» (3)

Otro azote para los programas jacobinos era un personalismo exacerbado. En cualquier partido las motivaciones ideológicas, las aspiraciones al bien común y las ambiciones personales van mezcladas inextricablemente, pero en los republicanos españoles el tercer elemento solía producir odios aniquiladores. Ya el buen rey Amadeo, traído por el *progresismo*, se desesperaba ante las rivalidades e intrigas: *"Io non capisco niente; siamo in una gabbia de pazzi"* ("No entiendo nada; estamos en una jaula de locos"). Figueras, que siendo presidente de la I República huyó un buen día a Francia sin despedirse, tacha a sus correligionarios de «infames, díscolos, ambiciosos, envidiosos». Éstos le retribuyeron llamándole loco. Lerroux, quien más que nadie había revitalizado el republicanismo a principios de siglo,

ponderaba las numerosas ocasiones en que su conmitón Rodrigo Soriano había incitado a asesinarle, o se queja, citando: «Lerroux conspiraba contra la monarquía, y los republicanos conspiraban contra Lerroux». En la II República, la aversión y el desprecio entre los dirigentes tuvieron un indudable efecto demoledor para el régimen y para ellos mismos, como creo haber mostrado en *personajes de la república vistos por ellos mismos*.(4)

El repaso de los hechos y de los testimonios de los mismos jacobinos permite concluir que el estilo turbulento, impaciente y convulso de éstos dista de ser una invención de sus enemigos. Con seguridad esas conductas hicieron un flaco servicio a sus propios ideales, al provocar una fuerte aprensión social incluso ante las medidas razonables por ellos propugnadas, y con ello un retraso histórico en su aplicación.

Siguiendo el modelo francés, que había decretado la maldad de la historia anterior de Francia, los jacobinos hispanos hacían lo propio con la de España, si acaso con mayor radicalidad, y exceptuando solo algunas situaciones, instituciones o personajes en los que, más o menos arbitrariamente, veían antecedentes o precursores de sí mismos. A partir del siglo XVI el pasado español constituía un amasijo de tiranía, atraso, inquisición, torturas y oscurantismo. La condena podía extenderse hasta el reino visigodo de Recaredo, cuando se consolida la hegemonía católica. En cuanto a la Edad Media, sentían una oscura preferencia por los moros, cuya dominación idealizaban frente a la «brutalidad» cristiana. o todos los republicanos pensaban así, evidentemente, sólo hay que pensar en el historiador Claudio Sánchez Albornoz, pero era la tendencia dominante y popular entre ellos*.

*Se hace más comprensiva esta actitud comparándola con la de los jacobinos latinoamericanos. El antiespañolismo en América tuvo rasgos paroxísticos, como en Campo Elías, lugarteniente de Bolívar y nacido en España que rugía: «La raza maldita de los españoles debe desaparecer; después de matarlos a todos, me degollaría yo mismo, para no dejar vestigio de esa raza en Venezuela». Algo parecido expresan, en definitiva, Sarmiento o Alberdi cuando lamentan que Argentina no hubiera sido colonizada por los daneses o los belgas, con lo cual los mismos Alberdi o Sarmiento —Argentina—, no habrían llegado a existir. Para Olmedo, el *Homero americano*, los españoles

—es decir, los progenitores del Olmedo— eran «estúpidos, viciosos, feroces, y por fin supersticiosos».

Francisco Bilbao concluía en *El Evangelio americano* —libro de texto escolar llegó a ser—, que el progreso de América del sur «consiste en desespañolizarse». Nada más razonable, pues según Bolívar, el imperio español constituía «la tiranía más cruel jamás infligida a la humanidad», había convertido «la región más hermosa del mundo en un vasto y odioso imperio de crueldad y saqueo». Etc. (Aunque el mismo Bolívar, en un momento de debilidad, asumiría que, con la guerra, la época española, los «tres siglos de cultura, de saber y de industria han desaparecido»). Por lo demás, los republicanos españoles no iban a la zaga a los americanos. Para Pi y Margall, «nuestras pretendidas glorias no fueron sino una interminable serie de hechos que nos deshonoran», y Castelar, con mayor lirismo, declamaba: «No hay nada más espantoso, más abominable, que aquel gran imperio español que era un sudario que se extendía sobre el planeta». Un analítico economista latinoamericano, J. Cecilio del Valle profetizó alegremente la defunción del idioma español: «Cada Estado americano tendrá su dialecto: se multiplicarán los idiomas y cada idioma será un nuevo método de análisis».

Caso de desespañolización fue la adopción del término «Latinoamérica», en sustitución del de Hispanoamérica, con el argumento de que los nuevos países no sólo tenían influencia española, pues se declaraban hijos espirituales de Francia, es decir, de la revolución francesa. Claro que entonces «Anglolatinoamérica», hubiera quedado mejor, ya que la influencia norteamericana, quizá no muy espiritual pero sí muy práctica, supera de lejos a la francesa. Y acaso la española sea algo más que una influencia.

La política desespañolizante parece haber encontrado a veces obstáculos inesperados, como en Méjico, cuyos líderes, observaba Tocqueville, «tomaron por modelo y copiaron casi enteramente la constitución federal angloamericana. Pero al trasladar a su patria la letra de la ley, no pudieron transportar al mismo tiempo el espíritu que la vivifica». Resultado: el país «se ve constantemente arrastrado de la anarquía al despotismo militar y del despotismo militar a la anarquía». Hay, en efecto, una enorme distancia entre la tradición anglosajona de apoyarse sólidamente en su propia experiencia y estudiar con cuida-

do los cambios a introducir, y el obtuso espíritu imitativo y autodenigratorio tan extendido en América Latina y en España. Posiblemente tenga que ver con ese espíritu la impresión que deja la historia contemporánea latinoamericana —y, en buena medida, la española—, de un exceso de retórica, un exceso de violencia, un exceso de incompetencia y un exceso de corrupción (6).

Todo ello se relacionaba, seguramente, con la carencia de un pensamiento propio, o al menos de análisis solvente de la realidad del país, que les permitiesen adaptar las ideas recibidas de fuera. Los esfuerzos de Pi y Margall —a quien apreciaban los anarquistas casi como uno de los suyos—, Azaña y algún otro, tuvieron corto vuelo, y puede considerarse nula la originalidad teórica del jacobinismo español. Tal deficiencia resalta, por ejemplo, en una de sus actitudes más definitorias, si no la más definitoria, el anticlericalismo. Este sentimiento resulta en más de un extremo comprensible, pero el carácter ciegamente exacerbado, incendiario y sanguinario (en una palabra, fanático... en nombre de la lucha contra el fanatismo) que adoptó en España, evidencia una incapacidad o desgana intelectual realmente fuera de lo común.

Esa pobreza intelectual no frenaba una producción panfletaria copiosísima e increíblemente exitosa. Sirva como botón de muestra este hecho: la república nació quemando bibliotecas y centros de enseñanza y cerró innecesariamente escuelas, colegios y facultades universitarias sólo por su carácter religioso. Y ya sus antecesores habían ocasionado otra catástrofe cultural con la forma como realizaron la desamortización en 1836. Por ninguno de éstos y otros hechos sintieron nunca la menor necesidad de justificarse. Pese a ello, la imagen de los republicanos como excepcionales valedores de la cultura y del intelecto sigue siendo casi generalmente aceptada.

A la inspiración de la Iglesia sobre la mayor parte del conservadurismo español correspondía, en cierto modo, la de la masonería sobre el jacobinismo. Fueron masones los iniciadores de la cadena de golpes militares: Espoz y Mina, Porlier, Lacy, Vidal, Riego, Torrijos etc., y puede decirse que la *técnica* del pronunciamiento nace, precisamente, de conspiraciones de las sociedades secretas (hoy, en cambio, la opinión corriente identifica la tradición del golpismo militar con la derecha. Otro éxito, sin duda de la propaganda republicana). Tam-

bién pertenecieron a la masonería la mayoría de los políticos de esa tendencia durante los siglos XIX y XX.

El tratadista Ferrer Benimeli estima que en 1931 eran masones el 62 por ciento de los diputados —es decir, dirigentes—, de Acción Republicana (azañista), el 62 por ciento en el Partido Radical Socialista, 38 por ciento en la Esquerra y 33 por ciento en los galleguistas (también el 53 por ciento en el Partido Radical, y el 38 por ciento en el PSOE). El estudioso J. Avilés Farré rebaja estas cifras al 46 por ciento o más en el grupo de Azaña y al 41 por ciento en el radical socialista. Otros datos repetidos cifran en 150 el número de masones en las primeras Cortes republicanas. Y cinco de los siete jefes de gobierno del régimen contaban entre los *hijos de la luz*. Como la masonería no agrupaba en el país a más de 4.500 personas, su influencia política puede calificarse de asombrosa, y sólo puede entenderse por la solidaridad entre los miembros de la *orden* y el carácter secreto de su actividad, que les permitía situarse en puestos decisivos de la administración, los partidos y el ejército.

Las logias no formaban un ejército disciplinado en la sombra, como algunos lo presentan, sino que en su seno bullían tendencias diversas, querellas y odios personales. Pero aun con eso, era fortísimo su poder en cuanto a crear estados de opinión y combatir al enemigo común —la Iglesia católica, de manera predilecta—. De hecho constituían un substrato ideológico y en buena medida orgánico, vertebrador de los partidos jacobinos.

Azaña y la tradición jacobina (III)

En principio, como hemos indicado, los republicanos de izquierdas podían haber tenido un papel de centro entre revolucionarios y conservadores, pues si detestaban a éstos, tenían buenos motivos para temer a los primeros. Sin embargo su actitud, reflejada en la frase de Albornoz sobre los pactos de Vergara y de El Pardo fue desde el principio intransigente con la derecha, pese a no haber sido ella, sino los anarquistas y luego el PSOE, quienes les habían propinado los golpes más demoledores durante el primer bienio.

Y tras esos azotes por su izquierda les había llegado, en noviembre de 1933, el tremendo varapalo de los electores, reduciéndolos a una presencia testimonial en las Cortes. La Acción Republicana, de Azaña, había obtenido 5 diputados; el Partido Radical Socialista 1, y su escisión Radical-Socialista independiente, 2. La Esquerra, con 20 escaños, salía mejor parada, pero su influjo se limitaba al ámbito catalán. Pese al desastre, los republicanos jacobinos actuaron con verdadera osadía, siguiendo su tradición, y trataron de propiciar golpes de estado para impedir que gobernase el centro lerrouxista —también republicano, pero moderado—. Fallidos los intentos, presionaron sin tregua al presidente, Alcalá-Zamora para que disolviera las Cortes, y urdieron nuevos planes golpistas para desalojar del poder al gobierno legítimo.

En verano de 1934, cuando el PSOE preparaba su revolución, las izquierdas *burguesas* cooperaron con él en graves maniobras desestabilizadoras, de modo especial en Vasconia, donde se les sumó el derechista PNV. Apoyaron asimismo la gestación del golpe de la Esquerra en Cataluña, adonde iban republicanos de Madrid «a seguir con entusiasmo las peripecias del movimiento que se preparaba (...) a favor del extremismo nacionalista», como testimonia Amadeu Hurtado, hombre de confianza de la *Generalitat* (1).

En octubre del 34, la Esquerra, el grupo más extremista y violento de las izquierdas *burguesas*, se lanzó a la rebelión, al lado de los socialistas. Los demás jacobinos, muy beligerantes, rompieron estrepitosamente con la legalidad, y todo indica que habrían secundado la insurrección si ésta no hubiera fracasado tan pronto en Madrid y Barcelona. Extraña que respaldasen una revolución de signo socialista,

pero esperaban benevolencia por parte del PSOE, y quizá una vuelta al poder, aunque fuera en posición subordinada.

La derrota de la insurrección les había obligado a dulcificar su tono y a olvidar su ruptura con las instituciones, que el gobierno de centro derecha tampoco insistió en recordarles. Pudieron entonces inclinarse hacia una tercera vía entre revolucionarios y conservadores, y tratar de apaciguar las furiosas hostilidades de la época, buscando, por ejemplo, una sintonía con el Partido Radical de Lerroux, que ya desempeñaba ese papel mejor o peor. Pero nada de eso iba a ocurrir. Por el contrario, tan pronto se repusieron del susto pasado, ayudaron a la campaña sobre la represión en Asturias, con informes, propaganda etc., acentuaron su radicalismo contra la derecha y contra Lerroux, y buscaron una alianza con el PSOE, ilusionados con la idea de volver al poder como en el primer bienio.

Una debilidad de los republicanos de izquierda en los años 30 era su escasez de líderes de talla. Azaña, que descollaba mucho sobre los demás, se veía, y no sin razones, como excepción casi única entre sus correligionarios, a quienes trata en sus escritos con indisimulable desdén. Precisamente su peripecia en 1935 sintetiza la situación política y la evolución de aquellas izquierdas, por lo que la trataremos con algún detenimiento.

Máximo protagonista del primer bienio republicano, Azaña había diseñado una estrategia para consolidar el régimen mediante una alianza entre las izquierdas burguesas y el PSOE, único partido con organización y fuerza de masas. Esa alianza, deseaba él, debía evitar «los horrores de la revolución social» y alejar indefinidamente del poder a las derechas. Su esquema había quebrado, principalmente por la subversión anarquista, y en septiembre de 1933 había tenido que abandonar el poder. Desde entonces, su estrella había declinado, y después de octubre del 34 pareció apagarse por completo.

Detenido entonces en Barcelona, había sido procesado en relación con el golpe. A su decir, el gobierno le acusaba «a sabiendas de que estoy sin culpa, (...) más aun, porque sabe que estoy sin ella», lo cual consideraba «monstruoso», «saña», «agresión a los valores del régimen», un hecho que «ha venido a desenmascarar a los judas», a gentes «incapaces de remordimiento», hacia las cuales «he agotado mi capacidad de desprecio», pese a que «me gusta ser tratado con

injusticia». (2)

En su apoyo había circulado ampliamente, a pesar de la censura, un manifiesto: «Lo que contra Azaña se hace quizá no tenga precedente en nuestra historia, y si lo tiene, de fijo valdrá más no recordarlo. No se ejercita en su contra una oposición, sino una persecución. No se le critica, sino que se le denuesta, se le calumnia, se le amenaza...». Firmaban Américo Castro, Azorín, Valle-Inclán, Marañón, García Lorca y otros intelectuales de renombre, aunque no Ortega ni Unamuno. Así comenzó su resurrección política (3).

El resto de la izquierda vio también la ocasión de convertir su proceso en látigo contra el represivo gobierno. Las frases del manifiesto suenan desmesuradas, pues Azaña fue tratado con corrección, los dicterios de la prensa derechista contra él no alcanzaban la acrimonia de los habituales en la prensa de izquierdas contra sus adversarios, y finalmente su caso quedó rápidamente sobrepasado, prueba de la independencia de los tribunales. Con todo, los indicios contra él distaban de ser nimios. Después de perder las elecciones, en noviembre de 1933, había caído dos veces en intentos de golpe de estado y era sabida su estrecha relación con varios jefes de la revuelta octubrina, en especial Prieto y Companys. Había descartado un gobierno de mayoría parlamentaria* en vísperas de la revuelta, y al estallar ésta, su partido había amenazado con usar «todos los medios» contra las instituciones, mientras él permanecía en Cataluña, a la que solía definir como «el baluarte de la República», base para reconquistar el poder. En fin, en la rebelión de la Esquerra participaron varios militares muy afectos a él, como Arturo Menéndez o Jesús Pérez Salas.

Para defenderse, Azaña sostuvo haber ignorado los preparativos golpistas y haber desaprobado, al conocerlas, las pretensiones de la *Generalitat*, por no ser él federalista ni creer en su éxito. Días antes del golpe, tras el sepelio de su ex ministro de Hacienda, Carner, había coincidido en Barcelona con dirigentes del PSOE y de la Esquerra, pero no habrían pasado de charlar de modo inconcreto, entre otras cosas «del modo más conveniente de emplear (...) la fuerza innovadora del socialismo español», aunque dicha «fuerza innovadora», como él sabía, se aplicaba por entonces a preparar la guerra civil. Después había permanecido en la Ciudad Condal como «inesperada vacación y asueto». Por consiguiente, él no formaba parte del comité revolucio-

nario, y menos aun presidiéndolo, como le acusaban (4).

*Azaña defendió un gabinete que convocara elecciones y que debería «no sólo restablecer la legalidad, sino gobernar vigorosamente en sentido republicano antes de la elección», a fin de «precaverse para que los partidos y la opinión republicanos no se vean sometidos a la misma operación desventajosa que el año pasado». Pero el gobierno radical no había infringido la legalidad y las elecciones de 1933 habían sido gestionadas por un gobierno de concentración, incluyendo al partido del mismo Azaña. Por ello, la «operación desventajosa» de que él habla un año después resulta inverosímil (5).

Suena increíble que se debiera a simple asueto su estancia en Barcelona en jornadas tan inquietantes como aquellas. Allí tenía cerca la frontera si el golpe fracasaba, y otras posibilidades si triunfaba, y debió de considerar ambas alternativas, ya que para nadie, y menos para él era un secreto el alzamiento. Tampoco sus charlas con los jefes del PSOE y de la Esquerra pudieron ser tan vagas como dice. En el *Cuaderno de la Pobleta* admitirá que hablaron de la insurrección, pero que él la había desaconsejado, por inviable. Esto parece cierto, pues lo confirma Largo Caballero en sus *Recuerdos* (6).

Ahora bien, no siempre en aquellos meses se opuso a la intentona, pues, como ya vimos en *Los orígenes de la guerra*, planeó un golpe de estado en julio, durante el conflicto por la ley catalana de cultivos. Pero esto lo ignoraban sus acusadores, y él, lógicamente, se guardó mucho de mencionarlo. Tampoco recordó la declaración de su partido, ya con la insurrección en marcha, apelando a usar todos los medios contra el gobierno.

Falto de pruebas, el tribunal renunció al proceso, a finales de noviembre. La derecha, descontenta, volvió a la carga en marzo, por la venta de armas a unos conspiradores portugueses asilados en Madrid, aventurada injerencia en los asuntos del país vecino. La operación se había realizado siendo Azaña ministro de la Guerra.

La acusación naufragó de nuevo. Azaña afirmó ante las Cortes que él solo había prestado ayuda humanitaria a los exiliados. Las armas, las había adquirido con destino a Somalia el industrial Horacio Echevarrieta, amigo del entonces ministro de Obras Públicas, Prieto. El negocio lo había tramitado el Consorcio de Industrias Militares, una de cuyas tareas era precisamente la exportación* y ningún documen-

to probaba que Azaña lo hubiera ordenado.

*Azaña señala que en su mandato «se fabricó una cantidad de material de guerra como nunca se había fabricado en nuestro país en tiempo de paz», y citaba como demostración de sus éxitos exportadores la venta de barcos de guerra a Méjico y Portugal, fusiles ametralladores a Grecia, gestiones prometedoras en la URSS y en Extremo Oriente, etc.

Fallida la venta por falta de pago, las armas habían sido reconducidas al *Turquesa*, para su empleo en la revuelta asturiana, pero esto último había ocurrido ya en tiempos del gobierno centrista de Samper. En conclusión, el responsable de aquella operación, fuera delictiva o no, sería... ¡Samper!. Arguyó que apenas conocía a Echevarrieta, cuya relación con su gobierno, «lejos de ser amistosa, era tirante, desagradable» (7).

Azaña se defendió, como el caso anterior, con más destreza que veracidad. Años después Prieto, exiliado en Méjico, aclaraba parte de la trama: al llegar la república, unos revolucionarios portugueses en España «pusieron a conspirar contra la dictadura de su país y se las arreglaron para comprar una partida de armas (...) Para este compromiso sirvió de intermediario cierto industrial que figuró como comprador ante el Servicio de Industrias Militares, dependiente del ministerio de la Guerra. (...) Los fusiles no llegaron a poseerlos a causa de que el industrial aludido no pudo pagarlos, con lo que quedaron almacenados en Cádiz. (...) En 1934, los organizadores del movimiento revolucionario (...) entramos en negociaciones con los portugueses (...) Nos lo cedieron todo (...) Fue transferido el contrato a un francés, amigo nuestro». Y así, engañando al «cándido Gobierno», el francés y Echevarrieta, habían desviado las armas al *Turquesa*. (8)

Azaña y la tradición jacobina (IV)

Por supuesto, Azaña estaba implicado, como Prieto. Sus diarios prueban su ayuda más que humanitaria a los exiliados, y su interés en el caso. El 25 de julio de 1931 escribía: «Hoy me anuncian que la revolución en Portugal será mañana. La noticia viene de parte de Corteçao, que le ha dicho a Guzmán cuán agradecido me está». Corteçao era uno de los jefes portugueses, y el mejicano Guzmán un agente de Azaña para tareas confidenciales. El 5 de agosto, aplazada la intentona portuguesa, anota: «Voy a casa de Guzmán (...). Le explico cuánto me interesa saber dónde para el material» Y más adelante: «Corteçao (...) tiene grandes miras respecto de su país y España (...) Dice que la decadencia del poder inglés favorecería la verdadera libertad de Portugal, que ha sido desde hace un siglo un protectorado británico. Inglaterra, fiel a su política tradicional, ayuda a mantener la división peninsular, y ha favorecido a la dictadura portuguesa. Establecida la República en España, las dos democracias se entenderían fácilmente (...) Poco a poco los dos países podrían llegar a una unidad política, por lo menos, a cierta unidad política. Hay que contrarrestar muchos prejuicios seculares (...) Como yo abundo en las opiniones y planes de Corteçao, sonrío satisfecho».

El 31 de octubre de 1931 anotaba: «En casa de Guzmán, Corteçao y Moure Pinto (...) Me dan cuenta de sus conversaciones con H. E. (Horacio Echevarrieta). Les había ofrecido dos millones a cambio de que el Gobierno revolucionario respetase el contrato para la construcción de una escuadra, que don H. gestiona con el Gobierno actual. La mayor parte quedaría en poder de E. para la compra de material. Últimamente H. E. aplaza la conclusión del convenio; dice que está apurado de dinero (...) Me propongo hablar con E. para ver si puedo animarlo. Que este asunto se me lograra, colmaría todas mis ambiciones, y ya podría decir que había hecho un servicio a España». El 19 de noviembre apunta una conversación con Echevarrieta sobre un trasbordo de armas en alta mar.

Estas y otras anotaciones prueban que Azaña tenía planes de envergadura hacia Portugal, y que facilitó armas en varias ocasiones,

aunque siempre se cubrió las espaldas. En noviembre de 1931, Ramón Franco, hermano del futuro dictador, y el diputado *jabalí* Balbontín, que habían participado en los tratos, amagaron un chantaje para lograr la libertad de presos anarquistas, amenazando en otro caso con destapar el asunto. Azaña parecía seguro, y anota el día 3: «Casares estaba muy preocupado, temiendo que el documento lo hubiera firmado yo. Le tranquilizo en absoluto. Yo no he firmado nada, ni ordenado nada. Todo pasó en una conversación con Ramón Franco».*

*Hubo al menos tres suministros de armas, expone el investigador Hipólito de la Torre. El 26 de agosto de 1931 los revolucionarios intentaron apoderarse de Lisboa, asaltando varios cuarteles y bombardeando el Cuartel General con dos aviones, cuyas bombas debieron de provenir de España. Entre las víctimas, señaló en 1934 la oposición en el Parlamento, hubo varios niños. Ramón Franco organizó esta primera entrega de armas. «El gobernador de Murcia, enterado del paso de las bombas, quiso detenerlas, y se le dijo que salían por orden del ministro de la Guerra para un movimiento revolucionario en Portugal» explica Azaña. Una nueva entrega, retenida al principio en Copenhague por el gobierno danés, llegó a los portugueses con apoyo de Prieto y de Echevarrieta. Parte de ellas serviría en la insurrección de octubre de 1934, en Madrid. Otro cargamento fue comprado en condiciones extraordinarias (sin aval) al Consorcio de Industrias Militares, pero los portugueses no pudieron pagarlo ni Echevarrieta prestarles el dinero. Azaña buscó un arreglo por medio de Juan March: «El asunto de los portugueses ya no puede hacerse por mediación de E. (Echevarrieta), y pienso que quizás este otro (March) se prestaría a servirlos (...) Quienes resultarían gananciosos serían la República y España». Los apuros económicos de los conspiradores cortaron el trato, y sería ese lote el que terminase en el barco *Turquesa*. Las sospechas de Lisboa enrarecieron las relaciones diplomáticas. De trocarse las sospechas en datos, se hubiera producido una crisis muy seria. De todos modos la conspiración, corroída por personalismos y malicias, tenía pocas posibilidades. Cortesao, Moura Pinto y otros eran conocidos en la oposición lusa como «el grupo de los budas», y atacados como presuntamente corruptos y despilfarradores. El iberismo de Azaña y otros preocupaba en Portugal, cuyo gobierno, para contrarrestarlas, estrechó sus lazos con Londres. El embajador en Madrid informaba a su

ministro: «El catalán Macià dice que España no existe, y que en su lugar debe constituirse una federación de nacionalidades ibéricas (Portugal, Cataluña, Galicia, Vasconia y Castilla)». Y comentaba: «Siendo cierto que para Portugal no existe peligro federalista (...) conviene no contrariar, sino, antes al contrario, auxiliar si fuera posible, toda corriente de opinión que tal vez se produzca a favor de esa concepción del Estado español opuesta a (su) unidad nacional» (1)

Con instinto político, Azaña supo sacar provecho de la sañuda e infame persecución que decía sufrir, si bien la facilidad y prontitud con que esquivó sus procesamientos vuelve un tanto excesiva su indignación, y atestigua de paso la permanencia de la legalidad democrática, contra lo que él da a entender constantemente. Su libro *Mi rebelión en Barcelona*, donde fustigaba sin piedad al gobierno, fue muy leído y le ganó amplia adhesión popular como víctima de una injusticia. Para dar cauce a esta cálida reacción, organizó tres mítines multitudinarios; el primero en Valencia, el 26 de mayo, el segundo en Baracaldo, el 14 de julio, y el tercero en Madrid, el 20 de octubre. Los tres se convirtieron en actos unitarios de izquierda. Olvidando rencillas, socialistas y comunistas llamaron a la gente a asistir a ellos «para manifestar su odio al fascismo», como decía el PCE. Masas del público saludaban con el puño cerrado, contrariando a los azañistas, que preferían los pañuelos blancos (2).

Azaña se explayaba en sus agravios, sin olvidar «otras injusticias, otras iniquidades, otras persecuciones mucho más graves y terribles, que están demandando vindicación». Que el gobierno hubiera usado «la propia fuerza material y física contra los perseverantes y casi únicos defensores del régimen, es una monstruosidad que estaba reservado a nosotros contemplar». Etc. Excusaba así a los insurrectos, para quienes no tuvo la menor censura. Al revés, todos resultaban auténticos republicanos y, por tanto, los únicos legitimados para gobernar: «La República es de los republicanos (...) ¿Es que pedisteis permiso al ministerio de la Gobernación para proclamar la República? (...) ¿Qué os impide hoy, mañana, cuando sea (...) realizar una manifestación semejante, aun más fuerte y seguramente victoriosa?» (3)

La derecha y el centro eran la antirrepública, sin derecho al poder: «Nos encontramos padeciendo (...) una política que ostenta para gobernar un título falso, porque procede de una mixtificación electoral

del año 1933». «Todo el Estado español actualmente es una conjuración antirrepublicana». «Toda Europa hoy es un campo de batalla entre la democracia y sus enemigos, y España no se exceptúa». La república quedaba acaparada por la izquierda —que acababa de asaltarla— y excluida de ella no sólo la derecha sino el mismo Partido Radical, el único republicano de larga data. En suma, solo había una república posible: la suya. Y su victoria «no puede ser un triunfo capitulado ni pactado; tiene que ser un triunfo total (...) con todos los enemigos delante». Estos propósitos volvían sumamente azarosa, si es que no imposible, la convivencia en el seno del régimen (4).

Pese a que los propios mítines probaban que el gobierno había mantenido legales a los partidos rebeldes, Azaña clamaba: «¿Es que los republicanos seguimos siendo tratados como españoles? Porque se nos trata como a un país enemigo, y en estas condiciones todavía se nos habla de conciliación y de convivencia, todavía hay gentes que físicamente o de un modo simbólico tienen la pretensión de alargarnos la mano (ovación). No, después de lo que aquí ha ocurrido, el pueblo republicano tiene derecho a una estricta justicia». O bien «Tolerancia (...) ¿en torno a qué? ¿Sobre miles de presos y de muertos?», como si la insurrección la hubiese organizado el centro derecha. Actitud reminiscente del rechazo socialista a las propuestas de concordia hechas por la CEDA a principios de 1934 (5).

Para encender a sus auditorios, el orador no rehuía tópicos fomentadores del extremismo, como el de la «muchedumbre del pueblo español reducido al hambre y a comer hierbas del campo y cortezas de los árboles». Pero desde la salida de Azaña del poder el hambre y la miseria no habían, ciertamente, aumentado. Incluso habían disminuido ligeramente* (6).

*Pese a frases tan inequívocas, bastantes historiadores califican de «moderada» la posición de Azaña por entonces. Debe de ser un concepto no habitual de la moderación.

No obstante él veía claro, y más desde octubre, las contraindicaciones de una insurrección: «La política del mal mayor conduce a la ruina» «Si creéis que el exceso de las persecuciones, la brutalidad del sistema gobernante, el hambre de los trabajadores, la miseria, la dislocación de los intereses, van a suscitar (...) un movimiento revolucionario, estáis equivocados». Propugnaba en cambio una coalición,

un «frente electoral», que remediase la derrota izquierdista en las elecciones de 1933, causadas por su propia «imprudencia y aturdimiento». Quería una victoria arrolladora, y por eso rehusaba apoyar la reforma de la ley electoral vigente, que favorecía desproporcionadamente a las mayorías, aunque éstas lo fueran por escasos votos. La reforma, pedida por la CEDA, atraía también a republicanos, que, dolidos de la experiencia de 1933, temían que la ley les volviese a perjudicar. Azaña, por el contrario, les recordaba el apabullante triunfo izquierdista de 1931, repetible a su juicio en los próximos comicios (7).

En realidad la renuncia a la violencia no podía entenderse como concordia, sino como un modo, legal solo en la fachada, de excluir de la vida política al centro-derecha, a la *antirrepública*. El proyecto había de soliviantar por fuerza a una derecha renuente ante un régimen por el que se sentía rechazada.

Azaña comprendía que la campaña antirrepresiva y la que él mismo impulsaba, creaban un clima emocional de muy alta graduación, pero creía poder dominarlo: «Nosotros vemos el torrente popular que se nos viene encima, y a mí no me da miedo el torrente popular ni temo que nos arrolle; la cuestión es saber dirigirlo, y para eso nunca nos han de faltar hombres; (...) mi obligación más neta (...) es no permitir que esa enorme fuerza popular se extravíe» (8). Su optimismo no partía, sin embargo, de ningún estudio de la situación política o de la actitud de aquellos partidos obreristas con quienes no tendría más remedio que aliarse. Sin duda pensaba meter en cintura, desde el gobierno, a los más discolos de sus aliados. La experiencia del primer bienio, cuando la díscola CNT le hundió, debió de haberle hecho reflexionar, pero no hay indicio de ello en sus escritos. Y la confianza en que «no le faltarían hombres» contradecía las observaciones de sus diarios, según las cuales si algo faltaba al republicanismo eran hombres «que supieran hacer bien las cosas». Pero tal vez ahora apareciesen.

Al margen de esos problemas, el hombre del primer bienio tuvo entonces su gran momento. Casas Viejas y luego las elecciones de 1933 le habían dejado políticamente malherido, y luego la rebelión de octubre pareció el tiro de gracia para su carrera. Y he aquí que, milagrosamente, el tiro de gracia resultaba el bálsamo de Fierabrás. Eran sus enemigos los que debían echarse a temblar y era él quien con-

centraba en su verbo la energía unitaria de la izquierda, dispuesto a administrarla como Zeus su rayo.

Desde los moderados a los comunistas, pasando por la Esquerra y la mayor parte de los socialistas, todos clamaban por la unidad frente al centro derecha, frente al «fascismo». Los mismos republicanos parecían haber superado su tradicional disgregación, al haberse unido tres de sus partidos en el de Izquierda Republicana, capitaneado por Azaña, y otros dos en el de Unión Republicana, de Martínez Barrio y Gordón Ordás; los dos nuevos partidos coincidían, a su vez en la táctica a seguir. Claro que, aun así, el peso de las izquierdas republicanas seguía siendo liviano sin el concurso del PSOE.

Y a atraerse a los socialistas se dedicó Izquierda Republicana durante 1935, requiriéndolos a una nueva alianza por intereses comunes, similar a la del primer bienio, aunque ahora el gobierno que eventualmente saliera de esa alianza debería ser íntegramente *burgués*. El PSOE tendría la misión de apoyarlo desde fuera y encauzar el «torrente popular» por vías reformistas. A causa de los presos reinaba en el PSOE una opinión favorable al entendimiento y el mismo el mismo Largo, como ya vimos, terminó por admitir un programa *burgués* y sin pretender gobernar. Podría estimarse esta sorprendente concesión como producto del escarmiento de octubre, pero la realidad demostraría algo distinto. El contacto privilegiado de Azaña fue Prieto, y las negociaciones iban a cuajar en la liga electoral de izquierdas conocida en la historia como Frente Popular.

Por lo que se ve, el republicanismo jacobino distaba de representar en aquellos momentos una alternativa intermedia entre revolucionarios y conservadores sino que unía su suerte a los primeros. Lo hacía, sin duda, no con intención de secundarlos, sino de dirigirlos, como en alguna medida había ocurrido durante el primer bienio. ¿Pero quién se impondría a quién en la arriesgada alianza? El proyecto azañista tenía ante sí dos escollos formidables: el republicanismo de izquierdas era muy débil desde cualquier punto de vista, mientras que los revolucionarios eran muy fuertes. Y desde el hundimiento de la conjunción republicano-socialista, dos años atrás, había cambiado decisivamente el panorama político: el sector principal del PSOE había abandonado toda moderación, el PCE se configuraba como una verdadera fuerza, el poderío anarquista persistía, la derecha disponía de una potente

organización con gran arrastre de masas, y en el ambiente general dominaba la exasperación y el odio creados por la campaña sobre la represión en Asturias. Estos factores amenazaban hacer del Frente Popular en ciernes algo profundamente distinto de la vieja conjunción republicano-socialista.

Pero estos factores, que en la distancia parecen obvios, quizá no eran percibidos entonces con claridad por los jacobinos. En todo caso éstos apenas los tuvieron en cuenta al hacer sus cálculos. Su preocupación esencial giraba en torno a otro problema: si querían volver al poder, y todo indica que lo deseaban con auténtica ansia, debían auparse sobre el voto obrerista. Y así lo hicieron, sin reparar demasiado en riesgos. Ellos consideraban que era la única manera de conseguir una república «progresista», única que aceptaban, frente a las asechanzas de la derecha. En la derecha los miraban más bien como a los kerenskis españoles.

Capítulo XIII

Las esperanzas de la CEDA (I)

En la actitud de las derechas pesaba mucho, como hemos observado, el miedo a la revolución, pero también la esperanza de evitarla, y al comenzar 1935 había buenas razones para el optimismo. El año se presentaba como la oportunidad dorada de la CEDA. Frente a las izquierdas, había demostrado la falsedad del «fascismo» que le achacaban. Frente a la extrema derecha, monárquica o falangista, había probado que podía derrotarse a la revolución sin destruir la legalidad. La victoria de octubre había sido la de su política y dejaba despejado, en principio, el camino para aplicar su programa y calmar los ánimos con reformas. Los nubarrones revolucionarios que volvían a acumularse en el horizonte, aunque alarmantes, no tenían por qué llegar a cubrir el cielo. Por mucho que se agitase, la izquierda necesitaba tiempo para reponerse orgánica y políticamente, y entre tanto los vientos de la discordia podían ir amainando conforme la situación política y económica mejorase. Por lo demás, Gil-Robles disponía de un fuerte aliado, el Partido Radical, aun si la alianza estaba plagada de reticencias: en la derecha, por el influjo masónico y la corrupción imputadas a los radicales; y a su vez muchos de éstos, anticlericales y antimonárquicos viscerales, soportaban mal a la CEDA. También la Lliga, de Cambó, constituía un aliado poderoso, y asimismo el Partido Agrario. Entre todos dominaban el Parlamento.

Aun así, la derecha católica empezó el año a trompicones. La

campaña sobre la represión siguió ocasionándole quebrantos, y se había abierto un foso entre Gil-Robles y el presidente, Niceto Alcalá-Zamora, mientras los monárquicos hostigaban duramente su política. Además, el Partido Radical, un tanto rutinario y sin muchas ideas, mostraba escasa voluntad de seguir el consejo reiterado por *El debate*: «Y ahora, a trabajar».

La CEDA abordó enseguida el problema agrario, para el cual disponía de un ministro, Manuel Giménez Fernández, imbuido de la doctrina social de la Iglesia y republicano abierto. A diferencia de quienes atendieron la reforma agraria en el primer bienio, Fernando de los Ríos y Marcelino Domingo, que desesperaban a Azaña por su ineptitud, y asustaron a los propietarios —no sólo a los grandes— más que beneficiaron a los jornaleros, Giménez conocía bien lo que se traía entre manos, era resuelto, y su jefe político le respaldaba.

Contra lo que alguna propaganda ha sostenido, la reforma agraria no fue abolida por Lerroux al llegar al poder a finales de 1933, sino mantenida bajo la gestión del competente ministro Cirilo del Río, el cual triplicó en 1934 el ritmo de asentamiento de colonos, en comparación con el primer bienio. Al llegar Giménez, empezó con el problema de los yunteros. Éstos poseían aperos y yuntas de mulas, pero no tierras, y en 1931 el gobernador de Extremadura los había asentado —ilegalmente— en fincas ajenas y sin pagar renta a los dueños, quienes habían recurrido, pidiendo su expulsión. En febrero de 1934 los tribunales, rechazando los recursos, habían autorizado a los yunteros a seguir en las fincas solo hasta el otoño, plazo dado por el gobierno de Azaña (A).

A: Tuñón de Lara afirma que 28.000 yunteros fueron desahuciados en febrero de 1934, lo que suena improbable. Los yunteros no debían superar ese número, aunque R. de la Cierva los cifra en 40.000. Gil Robles habla de unos 20.000 en noviembre de 1934. (*No fue posible la paz*, p. 177 y ss). Lo arriba expuesto procede de E. Malefakis (1).

Ante la miseria en que caerían al cumplirse el plazo, Giménez hizo prorrogar por un año la ocupación de tierras, con pago de renta, contra la cerrada oposición de monárquicos y agrarios. La medida debió de prorrogarse también luego, porque el general Queipo de Llano la refrendó al sublevarse en julio de 1936.

Resuelto a cambiar la anterior ley de reforma agraria, manifiesta-

mente defectuosa, Giménez evitó no obstante romper bruscamente con lo antes hecho, y ordenó asentar 10.000 colonos para 1935; pocos, pero bastantes más que en 1932-33. Junto a ello, redujo drásticamente el inventario de tierras expropiables, demasiado amplio, que desvalorizaba millares de fincas con perjuicio para numerosos campesinos (**B**); impuso la indemnización por principio, también para las tierras de los «grandes de España», confiscadas *revolucionariamente* en el bienio azañista; fijó un máximo de extensión para una sola finca, etc.

B: Escribe Azaña en su diario el 10 de agosto de 1931: «También se ignora la cabida total de las fincas sometidas a expropiación. (...) Tal como va el proyecto nos apoderaremos de una tal masa de tierras que no tendremos braceros a quien dárselas, ni dinero ni crédito para que las labren, ni organización administrativa ni técnica para hacer la distribución» (2)

Esta «reforma de la reforma» mejoraba aspectos de la del primer bienio sin alterarla de modo fundamental, y probablemente tampoco tenía mucha viabilidad (3).

A medias le salió la Ley de Arrendamientos Rústicos, pieza clave de sus planes, diseñada para aumentar el censo de pequeños y medios propietarios en el centro y sur del país. Facilitaba condiciones favorables de arriendo y aparcería, un crédito agrario adecuado y el acceso a la propiedad del suelo, orientación similar a la de la Ley de Contratos de Cultivo, de la Generalidad, y que debería frenar las alteraciones campesinas. Pero chocó con la barrera de los monárquicos, el Partido Agrario y la Lliga, así como de un vasto sector de la propia CEDA, defensores a ultranza del derecho de propiedad, y animados además de un espíritu de revancha por el aire de *trágala* con que se había legislado en el primer bienio.

C: Suele citarse, como muestra del cerrilismo de aquellos diputados, la *boutade* del tradicionalista Lamamié de Clairac: «Como el ministro de Agricultura siga citando encíclicas de Papas para defender sus proyectos, yo le aseguro a usted que terminaremos haciéndonos cismáticos griegos»

Muchos propietarios querían desahuciar a los arrendatarios, y a menudo lo hicieron, con actitudes a veces desalmadas, que alimentaban los odios y hacían perder votos a la CEDA. Un boletín interno del

partido llamaba a aquellos patronos «cómplices de la revolución»(4).

Tras mucho debate fue aprobada la ley, a mediados de marzo, pero «la triste verdad era que, en su última redacción, el magnífico proyecto de arrendamientos rústicos aparecía notablemente desfigurado», resume Gil- Robles. Revés muy sensible, pero no total, pues preceptos de la ley favorables a los campesinos pobres y sin tierra siguieron vigentes bajo el gobierno izquierdista del año siguiente, señala Gil-Robles (5).

Y a finales de marzo cesaba Giménez en su cargo, junto con los otros dos ministros cedistas entrados en el gobierno a principios de octubre anterior. Esta salida, en protesta por el indulto de González Peña, caudillo de la rebelión asturiana, era un coletazo de la insurrección izquierdista. Todavía en 1935 los rebeldes lograban, no obstante su derrota, provocar serias crisis.

La retirada de la CEDA duró un mes. Su fuerza parlamentaria le permitía volver, y lo hizo con nuevos bríos, a principios de mayo, obteniendo cinco ministerios en vez de los tres anteriores. Ello disgustó mucho al presidente, y más todavía que entre esos ministerios estuviera uno tan decisivo como el de la Guerra, y precisamente en manos de Gil-Robles. Pero la Bolsa subió. Muchos creyeron que por fin acababa el largo período de indecisiones y crisis desde finales de 1933, y que comenzaba una fase de estabilidad y energía.

Una preocupación del gobierno fue la instrucción pública, en la que, contra un tópico propagandístico, superó a la etapa izquierdista, aun sin salir de la mediocridad. El presupuesto aumentó en relación a 1934 (de 341 a 344 millones de pesetas), y más al primer bienio (251, 267 y 310 millones en 1931, 1932 y 1933 respectivamente). Como porcentaje de los presupuestos totales siguió muy bajo: 6,6 por ciento (7,08 en 1934), pero también por encima del primer bienio. La construcción de escuelas prosiguió a buen ritmo —algo inferior al del bienio azañista—, y el permiso a la enseñanza religiosa salvó el grave vacío educativo, creado por la legislación de 1931 (6).

La vuelta al poder permitió a la CEDA elaborar proyectos que debían mejorar la vida de los trabajadores y mitigar los rencores sociales. El ministro Federico Salmón puso a punto una ley de arrendamientos urbanos favorable a las familias modestas, así como inversiones y ayudas a los empresarios que creasen puestos de trabajo. Se

trazó un ambicioso esquema de repoblación forestal, y un «gran plan de pequeñas obras públicas», diseñado por el valenciano Luis Lucía, con vistas a absorber el desempleo. Se trataba de comunicar el casi millar de pueblos y más de ocho mil aldeas y caseríos semiaislados, de llevar el agua a los tres mil que carecían de ella, de eliminar buena parte de los 16.000 pasos a nivel etc. (7)

Una falla de importancia consistió en que, en mayo, Gil-Robles no osó traer nuevamente a Giménez Fernández. La cartera de Agricultura pasó al Partido Agrario, que fijó para el Instituto de Reforma Agraria la asignación financiera máxima antes considerada mínima: 50 millones de pesetas. Esa cantidad reducía a casi nada la reforma, la cual, protestó la Falange, tardaría así 160 años en completarse. Fue aceptada en cambio la «utilidad social» de la propiedad, principio revolucionario más que reformista, observa el historiador Malefakis. Definitivamente la reforma agraria, suponiendo que fuera la verdadera solución para el campo español, no tenía suerte ni con las izquierdas ni con las derechas (8).

Otro asunto político quedó mal resuelto, al permanecer suspendido el estatuto catalán. Recuperó las competencias autonómicas, excepto el orden público, una Generalidad provisional encabezada por el radical Pich i Pon, hombre de origen humilde acusado de haberse enriquecido con la política y de ejercer un descarado amiguismo. La Esquerra supo capitalizar hábilmente la suspensión, pese a que ella misma la había provocado. Cambó opina que de haberse dado «satisfacción a Cataluña, se habría anulado por muchos años la fuerza de las izquierdas catalanas, sin cuyo concurso no era posible crear un movimiento revolucionario de izquierdas españolas. En este momento se pudo juzgar la incapacidad política de Gil Robles» (9). Complicó el problema una oleada de atentados y atracos anarquistas, que sólo remitió al declararse la ley marcial en la región, desde principios de julio a finales de septiembre.

En conjunto, las huelgas y violencias disminuyeron mucho, y el año resultó el mejor de la república en cuanto a orden público. Claro que se trataba de una paz social sumamente incierta, mantenida bajo el estado de guerra al principio, y de alarma después. El sosiego solo reflejaba la pasajera debilidad revolucionaria, y bajo la superficie crecía la agitación de los espíritus. De todas formas hubiera sido imposi-

ble calmarlos en tan poco tiempo.

Gil-Robles se dedicó a reforzar el ejército, punto absolutamente vital, en su concepto. Los vientos de guerra europea arreciaron en octubre, cuando Italia invadió Abisinia y aumentó el nerviosismo en el Mediterráneo, donde Mussolini apetecía las Baleares. La CEDA creía imprescindible un rearme en pro de «una auténtica neutralidad», la cual exigía «la posesión de la fuerza» para ser respetada (10). Pero probablemente pesaba aun más la experiencia de la pasada insurrección, ante la cual las fuerzas armadas, salvo las africanas, habían demostrado peligrosas inepticias. Vistos los anuncios de nuevas intentonas, Gil Robles quiso disponer de un ejército disciplinado y fiable.

Para ello emprendió otra «reforma de la reforma» azañista, si bien no alteró sus líneas maestras. Devolvió al ministerio de la Guerra la aviación, adscrita por Azaña a la presidencia del gobierno; recuperó los nombres tradicionales de los regimientos, eliminados por aquél; ante las tensiones mediterráneas fortificó concienzudamente la base naval de Cartagena, creó un centro de Estudios y Experimentaciones y mejoró la dotación de las tropas y hospitales. Quedaron sin cumplir sus planes para un sistema de movilización más ágil, y la importación de varios prototipos de aviones para ser fabricados en España, así como la compra de material pesado en Francia y Alemania. Tampoco le dio tiempo a restablecer la Academia Militar General, cerrada en el primer bienio pese a su prestigio dentro y fuera del país. El rearme, aunque intenso, duró poco, y finalmente resultó muy modesto a causa de las restricciones presupuestarias: en 1935 se gastaron en defensa (Guerra y Marina), 596 millones de pts., frente a los 693 millones de 1933 o los 616 de 1932. No dio tiempo a emplear un crédito extraordinario acordado (11).

No menor trascendencia debían de tener los cambios en los mandos y en el estilo y concepción castrenses. La reforma de Azaña racionalizó el ejército y con el tiempo hubiera mejorado su eficacia, pero de momento había tenido varios efectos negativos, debidos en parte a la política de *republicanización* del mando. Un arduo obstáculo a esa política nacía, como observaba con fastidio el propio Azaña, de la mediocridad profesional frecuente en los milites republicanos. La promoción de ellos, a menudo masones, causaba desánimo e insatis-

facción entre la oficialidad, la mayoría de la cual no se sentía especialmente republicana —ni monárquica—, y desaprobaba la arbitrariedad y el favoritismo que creía detectar en los nombramientos. Los escasos conspiradores monárquicos (**D**), agrupados en la asociación clandestina UME (Unión Militar Española) explotaban el descontento (12).

D: Un conciso y excelente balance crítico de la reforma azañista se encuentra en Ramón Salas Larrazábal, *Los datos exactos de la guerra civil*, pp 28 y ss.

Otro factor, difuso pero nada desdeñable, perturbaba a las fuerzas armadas: el talante antimilitar, más que antimilitarista, de las izquierdas (pese a que sus próceres habían intentado imponerse, en 1930, precisamente por medio de un golpe militar). Azaña solía usar un tono despectivo hacia el ejército, y con frecuencia los oficiales sufrían vejaciones o provocaciones callejeras, por no hablar de la agitación política en los cuarteles.

Con este panorama, Gil-Robles pudo afirmar que su gestión en Guerra restablecía las normas elementales de disciplina y orden. El principal asesor e inspirador de sus medidas fue Franco, nombrado jefe del Estado Mayor Central. Como subsecretario eligió al general Joaquín Fanjul, un vasco impetuoso, autor de estudios de sociología militar; y como Inspector General, y luego jefe de la aviación, a Manuel Goded, de prestigioso historial en África. Los tres figuraban entre los mandos más capaces, pero tenían también otras características. Fanjul era de convicciones monárquicas bien conocidas, y Goded algo más: un conspirador activo contra la república (lo había sido también contra la dictadura de Primo). Sin embargo no existen indicios de que los nombramientos respondieran a una decisión golpista.

Las esperanzas de la CEDA (II)

Franco se convirtió en la bestia negra de las izquierdas después de la insurrección. Estaba amenazado de muerte, junto con Calvo Sotelo y otros dirigentes derechistas, o así lo creía él. Enseguida organizó una sección de información anticomunista y contraespionaje. Seguía, no obstante, afecto a la legalidad, según asegura en sus *Apuntes*: «Nuestro deseo debe ser que la República triunfe (...) sirviéndola sin reservas, y si desgraciadamente no puede ser, que no sea por nosotros». Ciertamente a él se debía en buena parte el mantenimiento de la legalidad frente al asalto de octubre y, al igual que Gil Robles, tomaba muy en serio la posibilidad de una nueva situación extrema que obligara a intervenir al ejército. Gallego precavido, sintetizará así su actuación como jefe del Estado Mayor: «se otorgaron los mandos que un día habían de ser los peones de la cruzada de liberación y se redistribuyeron las armas en forma que pudiesen responder a una emergencia» (1). Apreciación optimista, pues Azaña le estropeó sus combinaciones en 1936.

Por encima de estas reformas, la CEDA aspiraba fundamentalmente a otras dos: la de la ley electoral y la de la Constitución. En cuanto a la primera, su principal rasgo era la fortísima prima que otorgaba a las mayorías. En Madrid, por ejemplo, la candidatura ganadora recibía 14 escaños, y la segunda solo 4, aunque la diferencia en votos fuera nimia. Las Cortes no reflejaban así la verdadera opinión pública. El sistema favorecía las coaliciones y todavía hoy es casi imposible distinguir con precisión los votos de cada partido durante la república. «Resultaba incomprensible, desde un punto de vista teórico, la defensa por parte de las izquierdas, que tanto alardeaban de antifascistas, de un sistema que no era sino puro fascismo: el mismo del italiano Di Bianchi, adoptado por Mussolini para consolidar su situación», observa el líder de la CEDA (2).

La ley había sido pensada en provecho de los republicanos de izquierda que, siendo minoritarios y divididos en varios partidos, se veían forzados a coligarse y podían adquirir un poder muy por encima del que correspondía a sus votos... siempre que fueran del brazo de los socialistas y éstos admitiesen la hegemonía republicana. Con tales condiciones, las izquierdas contaban con ganar los comicios, aun-

que fuese por poco, e imponerse luego en las Cortes abrumadoramente. De ahí que Azaña rechazase en 1935 la reforma de la ley, si bien la había descalificado en noviembre del 33, cuando la misma se había vuelto contra los suyos.

EL MINISTRO GIMENEZ FERNANDEZ La ley facilitaba en principio la gobernabilidad y disuadía la proliferación de partidos, pero, en opinión de Gil-Robles, Alcalá-Zamora y otros, tenía una desventaja mayor, al propiciar vuelcos políticos, temibles en una sociedad tan polarizada. El ministro Giménez Fernández expresaba en *El debate*, el 19 de octubre de 1935 su temor a «consecuencias fatales, porque si triunfasen las extremas derechas, tras unas conmociones se desembocaría en el comunismo, y si triunfasen las extremas izquierdas, después de otras oscilaciones se iría a parar inevitablemente en el fascismo».

La CEDA propuso en enero un sistema proporcional, con sólo una prima ligera a las mayorías, lo cual debiera haber gustado a los pequeños partidos. Pero éstos se opusieron, salvo la Lliga, pensando que obtendrían menos escaños yendo por su cuenta que mediante acuerdos preelectorales. La propuesta, rechazada a derecha e izquierda, resultó inviable. Destacaron en su resistencia los reformistas y los agrarios:

«La ofuscación complaciente de estos dos grupos iba a tener todo el daño para ellos posible (...) Los dos jefes, (...) Melquíades Álvarez y Martínez de Velasco, al conservar el funesto método electoral irían, tras la anulación política a la extinción física: uno y otro perdieron injustamente el acta en las elecciones de febrero, y la vida en los asesinatos de agosto», observa agudamente Alcalá-Zamora (3).

También tropezó con inesperados escollos la reforma de la Constitución, la promesa electoral de mayor fuste hecha por la CEDA. En la necesidad de cambiarla convenía Alcalá-Zamora, a cuyo juicio aquella tenía un carácter sectario: «obedeciendo a teorías, sentimientos o intereses de partido (...) sin cuidarse apenas de que se legislaba para España, como si ésta surgiese de nuevo o la Constitución fuese a regir en otro país», y creaba «más que una sociedad abierta a la adhesión de todos los españoles, una sociedad estrecha con número limitado de accionistas y hasta con bonos privilegiados de fundador», que «invita a la guerra civil». Para Gil-Robles era «la menos viable de cuan-

tas conoció España», (seis hasta entonces) y condenaba a la nación a «los más peligrosos vaivenes. Nunca habría paz entre los españoles» **(A)** (4)

Según el artículo 125, modificar la Constitución exigía, durante los cuatro primeros años, el acuerdo de dos tercios de los diputados, y mayoría absoluta en lo sucesivo. Mayoría suficiente existía desde las elecciones de 1933, pero cedistas, monárquicos y radicales discrepaban sobre los puntos a cambiar. Los trastornos de 1934 dejaron el asunto en suspenso, pero una nueva ocasión se abrió en 1935. En los primeros días del año, don Niceto urgió al gobierno a poner manos a la obra. Él quería revisar no solo los artículos sobre religión, sino también los referentes a la familia, cultura, poder presidencial, cámara única, privilegios tributarios de las autonomías, enseñanza, etc. Con ese guión, la CEDA propuso derogar las disposiciones antirreligiosas, crear un Senado como elemento moderador, cambios en el régimen autonómico, la enseñanza, el derecho de propiedad etc. Cuarenta artículos quedaban afectados, lo que a los monárquicos pareció muy poco, y a la izquierda un atentado contra el espíritu laico y democrático del régimen.

El artículo 125 especificaba algo más: acordada la reforma, «quedará automáticamente disuelto el Congreso y será convocada nueva elección (...). La Cámara así elegida en funciones de Asamblea Constituyente decidirá sobre la reforma propuesta». Este requisito minaba adrede el afán reformista de los partidos, al vincular la revisión a la pérdida de sus escaños. Por tanto, abría el camino a un triunfo electoral de las izquierdas, las cuales reafirmarían sin duda la Constitución de 1931. Sonaba increíble que pudieran ganar las izquierdas al poco de la revuelta, pero cada mes que pasaba su victoria se veía menos remota, ante la debilidad y desconcierto del gobierno, las crisis y la relativa frustración de sus planes de mejora social.

Por ello Gil-Robles quiso ganar tiempo: «pretendí convencer al señor Alcalá-Zamora, cuantas veces hablé con él, de que era preciso, antes de plantear la revisión constitucional, acometer algunas otras graves cuestiones —reforma tributaria, paro obrero, obras públicas, rearme— (...) Así, (...) el Gobierno tendría a su favor un balance de tan positivos resultados que no podría lícitamente vacilar la opinión entre la disyuntiva de consagrar esa política o lanzarse a la aventura de un

brusco viraje hacia la izquierda» (6)

Pero Alcalá-Zamora interpretaba la pretensión de Gil-Robles de otra manera: como una obstrucción a la misma reforma «por el temor a perder en nuevas elecciones su posición de predominio parlamentario» (7). Esta incomprensión entre los dos prohombres, tan reveladora, tenía un largo trasfondo. En principio no debiera haber sido difícil la armonía entre ellos, siendo los dos católicos y esencialmente conservadores, tanto más cuanto que coincidían en sus juicios sobre asuntos políticos tan fundamentales como la constitución y la ley electoral. Por otra parte, si Gil-Robles manifestaba muy escasa simpatía hacia la república, Alcalá-Zamora había hecho lo esencial de su carrera al servicio del trono, como ministro en dos ocasiones, y solo se había adherido a aquella muy a última hora.

Pero estos acuerdos básicos no bastaron y primarían las diferencias de otro tipo, hasta el punto de que el presidente iba a revelarse un enemigo de la derecha no menos peligroso, sino incluso más que las propias izquierdas. Para empezar, uno y otro diferían radicalmente en su postura ante el régimen. Pese a su conversión reciente, Alcalá-Zamora bien podría ser titulado «padre de la república», y probablemente él se consideraba algo así, ya que había unido y acaudillado en 1930 el movimiento antimonárquico, pese a que en él predominaban las fuerzas de signo jacobino y socialista; y lo había llevado, junto con Maura, a su sorprendente victoria en abril de 1931. Había logrado entonces dos objetivos fundamentales: aquietar el recelo de la masa conservadora hacia la república, y atenuar los ímpetus anticlericales de la coalición izquierdista. Por este éxito estimaba él que le era debida la adhesión de la opinión conservadora, con cuyo auxilio podría «centrar el régimen», régimen que tan suyo consideraba, como expresan sus memorias.

Pero la decepción le había ensombrecido ya en las primeras urnas, en junio de 1931: había quedado «solo con 22 diputados en la tarea de hacer frente a los partidos de extrema izquierda»; las gentes de derecha habían optado por una «torpe y suicida deserción», a causa de hallarse «ofuscadas y como siempre mal dirigidas» (8). El liderazgo conservador debiera haber recaído precisamente en don Niceto. ¿Por qué no fue así? Muy probablemente por la quema de conventos mes y medio antes de las elecciones, en la cual su papel

había sido cualquier cosa menos airoso, y que había concluido con el castigo y mayor persecución a las víctimas. El suceso había traumatizado a la población conservadora y la había alejado del padre de la república. En cambio, el prestigio entre las izquierdas de quien las había dirigido a la victoria, y la falta de personajes de talla para sustituirle, le permitió continuar a la cabeza del gobierno por un tiempo, y luego ser nombrado presidente de la república.

La frase sobre la «mala dirección» de las derechas revela mucho. Esa «mala dirección» la constituían, precisamente la CEDA y su jefe, en quien veía el presidente una especie de usurpador, aparte de un personaje poco afecto al régimen por él fundado y que tan suyo sentía. Por eso la cordialidad de Alcalá-Zamora hacia Gil-Robles fue siempre nula.

Ya en abril de 1934 habían chocado, al oponerse el presidente a la vuelta de Sanjurjo y sus secuaces a sus cargos, en función de una amnistía. Desafiando a las Cortes, don Niceto había denunciado una supuesta coerción sufrida en sus derechos, y forzado un conflicto entre la presidencia y el parlamento. Gil-Robles, indignado, había propuesto a Lerroux derrotar al presidente en Cortes, pero el radical, en lugar de hacerlo, había preferido dimitir él mismo. El líder cedista quedó convencido de que el presidente, a quien tenía por persona entrometida y perturbadora, y con memoria de elefante para los agravios, «no nos perdonó jamás que hubiéramos querido destituirle» (9). En octubre del 34 el presidente había resistido a la entrada de tres ministros de la CEDA en el gobierno; después había contrariado su política en cuanto a la represión de la revuelta izquierdista; y nunca había dejado de manifestar suspicacias hacia el partido católico.

Gil-Robles hubiera preferido la monarquía, pero aceptaba la república. También aceptaba sin alegría la democracia, por considerarla proclive a la demagogia y la revolución. Con todo, había defendido la legalidad en octubre del 34, y se proponía cambiarla dentro de las normas estatuidas. Deseaba ante todo alejar el peligro revolucionario y, con él, la guerra civil. En sus memorias insiste mucho en ello, y no hay la menor razón para dudar de su sinceridad. Reprobaba la violencia, no respondió con ella a los atentados y agresiones que su partido soportaba, ni creó milicias. De ahí que aspirase empeñadamente a aplicar su programa económico y social antes de afrontar la revisión

constitucional y la consiguiente disolución de Cortes.

Para Alcalá-Zamora esa aspiración solo ocultaba la sed de poder de una «mala dirección» derechista. Según avanzaba el año, iba convenciénese de que la popularidad de la CEDA disminuía rápidamente —y él hacía lo posible para que disminuyera— y de que, después de las experiencias del azañismo y del gobierno participado por el partido católico, maduraba en la opinión pública un estado de ánimo templado, centrista, capaz de equilibrar de una vez a la república. Si a Gil-Robles le daba escalofríos la revolución, Alcalá-Zamora estimaba ese peligro poco inminente, sobre todo después del fracaso de la revuelta asturiana. Dos actitudes completamente distintas, de las que derivaban apreciaciones políticas no menos opuestas.

Por esas razones, al llegar el otoño de 1935, el presidente estaba dispuesto a utilizar sus prerrogativas para poner punto final a la experiencia de centro derecha iniciada a finales de 1933. La esperanza de Gil-Robles de que las Cortes cumplieran los cuatro años que en principio les correspondían, es descartada por Alcalá-Zamora como «ilusión insensata» (10). Sensata o insensata, él estaba resuelto a que no pasase de ilusión.

La pugna entre los dos políticos iba a marcar los últimos meses del año 1935, y tener consecuencias definitivas para la república.

Notas

A: Opiniones parecidas eran frecuentes. Madariaga entiende que la Constitución tenía tres grandes errores: impedía al ejecutivo tomar medidas adecuadas para asegurar el orden, por lo que la república «se vio precisada a protegerse contra su propia Constitución mediante leyes de excepción como la de Defensa de la República o la de Orden Público»; prescindía del Senado, lo cual «arrojó por la ventana una de sus más seguras garantías contra los violentos movimientos de opinión», y atacaba innecesariamente a la opinión y los intereses católicos. Asegura, algo vagamente, Alcalá-Zamora, «en marzo de 1936 oí a Azaña, ya de nuevo jefe del gobierno, que él hallaba la Constitución de 1931 aún mucho más defectuosa que yo la veía, pero que por conveniencia de táctica electoral había hecho a la reforma una oposición enérgica, contraria a su convicción» (5)

Capítulo XIV

Eliminación de Lerroux y expulsión de Gil-Robles del Gobierno (I)

La decisión de don Niceto de equilibrar la república “centrándola”, debía apoyarse, en principio, en el Partido Republicano Radical, el más importante, con mucho, de los partidos centristas, dirigido por Alejandro Lerroux. Aunque antaño había sido un clásico partido jacobino, de lo que conservaba resabios, con el tiempo había pasado a preferir “un acuerdo a una barricada” y a respetar, al menos como un hecho inevitable, la religión católica. El talante conciliador del Lerroux anciano le había llevado a claudicar en los conflictos tenidos con Alcalá-Zamora, y a aceptar los indultos de Pérez Farràs y luego el de González Peña. Su partido contaba con el mayor número de diputados, después de la CEDA, y su alianza con ésta había permitido, a pesar de roces, crisis y altibajos, la gobernación del país en 1934 y 1935.

Como con Gil-Robles, el presidente tenía coincidencias importantes con Lerroux, en especial el interés por alejar a la república de extremismos. Por tanto el presidente se apoyaba en el Partido Radical. Pero lo hacía procurando atraerse a militantes destacados a espaldas de su líder, según sospechaba éste, no del todo erróneamente. Como iba a ocurrir con Gil-Robles, los intereses comunes no iban a fructificar en un buen entendimiento. Don Niceto despreciaba al jefe radical a quien consideraba incompetente y corrupto o favorecedor de la corrupción; y éste le respondía con similar aversión,teniéndole por

un oportunista semidemente, sin criterio político ni conocimiento de la realidad social. Los desencuentros venían desde la misma alianza antimonárquica de 1930, cuando Lerroux, el republicano más antiguo y con mayor historial de lucha, el que había resucitado el republicanismo después de la desastrosa I República, había debido ceder la dirección del movimiento a don Niceto, un advenedizo recién llegado.

Así pues, el presidente veía en Lerroux un político poco afecto y nada indicado para encabezar la opción centrista que él deseaba, y por eso había obstaculizado de muchas maneras sus actos de gobierno. Su animosidad contra él coincidió, en el verano de 1935 con las ansias de desquite de Azaña y Prieto. Pues Lerroux había acosado al gobierno republicano-socialista, empujando a su caída después de Casas Viejas, había vencido a los dos izquierdistas en las elecciones de 1933 y, sobre todo, había derrotado la insurrección de octubre, obligando a Prieto a exiliarse, y a Azaña a soportar dos intentos de procesamiento. En verano de 1935, llegaría a ambos la ocasión de devolver los golpes, por medio de un escándalo en torno a unas corruptelas menores, el llamado *straperlo*, en el cual iba a desempeñar su papel don Niceto. El asunto, expuesto con cierto detalle en *Los personajes de la república vistos por ellos mismos*, lo resumiré aquí brevemente.

El *straperlo* era una ruleta especial que un judío holandés llamado Strauss quiso introducir en España, donde estaban prohibidos los juegos de azar desde la dictadura de Primo. Para ello “untó” con algunos regalos a políticos radicales. Como su inversión no fructificaba en un permiso para explotar el invento, el peculiar empresario trató de chantajear a Lerroux, que le despreció. Prieto, emigrado en Ostende, y Azaña, desde Madrid, contactaron con el chantajista, y urdieron, según todos los indicios, una hábil intriga para complicar al líder radical y a su partido.

Consistió el plan en que el holandés enviase a Alcalá-Zamora un informe de los presuntos sobornos. El carácter delincuente de Strauss queda claramente de manifiesto, pues de otro modo hubiera recurrido a los tribunales, si se sentía perjudicado. Y no menos manifiesta resulta su utilización política por otras manos. El recurso al presidente de la república como instrumento de un chantaje resulta en verdad insólito, aunque Alcalá-Zamora, en sus memorias ni siquiera señala

esa anomalía; y no podía ocurrírsele a Strauss, pero sí a quienes conocían dos detalles importantes de la política española: la inquina del presidente hacia Lerroux, y el deseo de la extrema derecha de romper la alianza entre la CEDA y el Partido Radical, base, como ya señalamos, de la gobernabilidad del país por entonces. Romper esa alianza supondría crear una situación política muy difícil, frustrando a las derechas moderadas y facilitando el camino hacia un golpe que acabase con la república. También interesaba a la izquierda revolucionaria y jacobina romper la alianza, para dar fin a la experiencia centroderechista y adelantar las elecciones. La ingeniosa intriga había de explotar asimismo el miedo de la CEDA y de otros políticos a aparecer ante la opinión pública mezclados en el asunto.

El informe de Strauss suponía para el presidente un arma de doble filo. Por un lado le facilitaba desembarazarse de Lerroux, pero por otro resultaba él mismo chantajeado, pues si no utilizaba los documentos contra el jefe radical, él mismo podía ser presentado como encubridor de un delito. Y aunque tal acusación sonara muy forzada, todos conocían la capacidad de Prieto y Azaña para crear movimientos de opinión explotando apariencias de culpa.

Don Niceto habló del asunto con Lerroux, quien no le dio importancia, pues creyó que se trataba de una intriga del propio Niceto y del ministro de Gobernación, Manuel Portela Valladares. Éste era hombre de confianza del presidente, de cuya mano iba pronto a adquirir gran relevancia política. Lerroux se sentía espiado por él, y Gil-Robles no soportaba su conducta “sinuosa y equívoca” (1). Don Niceto se reservó los documentos de Strauss, pero el 20 de septiembre aprovechó una crisis parcial inesperada para sustituir a Lerroux a la cabeza del gobierno, nombrando para el puesto a un político sin respaldo parlamentario, Joaquín Chapaprieta, ministro de Hacienda desde mayo. Chapaprieta aceptó el cargo ante el peligro de una disolución de Cortes. El mismo temor hizo entrar en ese gobierno Gil-Robles, siempre en Guerra, y a Lerroux, en Estado, amargados ambos, el uno por no haber sido llamado a gobernar, como correspondía en buena lógica parlamentaria, y el otro por haber sido expulsado de la jefatura del gabinete.

Quizá don Niceto hubiera guardado para sí los papeles de Strauss, por no servir de cauce a un delincuente, pero en un banquete en des-

agravio a Lerroux, éste hirió con una alusión al presidente, quien, furioso, entregó los documentos al gobierno. A partir de ahí, cada cual desempeñó su papel. Chapaprieta y Gil-Robles, asustados ante el chaparrón a punto de descargar, dieron estado público a las acusaciones y las llevaron a las Cortes, el 28 de octubre, antes de que el fiscal hubiese dictaminado sobre el posible delito. Y en las Cortes la extrema derecha monárquica y el falangista José Antonio se encargaron de abrumar al Partido Radical y a su caudillo. Lo mismo hicieron en la calle las izquierdas, esparciendo al máximo las sospechas sobre la derecha en general en una agitación implacable, combinada con la permanente sobre la represión de Asturias.

Para unas corruptelas casi insignificantes el escándalo fue inmenso, y cuarteó la alianza de centro derecha. Las recriminaciones y desconfianzas envenenaron la relación entre los socios del gobierno. Los radicales acusaban a Gil-Robles, y éste creía que Chapaprieta había actuado como instrumento de Alcalá-Zamora, para comprometerle. Si bien Lerroux salió inculpaado de las Cortes, hubo de dimitir, y su partido, abandonado por sus aliados y objeto de un sañudo ataque desde los extremos, sufrió una crisis devastadora. El terreno intermedio entre derechas e izquierdas había desaparecido, para satisfacción de los extremistas.

De momento el gobierno de Chapaprieta, que solo contaba un mes de antigüedad, sobrevivió. Aunque todos comprendían que la situación se había tornado muy precaria, tanto Gil-Robles como Chapaprieta se aferraron a las últimas posibilidades de desarrollar sus programas, convencidos de que una disolución de Cortes en aquellas circunstancias equivalía a un salto al abismo. “¡Mal momento para acometer una obra ineludible de restauración económica! —escribirá el líder cedista— (...) Sólo un grupo fuerte y disciplinado como el nuestro era capaz de emprender tan ambiciosa tarea (...) Pero la posición de la CEDA resultaba, por desgracia, bastante precaria. Combatida con verdadera saña por izquierdas y derechas, su mayor enemigo era, sin embargo, el presidente de la República (...) Se acercaba el momento inevitable de la ruptura, sentido por mí con indecible angustia, cuando el Ejército carecía aún de cohesión interna y de fuerza material bastante para imponerse a la revolución (...) El pavoroso fantasma de la guerra civil comenzaba a dibujarse, con todos sus horrores (...) Los partida-

rios de las soluciones catastróficas iban pronto a salirse con la suya". (2)

En medio de la agitación de aquellos meses, la CEDA puso a punto su "gran plan de pequeñas obras públicas", para combatir el paro, hizo aprobar el 2 de noviembre en las Cortes. En los meses pasados había apoyado también la labor de Chapaprieta desde el ministerio de Hacienda primero, y como jefe del gobierno después. Con él, así como con Lerroux, se había sentido Gil-Robles bien compenetrado. Chapaprieta perseguía, mediante una Ley de restricciones, una depuración a fondo de las finanzas del estado, con poda de sus organismos. En septiembre había suprimido nada menos que tres ministerios; dos de ellos estaban en manos de la CEDA, la cual aceptó el sacrificio en bien de la causa. También había eliminado 4 subsecretarías, 20 direcciones generales y 300 coches oficiales, rebajado sueldos excesivamente altos y aumentado ligeramente los más bajos, etc. (3)

Chapaprieta era un tecnócrata, y tanto lo era que a sus memorias (A) apenas si asoman el anarquismo, el marxismo o el fascismo, o revueltas como las del 17 o del 34, que él vivió con un curioso alejamiento. No obstante, su pericia en materia económica y hacendística tiene relevancia en un tiempo en que las preocupaciones económicas de los políticos solían ser sumarias (él habla con sarcasmo de los conocimientos económicos de Azaña). (4)

Su proyecto incluía racionalizar el gasto público y aumentar los ingresos gravando más a los pudientes. Vigiló los fondos reservados, tradicional cauce de corruptelas, e impuso a los ministros mayor sobriedad y control del gasto. Reformó la Ley de contabilidad "corrigiendo el abuso de que la intervención general del Estado, a pesar de su nombre y de su función, no interviniese ni supiese de qué forma y en qué realmente se empleaba el dinero que se autorizaba a librar". Su éxito parece haber sido notable, pues redujo a la mitad los 800 millones de pesetas de déficit inicial del presupuesto de 1935, y consiguió aumentar los ingresos en 250 millones de pesetas: "Jamás se alcanzó por la Hacienda española una tan alta recaudación". Ello le permitió, según se ufanaba, atender mejor que nunca, a pesar de la política de ahorro, los gastos en obras públicas, sociales y defensivas, y prever un aumento de los mismos para 1936. "Tenía la seguridad (...) de

que de su ejecución dependía el resurgir de España. Aparte del efecto moral, tan necesario para la psicología de nuestro pueblo, de un saneamiento y de una adecuada organización de la administración pública, mis proyectos aseguraban la nivelación del presupuesto, y con unas finanzas saneadas, un crédito público inmaculado y poco usado, y precio bajo para el alquiler del dinero, se podía y debía acometer un potente renacimiento económico". (5)

Como resultado de las reformas emprendidas por los conservadores, 1935 fue el mejor año económico de la república, pese a que la renta *per capita* bajara algo (1.033 pesetas frente a 1.078 el año anterior). La producción agrícola resultó mediana y la industrial buena; pero lo principal fue que asomaron, por primera vez después de la parálisis de los años anteriores, signos serios de recuperación de la inversión privada, comenzó a sanearse la administración y se establecieron planes económicos razonables. Esta recuperación, de consolidarse, debería haber apuntalado la república. Pero en noviembre el régimen se tambaleaba. (6)

El problema principal provenía de la presidencia, y precisamente entorno a aquel punto esencial en el que más coincidían Gil-Robles y Alcalá-Zamora: la reforma de la constitución. Desde principios de año el presidente venía presionando en favor de su inmediato planteamiento. Tenía en ello un doble interés, por la reforma misma y porque ésta acarrearía la autodisolución de las Cortes, evitándole a él ese trabajo: deseaba liquidarlas desde principios de 1935. La cuestión tenía importancia crucial, pues si era él quien las disolvía, perdía la posibilidad de hacerlo con las siguientes, ya que la ley permitía al presidente dos disoluciones parlamentarias. No acababa ahí la cosa, pues las Cortes posteriores podían juzgar sobre esa segunda disolución, y si la consideraban injustificada el presidente quedaría automáticamente destituido. Alcalá-Zamora ya había apuntillado las Cortes constituyentes del primer bienio, y aunque él creía que esa disolución no debía computársele entre las dos de su derecho, le afligía la sospecha, por lo demás fundada, de que la mayoría de los partidos opinaba lo contrario. Así lo indica Chapaprieta, que trató a fondo al presidente por aquellos días. (7)

Ese temor explica por qué toleró durante un año entero a Lerroux y a Gil-Robles y hasta permitió a la CEDA —con profunda repugnan-

cia— ocupar cinco ministerios, entre ellos el de la Guerra. Pero conforme pasaban los meses iba haciéndose claro que la derecha no plantearía los cambios constitucionales mientras no se enderezase la situación política y económica, y a eso no estaba dispuesto. Su postura sobre la reforma varió entonces, y, dice Gil-Robles, “con un desdén ya francamente ostensible en la entrevista que con él mantuve el 21 de noviembre, se obstinó en dar por fracasados nuestros propósitos revisionistas (....) Su incalificable conducta quedó por completo al descubierto cuando en el Consejo del 2 de diciembre se inclinó (...) hacia una reforma del menor alcance posible (...) a cuya discusión no se opusieran los grupos políticos entonces alejados del poder”. Don Niceto quería ahora revisar sólo el artículo 125, es decir, el que establecía el propio procedimiento de la reforma, y escudaba su sorprendente giro en la conveniencia de aplacar a la izquierda. Todo indica que vislumbraba una victoria de la izquierda en las siguientes elecciones y que deseaba congraciarse con ella. (8)

Eliminación de Lerroux y expulsión de Gil-Robles del Gobierno (II)

La labor del gobierno prosiguió en noviembre en un clima de recelos, en el que Chapaprieta creía que Gil-Robles boicoteaba sus planes, y éste, a su vez, que aquel maniobraba en connivencia con don Niceto. Se sumaba a ello la furia de los radicales contra ambos, ante los prolegómenos de un nuevo escándalo que redondeaba el del *straperlo*. Se trataba de la denuncia de un militar de extrema derecha, Nombela, sobre el intento de pagar una indemnización indebida a un industrial, Tayá, con negocios en la Guinea. La denuncia, dirigida contra los radicales, intentaba contaminar a la CEDA y arrastrarla en la caída. Parece que Nombela faltó a la verdad en varios extremos, sobre todo en relación con la CEDA, y fue destituido, pero el fondo de su denuncia era real, aunque la indemnización no llegara a pagarse. El día 9 de diciembre, siguiente de aquel en que se había tratado el nuevo escándalo en las Cortes, Chapaprieta dimitía, habiendo durado dos meses largos. Alega en sus memorias que Gil-Robles obstruía sus proyectos, con intención de provocar la crisis y sucederle a la cabeza del gobierno. Suena dura de creer, vista la renuencia presidencial, que el líder católico cayese en la ingenuidad de esperar tal cosa, y éste, desde luego, sostiene lo contrario: "Pretendí con todas mis fuerzas disuadirle (a Chapaprieta, de dimitir). Una crisis en aquellos momentos podría tener gravísimas consecuencias (...) Lo que se pretendía, por lo visto, era demostrar al presidente de la república la incapacidad de las Cortes para llevar a cabo ninguna obra legislativa, con lo cual se le forzaba a disolverlas" (1).

Pero cabe también que se hiciera ilusiones, pues por algún tiempo creyó, según Chapaprieta, haber sintonizado con don Niceto: "El señor Gil Robles se mostraba muy satisfecho por su relación con el presidente (...) Sus amigos lo pregonaban alborozados(...) Pero desgraciadamente la realidad en cuanto a la situación de ánimo del presidente era bien distinta de la que suponían el señor Gil Robles y su ministros". Al parecer el cuarto militar del presidente pasaba a éste informaciones, nacidas de los celos y rencores profesionales, por las cuales "vivía el señor Alcalá-Zamora (...) en continuo sobresalto y llegué a creer que hasta temía por su seguridad personal". Una vez le

aseguraban que se estaban realizando obras en el ministerio de la Guerra para convertirlo casi en una plaza fuerte. Otra, que se iba a dar mando a personas notoriamente desafectas al régimen, preparando así las cosas para provocar y consumir un golpe de fuerza" (2).

La dimisión de Chapaprieta creaba una sensación de crisis general del centro derecha. Para dar al fracaso un aire más simbólico, mientras en las Cortes y en la calle las extremas izquierdas y derechas se cebaban en el Partido Radical por el caso Nombela-Tayá, y procuraban, aunque en vano, implicar a la CEDA, el máximo dirigente de la insurrección de octubre, Largo Caballero, salía absuelto "por falta de pruebas".

Siguieron movimientos por parte de don Niceto y de Gil-Robles, el primero para imponer un gobierno sin la CEDA, y el otro para impedirlo. Fracasadas las maniobras del presidente, éste convocó el día 11 al líder cedista. La mayoría de los comentaristas, y el mismo interesado, creían que por fin iba a encargarle formar gabinete. (3)

Pero ocurrió justamente lo contrario, previo un incidente grotesco: ese día la Guardia Civil vigilaba los accesos a Madrid, el edificio del ministerio de la Guerra, y los cuarteles y aeródromos. Gil-Robles, alarmado, acudió al palacio presidencial algo antes de la cita, y allí tropezó con el ministro de Gobernación en funciones, De Pablo Blanco, que salía de consultar con don Niceto. El cedista se dirigió al ministro con duras palabras, conminándole a retirar la vigilancia, y entró en el despacho presidencial con ánimo airado. Entonces se aclaró el asunto: Alcalá-Zamora no estaba dispuesto a encomendarle el gobierno y trataba de neutralizar con la Guardia Civil cualquier posible reacción. (4)

Negar el poder a la CEDA significaba disolverlas Cortes en breve plazo, y eso, en efecto, insinuó el presidente. Gil-Robles recuerda la escena: "Todo el porvenir trágico de España se presentó a mi vista. Con ardor, casi con angustia, supliqué al señor Alcalá-Zamora que no diera un paso semejante. El momento elegido para la disolución, le dije, no podía ser más inoportuno. Las Cortes se hallaban aun capacitadas para rematar una obra fecunda, tras de la cual podría llevarse a cabo sin riesgos la consulta electoral. En un breve plazo, a lo sumo dentro de algunos meses, sería posible sanear la Hacienda; votar los créditos necesarios para un plan de obras públicas que absorbería la

casi totalidad del paro; liquidar los procesos del movimiento revolucionario de 1934, que eran temible bandera de agitación en manos de las izquierdas; aplicar la reforma agraria, con el reparto de los cien primeros millones de pesetas ya consignados; completar la reorganización del Ejército (...) para adoptar en seguida el acuerdo de la reforma de la Constitución que, según palabras del propio jefe del estado *invitaba a la guerra civil*. Impedir la realización de esa tarea, añadí con toda vehemencia, era tan peligroso como injusto". Pero sus argumentos dejaban impasible a su interlocutor. "El presidente llevaba a España hacia el abismo". Fuera de sí, le apostrofó: "Su decisión (...) arrojará, sin duda, a las derechas fuera del camino de la legalidad y del acatamiento al régimen. Con el fracaso de mi política, sólo podrán ya intentarse las soluciones violentas. Triunfen en las urnas las derechas o las izquierdas, no quedará otra salida, por desgracia, que la guerra civil. Su responsabilidad por la catástrofe que se avecina será inmensa. Sobre usted recaerá, además, el desprecio de todos. Será destituido por cualquiera de los bandos triunfantes. Por mi parte, no volveré a verle jamás aquí. Ha destruido usted una misión conciliadora" (A) (5)

Alcalá-Zamora se justifica en sus memorias arguyendo que Gil-Robles no se había proclamado inequívocamente republicano. Argumento flojo y, desde luego, ni democrático ni constitucional. La CEDA había probado con reiteración y en circunstancias arduas su moderación y respeto a las leyes, mientras que muchos republicanos habían vulnerado de modo abierto la legalidad: así Azaña, Prieto o Largo Caballero, según él sabía perfectamente. El análisis implícito en las frases de Gil-Robles tenía, por lo demás, harta consistencia. Si alguien tenía derecho a gobernar, de acuerdo con la legalidad parlamentaria, era la CEDA, y negarle el ejercicio de ese derecho después de tan paciente espera equivalía a hacer a la república incompatible con la derecha católica y, por lo tanto, con una gran masa de población del país. Ello suministraba la mejor munición a la extrema derecha, ansiosa de derrocar un régimen del que se sentían disociados desde la quema de conventos en mayo de 1931. Para estos grupos, la táctica «posibilista» de Gil-Robles no era más que una dañina pérdida de tiempo, al abrigo de la cual engrosaba el movimiento revolucionario. El capital político conseguido por el legalismo de la CEDA después de la revolución de octubre quedaba dilapidado en un instante por la deci-

sión de don Niceto.

Ocurría esto, además, en momento muy desfavorable para la CEDA, cuando su alianza con los radicales yacía en ruinas, y apenas habían comenzado sus medidas económicas y sociales. Peor todavía: cuando el programa de Chapaprieta, verdadero plan de estabilización, se hallaba en su fase inicial de sacrificios —entre ellos un aumento del paro— mientras que los beneficios tardarían aun bastantes meses en percibirse.

Las memorias de Alcalá-Zamora no prestan la menor atención a estos factores. De manera típica, interpretan la indignación y la furia de Gil-Robles en términos puramente personalistas, como simple despecho y obcecación. Pero no exagera el frustrado cedista al acusarle de haber arruinado una misión conciliadora en el atormentado panorama de la época.

Gil Robles juzgó que el presidente “vulneraba la esencia misma del sistema constitucional, aunque respetara la forma”. Y se planteó: “¿Sería lícita una situación de fuerza para salvar al país?” Desesperado, habló con el general Fanjul sugiriéndole que el ejército tomara transitoriamente el poder y restableciera la legalidad constitucional, vulnerada a su juicio por el presidente. Fanjul decidió consultar con sus colegas. “La responsabilidad de una decisión que podía ser de vida o muerte para la patria pesó como una losa sobre mi espíritu en aquellas horas interminables, durante las cuales pasaron ante mis ojos, en trágico desfile, las más negras perspectivas”, recuerda el político. Por segunda vez propiciaba un golpe de estado. La anterior había sido con ocasión del indulto a Pérez Farràs, forzado por la intervención no constitucional de don Niceto. (7)

Simultáneamente con esta gestión, Calvo Sotelo comisionó a Ansaldo para que requiriese a Franco, Fanjul y Goded, a emplear la fuerza. Parece que también José Antonio presionó en el mismo sentido. Pero, como cuando el indulto a Pérez Farràs, los jefes militares se retrajeron, y también por consejo de Franco. Este no creía el momento lo bastante crítico ni al ejército lo bastante unido para una acción tan drástica. Por tercera vez impedía un golpe de estado contra la república. El primero había sido durante la revolución de octubre, cuando los monárquicos, según testimonio de Ansaldo, le propusieron aprovechar una coyuntura tan favorable. (8)

El presidente deseaba un gabinete centrista y probó a encomendar su formación a varios políticos; da la impresión de que actuaba bajo un intenso nerviosismo, pues incluso intentó la insólita maniobra de dar el encargo simultáneamente a Maura y a Portela. Cambó le apoyaba y trataba de calmar a Gil-Robles. Por fin, el día 13 recibió Portela la misión, cosa que muchos creían era la verdadera intención de don Niceto desde el principio.

Quizá las cosas habrían sido distintas para la CEDA si, cuando su victoria electoral en noviembre de 1933, Gil-Robles hubiera exigido la parte de poder que le correspondía legalmente. En cambio se había mantenido al margen del gobierno, con la intención de aplacar a las izquierdas, ya levantiscas. No logró aplacarlos, y su trayectoria posterior se resumiría así: sus ofrecimientos de concordia fueron recibidos con abierto desprecio, mientras el PSOE preparaba activamente la guerra civil, la Esquerra inflamaba a las masas en Cataluña y las izquierdas republicanas atizaban el fuego y urdían golpes de estado. Al entrar la CEDA en el gobierno, al cabo de un año y con timidez, las izquierdas se rebelaron. Sólo en mayo de 1935 pareció adoptar la CEDA una postura enérgica, pero Alcalá-Zamora se encargó de yugularla, en diciembre, concluyendo de este modo “el año de la CEDA”, sin haber tenido oportunidad de realizar más que en mínima parte su programa, y con la desairada pérdida del ministerio de la Guerra.

Tal como Azaña fue la figura más notable en las izquierdas republicanas, Gil-Robles lo fue en las derechas. Cabe advertir algunos paralelismos entre las gestiones de ambos: tuvieron poder durante unos dos años, y carecieron de tiempo para desarrollar o consolidar sus proyectos. Debieron sus fracasos más a las incoherencias y rivalidades en sus propios campos que a enemigos políticos abiertos. Fueron descabalgados del poder, no por elecciones, sino por Alcalá-Zamora. E intentaron golpes de estado, dos cada uno.

Hay otras semejanzas. Eran cultos y excelentes oradores, y concitaron odios feroces de sus enemigos. Ha sido muy comentado el rencor de la derecha contra Azaña, y menos el de la izquierda contra Gil-Robles, pero baste citar a Cambó: “Yo veía desde mi escaño las miradas de algunos socialistas cuando hablaba (...) Gil-Robles, en las cuales se veía claramente el deseo de asesinarlo”. (15) Expresión nada metafórica, pues estuvieron a punto de satisfacer ese deseo en

julio de 1936. Los escritos de ambos reflejan honda preocupación, sin duda sincera, por el destino de España, así como una oscura angustia ante la guerra civil. Si bien Azaña pensó poco en ese peligro hasta que la guerra se reanudó de hecho.

Las disimilitudes cuentan más. Azaña tuvo un poder mucho mayor y más directo, durante casi dos años y medio, como ministro y como jefe del gabinete. Gil-Robles, en su primer año no pasó de presionar al ejecutivo desde fuera, y luego, aunque inspirase la política oficial, sólo llegó a ministro, y durante 7 meses, tiempo insuficiente para cualquier obra de gobierno. El poder de Azaña fue muy estable, mientras que el de centro-derecha padeció tales vaivenes que impidieron cualquier labor continuada: dos crisis totales y tres gobiernos en 1934; y cinco gobiernos en 1935 antes del de Portela.

Estas exasperantes oscilaciones se debieron a un acoso de la izquierda incomparablemente mayor que el que Azaña había soportado de la derecha. El primer año del bienio conservador transcurrió bajo una continua subversión culminada revolucionariamente en octubre, y el año siguiente se adensó el lúgubre ambiente de guerra larvada. Por contraste, en el bienio azañista el único ataque violento de la derecha, el de Sanjurjo, apenas había hallado eco en el campo conservador, y lejos de debilitar a Azaña, le había fortalecido y llenado de euforia a las izquierdas.

Otros factores de desequilibrio en el segundo bienio fueron la hostilidad de los monárquicos, llevada hasta unir fuerzas con las izquierdas en torno al *straperlo*; y sobre todo el intervencionismo de Alcalá-Zamora, que forzó dos crisis constitucionalmente muy peligrosas, e indirectamente otras más. Azaña había logrado casi siempre tener a raya al presidente, el cual, en cambio, se convirtió en una pesadilla para Lerroux y Gil-Robles, como éste lamenta: "Combatida (la CEDA) con verdadera saña por izquierdas y derechas, su mayor enemigo era, sin embargo, el presidente de la República". O bien: "La lucha contra todos resultaba en extremo agotadora. Si continuaba en ella era tan sólo por el convencimiento, cada vez más firme, de que nuestro partido constituía el único valladar existente contra el riesgo de una guerra civil". (9)

También difieren los conatos golpistas de ambos políticos. Azaña intentó un golpe frontal contra el veredicto de las urnas en noviembre

de 1933, y luego planeó otro, hacia julio del año siguiente, aprovechando una situación límite creada por la subversión de la propia izquierda. En cambio los dos amagos de Gil-Robles se orientaron contra decisiones muy dudosamente constitucionales o democráticas de Alcalá-Zamora.

Los diarios de Azaña citan a Gil-Robles poco y con desprecio: “Este Gil Robles, de voz metálica, inalterable, un poco cargado de hombros, sin ideas ni talento, es la estampa del abogado cínico”. “No le he dado la mano, ni al entrar ni al salir. Este danzante (...) me cubre de injurias soeces por esas provincias”. Alguien le habla “como un Gil Robles cualquiera”. A su vez Gil-Robles, que en sus memorias expresa casi admiración por Prieto, habla con repulsa de Azaña: “hombre altivo y soberbio (...) desdeñaba a cuantos tenía a su alrededor (...) Diestro conversador y uno de los grandes prosistas de su tiempo, la política le repugnaba en lo que tiene de intercambio y comunicación directa de sentimientos e ideas. Reservado e introvertido (...) manifestaba un radical sectarismo (...) Acusada cobardía (...) Oratoria a la vez fascinante y demoledora, pero siempre fría y monótona”. En realidad, los dos se trataron muy poco o nada, fuera de las Cortes. (10)

